

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

“Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución 1452 del 27 de octubre de 2022”

EL SUBDIRECTOR DE CONTRATACION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias que le fueron atribuidas, en especial las conferidas en los artículos 12 de la Ley 80 de 1993, 17 de la Ley 1150 de 2007, 86 de la Ley 1474 de 2011, la Resolución No. 200 de 2020, la Resolución 370 de 2020 y:

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Que El Instituto de Recreación y Deporte IDRD publicó la Licitación Pública No. IDRD-STC-LP-017-2017, cuyo objeto fue: ***“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C.; PARQUE SIMÓN BOLÍVAR -12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS”.***

Que dicho proceso fue adjudicado al proponente UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, cuyos integrantes son Ingeniería Construcciones y Equipos INCOE SAS identificada con el NIT Nro. 900.803.956-7 con una participación del 24%, ASECAF SAS identificada con el NIT Nro. 808.000.935-2 con una participación del 25% y Construcciones Maja SAS identificada con el NIT Nro. 800.112.612-0 con una participación del 51%, Unión Temporal representada legalmente por RAFAEL PALACIO DORADO.

Que producto de la referida adjudicación, las partes suscribieron el 27 de septiembre de 2017 el Contrato de Obra No. 2937 de 2017, por un valor de **ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$11.816.242.707) MCTE.**

Que el Contrato No. 2937 de 2017, estableció como plazo de ejecución de ejecución lo siguiente “El plazo de ejecución se estima en Trece (13) meses, contados a partir de la aprobación de la garantía única y suscripción del acta de inicio. El plazo de ejecución se encuentra discriminado así:

Periodo de Coordinación: Quince (15) días.
Periodo de trámite de licencias: Dos y medio (2.5) meses.
Periodo de Construcción: Diez (10.0) meses.”

Que el día dieciséis (16) de noviembre de 2017, las partes suscribieron acta de inicio del contrato de obra, determinando con fecha inicial de terminación del plazo contractual el quince (15) de diciembre de 2018.

Que el contrato tuvo las siguientes modificaciones, prórrogas y suspensiones a saber:

PRÓRROGAS

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Número de Prórroga		Plazo
1. Modificación 1.		TREINTA DÍAS (30)
2. Modificación 3.		TRES MESES (3)
ADICIONES		
Número de Adición		Valor (\$)
N.A.		N.A.
Valor total del contrato:		
SUSPENSIONES		
Número del Acta de Suspensión		Tiempo
1. Suspensión 1		Treinta (30) días
2. Ampliación No. 1 de la suspensión No. 1		Sesenta (60) días
3. Ampliación No. 2 de la suspensión No. 1		Treinta (30) días
4. Ampliación No. 3 a la suspensión No.1		Quince (15) días
5. Ampliación No. 4 a la suspensión No.1		Ocho (8) días
6. REINICIO No. 1		Seis (6) de julio de 2018
7. Suspensión No.2		Treinta (30) días
8. Ampliación No.1 a la suspensión No.2		Treinta (30) días
9. Ampliación No.2 a la suspensión No.2		Treinta (30) días
10. Ampliación No.3 a la suspensión No.2		Treinta (30) días
11. REINICIO No. 2		Veintiocho (28) de noviembre de 2018.
12. Suspensión No.3		Doce (12) días
13. Ampliación No.1 a la suspensión No.3		Diez (10) días
14. Ampliación No.2 a la suspensión No.3		Once (11) días
15. Ampliación No.3 a la suspensión No.3		seis (06) días
16. REINICIO No. 3		Siete (7) de octubre de 2019
17. Suspensión No 4		Quince (15) días
18. Ampliación No. 1 a la suspensión No.4		Quince (15) días
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con las prórrogas y suspensiones:		05/03/2020
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	Cláusula N°	Descripción
Modificación 2	N/A	Se aclara AIU del contrato de obra.
CESIONES DERECHOS ECONÓMICOS		
Cedente		Cesionario
UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN		TRANINGCO S.A.S.

Que de acuerdo con lo anteriormente indicado y en consideración a la fecha de inicio del contrato fue el 16 de noviembre de 2017, el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 2937 de 2017, terminó el 05 de marzo de 2020.

Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 9) del contrato, el contratista constituyó a favor del IDRD la póliza única de cumplimiento No. AA027962, expedida por la EQUIDAD SEGUROS identificada con NIT Nro. 860.028.415 la cual incluyó los siguientes amparos:

AMPAROS	VIGENCIA	VIGENCIA HASTA	VALOR
---------	----------	----------------	-------

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

	DESDE	CONFORME MODIFICATORIO DE FECHA 07/01/2021	ASEGURADO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	09/07/2018	30/06/2021	\$ 4.577.216.640,94
Cumplimiento del contrato	09/07/2018	30/06/2021	\$2.363.248.541,40
Salarios y prestaciones sociales	09/07/2018	05/02/2023	\$590.812.135,35
Estabilidad y Calidad de Obra	09/07/2018	04/11/2024	\$2.954.060.676,75

Que las partes pactaron en la Cláusula segunda del contrato, la cláusula penal la cual indica que “(...) Si **EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o las obligaciones emanadas del presente contrato, pagará al IDRD, el veinte por ciento (20%) del valor del mismo como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se le declare la caducidad del contrato y se impongan las multas a las que haya lugar. EL IDRD podrá hacer efectivo el valor de la cláusula penal imponiéndola mediante resolución motivada (...)**” (Negritas y cursiva propia).

Que, mediante oficio con radicado No. 20202100123622 del 21 de julio de 2020 el Consorcio Santa Paula 008 en calidad de interventor del contrato de obra 2937 de 2017 informó a la supervisión del IDRD sobre el posible incumplimiento, por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN. Con este precepto, el cual fue remitido a la Subdirección de Contratación por la supervisora mediante memorando Nro. 20204200264563 de fecha 11 de agosto de 2020 y memorando de alcance Nro. 20204200297963 del 16 de septiembre de 2020, solicitando de trámite del presunto incumplimiento del Contrato de Obra Nro. 2937 de 2017, anexando el informe sobre presunto incumplimiento remitido por el interventor del contrato, que sustentan el inicio de la actuación administrativa.

II. TRÁMITE ADMINISTRATIVO

En consideración al informe de presunto incumplimiento radicado por la Supervisión del contrato mediante los memorandos Nro. 20204200264563 de fecha 11 de agosto de 2020 y memorando de alcance Nro. 20204200297963 del 16 de septiembre de 2020, el cual contiene el informe remitido por el interventor del contrato, la Subdirección de Contratación del IDRD procedió a citar a los interesados conforme con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así:

Al Contratista Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento Asemain, se le curso citación mediante radicado No. 20208000110071 del 28 de septiembre de 2020 la cual fue recibida por el contratista el 29 de septiembre de 2020.

A la compañía garante – La Equidad Seguros OC, se le citó mediante radicado No. 20208000110101 de 28 de septiembre de 2020, la cual fue recibida el 29 de septiembre de 2020.

El día 9 de octubre de 2020, en donde se procedió a dar lectura en audiencia al oficio que

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

contiene el informe técnico de presunto incumplimiento, los hechos generadores del presunto incumplimiento, las obligaciones y normas presuntamente incumplidas, así como las posibles sanciones a aplicar y la tasación del perjuicio, desarrollando los siguientes puntos del orden del día:

1. Objeto de la audiencia.
2. Lectura Reglas de participación
3. Presentación de los funcionarios IDRD.
4. Presentación de los asistentes a la audiencia
5. Presentación de las circunstancias fácticas que dieron origen al procedimiento administrativo sancionatorio, las posibles normas y cláusulas violadas y sus posibles consecuencias.
6. Intervención Contratista o su Representante.
7. Intervención del Garante.

Conforme con el trámite administrativo surtido a continuación se relación las audiencias llevadas a cabo dentro del procedimiento:

Nro. ACTA	FECHA AUDIENCIA	TEMAS TRATADOS
1	9/10/2020	<p>Instalación de la Audiencia Pública que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.</p> <p>Se da lectura del orden del día evacuando los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. objeto de la audiencia. 2. Lectura Reglas de participación 3. Presentación de los funcionarios IDRD. 4. Presentación de los asistentes a la audiencia 5. Presentación de las circunstancias fácticas que dieron origen al procedimiento administrativo sancionatorio, las posibles normas y cláusulas violadas y sus posibles consecuencias. 6. Intervención Contratista o su Representante. 7. Intervención del Garante. <p>De acuerdo con las manifestaciones señaladas en audiencia se hace entrega del informe de interventoría junto con los anexos y la citación de manera física a las partes para sus respectivos descargos.</p>
2	20/10/2020	Continuación descargos
3	27/10/2020	Continuación descargos
4	3/11/2020	Cambio de apoderado y solicitud de nulidad
5	12/11/2020	Presentación descargos apoderada del contratista.
6	24/11/2020	Finalización de descargos
7	3/12/2020	Resuelve recusación.
8	15/12/2020	Acto Administrativo que ordena la práctica de pruebas
9	20/01/2021	Presentación de prueba por informe
10	27/01/2021	Presentación de prueba por informe

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Nro. ACTA	FECHA AUDIENCIA	TEMAS TRATADOS
11	4/02/2021	Presentación de prueba por informe
12	16/02/2021	Practica de pruebas testimoniales
13	17/02/2021	Practica de pruebas testimoniales
14	19/02/2021	<u>Solicitud de suspensión por incapacidad medica</u>
15	25/02/2021	Solicitud de nulidad del procedimiento
16	4/03/2021	El IDRD resuelve solicitud de nulidad del procedimiento
17	12/03/2021	Acto administrativo que decide sobre pruebas
18	23/03/2021	Practica de pruebas testimoniales
19	14/04/2021	Renuncia poder la apoderada del contratista
20	26/04/2021	Reasume apoderada del contratista y se solicita suspensión
21	3/05/2021	Practica de pruebas testimoniales
22	4/05/2021	Practica de pruebas testimoniales
23	12/05/2021	Practica de pruebas testimoniales
24	20/05/2021	<u>Solicitud de suspensión por incapacidad medica</u>
25	28/05/2021	Practica de pruebas testimoniales
26	8/06/2021	Practica de pruebas testimoniales
27	16/06/2021	Practica de pruebas testimoniales
28	22/06/2021	Revisión de pruebas testimoniales que no se han podido practicar
29	7/07/2021	Solicitud de suspensión de la audiencia por el apoderado de la aseguradora
30	16/07/2021	Acto administrativo que decide sobre pruebas
31	27/07/2021	Acto administrativo que decide sobre pruebas
32	15/09/2021	Alegatos de conclusión - <u>Solicitud de suspensión de la audiencia por la apoderada de la contratista</u>
33	28/09/2021	Alegatos de conclusión - <u>Solicitud de suspensión de la audiencia por la apoderada de la contratista</u>
34	07/10/2021	Solicitud de la apoderada de la contratista – Control de Legalidad prueba por informe.
35	13/10/2021	Solicitud de aclaraciones y observaciones a la prueba por informe.
36	02/11/2021	Solicitud de suspensión por incapacidad medica indico en el asunto: <u>“Por medio de la presente, me permito informarle que a la doctora Diana C. Barragán Vargas le es imposible asistir a la continuación de la audiencia del proceso de la referencia prevista para el día de hoy dos (2) de noviembre a las 2:30pm, en razón a que se encuentra en incapacitada, por graves quebrantos de</u>

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Nro. ACTA	FECHA AUDIENCIA	TEMAS TRATADOS
		<u>salud. Sin embargo, la Excusa medica no fue aportada con antelación a la celebración de la audiencia</u> , como tampoco se encuentra transcrita por la EPS a la cual debe estar afiliada la doctora Diana Carolina Barragán, por lo que se procedió a la <u>presentación por parte del intervisor de las aclaraciones de la prueba por informe realizadas por los apoderados de las partes.</u>
37	10/11/2021	<u>El día 6 de noviembre de 2021, se notificó al IDRD el auto por el cual se admite tutela y decreta medida cautelar -tutela 2021-205, orden emitida por el JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ, en donde ordenó como medida provisional a la entidad INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD-, IDRD suspender la audiencia programada para el día miércoles 10 de noviembre a las 8:30am, mientras se decide de fondo la presente acción constitucional.</u>
38	30/11/2021	Conforme con lo ordenado por el juez de tutela según radicado 110014088064202100205 de fecha 18 de noviembre de 2021, procedió a convocar a reanudación de audiencia para el día 30 de noviembre de 2021, notificando a las partes mediante los oficios Nros. 20218000222131 y 20218000222101; <u>no obstante, mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2021, la apoderada manifestada su imposibilidad de asistir.</u>
39	14-12-2021	<u>La apoderada manifestado su imposibilidad de asistir, conforme con el correo electrónico remitido, en donde se indica en el asunto: “Por medio de la presente y en mi calidad de esposo de la doctora Diana C. Barragán Vargas, me permito informarle que ella continúa en delicado estado de salud, por lo que su médico tratante, con el cual acabamos de tener control, le acaba de extender su incapacidad hasta el día 30 de diciembre del presente año, con el ánimo de salvaguardar no sólo su salud sino la de nuestro bebé. En este orden de ideas, y dado que le es imposible asistir a la continuación de la audiencia del proceso de la referencia prevista para el día de hoy catorce (14) de diciembre a las 2:30pm, le solicito de manera muy comedida y en su nombre (ya que ella no tiene los medios para hacerlo actualmente) que se proceda a fijar nueva fecha para llevar a cabo la continuación de la audiencia.”</u>
40	03-01-2022	<u>La apoderada manifiesta su imposibilidad de asistir, conforme con el correo electrónico remitido, en donde se indica en el asunto “Por medio de la presente, me permito informarle que la doctora Diana Carolina le es imposible asistir a la continuación de la audiencia del proceso de la referencia prevista para el día de hoy tres (3) de enero a las 2:30pm, como quiera que, a la fecha,</u>

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Nro. ACTA	FECHA AUDIENCIA	TEMAS TRATADOS
		<u>continúa incapacitada laboralmente, en razón a su estado de salud. Adicional a lo anterior, es menester señalar que la doctora Diana se encuentra igualmente en luto, por el fallecimiento de su señora madre María Stella Vargas Rodríguez,</u> por lo que se agradece se re programe la misma para finales de enero del presente año.”
41	24/01/2022	<u>Solicitud suspensión audiencia por parte del Representante legal del Consorcio, indica en la reanudación de la audiencia sobre la revocatoria del poder otorgado a su apoderada,</u> y solicito se le concediera tiempo para buscar un abogado, solicitud a la que accedió este despacho y procedió a reprogramar la audiencia para el día 2 de febrero de 2022.
42	02/02/2022	<u>El 1 de febrero el JUZGADO 58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ TRANSITORIAMENTE 40 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE, notifico al IDRD TUTELA 2022-0071, así mismo, el día 2 de febrero el juzgado ordenó SUSPENDER en forma provisional e inmediata la reanudación de audiencia que trata el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 seguida por el presunto incumplimiento el Contrato de Obra Nro. 2937 de 2017 a celebrarse el día 2 de febrero de 2022 a la hora de las 9 a.m. hasta cuando se resuelva de fondo la presente acción constitucional.</u>
43	18-02-2022	<p>En atención al fallo de tutela emitido por el Juzgado Cuarenta de Pequeñas Causas y Competencias Múltiple de Bogotá de fecha Once (11) de febrero de 2022, con radicado Nro. 2022-00071, en donde se resolvió Negar la tutela, interpuesta por la Doctora Diana Carolina Barragán Vargas contra el Instituto Distrital de Recreación y Deportes –IDRD y bajo la cual se tenía como medida provisional la suspensión de la audiencia que se sigue contra el Consorcio Unión Temporal San Antonio IDRD por el posible incumplimiento del Contrato de obra Nro. 2937-2017, y en donde se solicitaron adoptar las medidas efectivas para evitar los circunstancias que dieron lugar a la tutela.</p> <p>Sin embargo, se recibe comunicación del representante legal del consorcio donde indica imposibilidad reanudación audiencia, en los siguientes términos:</p> <p><i>“Teniéndose en cuenta que la acción de tutela promovida por la doctora Diana Carolina Barragán en contra del IDRD, ante el Juzgado Cuarenta de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá D.C., <u>aún no está resuelta de fondo, como quiera que la misma fue impugnada por la accionante el pasado miércoles 16 de febrero, no</u></i></p>

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Nro. ACTA	FECHA AUDIENCIA	TEMAS TRATADOS
		<p><u><i>entendemos la razón por la cual usted decidió reprogramar la continuación de la audiencia</i></u>". (subrayado negrilla fuera de texto).</p> <p><i>En este orden de ideas y con el ánimo de atacar en debida forma de su parte, la medida provisional de la tutela que dice "SUSPENDER en forma provisional e inmediata la reanudación de audiencia que trata el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 seguida por el presunto incumplimiento el Contrato de Obra Nro. 2937 de 2017 a celebrarse el día 2 de febrero de 2022 a la hora de las 9 a.m. hasta cuando se resuelva de fondo la presente acción constitucional", le solicitamos de manera muy comedida acate dicha instrucción judicial, que valga la pena indicar, se encuentra vigente, hasta que la tutela no sea decidida en segunda instancia."</i></p>
44	25/03/2022	<p>Pese a haberse indicado al representante legal del contratista sobre los efectos del fallo de tutela en la citación al contratista, se recibe comunicación del representante legal del consorcio donde indica imposibilidad reanudación audiencia.</p> <p>En audiencia, se solicita solicitar a la Veeduría Distrital, Contraloría Distrital, Procuraduría general de la nación y personería distrital acompañamiento especial audiencia.</p> <p><u>Así mismo, se solicita al director jurídico del IDRD remitir las actuaciones surtidas a los jueces de tutela, y la imposibilidad de cumplimiento de los fallos ocasionadas por la renuencia del contratista.</u></p>
45	21/04/2022	<p>Comunicación del representante legal del consorcio donde indica imposibilidad reanudación audiencia.</p> <p>Se cita nuevamente a audiencia para el 5 de mayo de 2022.</p>
46	5/05/2022	<p><u>Comunicación del representante legal del consorcio donde indica imposibilidad reanudación audiencia.</u></p> <p><u>Teniendo en cuenta el fallo del 6 de mayo de 2022 emitido por el juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito, donde confirmo el fallo en primera instancia de la tutela, se cita nuevamente a audiencia para el 19 de mayo de 2022.</u></p>
47	19/05/2022	<p>De acuerdo con el fallo de tutela en segunda instancia, se cita a reanudación de audiencia para el 19 de mayo a las partes, No obstante, el representante legal del contratista</p>

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Nro. ACTA	FECHA AUDIENCIA	TEMAS TRATADOS
		solcito suspender la audiencia con el fin de conseguir apoderado. Solicitud aceptada dejando la salvedad que fue la misma solicitud el 24 de enero y que tiene en su poder todos los documentos del proceso. Se reprograma audiencia para el 26 de mayo de 2022.
48	26/05/2022	Presentación del apoderado designado por el Representante legal del contratista, Doctor Juan Carlos Quintero Cuervo. Solicitud suspensión audiencia con el fin de presentar los alegatos de conclusión por parte del apoderado contratista.
49	2/06/2022	Lectura acto administrativo por medio del cual se decide solicitud nulidad y exclusión de la prueba, de acuerdo con la audiencia del 13 de octubre de 2021.
50	13 de junio de 2022	<p><u>El apoderado del contratista, doctor Juan Carlos Quintero Cuervo, presentó una solicitud de recusación contra el suscrito, con la finalidad que sea apartado del procedimiento referido y en su lugar se designe otro funcionario que dirima la controversia, esto con fundamento en aras de proteger el principio de imparcialidad.</u></p> <p>De acuerdo con el trámite de la recusación, la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RESOLUCIÓN No. 441 DE 11 DE JULIO DE 2022 <i>“Por la cual se resuelve una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para resolver recusación en contra de Subdirector de Contratación del IDRD”.</i> - RESOLUCIÓN No. 646 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 <i>“Por la cual se resuelve Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación en contra de la Resolución No. 441 de 11 de julio de 2022, por medio de la cual se resolvió una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del Instituto de Recreación y Deporte para resolver la recusación en contra del Subdirector de Contratación del IDRD”</i> <p>Dentro de la cual fue resuelta por la Subdirectora de Recreación de del IDRD, en Resolución No. 1251 del 28-09-2022 <i>“Por la cual se resuelve la recusación presentada en contra del Subdirector de Contratación del IDRD, en el marco del Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra 2937 de 2017 suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN Y EL IDRD.”</i></p>
51	7 de octubre de 2022	Conforme con la Resolución No. 646 del 1 de septiembre emitida por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Nro. ACTA	FECHA AUDIENCIA	TEMAS TRATADOS
		<p>“Por la cual se resolvió el recurso de reposición y en subsidio de Apelación en contra de la Resolución No. 441 de 11 de julio de 2022, por medio de la cual se resolvió una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del IDRD, para resolver la recusación en contra del Subdirector de Contratación del IDRD”, y la Resolución No. 1251 del 28 de septiembre de 2022 “Por la cual se resuelve la recusación presentada en contra del Subdirector de Contratación del IDRD, en el marco del Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra 2937 de 2017 suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAYN Y EL IDRD.” Se procedió a reanudar la audiencia continuando con la presentación de los alegatos de conclusión de las partes.</p> <p>En la audiencia, el apoderado del contratista no presenta alegatos de conclusión. No obstante, presenta recusación contra el Subdirector de Contratación por la tacha del testimonio del apoyo a la supervisión Ingrid Roperó, solicitud que fue rechazada de plazo indicándole que la misma fue presentada como “tacha de testimonio” y se decidirá en el pronunciamiento de fondo por parte de la Entidad.</p> <p>Realiza la presentación de descargos el apoderado de la compañía garante.</p>
52	24/10/2022	Reanudación de audiencia, con el fin de continuar con el punto 9 del orden del día “Toma de decisión por parte de la Entidad. Sin embargo, el apoderado del contratista presento nulidad.
53	27/10/2022	<p>Reanudación de la audiencia, se resuelve nulidad presentada por el apoderado contratista.</p> <p>Continuidad punto 9 del orden del día “Toma de decisión por parte de la Entidad”. Lectura Resolución 1452 del 27 de octubre de 2022 “Por medio de la cual se adopta decisión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio del Contrato de Obra IDRD-CTO-2937 de 2017”.</p>
54	22/11/2022	<p>Sustentación del recurso de reposición interpuesto por las partes en audiencia del 27 de octubre de 2022.</p> <p>El apoderado de la compañía garante dentro de la sustentación del recurso de reposición, solicito la práctica de pruebas, razón por la cual se suspendió fijando como fecha de reanudación el día 29 de noviembre de 2022.</p>
55	29/11/2022	<p>Lectura del acto administrativo de fecha 29 de noviembre por medio del cual se decide sobre la solicitud de pruebas en el trámite del recurso de reposición.</p> <p>Se fija como fecha de reanudación para la lectura del fallo</p>

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Nro. ACTA	FECHA AUDIENCIA	TEMAS TRATADOS
		por el cual se deciden los recurso interpuestos para el día 21 de diciembre de 2022.

III. DE LA DECISIÓN OBJETO DE RECURSO DE REPOSICIÓN

Mediante la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, se adoptó decisión dentro del procedimiento Administrativo Sancionatorio seguido al Contrato de Obra No. 2937 de 2017, en donde se resolvió lo siguiente:

“RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento parcial del Contrato de Obra No. 2937 de 2017 cuyo objeto consistió en CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C.; PARQUE SIMÓN BOLÍVAR -12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS”, suscrito entre el IDRD y la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN identificado con el Nit No. 901118265-1 conformado por las empresas Ingeniería Construcciones y Equipos INCOE SAS identificada con el NIT Nro. 900.803.956-7 con una participación del 24%, ASECAF SAS identificada con el NIT Nro. 808.000.935-2 con una participación del 25% y Construcciones Maja SAS identificada con el NIT Nro. 800.112.612-0 con una participación del 51%, Unión Temporal representada legalmente por Rafael Palacio Dorado, en relación con los incumplimientos 1, 5, 6 y 7 debidamente identificados en este documento, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo,

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, hacer efectiva La cláusula penal pactada en el contrato de obra equivalente al 20% del valor total de la cláusula penal, esto es la suma de \$2.363.248.541 de conformidad con lo establecido el contrato de obra No. 2937 de 2017, el valor que deberá consignarse a favor del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD identificada con el NIT. 860061099-1 en la cuenta de ahorros No. 007700683878 del BANCO DAVIVIENDA dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la ejecutoria del presente Acto Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Declarar la ocurrencia del siniestro de incumplimiento amparada en la Garantía Única No. AA027962, expedida por aseguradora La Equidad Seguros, por concepto del amparo de cumplimiento por el \$2.363.248.541 correspondiente al 20%. Valor que deberá ser cancelado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución por las razones expuestas en el presente acto administrativo.

El valor de la cláusula penal impuesta a través de la presente resolución deberá ser descontada de los saldos a favor del contratista la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo en virtud de la figura jurídica de la compensación de deudas, para lo cual, la subdirección de contratación solicitará a la Subdirección Técnica de Construcciones una certificación sobre los saldos a favor del contratista.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Si ello no fuere posible, el valor que corresponde a la cláusula penal se hará efectivo y deberá cancelarse por la aseguradora La Equidad Seguros, con cargo al amparo de cumplimiento de la póliza No. AA027962, constituida con ocasión del Contrato de Obra No. 2937 de 2017, dentro del mes siguiente a la ocurrencia y acreditación del siniestro de conformidad con el Artículo 1080 del Código de Comercio.

ARTÍCULO CUARTO: *Declarar el incumplimiento y en consecuencia ordenar la ocurrencia del siniestro amparado en la Póliza Garantía Única No. AA027962, expedida por aseguradora La Equidad Seguros, por concepto del amparo de correcta inversión del anticipo por la suma de \$2.874.727.669. Valor que deberá ser cancelado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente resolución por las razones expuestas en el presente acto administrativo.*

El valor impuesto a través de la presente resolución deberá ser descontada de los saldos a favor del contratista la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo en virtud de la figura jurídica de la compensación de deudas, para lo cual, la subdirección de contratación solicitará a la Subdirección Técnica de Construcciones una certificación sobre los saldos a favor del contratista.

Si ello no fuere posible, el valor se hará efectivo y deberá cancelarse por la aseguradora La Equidad Seguros, con cargo al amparo de correcta inversión del anticipo de la póliza No. AA027962, constituida con ocasión del Contrato de Obra No. 2937 de 2017, dentro del mes siguiente a la ocurrencia y acreditación del siniestro de conformidad con el Artículo 1080 del Código de Comercio.

ARTÍCULO QUINTO: *Cerrar el Presunto Incumplimiento No. 3 del pago de Salarios y Prestaciones del personal a su cargo. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto.*

ARTÍCULO SEXTO: *Cerrar el Presunto Incumplimiento No. 4 la cláusula de Indemnidad. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto.*

ARTÍCULO SEPTIMO: *Cerrar el Presunto Incumplimiento No. 8 Presunto Incumplimiento por utilizar y ocupar de manera irregular el predio de la UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE – UDS. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto.*

ARTÍCULO OCTAVO: *De conformidad con lo previsto en el numeral 6.2., Artículo 6º de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 218 del Decreto Ley 019 de 2012, INFÓRMESE a la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de lo resuelto en el presente Acto Administrativo, para su conocimiento y los asuntos de su competencia.*

ARTÍCULO NOVENO: *Comunicar el contenido de la presente Resolución al COPNIA, para su conocimiento y los asuntos de su competencia, de acuerdo con lo ordenado en el presente acto administrativo.*

ARTÍCULO DECIMO: *Remitir el contenido de la presente actuación a la oficina de control interno del IDRD para su conocimiento y los asuntos de su competencia, de acuerdo con lo ordenado en el presente acto administrativo.*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: *PUBLÍQUESE el presente Acto Administrativo en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP, de conformidad con lo ordenado en el Artículo 218 del Decreto Ley 019 de 2012.*

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: *Contra la presente Resolución solo procede el Recurso de Reposición, el cual deberá ser interpuesto en los términos y la oportunidad que prevé el literal c) del Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.”*

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL RECURSO

En garantía del derecho de defensa y contradicción, el Contratista y el garante hicieron uso del recurso de reposición de que trata el literal c) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en consonancia con el artículo 77 del código de procedimiento administrativo, que regula los requisitos que deben reunir los recursos que son los siguientes: “1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer y 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. En el presente caso, tal como se evidencia en el curso de la audiencia y en los documentos allegados, los recursos dan cumplimiento a los requisitos de Ley, razón por la cual resultan admisibles y serán objeto de decisión.

IV. RECURSO DE REPOSICION

a. Apoderado del contratista

En síntesis, el recurso presentado por el apoderado del contratista en audiencia del 22 de noviembre de 2022, y de los cuales remitió por correo electrónico el escrito leído, los argumentos de inconformidad se resumen, en I. Nulidad del procedimiento Administrativo Sancionatorio, II. Pérdida de competencia del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para declarar el incumplimiento del Contrato de Obra. – Por Violación del principio de *non bis in ídem*. – Por Pérdida de competencia al instaurar la demanda por el medio de control de controversias contractuales. III. Porque no existió incumplimiento del Contrato de Obra imputable a la Unión Temporal. – por Violación al principio de planeación por parte del IDRD.

“En ese sentido, la sustentación la voy a agrupar en 5 grupos principales; el primero será la advertencia de la nulidad del procedimiento sancionatorio; el segundo es la pérdida de la competencia de la entidad para declarar el incumplimiento del contrato de obra; el tercero es la violación al principio del non bis in ídem; el cuarto la inexistencia del incumplimiento atribuible al contratista y el quinto es la violación al principio de planeación en cabeza de la entidad.

En ese sentido, entonces, me permitiré hacer la sustentación en los siguientes términos:

1. Nulidad del procedimiento administrativo sancionatorio:

Sin perjuicio de los reparos, en concreto, que se formularán posteriormente es menester advertir la existencia de la nulidad procesal de la cual está viciado al procedimiento administrativo sancionatorio que se adelanta en contra de la Unión temporal.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

En relación con lo ocurrido con la audiencia llevada a cabo el pasado 7 de octubre del presente año. Lo anterior debido a la recusación formal que el suscrito presentado en contra del Doctor Camilo Ernesto Quiroga Mora, la cual fue arbitrariamente rechazada de plano sin que se le diera el trámite correspondiente establecido en la ley 1437 en 2011.

Así las cosas, con la actuación irregular del doctor Quiroga, se configuró la causa de nulidad establecida en el numeral 3 del artículo 133 del Código General del Proceso, la cual reza:

Artículo 133 - Causales de nulidad: El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos:

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o suspensión, o si en esos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

En ese sentido, el hecho de que el Doctor Quiroga no haya seguido el procedimiento establecido para el trámite de la recusación y, por el contrario, caprichosamente haya querido seguir adelante con el desarrollo de la audiencia, haciendo caso omiso de las múltiples solicitudes hechas por el suscrito, donde se le ponía de presente que, de acuerdo con la norma, debía suspender la audiencia.

No sólo deja de ver el actuar imparcial y contrario a derecho que está adaptando de la entidad en contra del contratista, sino que configura una clara violación al derecho al debido proceso, pues el doctor Quiroga no puede simplemente rechazar de plano la solicitud y continuar con el curso del proceso, pues precisamente el procedimiento establece que, aunque sí, aunque sí tiene la Facultad de pronunciarse sobre la recusación y decidir si la acepta o no, para lo cual se le otorgó un término de 5 días a partir de la formulación.

El artículo está absolutamente claro en establecer que la actuación administrativa debe suspenderse hasta tanto no se decida sobre la recusación por el superior jerárquico del funcionario recusado.

Por lo tanto, no está justificada la actitud tomada por el funcionario recusado al manifestar que simplemente rechaza de plano la recusación formulada en su contra, y argumenta que por considerarla temeraria no suspenderá la actuación y seguir adelante con la audiencia, pues dicho actuar no está contemplado en la norma, máxime cuando en un hipotético caso en el que la temeridad se encontrase probada en el proceso, al revisar los estipulado al respecto, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el Código General del Proceso, no existe una norma que habilite en este caso el Doctor Quiroga, para rechazar de plano la recusación y dejarla sin efecto, que le permita apartarse del trámite de la misma, cuando por el contrario su deber legal es el de remitir las recusaciones a su superior jerárquico para que sea éste quien resuelva sobre el asunto.

En este punto es relevante hacer alusión a la situación presentada al interior de la audiencia llevada a cabo el 7 de octubre de 2022, donde al no encontrar otra alternativa para seguir adelante con la audiencia del doctor Quiroga decidió desestimar la prueba que ya había sido practicada y que hacía parte del

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

proceso, con la intención de dejar sin fundamento la recusación que se acababa de presentar en su contra, situación que era manifiestamente ilegal, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 del Código General del Proceso, una vez se haya practicado una prueba, no será posible desistir de la misma, dejando nuevamente en evidencia la parcialidad con la que se está adelantando el procedimiento sancionatorio en contra mi prohijado.

Pues es evidente que la entidad llegó a un fallo sin importar, que en el camino se vulneraran el derecho al debido proceso y a los principios que rigen las actuaciones administrativas, pues la Unión temporal San Antonio se encuentra ejerciendo su defensa al interior del procedimiento sancionatorio sin las garantías mínimas con las que se debería adelantar dicho proceso, como lo son la imparcialidad, el debido proceso, la igualdad y moralidad, todos ellos contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia y los cuales se ven mermados con ese tipo de decisiones adoptadas por el Subdirector de Contratación del IDRD.

Ahora bien, habiendo dejado claro que en el hipotético caso en el que la supuesta actuación temeraria en la que se basó el despacho para rechazar la recusación estuviera aprobada el interior del proceso, la misma no escogiste para que el juez, en este caso del Dr. Quiroga, a quien se le ha concedido la facultad para eliminar el presente incumplimiento del contrato de obra 2937 del 2017, no le dio trámite establecido, a la recusación formulada en su contra, pues no existe una norma que lo faculte para este plano de la solicitud y pasar de largo la suspensión de la actuación a la que estaba obligado, pues éste debía remitir la recusación a su superior jerárquico para que la resuelva.

En consecuencia, como se explicó anteriormente, el presente procedimiento sancionatorio se encuentra viciado por una nulidad, de lo cual se hace necesario dejar constancia en el presente recurso de reposición en contra de la resolución 1452 de 2022.

Ahora bien, reparos en contra de la resolución número 1452 del 27 de octubre de 2022.

2. Pérdida de la competencia del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para declarar el incumplimiento del contrato de obra.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD perdió competencia para declarar el incumplimiento del contrato de obra y, en consecuencia, para solicitar la cláusula penal pactada en dicho contrato.

Lo anterior, atendiendo a que transcurrieron dos años contados a partir de la terminación del contrato de obra, sin que se hubiese preferido administrativo que declarara su incumplimiento.

Con el fin de establecer la fecha hasta la cual la entidad contratante podía declarar el incumplimiento del contrato, no se encontraba liquidado. Nos debemos remitir en primera medida de lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, la cual establece lo siguiente:

Artículo 11. Del plazo para la liquidación de los contratos. *La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes o dentro del que acuerden las partes para el*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

efecto, de no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no presente la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la Facultad de liquidar en forma unilateral entre los dos meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código de procedimiento administrativo, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término, a qué se refiere a los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136.

Ahora bien, el Consejo de Estado, enfático en establecer que la competencia temporal con la que cuenta la administración para llevar a cabo la declaratoria de incumplimiento del contrato, luego de vencido el término estipulado por las partes para su ejecución, no podrá acceder, en ningún caso el término para llevar a cabo su liquidación.

Esto es, el término de 2 años antes mencionado, sobre el particular en sentencia de 9 de marzo de 2000, estableció lo siguiente: “Ahora bien, en cuanto a la competencia temporal con la cual cuenta la administración para declarar el incumplimiento del contrato después de su vencimiento, la corporación de manera reiterada ha sostenido que en aquellos contratos en los que se rigen por el decreto ley 222 de 1983, dicha figura ópera después del vencimiento del plazo contractual y antes de la liquidación o dentro del auto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de este.

Dado que efectuará la liquidación del contrato o vencido el plazo para hacerlo por mutuo acuerdo o unilateralmente por la administración, está queda despojada de sus potestades sancionatorias y cualquier incumplimiento que se imputa el contratista debe ser examinado por el juez.

Pues bien, en el expediente no una prueba en la cual se puede afirmar que el contrato de obra fue liquidado unilateralmente por parte del IDRD y mucho menos hubo una liquidación de mutuo acuerdo. En ese sentido, el IDRD contaba con un término de 2 años contados a partir del día siguiente a la finalización del contrato de obra, que fue el 5 de marzo del 2020 para expedir el acto administrativo, en el cual se declara el incumplimiento por parte de la Unión temporal, término que venció el pasado 20 de julio del 2022, el cual contempla la suspensión de términos que de prescripción y caducidad con ocasión a la emergencia sanitaria, por el COVID-19 entre el 16 de marzo 2020 y el 30 de junio del mismo año.

En vista de lo anterior, necesariamente se llega a la conclusión de que el IDRD como entidad contratante y la cual estaba facultada para adelantar el procedimiento para declarar el incumplimiento del contrato de obra con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, perdió la competencia para hacerlo.

3. Violación del principio del non bis in ídem

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que el IDRD radicó una demanda por medio del control de controversias contractuales en contra de la Unión temporal, que de acuerdo con el acto individual de reparto, la cual está adjunta al presente, le correspondió el número de radicado número 250023360020220043700 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cual versa sobre el mismo contrato de obra que es objeto del presente trámite, con la cual solicita una vez más la declaración del incumplimiento del contrato de obra, el proceso instaurado ante la jurisdicción contenciosa claramente configura una violación al principio Non Bis in ídem y pues en el mismo, en el mismo se estaría juzgando por segunda vez a la Unión temporal por los mismos hechos, reclamando de ella el pago de unos perjuicios y la cláusula penal dos veces.

Es incoherente el actuar del IDRD, dado que la Resolución 1452, resuelve declarar el incumplimiento del contrato de obra y hacer efectiva la cláusula penal pactada en el mismo, cuando con anterioridad a la misión de dicha resolución ya había instaurado un proceso ante el juez contencioso con el fin de declarar, de reclamar los perjuicios por el supuesto incumplimiento del contrato y la cláusula penal.

Es así como queda en evidencia que lo que se pretende en ambos procesos por parte del IDRD es el pago de las mismas sumas de dinero, al declarar el presunto incumplimiento del contrato de obra por parte de la Unión Temporal dos veces, lo cual resulta a todas luces improcedente.

4. Pérdida de competencia de instaurar la demanda por medio control de controversias contractuales.

Si con la presentación de la demanda, lo que pretendía el IDRD era dar aplicación a lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado en los casos en los cuales la entidad contratante pierde competencia para declarar el incumplimiento del contrato, debió emitir una resolución en la cual archivará el presente trámite regulado en el artículo 86 de la ley 1474 del 2011.

Dicha actuación del IDRD puede entenderse como aceptación, de que el llamado a declarar el incumplimiento de contrato y condenar al pago de perjuicios y la cláusula penal es un juez y no dicha entidad, lo cual sería lo procedente en este caso, téngase en cuenta que no pueden coexistir un proceso administrativo regulado en el artículo 86 de la citada ley y el proceso contencioso sobre el mismo contrato; pues de existir un proceso contencioso, la entidad pierde competencia para seguir adelantando el proceso para declarar con el cumplimiento de la entidad, el incumplimiento de la entidad, en este caso, es el juez el llamado a determinar si existe o no incumplimiento y las consecuencias que puedan derivarse de tal, según lo pactado en el mismo contrato, máxime si la entidad pública ha perdido competencia, también en razón del tiempo transcurrido durante el cual no ha liquidado ni declarado el incumplimiento del contrato, tal y como ocurre en el presente caso.

Como consecuencia de lo expuesto, el IDRD debe archivar el presente proceso sancionatorio, pues no declaró el incumplimiento del contrato en los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado y en todo caso, el proceso ya cursa en la jurisdicción contencioso administrativa.

5. No existió incumplimiento del contrato de obra imputado de la Unión temporal.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

En la resolución No. 1452 del IDRD, expone las razones por las cuales considera que la Unión temporal incumplió el contrato de obra, sin embargo, pierde de vista que la razón del incumplimiento de la mayoría de los casos que se debe a hechos imputables a la entidad contratante, debido a la fehaciente violación al principio de planeación, que no sólo modificaron el alcance del contrato, sino que provocaron que el contratista incurriera en cuantiosos costos adicionales no previstos.

6. Violación al principio de planeación por parte del IDRD

Cuando se inició el proceso de licitación para la adjudicación del contrato de obra, el IDRD ya había celebrado y finalizado un contrato con el fin de establecer los diseños de la cimentación y el reforzamiento estructural de la obra que se iba a realizar, los cuales se remontan al año 2010.

Así las cosas, era claro que el contratista al cual se le debió adjudicar el contrato de obra debía acogerse en principio a dichos diseños con el fin de ejecutar el contrato, partiendo de la base de que los diseños eran viables, situación de la que debió asegurarse el IDRD.

Una vez, fue adjudicado el contrato de obra a la Unión temporal se adelantaron todas las labores tendientes a iniciar con la ejecución de la obra. Sin embargo, al empezar la misma se pudo establecer que los diseños entregados a la Unión temporal estaban desactualizados, pues no contemplaban el carácter técnico, que se debía implementar respecto de las normas de Sismo Resistencia NSR 10, además de estar incompletos; situación que quedó acreditado en el proceso con el testimonio del ingeniero Eduardo Fernández Rincón, el cual al ser interrogado por los apoderados del contratista y de la compañía garante, afirmó que los diseños efectivamente habían sido entregados incompletos.

Se aclara que la Unión Temporal sólo pudo conocer de ellos cuando ingresó al lugar en donde se iba a ejecutar la obra y de ellos advirtió a la entidad contratante, pues dicha situación generaba un cambio en el alcance del contrato de obra, dado que la Unión temporal tuvo que realizar nuevos diseños, lo que generó a su vez una serie de gastos que no se encontraban inicialmente previstos en el contrato de obra porque se reitera, los diseños aportados por el IDRD eran abiertamente inconsistentes para poder ejecutar el contrato.

Además, el tema de los diseños también incidió de manera significativa en el trámite de la obtención de la licencia a cargo de la Unión temporal, pues con los diseños aportados por la entidad contratante era imposible adelantar el trámite y la obtención de la licencia. En este punto resulta necesario precisar que en varias oportunidades la Unión temporal solicitó acceso al lugar donde se iba a ejecutar la obra, pero el IDRD no fue diligente en coordinar la entrada al mismo, con el fin de revisar lo relacionado con la cimentación. Solo hasta cuando hubo una evaluación de la cimentación por parte de la Unión temporal, se pudo establecer que los diseños que aportó el IDRD eran inviables, no se podía simplemente hacer un ajuste en los mismos, sino que, por el contrario, se requería diseños completamente nuevos y diferentes.

Sumado a lo anterior, durante la ejecución del contrato de obra se conoció que el bien inmueble en donde se iba a ejecutar la obra había sido declarado bien de interés cultural a nivel distrital mediante el Decreto 0606 del 2001, situación que

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

no se contempló en la consultoría contratada con el IDRD y que fue la base del proceso licitatorio del contrato de obra.

Dicha situación influye de manera directa en la obtención de la licencia, pues al ser un bien de interés cultural, la obra debía adelantarse con base en unos diseños que tuviesen en cuenta la naturaleza del inmueble, es decir, no sobre la cimentación no fue contemplada los diseños, sino también que el inmueble era de interés cultural, situación que impactó de manera considerable en los tiempos de obtención de la licencia y generó además unos sobrecostos que tuvieron que ser asumidos por la Unión temporal, hechos que se encuentran ampliamente acreditada en el proceso.

El abierto incumplimiento del principio de planeación por parte del IDRD en la fase previa a la licitación y adjudicación del contrato de obra, fue lo que generó retrasos en la obra y finalmente la imposibilidad de ejecutar la misma por parte de la Unión temporal.

El no contar con los diseños adecuados ocasionó demoras en la ejecución del contrato, pues se tuvieron que corregir los diseños y se tuvo que realizar una nueva investigación sobre los cimientos, lo cual fue presentado en varias propuestas a la entidad pública que no se pronunció sobre las mismas.

Adicionalmente, incurrió en nuevos diseños e investigaciones, un gasto que la Unión temporal que no fue reconocido por el IDRD.

En este punto es necesario mencionar que, no le está dado a la entidad trasladar la responsabilidad por su falta de planeación al contratista, tal y como lo pretende hacer en los argumentos esgrimidos en la resolución 1452, al mencionar los siguiente:

“Conforme con los argumentos expuestos por los apoderados, resulta necesario indicar en primer lugar, que el principio de planeación implica tanto a la entidad estatal como el contratista. Cuando el contratista se presenta al proceso de selección infiere que él es el experto en la materia y tuvo la oportunidad de realizar observaciones en la etapa previa al proceso de selección. De hecho, tanto es así que, si un proyecto no es construible, no tiene sentido que un contratista se presente para después, presentar reclamaciones y si él hubiera advertido de la situación, no debió haber presentado oferta o debió haber presentado las observaciones del caso en la etapa precontractual.”

Es completamente irrazonable por parte del IDRD exigir que el contratista pudiera prever una situación como la que aconteció en el contrato de obra, pues en la etapa precontractual evidentemente no se tenía acceso a las instalaciones de la Unidad Deportiva El Salitre, por lo que verificar el estado de cimentación y las estructuras que tenían que ser intervenidas por el contratista, solo fue posible una vez empezó la ejecución del contrato y fue hasta ese momento donde se empezaron a dar evidencia las serias inconsistencias e inviabilidad de los diseños entregados como insumo por parte del IDRD al contratista.

Así pues, no es de recibo lo dicho por la entidad de resolución 1452, donde le exige al contratista haber hecho observaciones de tal índole en la etapa precontractual, máxime, cuando oportunamente el contratista por medio de sendos oficios puso de presente a la situación de la entidad, lo que ningún escenario puede llegarse a entender como una eximente de la responsabilidad

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

de esta por su ostensible falla, falta al principio de planeación y que ahora quiere trasladar al contratista alegando a su favor su propia culpa.

En consecuencia, es claro que al adjudicarse el contrato de obra ya se presentaba una serie de inconsistencias no previstas por la entidad contratante, que forzosamente llevaron a que el contrato presentará retrasos y se incurriera por parte de la unión temporal en costos no previstos y en otros simplemente imposibles de cumplir. Estos factores, sin lugar a dudas, no pueden trasladarse a la Unión temporal para declarar incumplimiento por parte de ella, pues es evidente que la no ejecución del contrato es atribuye al IDRD.

En virtud de todo lo anterior, se solicita lo siguiente:

De conformidad con lo planteado en el presente recurso solicitó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte:

Primero: *Revocar en su totalidad la Resolución número 1452 del 27 de octubre de 2022, por medio de la cual se adopta decisión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio del contrato de obra 2937 del 2017.*

Segundo: *En consecuencia, de lo anterior, archivar el proceso administrativo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se pretende declarar el incumplimiento del contrato de obra pública número 2937 del 2017.*

En esos términos queda presentado el recurso de reposición por parte del contratista.”

B. Apoderado del garante La Equidad Seguros Generales OC

En el mismo sentido que el apoderado del contrastiva, el apoderado de la Equidad Seguros Generales O.C, garante del Contratista bajo el contrato de Obra No. 2937 de 2017, procedió con la presentación del recurso el cual también remitió al correo electrónico, dentro de los argumentos expuesto se relacionan, I. Falsa motivación de acto administrativo. a. por cuanto el contrato no. 2937 no fue ejecutado en la forma y plazo convenido por decisiones de la entidad contratante. b. porque el contrato no. 2937 tuvo evidentes deficiencias de planeación que nunca fueron conjuradas. c. por ausencia de afectación del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y confusión de los conceptos de amortización de anticipo con buen manejo y correcta inversión del anticipo. II. del indebido control, monitoreo y cualificación de los riesgos dentro del contrato de obra no. 2937 de 2017. III. violación del derecho fundamental al debido proceso. a. por expedir decisiones ajenas al procedimiento previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. b. por no dar trámite a solicitud de recusación. IV. terminación del contrato de seguro por agravación del estado del riesgo (artículo 1060 del código de comercio). V. falta de acreditación del perjuicio reclamado. vi. falta de competencia por haberse promovido el medio de control de controversias contractuales por parte de la entidad contratante en contra de la unión temporal reforzamiento asemain. VII. Reorganización empresarial de la sociedad construcciones maja S.A.S. VIII. Subsidiaria proporcionalidad de la cláusula penal.

A continuación, se relaciona lo expuesto a título de recurso en audiencia del 22 de noviembre de 2022:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

“Sin embargo, tal cual, como lo advertía en la sesión anterior, pues esta vocalía, este servidor y la compañía que representó La Equidad, Seguros Generales, organismo cooperativo, están en total desacuerdo con la decisión adoptada a través de la resolución 1452 del 27 de octubre del 2022, amén por una falsa motivación, o bien sea por violaciones sistemáticas del debido proceso y derecho de defensa que no atienden a la realidad, tanto del contrato como a la realidad probatoria que fue enarbolada, a lo largo de las sesiones de trabajo de este desarrollo del artículo 86 de la ley 1474.

A efectos de hacer más práctica esta diligencia, entonces he querido resumir de forma sucinta y en el día de hoy ya cuando se ha consolidado este documento, pues nos aparecieron algunos otros argumentos o recordamos otros argumentos que puede que no estén contenidos en el escrito, por lo que rogaría entonces, como ya lo advertí, tenga en cuenta esta presentación, la intervención del suscrito y también el documento que compartía hace breves instantes y el cual ya me acusaron recibo.

La metodología que hemos adoptado es una metodología ius generis en la sustentación de recursos e inicialmente me permitiré abordar unos aspectos básicos o condiciones generales en las cuales creen la Equidad, seguros generales, organismo cooperativo que es necesario recabar y reflexionar, no solamente como concepto general, sino también aplicados de forma práctica, aquellos principios o aquellas consideraciones generales, en lo acaecido en la relación contractual sinalagmática que nos ocupa; para luego tener unos motivos de inconformidad, como ya lo advertí, unos de falsa motivación, otros de violación del debido proceso, otros relativos a la terminación del contrato de seguro por modificación o agravación del Estado del riesgo, también haremos una sucinta descripción de lo que son los riesgos del contrato y finalmente en desarrollo y concatenado con la violación del debido proceso, unos problemas sobre la liquidación y la compensación.

Así pues, los principios de la contratación estatal que están consagrados en la ley 80 de 1993 se encuentran dentro de ellos la buena fe y la planeación, destacándose que estos principios de buena fe y de planeación no sólo son achacables al extremo contratista, como bien lo pretende o como mal pretende indicar el acto administrativo.

Y esta circunstancia es el eje temático sobre el cual parte en demasía la defensa que representa, ello por cuanto, erróneamente se ha indicado que por parte del consorcio Santa Paula 008 y por parte del doctor Camilo, que la Unión temporal reforzamiento SIMAIN IDRD asumió con la suscripción del contrato, con la suscripción de aquella cláusula en donde se comprometía a hacer unos ajustes sobre los diseños y con la suscripción de las suspensiones u otros, asumió todos los yerros de la entidad y modificó la matriz de riesgos establecida desde la fase precontractual por el mismo Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Esta circunstancia no es cierta y entonces tengo, a su juicio, a su turno, que indicar que, en virtud del principio de buena fe, los contratos todos tienen que ejecutar de buena fe y ellos se basan no solamente en el artículo 1602 de la codificación civil, sino también el artículo 1603.

A su turno, el primero establece el pacta sun servanda y el artículo 1603 dice que estos contratos y que esta ley para las partes, deben ejecutarse de buena fe, y para ello también hay que advertir que la Corte Constitucional, en distintas

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

sentencias, habló en este caso de la sentencia C- 892 del 2001, indicó y habló sobre la procedencia que de buena fe de las partes, de ambos extremos sinalagmáticos en el período pre contractual y de la entidad estatal, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

“La circunstancia de que el principio de la buena fe tenga un claro fundamento constitucional es de gran trascendencia en el área del derecho público, de un lado, por cuanto permite su aplicación directa y no subsidiaria en el espectro de las actividades administrativas y del otro, por cuanto contribuye a las necesidades claras al poder del Estado, buscando impedir el ejercicio arbitrario de las competencias públicas y a humanizar las relaciones que surgen entre la administración y los administrados”

Tengo por demás achacar, que el principio de la buena fe de parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte nunca se satisfizo, al menos en lo que tiene que ver con la ejecución del presente contrato.

Y esta circunstancia o esta aseveración no está sustentado en un mero capricho de parte de este extremo procedimental se basa en los testimonios y en los aspectos documentales que previamente fueron entregados en el marco de este procedimiento administrativo sancionatorio y que fueron debidamente acreditados.

Tales como, el hecho de haber aceptado en su integridad y dado por hecho un problema de cimentación.

Entonces, hablaba de que a juicio este servidor y sustentado documentalmente encontramos sistemáticas violaciones del principio de la buena fe en cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

La primera circunstancia fue haber iniciado una actividad precontractual, esto es una licitación sin el lleno de los requisitos técnicos exigidos para adelantar ese proceso, con el convencimiento de no sólo el oferente que derivó en ser contratante, sino de muchos oferentes y para ese momento habían transcurrido alrededor de más de 12 años entre la afectación de él bien, como bien de interés público y la fecha en la cual se había elaborado la consultoría que derivó en la contratación.

Y a su turno, se saben que existe una subdirección específica representada, entre otras cosas, por la arquitecta Charlotte Gaviria en su momento o por el arquitecto Mauricio Reina Manosalva, profesionales acompañados de un ejército, también de ingenieros, abogados, especialistas y arquitectos a los cuales le era oponible estas circunstancias, no solamente, la afectación del contenido patrimonial o del interés público y patrimonial sobre el bien, bien de interés público patrimonial, sino también achacable, los graves yerros metodológicos en los cuales se incurrió la consultoría que derivó en el presente contrato.

Aspectos garrafales, como indicar que había una Viga de cimentación. ¿Imaginaria?.

Doctor Camilo, el IDRD llegó al convencimiento a la Unión temporal reforzamiento SIMAIN en un sistema de cimentación que no existe y en la visita primigenia del anterior procedimiento sancionatorio, que se incorporó como prueba para el presente procedimiento administrativo sancionatorio contractual

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

se dejó el recorrido filmográfico, en donde se acredita fehacientemente y también en distintos documentos, incluso también a aceptados por el Consorcio Santa Paula 008, en donde carece de las vigas que estaban en la inicialmente en la consultoría.

Y también falta al principio de buena fe la misma entidad, cuando sabiendo que existe estos problemas garrafales, pues decide apartarse y achacarle estas condiciones negativas, al contratista y también a la aseguradora.

Y entonces en su momento, el IDRD través de su arquitecto Mauricio Reina, indica y asume la elaboración de los diseños de cimentación para supuestamente superar los problemas.

Asumo yo en el entendido en que los riesgos estipulados en este contrato, la memoria me falla, no sé si es el 22 o el 21 me corregirán, pues establece que los problemas del diseño y los problemas que se encuentren en obra son asumidos o fueron asumidos supuestamente por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Y entonces no me explico cómo el resultado de esos, de esos trabajos internos adelantados por el IDRD, fueron nefastos y vulneraron nuevamente el principio de buena fe, y aun así, quienes presidían la ordenación del gasto en su turno, daban órdenes para seguir adelante con la ejecución de una cimentación que era imposible técnicamente, que aún tampoco cumplía con la norma técnica de Sismo Resistencia denominada NSR 10.

Y a pesar de que por escrito esa circunstancia fue documentada y que testimonialmente se acreditó a través de un testigo, entre otras cosas, experto en materia de estructuras y cimentación, nada dice el acto administrativo al respecto; vulnerando sistemáticamente el principio de la buena fe. Buena fe exenta de culpa.

Y, entonces podríamos decir que, con todo ese Ejército, esa legión de arquitectos e ingenieros, ese grupo especializado con que cuenta el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para intervenir los bienes que están bajo su cuidado, pueda ser exenta de culpa en un documento arbitrariamente alejado de las normas técnicas, obsoleto y que, a pesar de haber sido con peligro en su momento, nada haya hecho para con su contratista ni mucho menos para con sus funcionarios.

No, aquí el tema derivado del acto administrativo del cual es objeto de reproche, simplemente llega a versar e indicar que el culpable es la Unión temporal Reforzamiento SIMAIN y que finalmente quién va a pagar los trastos rotos es La Equidad, Seguros Generales, organismo cooperativo, pero cuando miramos la razón de la razón encontramos que hay causales eximentes de responsabilidad que, nuevamente repito, pero que, desde hace más de 2 años, advertí ante este mismo despacho.

Aspectos sobre lo cual, nada dice, el acto administrativo que es objeto de reproche y que subsecuentemente es objeto de falsa motivación.

También podría traer a colación la sentencia C - 207 de 2019, la pongo de presente la estoy exhibiendo en donde nadie puede alegar sus propias culpas en su provecho, y eso hace parte del principio de buena fe y no puede entonces el

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

consorcio de Santa Paula 008, tapar el sol con un dedo e indicar que sí puede que hayan todos los errores en fase de planeación y en fase contractual de parte de la entidad, pero que al mantenerse la relación contractual viva través de distintos otrosí, que entonces la Unión temporal, quien lo único que hizo fue propender por la satisfacción del bien público y el objeto contractual, que entonces es el único que tiene que llevar las resultas de un supuesto incumplimiento.

La “exceptio non adimpleti contractus” aplica incluso para este contrato, y que entonces, es el desarrollo de este acuerdo sinalagmático, en donde encontrará que los hechos y las piezas de este rompecabezas, indican que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte no tuvo una conducta ajustada a la honestidad, rectitud y que la debilidad de qué habla la sentencia C -207 de 2019.

Entre otras cosas, porque aceptó las suspensiones, de acuerdo a unos hechos y consideraciones que me permito resumir.

Indicó o se indicó, a través de un procedimiento sancionatorio que reposa en las respectivas grabaciones filmográficas en donde se hacía presente y necesario la pactación de precios en el marco del principio de solemnidad del contrato y que a pesar de que al contrato le quedaban dos días, existían causales propias que permitían el restablecimiento del equilibrio contractual, al menos en el tiempo, y también la pactación de precios que viabilizarán la ejecución de módulos a) y b), sabiendo que, a ese momento, la última suspensión del contrato no se tenía definido el alcance de este contrato, no se sabía cuánto se podría ejecutar del módulo a), cuánto se podría ejecutar del módulo b); y si eventualmente el auditorio y el módulo c), podrían llegar a siquiera a ser intervenidos y con ese convencimiento, suspendieron el contrato de obra.

Y en el marco de esas tratativas, entre el interventor y el contratista y con la participación de la supervisión, de la interventoría y del apoyo a la interventoría que están aquí presentes, y que brindaron sus testimonios y que el doctor Camilo pudo escuchar, pues, quedó plenamente justificado que el contrato no tenía un alcance contractual definido. Y aún así, cuando se solicitó la prórroga de la suspensión por cuanto no habían sido superados los hechos que dieron origen a la suspensión en el marco de lo que el Consejo de Estado ha advertido, Sección Tercera, Subsección C sobre lo que significa la suspensión.

El despacho que presidía en su momento estoy en la doctora Charlotte, ordenadora del gasto y el funcionario competente decidió dos cosas: Reanudar el contrato para que fenecieron y archivar la investigación porque iba a declarar un incumplimiento, porque el contrato y va hasta allí.

¿Es acaso ajustado a estos principios de la sentencia, C-207 de 2019?

Porque no se nos dijo en un comienzo y además, si revisamos que la problemática sobre la cual recae en estas circunstancias son en un todo achacables a la entidad, que, entre otras cosas, resumo y ratificó, la falta debe ajustarse a derecho y a normas técnicas de la consultoría inicial.

La extralimitación de la interpretación del contrato por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en donde asumió que el ajuste de los diseños era la realización de unos diseños nuevos, la falta de cimentación idónea y la falta de diseño idóneo de la cimentación, teniendo de presente, entre otras cosas, que en

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

la obra reposan unas columnas realizadas por la Unión temporal contratista esperando a ser usadas, siempre y cuando se hubiese definido dentro del plazo del contrato un diseño de los talos, circunstancia que al día de hoy no se tiene.

Esta circunstancia de dejar vencer el plazo del contrato lo hizo la entidad a sabiendas de lo que ocurriría, de la pérdida de los recursos, de el no cumplimiento del Estado de bienestar, del no cumplimiento de las políticas públicas que se pretendían satisfacer con este coliseo, el más importante de la ciudad, el más céntrico y el más representativo, con más de 50 años de historia y a sabiendas de esta circunstancia, dejó vencer el contrato.

Y sabía, entre otras cosas, porque así queda documentado, al menos el arquitecto Mauricio Reina sabía que se requería una adición de contrato, mayores recursos y aun así, aquel funcionario decidió abstraerse de tal circunstancia, y entonces esta circunstancia, el principio de buena fe va concatenada con el principio de planeación.

Para advertir entonces que el principio de planeación, debe extenderse no solamente a una fase de diseños, sino en el marco de toda la ejecución del contrato y saber que los estudios deben ser completos, el análisis debe ser serio del proyecto que demande los recursos para satisfacer el objeto del contrato, pero no puede decirse entonces, que a pesar de que hay una matrícula inmobiliaria que no fue puesta de presente en fase precontractual a ninguno de los oferentes, que a pesar de que existía una matrícula inmobiliaria que tenía una inscripción, esto es una afectación de contenido patrimonial, a pesar de ello, diga que el problema de planeación es achacable en un ciento por ciento a la Unión temporal reforzamiento ASIMAIN.

Pero tengo que recabar y saltarme un tanto en mi argumentación, en mi dialéctica para advertir una cosa Doctor Camilo y es que la efectividad de la cláusula penal y la efectividad del contrato de seguro, no tiene que ser como lo hizo el acto administrativo, objeto de achaque, no puede ser así, sino que tiene que haber una imputabilidad al contratista.

No se trata entonces de una carta de crédito o una carta bancaria, la expedida por La Equidad Seguros, sino que tiene que seguirse un postulado, esto es, el Decreto 1082 de 2015, en donde determina una imputabilidad de su cláusula penal al contratista.

Usted simplemente ordenó que se haga un pago por parte de la compañía de seguros, ¿Y dónde está la imputabilidad? ¿Y dónde está esa acreditación específica atribuibles de la Unión temporal reforzamiento ASIMAIN?, no estamos acá en virtud de una responsabilidad objetiva en donde sea la Unión temporal la que tenga que romper el nexo de causalidad y acreditar eximentes que, aunque los acreditó, se le está juzgando, casi que, devolviéndonos 7 siglos a un periódico inquisitivo en donde se está presumiendo una mala fe, sin tener en cuenta que la razón del problema subyace en la violación del principio de planeación.

Y entonces los que dedicamos nuestro ejercicio profesional a esta área del derecho, la contratación pública, sabremos que en muchas oportunidades se ha hablado del “rebusque stantibus”, aquella teoría de la imprevisión que hace más gravosa la prestación sinalagmática para uno de los extremos contractuales, pero los que conocemos aquella teoría, sabremos que la misma tiene un límite y

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

es una delgada línea entre la mayor onerosidad y la imposibilidad de ejecución del contrato.

Y esta línea, jamás fue abordada en virtud del ejercicio motivacional del despacho materializado en el acto administrativo que es objeto de reproche y lo digo porque la culpa exclusiva de la víctima es una exclusión propia tanto de la cláusula penal como la efectividad de los amparos, incluido el de anticipo y el de cumplimiento contenido en la ley, sobre el cual el doctor Camilo y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte están bajo el imperio, quien lo dice el artículo 209 constitucional.

Y entonces tenemos que el principio de planeación al ser inadvertido o vulnerado con el proceso licitatorio derivó en un contrato que a todas luces era nulo, que debió ser declarado nulo desde un comienzo.

Más adelante, hablaremos sobre el contrato adicional y la adición contractual, para referirme, que lo que finalmente es objeto de achaque por el consorcio Santa Paula 008 es un objeto contractual diametralmente distinto y opuesto al contratado y al que fue asegurado por La Equidad, seguros generales, organismo cooperativo.

Esta circunstancia no puede ser desechada por el despacho, porque es que en virtud de esa planeación se sabe que las entidades no pueden iniciar procesos de contratación si no están todas las partidas y las disponibilidades presupuestales, pero también, todo el análisis de conveniencia o inconveniencia del objeto y las autorizaciones y aprobaciones para ello.

No es por demás indicar, que cuando se manda a la Unión temporal reforzamiento ASIMAIN hacer unos ajustes y a obtener una licencia, sobre un capítulo, unos productos que eran imposibles, esto es una consultoría nefasta, estaba incurriendo en la violación del principio de planeación, ¿Quién? la entidad y estaba vulnerando también el principio de confianza legítima, quien a través de un proceso precontractual, aseguró tener todas las condiciones de conveniencia del proyecto y las autorizaciones y aprobaciones para ello, que había olvidado, que estaba mandando a ser un objeto imposible, estaba mandando a incumplir unas obligaciones de contenido patrimonial y urbanístico.

Y entonces, cuando se hace estas circunstancias, se sabe, lo advertía hace unos segundos, aquí lo está diciendo la Corte Constitucional y el Consejo de Estado también, que hay momentos en donde la falta de planeación conduce la imposibilidad de cumplir el objeto y que estas circunstancias derivan en cuantiosos pleitos judiciales, uno de ellos es el presente que nos ocupa y me duele como ciudadano, oriundo de la ciudad de Bogotá, de la capital y quien en mi juventud use ese escenario deportivo para el desarrollo de mis actividades lúdicas y deportivas, ver el estado en que está actualmente el escenario deportivo.

Y me duele saber, la participación del mismo estado a través de su distrito y a través del instituto para esas circunstancias, porque jamás se quiso superar los errores y sí lo hicieron, lo hicieron de forma improvisada; cuando el ingeniero Mauricio Reina da la orden de que ellos, a través de su subdirección, van a hacer los diseños de la cimentación y lo hacen sin el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y lo hacen a sabiendas de que el ingeniero estructural que rindió testimonio y aclaró las circunstancias, se opuso y siguió adelante, conllevó

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

a estas circunstancias, fue esa la razón principal del incumplimiento, la razón esencial, circunstancia que a todas luces derivará en procedimientos de responsabilidad fiscal en el marco de la ley 610 del 2000, pero también derivará en procesos administrativos sancionatorios y/o disciplinarios en contra de aquellos funcionarios.

Seré parte activa para que ello ocurra, más allá de ser extremo dentro del procedimiento, por ser ciudadano y por qué me duele estas circunstancias la que nos ocupa, pero aquel dolor no puede compadecerse para que mi cliente La Equidad Seguros sea quien tiene que achacar esta circunstancia, porque ello no es otra cosa que una grabación, una modificación del Estado del riesgo, lo indicaba hace un rato como la ley 397 de 1997, en su artículo 4 designó o determinó cuál es el la consideración de un bien cultural del ámbito nacional departamental, distrital y municipal, en distintos territorios en desarrollo de la ley 70 de 1993, indicaba también como el Decreto Distrital 606 de 2001 adoptó el inventario de algunos bienes de interés cultural, y en su artículo 1 remitió a un anexo 1 y en este Decreto Distrital del 2001, anterior a la consultoría, que fue utilizada para el pliego de la licitación pública, determinó que la Unidad Deportiva el Salitre hacía parte de los bienes declarados de interés cultural, a través de la categoría CI, que no es otra cosa que conservación integral y la conservación integral no soy especialista en derecho urbano, ni urbanístico, ni inmobiliario, pero, en alguna oportunidad sí tuve la experiencia académica de saber que la conservación integral tiene, entre otras cosas, unas consideraciones especiales frente al manejo constructivo y el proceso de intervención, sobre tal predio, estableciéndose unas reglas técnicas para salvaguardar ese interés y una normatividad especial, sobre la cual era imposible hacer ajustes de diseño sobre los entregados por el IDRD.

Era imposible hacer un ajuste, por lo que de plano el argumento del consorcio Santa Paula 008 está mandado a recoger, no puede aceptarse que la obligación de ajuste sea achacada a la Unión temporal reforzamiento ASIMAIN y que bajo ese criterio tenga que volver a hacer nuevos diseños, tenga que mover su objeto contractual a uno nuevo, porque es que ahí dice que él se comprometió a un ajuste.

Los ajustes menores eran por la actualización normativa, así se sobreentiende, teniendo de presente que los diseños eran no fase una ni era un anteproyecto si no eran una fase 3 y cómo es que unos estudios de fase III que puedan tener un meridianos ajustes, tenga que volverse a incluso un anteproyecto porque no contemplaron la norma de Sismo Resistencia NSR 10, pero tampoco cumplieron el Decreto Distrital achacable desde el año 2001, que advierte la existencia de un derecho de contenido patrimonial o de interés público sobre la conservación de la edificación, siendo entonces imposible hacer una cimentación como lo pretendía el despacho o como lo pretendía el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en columnas de concreto pegadas a los muros de protección patrimonial.

Y como quiera entonces que se ha exigido esta circunstancia, pues tengo por demás saber que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, no podría jamás haber achacado en virtud de haber asumido los ajustes esta circunstancia.

¿Porqué?

Porque es que el contrato adicional y la adición contractual son dos conceptos

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

diametralmente opuestos, verbigracia o para sustento de estas afirmaciones, pues tengo por demás, indicar la existencia de la sentencia C-300 del 2012, en donde la Corte Constitucional, desarrollando el artículo 1501 de la codificación civil, establece esencias o parámetros de ambos fenómenos para advertir lo siguiente, cuando se hace una reforma del contrato en su esencia surge un nuevo contrato y esto es un contrato adicional que es lo que aquí ocurrió, no se trata de un contrato adicional y para ello voy a traer sendos ejemplos, que ameritan la necesidad de determinar la existencia, que esto era una existencia de un contrato adicional, esto es, que el contrato primigenio era imposible de cumplir y que ese contrato adicional o esa resultas del actual objeto contractual no son aseguradas por La Equidad, Seguros Generales, organismos cooperativos.

Para ello, es importante indicar y que se tenga en cuenta los testimonios de la doctora Mónica Liliana Blanco Méndez, así como también de la ingeniera Roper, en donde al unísono advirtieron, por ejemplo, que inicialmente sí se tenía contemplado el desarrollo de una cubierta, pero que finalmente no iba a alcanzar para la cubierta y que a través de comités se le decía que no ejecutará la cubierta y más adelante en mi presentación acudiré a imágenes del material probatorio que consta en el presente procedimiento administrativo sancionatorio contractual para advertir como el módulo C, a semanas del fenecimiento del plazo, se le daba la orden de ejecutar actividades allí y se acusaba de presunto retraso por la inejecución de actividades en el auditorio, actividades de desmonte del auditorio, pero luego, es que no alcanza la plata y el presupuesto, porque aún no tenemos definida ni siquiera el dado sobre el cual va a ir cimentada o izada las columnas que le mandamos a hacer y lo que es peor, luego de fenecido el contrato, a pesar de que había un APU o distintos APUs, para fabricación, otro para suministro y otros paisaje, de forma arbitraria, el consorcio Santa Paula 008 ha querido ser cercenar el alcance contractual del 48% que ejecutó realmente la Unión temporal reforzamiento ACEMAIN para hacer descuentos a la ligera.

Inicialmente presentó un Excel siquiera sin firma y ese es el documento, el único documento que el Doctor Camilo apropió para la adopción de su decisión, a todas luces errado, por fuera de cualquier tipo de margen de legalidad, por fuera de todo debido proceso y entonces tenemos que indicar, estamos ante un problema, un problema gravísimo, en dónde se está indicando que esta intervención de elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, que eran parte del contrato y que estaban a cargo del IDRD, son las causas eficientes para imputarle responsabilidad a la Unión temporal reforzamiento ACEMAIN.

Doctor Camilo, con el respeto que su despacho y la doctora Andrea también me merece, pero tengo por demás achacar que el acto administrativo está falsamente motivado y está parcializado y es una aseveración, que se tiene en cuenta por las circunstancias que quién me antecedió, advirtió en parte, no atendió unos requerimientos específicos, no tuvo en cuenta los argumentos sobre los cuales descorrí traslado de las pruebas, tanto inicialmente como en sede de traslado y finalmente sea adecuó a lo que ciegamente le indicó el consorcio Santa Paula 008; Le invito a que haga una nueva lectura de los 7 tomos que fueron radicados en el año 2020, Para que vean la precariedad argumentativa, de esa prueba.

Precariedad argumentativa que fue advertida por mí en aquella sede y sobre la cual argumente una solicitud de nulidad de la prueba y que no fue atendida

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

favorablemente, y que es simplemente se dijo que al finalizar se iba a ser una revisión de los argumentos y que se iban a valorar las circunstancias que yo ponía de presente deje la respectiva constancia hace dos años, no obstante, el acto administrativo que hoy recurro no dijo absolutamente nada al respecto, guardó total silencio y también que solicite y advertí en virtud del artículo 13 de la carta política, esto es de derecho igualdad, requiero que también se investigue al consorcio Santa Paula 008.

¿Cuál fue la actitud del Instituto Distrital de Recreación y Deporte? Guardar silencio y dejar prescribir o caducar las acciones sancionatorias contra esa interventoría y les dio pleno valor documental y probatorio a esas aseveraciones, a documentos sin firma, a documentos por fuera de cualquier procedimiento con unos sustentos precarios, irrisorios que no guardan la altura de este procedimiento sancionatorio y es en virtud de esa circunstancia, pues que, es importante abordar, que si esto era un contrato adicional, la realización de ese contrato adicional no puede ser garantizada ni fue objeto de garantía de parte de La Equidad Seguros Generales, organismo cooperativo, en virtud, entre otras cosas, por la modificación del Estado del riesgo que en el Consejo de Estado me ha indicado que debo achacarle en mi sede defensiva y lo estoy haciendo acá y para ello tengo que hablar de la cláusula penal y su proporcionalidad como otro de los elementos propios, que quiero enarbolar como parte de la argumentación.

Para ello puedes traer a colación el artículo 1596, que dispone si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal y para ello indicar que ustedes aceptaron una ejecución del 48% que consta en actas, que está soportada por pagos y que un Excel sin firma no puede venir a controvertir, entre otras cosas porque es Excel sin firma, no constituye una sentencia judicial que me haya dicho que las actas de los comités, que las certificaciones emanadas y que lo contenido en los pagos sean ilegales o ilícitos y como quiera que se aceptó parte de esto, si hubiese tenido derecho a que se rebajará proporcionalmente esa cláusula penal, que se aplicará también el artículo 67 del código de Comercio y que en últimas, si existiese algún criterio de imputabilidad al contratista que no lo hay, como ya lo advertí, era necesario no solamente acreditar una proporcionalidad pero también tener en cuenta algo, uno de los argumentos más importantes que quiero traer a colación, para ello, ruego por favor que nos acerquemos al Decreto 1082 del 2015, en ella se establecen, entre otras cosas (...)

Las posibilidades de afectación del contrato de seguros ¿Y cuándo hay una suficiencia o que se cubren?

Y entonces en lo que tiene que ver con el artículo 2.2.1.2.3.1.7, se habla de la garantía de cumplimiento y se habla de qué es lo que se cubre con la garantía de cumplimiento y en lo que refiere al numeral tercero, esto es el cumplimiento, la garantía única de cumplimiento habla en su amparo de cumplimiento, que se cubre:

- 1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista.*
- 2. El incumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de obra, cuando el contrato no para entregas parciales y el pago del valor de las multas y la cláusula penal pecuniaria.

¿Y pensaríamos entonces que mientras los primeros 3 numerales hablan de una imputabilidad al contratista, no se dicen lo mismo en el numeral cuarto?

Que las multas o las cláusulas penales se puedan llegar a interpretar, que no son imputables al contratista. Pues tendría que advertir desde ya que no habría nada más alejado de la realidad, primero porque en Colombia está proscrita la responsabilidad objetiva, y segundo, porque cuando revisamos este mismo Decreto 1082 en la posibilidad o efectividad de las garantías, tengo que acudir a lo que antes era el artículo 128 del decreto 1510 del 2003.

Actual artículo 2.2.1.2. 3.1.19.

Que establece la efectividad de las garantías y lo condensa en 3 numerales. El primero reza lo siguiente:

“1. Por medio del acto administrativo, en la cual la entidad declare la caducidad del contrato y ordena el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado el acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

2. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante el acto administrativo correspondiente, constituye el siniestro”

3. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad declaró el incumplimiento puede hacer efectiva la cláusula penal si está pactada en el contrato y ordenar su pago al contratista del garante el acto administrativo correspondiente de la reclamación para la compañía de seguros”.

Como los que estamos aquí presentes, habremos podido advertir la imposición de la caducidad, de la cláusula penal o de la multa, indica que se tiene que hacer efectiva y hacerse efectiva el pago al contratista y al garante y ello no es otra cosa que como lo dice el numeral tercero, que se declare el incumplimiento.

Esto es que tiene que haber una imputabilidad, en materia de responsabilidad civil contractual tiene que haber un incumplimiento, tiene que haber un daño, una cláusula penal, pero tiene que haber un nexo de causalidad entre el actor de la conducta que se reprocha y el producto o el cometido de esa conducta, por lo que entonces tenemos que advertir que la cláusula penal no se puede meramente inventar y cobrársela a la aseguradora, porque es que parte de lo que hemos indicado con nuestro equipo de trabajo, en lo que tiene que ver con la cláusula penal y con el anticipo en el cargo de falsa motivación, es que el doctor Camilo sólo le dio órdenes económicas adversas a La Equidad, Seguros Generales, organismo cooperativo y le impone que tiene que hacer un pago en 10 días.

Qué pena doctor Camilo, pero el Código de Comercio primero me da a mi 30 días, pero el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, me dice que primero tiene que cobrarle a la Unión temporal reforzamiento ASEMAIN, y usted no hizo ni lo uno ni lo otro, incurriendo en una falsa motivación, e independientemente si lo hubiese hecho correctamente, esto es ordenar el pago directamente a la Unión temporal y si aquella no paga, darme 30

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

días a mí para pagar, tengo por demás indicar, que esta circunstancia tampoco podría haberse dado primero porque hay causales eximentes de responsabilidad, de las cuales he hecho brevemente su exposición; segundo porque hay un problema competencial que fue denunciado en alegatos de conclusión por esta vocalía y sobre el cual se guardó silencio; Tercero, porque usted mismo perdió la competencia cuando usted impetró dos acciones judiciales.

Una, la primera la presentó y después la retiró. Y esta segunda que no la conocíamos prácticamente y tuvimos que hacer una ecuación en nuestro recurso a última hora, en dónde ustedes insistentemente, no sé cómo, porqué, han determinado demandar, el incumplimiento del contrato y la efectividad o liquidación del contrato, esa actividad no significa otra cosa, sino un prejuizgamiento porque antes de escucharme en alegatos de conclusión, usted ya había tomado una decisión y era demandarme porque supuestamente el tomador de mi cliente había incumplido.

Eso no es otra cosa que un prejuizgamiento y esa sola razón debe haber significado que ustedes terminarán este procedimiento y sometieran esta discusión sobre el cumplimiento o no y la efectividad del amparo de cumplimiento o del mismo cumplimiento de anticipo, (perdón) y el cumplimiento a la jurisdicción de lo Contencioso administrativa.

El camino que asumo que determinaron, fue imponernos una cláusula penal para cobrarla por jurisdicción contenciosa administrativa y liquidar el contrato, pero ya no nos importa porque tenemos los recursos o nos enriquecimos sin causa.

No, las cosas se tienen que hacer bien, sí es la jurisdicción de lo Contencioso administrativo, le ruego por favor revoque este acto administrativo y reforme su demanda y que el litigio sea dirimido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esto es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera.

Por demás, si quisiera hoy impetraron un medio de control, estaría más que alejado de cualquier término, como mi antecesor le advirtió al despacho.

Y entonces en la cláusula penal y de proporcionalidad tengo por demás advertir una existencia y es la existencia del numeral 1 del artículo 3 de la Ley 1437, que en consonancia con el artículo 59 de la ley 80 de 1993, me hablan de la exigibilidad o parte del desarrollo del debido proceso del desarrollo de la legalidad para traerme a dos principios o elementos del “ius puniendi contractual administrativo”, esto es, la razonabilidad y la proporcionalidad.

Entendiéndose que solamente con esa justificación propia es que podríamos nosotros entrar a entender ¿Cuál es la justificación y razón clara, cierta y real que ha adoptado el despacho para imponer esa cláusula penal y en qué razón?

Por demás tengo que decir, usted bajo casi 10 puntos porcentuales, el avance del contrato de obra a través de un Excel sin firma que erróneamente le presentó el consorcio Santa Paula 008 y que supuestamente debía ser bajo la gravedad de juramento y ni siquiera venía con la firma, y advertía entre otras cosas, que esos problemas se tenían que solucionar, era apartándose de esa circunstancia.

Y se tenía que acreditar, motivacionalmente, porque se tenía que determinar una

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

cifra menor al 48% que documentalmente está probado en el contrato; no lo dije, yo lo escribió la supervisión de interventoría, el interventor y el contratista.

La aseguradora no participó en la elaboración de este documento y que, con base en ese 48%, eventualmente se rebaje proporcionalmente la cláusula penal, en lo que razonadamente sea imputable al contratista, sabiendo que los problemas de buena fe, planeación no les son achacables y que en suma, esto es un contrato adicional que escapa de la voluntad del extremo contratista.

También es cierto indicar cómo lo advertí, la existencia del artículo 2.2.1.2.3.1.7 que estipula en su numeral 3.1 que el incumplimiento tiene que ser imputable al contratista, aquí no se ha acreditado el incumplimiento imputable al contratista y por esa razón creo que la definición de riesgo asegurado no se ha presentado; porqué, quién tuvo la voluntad fue el mismo beneficiario, dejar vencer el contrato, de modificar el contrato, de no aprobar un plan de inversión del anticipo, de permitir que su supervisión de interventoría y su interventor aceptarán que se pagarán a esas personas a esos terceros y hoy reprochar esa circunstancia.

Para determinar la existencia también del artículo 2.2.1.2.3.2.3 aplicable a la póliza AA027962 del Decreto 1082 de 2015, que me estipulan en el subnumeral 5.2.1.1. 2.1 que la compañía de seguros no responde por la causa extraña, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho del tercero o la culpa exclusiva de la víctima.

¿Cuál hecho del tercero?

Todas las omisiones en que incurrió el consorcio Santa Paula 008

Y ¿Cuál es la culpa exclusiva de la víctima?

Todos los errores y omisiones en los cuales se incurrió el Instituto Distrital de Recreación.

Y ahora para sustentar un subsecuente argumento de falsa motivación, tengo por demás indicar que el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo lo dije hace dos años, me molesto en demás leer las motivaciones tan erradas, de parte del Doctor Camilo en su acto administrativo, cuando desatendió el artículo 2.2.1.2.3.1.5 del Decreto de 1082 de 2015.

En donde bajo el imperio de la legalidad y tipicidad se determinó única y exclusivamente 3 objetos de cobertura en lo que tiene que ver con el pago del anticipo, y yo advertí y revise la grabación y ahí estaba, la revisión que consta y que está en poder del Instituto, dice claramente que yo advertí y deje constancia que es el objeto que la ley, el legislador les dio a las coberturas de las garantías únicas de cumplimiento.

Y en ellas, se establece que se cubren no inversión del anticipo, uso indebido del anticipo, apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, y lo dije cuando controvertir las pruebas que fabricó el consorcio Santa Paula 008 de forma amañada. Y les dije, la aseguradora no garantiza legalizaciones, es más, el contrato de fiducia establece un procedimiento especial y real en donde la supuesta legalización se da es incluso en la liquidación del contrato, por lo que aún no sería exigible tal circunstancia.

Y, la entidad que hizo, hizo oídos sordos, para luego determinar mágicamente que si bien no está bajo el principio de legalidad de las faltas y las sanciones,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

una cobertura sobre amortización, la ratio decidendi del acto administrativo objeto de reproche, me condena a mí, ni siquiera la Unión temporal reforzamiento ACEIMAN, sino a La Equidad Seguros, en forma exclusiva, La Equidad Seguros Generales, organismo cooperativo en un plazo de 10 días a devolver un anticipo, el dinero de un anticipo que no ha sido amortizado.

Entonces, la motivación está dada por el supuesto, no legalización, el contratista no legalización, pero en la parte resolutive no habla de una no legalización, habla una no amortización, y el valor que me ordena a devolver, que no lo tengo, es un supuesto recurso indebidamente amortizada, no amortizado; sabiendo que la amortización también se puede dar incluso en fase de liquidación.

Y aquí vamos a las definiciones propias del artículo 91 de la misma Ley 1474, que me establece la necesidad de un patrimonio autónomo, de una fiducia, como aquí ocurrió, y para el desembolso de los anticipos, de esa fiducia es necesario un procedimiento, cual procedimiento, que haya un acta, que haya un plan de inversión del anticipo, pero entienda dos cosas Doctor Camilo, como en mi primera intervención hice, es que aquí existieron 3 planes de inversión del anticipo y ninguno de ellos quedó en firme. Esa circunstancia no es achacable a La Equidad Seguros, eso es una irregularidad que incluso puede abordar el campo penal para los funcionarios y para el interventor que firmó y aprobó estas circunstancias y el que asumió en sesión también debe responder.

Mi cliente no tiene por qué entrar a responder por la negligencia de aquellos terceros y entonces se hablaba de que había que constituir una fiducia para un procedimiento de una entrega de unos anticipos, con la salvaguarda de estas circunstancias y reposa porque así lo advertí, lo exhibí en distintos en distintas oportunidades, en sede defensiva, que los pagos a TRANINCO SAS y a otros terceros contaron con el visto bueno de la entidad a través de su interventor y entonces la fiducia pago por la orden que se cumplió en el contrato de fiducia y ahora viene el Consorcio Santa Paula 008 a inventarse un procedimiento que no hay, y decir que tocaba legalizarle a él, porque él quiere, los dineros que él como cesionario, aceptó que ya había autorizado.

Y viene a empezar a hacer un juicio de reproche sobre una razón social que le pareció nefasto y que se habían robado los recursos públicos porque era una empresa que no guardaba ningún tipo de relación; pues acredite en descargos que habían cometido un grave error, una terrible equivocación y estaban sacando el ruta equivocado y sobre eso no dijeron nada en el acto administrativo.

Como también sobre esos sendos errores, no se inició en ningún procedimiento administrativo sancionatorio en contra del actual contratista.

Y puestos de presente estos elementos básicos, es menester advertir un último, también referido al principio de legalidad, para advertir básicamente, unos motivos de inconformidad:

El primero de ellos, una falsa motivación, falsa motivación derivado en que la imputación que se está haciendo a la Unión temporal reforzamiento ACEMAIN y los casi 5.000 millones de pesos que se le están cobrando a mi cliente se derivan de una falta de planeación que exime de responsabilidad a la Unión temporal, pero también que constituyen una exclusión propia del contrato de seguro otorgado por 1.000.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Y tengo por demás indicar, apartes probatorios que reposan en el expediente, verbigracia, el testimonio del señor o el doctor Eduardo Fernández Rincón, esto es el 4 de mayo del 2022, cuando la otrora apodera de la Unión temporal, la doctora Adriana Barragán le preguntó, “¿usted como director de interventoría tuvo acceso a los diseños entregados inicialmente por parte del IDRD al contratista de obra.? ¿Tiene algo que decir al respecto de estos diseños?”

La respuesta de aquel fue: “Los diseños preliminares dados por, pese a, y otorgados al contratista estaban incompletos, habían de 3 tomos que presentaron, faltaba 1 y en un producto y de 16 había 9 y faltaban 5. Muchos de los tomos faltantes se referían al reforzamiento del coliseo de la patología.”

Cuando el suscrito apoderado en La Equidad, Seguros Generales, organismo cooperativo en la misma sesión de diligencia de esto es el 4 de mayo del 2022, le solicite que nos ilustrará sobre todo aquello que conozca o le conste sobre el contrato de obra 2937 del 2017. Tuvimos como respuesta los siguientes.:

“Este contrato cuando salió en licitación, año 2010, se requería un proyecto estructural y se le asignó a la firma PCA, ese proyecto en realidad fue cancelado en el 2010 por parte del IDRD y se canceló en esa época porque no se tenían fondos para realizar el proyecto. No se presentó en esa época la aprobación de los diseños entregados a la Curaduría estuve hablando con el ingeniero Armando Palomino, parte en su momento del PCA y me dijo que estaba lleno de trabajo, que para retomar el proyecto debería esperarse al menos 6 meses y con posterioridad pregunté al señor Narváez, también parte del PCA y él me contó lo de la falta de fondos, se me contó que en ese momento le faltaba plata.”

Frente a este mismo interrogatorio o testimonio, (perdón) Preguntó la Doctora Diana Barragán. “¿Dentro de los diseños entregados por PCA, se había referenciado de alguna forma la afectación patrimonial que tenía el bien objeto del contrato de obra pública.?”

Respuesta, “eso ya lo dije, cuando ellos remiten en los diseños iniciales o la parte que alcanzaron a hacer, no tenía nada de patrimonio o sobre afectaciones al patrimonio.”

Ahora bien, sobre las suspensiones o prórrogas del contrato, también lo advertí hace ya bastantes minutos, en donde las suspensiones y prórrogas del contrato se ampararon en los problemas de falta de planeación, dentro de ellas, los problemas con el IDPC o los trámites que se requerían ante IDPC y también advertir que existen causales eximentes de responsabilidad, pero por favor que tengan en cuenta folio 93 y folio 94, esto es de los documentos en donde el contratista hace la explicación sobre el proyecto actual para esa fecha establecida, que había un módulo A, B y C que se contemplaba montar en un 100% que el módulo A y B, pero no se contemplaba el montaje del módulo C, debido al tiempo disponible al día de hoy; y entonces se advertía la existencia o necesidad de aprobación de mayores recursos.

El 15 de enero del 2020 esto es, a escasas semanas de que se dejara morir el contrato, folio 99, 100, está este documento identificado con radicado IDRD - 629992020000238, data del 15 de enero dirigido a la Unión temporal reforzamiento San Antonio, quien firmado por el representante legal del consorcio Santa Paula 008.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Importante indicar que el segundo de los folios dice “módulo C no se ejecutará anexar el balance presupuestal del contrato contemplando lo antes mencionado” y entonces, frente al módulo o al plan de contingencia se dice que el módulo C no se va a ejecutar, mire que ni siquiera dice que se puede ejecutar o no, y entonces, hay varios problemas aquí con la falsa motivación.

1) El 35 o 38% que dice el consorcio Santa Paula que se ejecutó o el 48% que indican los documentos probatorios que hacen parte de este procedimiento sancionatorio; ¿48% de qué, del módulo A el B o el C?, ¿Pero cómo podría ser el módulo A, B y C en todos sus componentes, parte de ese 100% si el presupuesto no iba a alcanzar.

Bien lo dijo la doctora Mónica Blanca Liliana Méndez en su testimonio que el techo, por ejemplo, era un documento contractual, pero que no se iba a ejecutar y aquí se está diciendo que el módulo C es un producto contractual, pero que no se va a ejecutar y que entonces anexe un nuevo balance presupuestal y a pesar de eso, semanas posteriores dejan vencer el contrato, teniendo de presente que para esta fecha habían suspensiones, entre otras cosas, para legalizar APU's, qué son cuantificados en más de 200 millones de pesos a la fecha, como ejecutados y que ya no se reconocen, pero también para la definición de actividades mayores y menores en la obra.

Y entonces Doctor Camilo, hay una falsa motivación porque usted no podría decirme cuál es el 100% del alcance contractual, no hay al día de hoy una meta definida de terminación del plazo del contrato que le fuera exigible a la Unión temporal, porque entonces me declara una cláusula penal en la que se incluye en su cuantificación el módulo C, o en la que se incluye, el izaje de una estructura que no tenía definida su cimentación o los datos sobre las cuales se iba a lzar o porque me sanciona, por no techar un edificio en el cual no alcanzaba el presupuesto y porque bajo la teoría de los actos propios, desconoce que ustedes habían aceptado las suspensiones para esas legalizaciones, pero que dejaron vencer el contrato.

¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ello?

La respuesta es simplemente, indicar que el acto administrativo incurrió en falsa motivación, aquí el 14 de noviembre del 2019, esto es, casi dos meses antes a la anterior prueba, se dice que se necesitaba la adición del contrato, para realizar el módulo C faltante y para la respectiva liberación de todo lo pertinente a la calidad, mire lo que el 23 de enero del 2020, esto es, 8 días después de la carta entregada para el contratista por el interventor, mire lo que le dicen en el acta: “Se le reitera al contratista que la prioridad del reforzamiento va hacia los elementos de mampostería y ventanearía del módulo C, actividad que se ha liberado desde la semana pasada por parte de la interventoría”, ¿cómo así?, esto está folio 1546 de las pruebas y la anterior cita folio 663 de las pruebas, entonces ¿si se va hacer o no se va a hacer?

¿Qué dice el consorcio Santa Paula en su nueva prueba?

No dice nada.

Y, bajo ese criterio entonces encontramos, en el acta 38 no se le autorizaba el desmonte del auditorio hasta que se contará con una cotización, la logística y el

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

procedimiento de la actividad, el IDRD había aclarado en su momento que no ha sido posible presentar la autorización del desmonte de la última cubierta, que no se contaba con el sistema de protección de mampostería, pero esos aspectos eran actividades no previstas y aquí voy nuevamente, esto ya no era un contrato, una adición de contrato, este era un contrato adicional y requería las formalidades de una licitación propiamente dicha.

Y entonces, el contratista les aclaro bajo el principio de buena fe contractual, que era necesario contar con el aval para la ejecución del auditorio y, no obstante, se le adelantaba para esa fecha un proceso de multa por no ejecutar aquellas actividades. ¿Pero cómo podría ejecutar esas actividades, si esas actividades estaban suspendidas por autorizaciones o pactaciones de precio?

Miren lo que ocurrió el 7 de enero del año 2020 en el acta 50, habló del folio 1466, se le aclara al contratista que no será autorizado el desmonte hasta no tener certeza que se cuenta con el material requerido para el izaje, la interventoría solicita que el módulo C no se ejecute y los recursos que habían sido destinados para está sean usados en la cubierta y acabados del módulo A y B, pero recuérdese lo que dijo la ingeniera Mónica Blanca Liliana Méndez, qué dijo que la cubierta del módulo A y B no era contractual. Y, entonces vemos que hay una amalgama de directrices encontradas entre sí que hoy son materia de la imputación de la cláusula penal. Y esta circunstancia no es nueva, estas pruebas fueron entregadas y exhibidas en mis descargos.

Y entonces tengo por demás achacar, esto como problemas sendos de ejecución de ejecución achacables a la interventoría, al apoyo a la supervisión y en general a la entidad.

Y miren el seguimiento de la programación que aquí se hablaba de que ya había ejecutado un 42.89, ¿Cuándo? El 16 de enero del 2020.

Pero también se dice, “el atraso antes mencionados se presenta por el suministro de material a obra y el izaje y la estructura metálica, al igual que el desmonte del módulo C”, entonces me dicen, no haga el desmonte del módulo C, después me dicen, haga el desmonte del módulo C y aquí me dicen le voy a tener en cuenta el incumplimiento del módulo C, pero sí me acaba de dar una directriz que no lo ejecuté, miren 16 de enero del 2020, un día después de la carta que exhibí y eso estaba folio 1531. Dr Camilo, porque no se tuvo en cuenta esto para la circunstancia de eximir de responsabilidad siquiera parcialmente al contratista; esto es una falsa motivación.

Entonces, no teníamos claridad al momento de acabarse el contrato del 100% de los ítems contractuales, solicité el apoyo de ingeniería que me ha prestado, que nos suministra una prueba y la adjunto con el escrito del recurso que acabo de ser acusado en recibo y en ella claramente se acredita como más del 80% de los ítems iniciales cambiaron, sufrieron modificación o aumentaron inusitadamente, verbigracia la carpintería metálica y actividades como el módulo C no tenían presente una asignación presupuestal para el momento de finalización del plazo, porque el presupuesto, lo he dicho siempre, no alcanzaba y frente a eso el despacho del doctor Camilo le ordenó un pronunciamiento de fondo a la interventoría y la interventoría no dijo nada y no obstante lo anterior, fue el mismo despacho del que únicamente tuvo en cuenta la prueba del consorcio Santa Paula 008, presentada en noviembre del año 2020.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

¿Y, por qué? Porque son 7 tomos, si son voluminosos pero no dicen nada de fondo y ¿dónde quedan mis argumentos y mis pruebas? ¿Porque no han sido tenidas en cuenta?, eso es una falsa motivación y recabar en las exclusiones del contrato de seguro que ya advertí.

En lo que tiene que ver con el anticipo, aquí, esto es el 10 de octubre del 2019, hay una carta que es determinada en el 2019 - 008 y se le hace unas circunstancias de aclaración del manejo del anticipo, pero hablan de un valor amortizado y unos soportes de rendimiento y unas supuestas legalizaciones, pero aquí en ningún momento se atreven a decir que hay un saldo por legalizar de \$2.800 millones, aquí sólo se habla de \$869.598.815.

¿Y entonces doctor Camilo, dónde queda el principio de aplicación de la norma más favorable?

Sí, aquí se estaba hablando que había pendientes de legalizar sólo \$869.598.815, porque determina más de \$2.500 millones de pesos que deberá pagar mi cliente por un problema de amortización, yo no cubrí la amortización, eso es una falta de motivacional.

Y entonces, la pretensión de la entidad va en unos apartes en \$2.519 millones, en otros \$869 millones y se habla y se equipara indistintamente distintos verbos, legalización, inversión, apropiación y amortización, todos ellos son distintos y yo no cubro todos, no hay cobertura sobre amortización, no hay cobertura sobre legalización, yo cubro la apropiación indebida, el uso indebido, que me advierte la obra, que hubo algún adelanto de casi el 50%, por lo que tendría que haberse determinado como usado debidamente el anticipo por el solo hecho de tener a que el porcentaje de ejecución.

Y le advertía, líneas atrás o en momentos atrás, como se hablaba que se estaba ejecutando, (folio 431, folio 435), en el formato de alianza fiduciaria SA todas las directrices firmados, entre otras cosas, por el interventor; órdenes de giro, está el 16 de julio del 2019, ¿Cómo es posible que hoy ya se diga que esas órdenes de giro fueron oscuras? ¿Donde hay por parte de la interventoría un procedimiento o una denuncia penal que advierta que esto es falso?

No, el anticipo sí se legalizó y esto es una prueba de ello.

Continúan estas circunstancias, ni encontramos pruebas fehacientes que, en efecto, si había avances del contrato y esta conciliación bancaria del fideicomiso Unión temporal San Antonio reforzamiento se hablan de la legalización y ejecución y pagos de acuerdo al procedimiento en contrato de fiducia.

Entonces, esta cláusula 14 es la que me establecía el procedimiento operativo y en ella no se considera entonces ningún incumplimiento del procedimiento operativo que me permita advertir que se robaron el anticipo y, por lo tanto, no hay un incumplimiento que pueda hacer endilgado a la Unión temporal reforzamiento ACEMAIN y mucho menos, cabe en suma alguna, comprometer la responsabilidad pecuniaria de La Equidad, Seguros Generales, organismo cooperativo.

En los folios, 433, 439, 437, 435, 431, 359, 363, 389, 414, 402 y 400 se

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

relacionan y justifican \$4.300 millones de pesos en desembolsos a los proveedores autorizados por el interventor y, por supuesto, por la supervisión de interventoría y todos esos conceptos se adecúan al plan de inversión del anticipo, ¿no sé a cuál?, al primero que contemplaba una cimentación en concreto, o al último que preveía unas circunstancias diametralmente distintas, esto es de un contrato adicional.

Valga la pena advertir que el folio 572 fue debidamente advertido la confusión y sobre esta circunstancia nada dijo al respecto del acto administrativo y finalmente, pues, indicar que todas estas circunstancias advierten un problema de Falsa motivación; Falsa motivación que no puede llegar a otras circunstancias, sino a determinarse verbigracia, otra indefinición en noviembre del 2019, folio 534 y siguientes sólo se habla de \$1.782 millones, qué era lo único que estaba pendiente de legalización.

Al día de hoy, el ingeniero Raúl Orlando Delgado no ha explicado, ni consorcio Santa Paula 008 ha explicado, por qué esos valores, lo que sí es cierto es que la condena que sólo se le impuso a La Equidad, Seguros Generales, organismo cooperativo y en nada se le impuso a la Unión temporal reforzamiento ACEMAIN, fue la más gravosa y fue la de amortización, que no es objeto de cobertura.

El folio 1554 me hablaba de un 45.73% de ejecución y esto a fecha 26 de enero, sabiendo que el documento que aporte como prueba establece que más de un 60% del porcentaje global de actividades, indistintamente del peso económico del mismo, no era achacable ni ejecutable por falta o indefinición o por estar sujeto a una necesidad de definición técnica.

Y entonces tengo que por demás indicar que, una verdadera motivación no hubiese eximido de responsabilidad, esto es de la cláusula penal al contratista, porque si ejecutó el 45% y además, hay un 60% que no es ejecutable, no un 35 o un 55% (pues hablo en aproximaciones en valores aproximados), pues tengo por demás indicar que no es posible que se pueda hablar de una verdadera motivación que puedan elevar una imputabilidad de incumplimiento que derive en la efectividad de una cláusula penal achacable en la Unión temporal y cobrable a la Unión temporal y/o la aseguradora, sabiendo que esta última no es solidario y aquí de este folio en 1554 quise atraerlo, por lo que advirtió la interventoría, que es el segunda viñeta.

2“La interventoría informa que a la fecha se encuentra en la obra 248.071 kg y falta en obra 278.711 kg para completar el total de 526.782 kg que se tienen que tener para cumplirla con programación”

Aquí esta prueba, ruego que se ha tenida en cuenta con la discriminación del APU que, como los testimonios lo acreditaron, tenía varios componentes, había un APU para, elaboración o fabricación otro para suministro y otro para Isaac.

Porque Doctor Camilo no sé si pudo discernir, pero la rebaja, qué hace el interventor, de forma inconsulta e interpretando unilateralmente el contrato sin competencia para ello, es ordenar que se devuelva el recurso que se pagó por la fabricación, el suministro de la carpintería metálica o de las vigas que fueron fabricadas a medida para el edificio y que reposan en la entidad bajo la custodia de la entidad.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Pero aquí se advierte que se le estaba exigiendo que llevará unos kilogramos propios de cerchas o de columnas metálicas al contratista y ahora a pesar de que el señor parcialmente en la medida de lo posible y mientras el contrato no estuvo suspendido entregó parte, se le está diciendo no, no señor, que pena es que eso ya está en poder de la Entidad, pero tiene que devolver la plata que se le pagó por eso, pero sí fue el mismo consorcio Santa Paula 008 el que firmó los pagos y acreditó ese porcentaje de ejecución 45.73.

¿Dónde queda la teoría de los actos propios?

No puede alegar su propia torpeza hoy la entidad, si atomizó la actividad en 3 actividades, fabricación, suministro e izaje y se ha acreditado de forma concienzuda que, el izaje no pudo elaborarse, por indefinición y por principio de solemnidad, esto es, la actividad no estaba definida en forma escrita antes de la finalización del plazo contractual, no puede entonces La Equidad llevar la culpa o la carga de esa indefinición y esa culpa exclusiva de la entidad y de la interventoría y de la del apoyo a la interventoría.

Entonces, folio 487, esto es en plazo del contrato, 22 de octubre del 2019, hace 3 años y un mes, se le indicó cuáles fueron las circunstancias en lo que tiene que ver con el anticipo y se advirtió el uso debido del anticipo, desde aquella fecha al día de hoy les achacable cualquier tipo de investigación en torno al anticipo de la entidad y desde aquella fecha a la presente fecha o al momento de expedición del acto administrativo es claro que transcurrieron más de los 3 años de la caducidad de la facultad sancionatoria, aspecto advertido en mis alegatos y sobre lo cual no dijo absolutamente nada el despacho.

Y determinar, en la misma oficina de control interno a folio 568, advirtió de la existencia de 3 planes de inversión del anticipo, bajo estas circunstancias, era necesario rebajar la cláusula penal en un 45.73%, como mínimo, porque es lo que la prueba indica que avanzó el contratista sobre el 100% del valor contractual, pero a ello también, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, según sentencia. (Permítame le digo cuál es el número de la sentencia) C -564 del 2000 que establece unos principios de la razonabilidad, de la proporcionalidad, me establecen una necesidad de que se haga el ejercicio motivacional, que no se hizo, para excluir verbigracia el módulo C, para excluir los aspectos de cimentación de las actividades que no se pudieron usar, para excluir el techo del edificio, como quiera que sobre ellos ópera o la "exception adimpleti contractus" o la irresistibilidad o la culpa exclusiva de la entidad.

Y entonces, como mínimo, debería rebajarse proporcionalmente a \$1.282.632.669, la cláusula penal, no lo dije hoy, lo dije hace dos años en mis descargos, sobre esto y sobre no a acoger esta solicitud, el despacho en el acto administrativo no dijo nada, eso es violar el derecho de defensa y contradicción, Doctor Camilo, por qué tuvo que haberse pronunciado al menos para decirme porque no tenía razón, ni siquiera tiene en consideración las aproximaciones aritméticas que juiciosamente esta vocalía le realizó

Y entonces esto, es el folio 105 el maravilloso folio en el cual se argumenta el descuento de 500 millones de pesos y tengas en cuenta, no está firmado ni por el contratista ni por el interventor y téngase en cuenta, entre otras cosas, que este supuesto balance del contrato no hace parte del procedimiento del artículo 11 de la ley 1150 del 2007, ni fue achacable ni fue un documento contractual. Es

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

un documento producido por la misma interventoría carente de firma espurio y alejado de la realidad, el cual, entre otras cosas constituye una usurpación de funciones.

Porque el estado vedado en este procedimiento, hace este tipo de lucubraciones, en contra sus propias firmas en donde avalaron unos pagos e interpretar a su acomodo el contrato. Las potestades excepcionales contenidas en los artículos 14 y 18 de la ley 80 contienen, entre otras cosas, la posibilidad de modificación, interpretación del contrato, pero esas posibilidades de interpretación y modificación sólo están para la ordenación del gasto, tienen que tener un acto administrativo previo, tienen que ejecutarse en desarrollo del contrato antes del vencimiento del plazo y tienen que tener una indemnización de perjuicios al contratista.

Ninguno de esos elementos se presenta, en el folio 105, fue expedido por el interventor, modificó el contrato interpretando que la fabricación y suministro no se tenían que reconocer, a pesar de que se habían pagado ya, carecen de una contradicción, por lo que son una mera prueba sumaria y cuando se contradijo nada se advirtió de por qué se iban a sustentar en las cifras aritméticas proporcionadas en este Excel sin firma.

Y, entre otras cosas, es que ustedes pactaron una APU en esa forma y pagaron el APU en esa forma, porqué vienen a hacer esos descuentos hoy en día y porque no tienen en cuenta lo que advertí desde hace dos años, eso es falsa motivación.

Y entonces, lo que hizo el consorcio Santa Paula 008 no tiene sustento jurídico, ni técnico ni científico, no puede corroborarse si la veracidad de aquel documento y le ruego al despacho que no tenga en cuenta el 38%, que acuda al 45.73% y que a ese restante 54.27%, le aplique el criterio de dosimetría sancionatoria, proporcionalidad y razonabilidad en lo que le sea achacable al contratista sacando la cimentación, sacando el techo de todos los módulos y sacando todas las actividades del módulo C, como a bien sea solicitado. Si existe cualquier tipo de porcentaje qué exceda, ahí se podrá cuantificar una cláusula penal, en virtud del artículo 1596 que advertí en la primera parte de este recurso.

También quiero que tengan en cuenta la respuesta generada del 23 de marzo del 2021 por Raúl Orlando Delgado, que indicó claramente que “no conoce la legislación, que no tiene claro cuál es el concepto de legalización del anticipo y que, él aclara que en la terminación del contrato era el momento de legalizar y las actividades que, a su juicio requerían la legalización del anticipo”

Y entonces, en respuesta, el ingeniero Raúl Orlando Delgado contesta: “Cómo le estoy diciendo o cuando se hacen los giros del anticipo estos digamos que son previos para poder comprar, el contratista presenta unos documentos correspondientes a una cuenta de cobro, en algunos casos unas facturas preforma, la legalización ya vienes cuando él ya le llegó el suministro lo tiene en la obra, entonces le entrega las facturas de todo aquello que le habían girado producto del anticipo, con esa documentación es que se hace la verificación de que lo presentado como cuenta de cobro inicialmente cuando llega a la obra, pues aparezca la factura específicamente. En el caso de los concretos, se hace una factura preforma por un valor que puede ser 200 o 300 millones de pesos y a medida que va llegando el suministro se produce una factura que es con la que

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

ellos legalizan el anticipo ante la interventoría, no existe un manual de interventoría al respecto.”

Esta respuesta es un total desconocimiento al contrato de fiducia, al contrato de obra y a las facultades que como interventor tiene, y esta circunstancia de legalización es lo que se reprocha para achacarle a mi cliente la no amortización, pero lo repito, ni este procedimiento de legalización ni la falta de amortización del anticipo hacen parte de la cobertura que la ley le achacó a la Equidad, Seguros Generales, organismo cooperativo y por tanto, es necesario que se exima de responsabilidad a mi cliente, no solamente en el amparo de cumplimiento, sino también en el de anticipo.

Cuando le preguntaba, ¿Qué significa amortizar anticipo?, dio una respuesta, que es finalmente lo que se le está cobrando a mi cliente.

Básicamente, estos argumentos se aúnan a una falsa motivación, a un problema de cumplimiento y de no imputabilidad del cumplimiento al contratista, una exception pretendí contratos, sabiendo el descuento irracional del 45 al 38%, un anticipo y una violación al debido proceso, sabiendo que cuando en la parte resolutive, se ordena oficiar a una oficina de tesorería posterior a la ejecución o a la ejecutoria del acto administrativo para que se produzca una prueba posterior al procedimiento, se está incurriendo en una violación del debido proceso y una violación de las formas propias del debido proceso, ya sea del artículo 17 de la ley 1150, ya sea del artículo 11 de la ley 1150.

Porque los literales a), b) c) y d) del artículo 86 establecen un régimen probatorio, régimen probatorio que puede ser en cualquier momento hasta antes de que se profiera la decisión y es la Ley 1437, en la que me prevé a través del agotamiento de lo que antes llamábamos con el Decreto 01 de 1984, la vía gubernativa, yo como ciudadano o como interesado parte interesada presentar o solicitar pruebas; pero en ninguna parte del literal del artículo 86 se prevé (...) (hay podemos suspender dos minutos para buscar mi cargador, por favor que se va a pagar mi computador).

Entonces venía advirtiéndome, la necesidad de adecuar el procedimiento a las formas propias de cada juicio y para tal efecto le advertí al despacho que no era posible decretar una prueba, en la parte resolutive, prueba que es sumaria, que es posterior y de la cual yo no puedo nunca ofrecer una contradicción, denotándose que esa prueba, es atentatoria del artículo 11 de la ley 1150, en donde se prevé un procedimiento para la liquidación, entonces vulnera el debido proceso, pero también es una prueba que usted está decretando y que debió decretado antes de tomar una decisión, pero también es una prueba que controvierte sus pretensiones en los procesos que si bien conozco, asumo que están caminando a la declaratoria de incumplimiento y a la liquidación del contrato.

Y entonces mal podría la entidad, cobrarle una plata con una liquidación que está en manos de la jurisdicción contencioso administrativa a partir de una prueba que no puedo controvertir, que no fue decretada, no fue ordenada por el despacho, no fue trasladada a las partes y a lo sumo, es una circunstancia que vulnera el derecho al debido proceso y el derecho de defensa.

Esa circunstancia no es menor, es un hecho grave porque advierte que bajo la sentencia C-499 de agosto de 2015, en donde se habla de la legalidad, de la

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

posibilidad o la constitucionalidad, perdón, de la posibilidad de las entidades de cuantificar los perjuicios, se habló de la ley cierta, ley previa y escrita, pero también se habló que el deber motivacional y probatorio de la entidad para con sus coadministrados es en el marco del procedimiento y no podría entonces, hacer el procedimiento y finalizado el procedimiento, ordenar una prueba para cuantificar el siniestro, esas circunstancias anómalas y esa circunstancia amerita, por sí sola, amerita la revocatoria íntegra de la resolución emanada por el despacho, esto por un problema de que ya usted no tiene capacidad liquidatoria y si usted encomendó al juez la liquidación del contrato, la cuantificación del siniestro, esto es sobre la existencia o no de saldos, está en manos de la autoridad judicial.

Y es por esta razón que llamó al despacho a que se tutele el debido proceso y el derecho a defensa y las formas propias de cada juicio, no solamente en este sentido, cómo lo advertí, en la lealtad que tengo para con el despacho en el mes de octubre cuando se estaba adelantando un procedimiento especial de recusación, el despacho simplemente decidió apartarse de la prueba y le advertí al doctor Camilo que esta circunstancia, pues era anómala y no podía tenerse en cuenta porque a mí me interesaba el testimonio de la ingeniera Mónica Blanca Liliana, sobre eso que tengo que decir, primero usted no advirtió nada de lo que yo logre comprobar con la ingeniera Mónica Blanca, osea asumió todo como usted había indicado en la grabación que respondió bien Mónica Blanca Liliana, sobre lo que yo logre acreditar de ella, no dijo, ni razonó nada para decir que tenía o no tenía yo razón, pero advirtió usted cuando retrotrajo su actuación y dijo que no podía ni tenía competencia para excluir una prueba que ya había sido debidamente practicada, dijo que en el acto administrativo en la parte de resolutive, usted va a decidir sobre la tasa de sospecha del testigo.

¿Qué pasó en el acto administrativo? No dijo nada, por lo que no resolvió de fondo todo lo que le estábamos solicitando y esas circunstancias y me parece también grave que atenta con la garantía del debido proceso y derecho a defensa y que la ausencia de la cuantificación o la cuantificación, que está creada a través de un nuevo procedimiento que no es legal, que se inventado a través del acto administrativo en sus párrafos de la parte de resolutive, pues advierten una violación del debido proceso. Debido proceso, que también se da por la ausencia, apreciación del 100% de mis intervenciones porque fue transcrito parcialmente todo lo que dijo el suscrito no se tuvo en cuenta, por ejemplo, la intervención verbal que dicen alegatos de conclusión y no se dijo nada sobre lo que advertí en sede de alegatos, como tampoco fue puesto de presente los argumentos o al menos controvertidos frente a lo que volví a advertir acá.

Pero , amén de lo anterior, es menester indicar lo siguiente, la ley 1116 del 2006 establece un régimen en Colombia prevalente, entre otras cosas, incluso al Estatuto de contratación administrativa, esto es, existe un Estatuto en materia de reorganización empresarial y reestructuración, a su juicio, cuando hicimos la elucubración necesaria de este procedimiento, encontramos, que una de las empresas que tiene el 51% de la Unión temporal, entró en un proceso de reorganización empresarial.

Y es una circunstancia que ya reposan en la matrícula mercantil que puso de presente dentro del anexo de mi intervención y que forma parte del anexo documental y probatorio al que estoy acudiendo y en esa uno de los extremos de la Unión temporal o de los componentes de la Unión temporal, entró en

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

reorganización y la reorganización implica que si ustedes creen que son acreedores al menos del anticipo, en virtud también de esa consideración del artículo séptimo de la ley 80 de 1993 sabiendo que esa Unión temporal, sea distribuido en unas alcances porcentuales, tenía que haberse hecho parte en esa circunstancia y en ese proceso y sabiendo que el cobro a la compañía de seguros es supletivo, sí y sólo sí existan resultados de ese proceso de reorganización empresarial o de la eventual liquidación es que pueden llegar a hablarse de un supuesto siniestro que no lo hay, como ya lo he explicado, a cargo de la póliza de seguros otorgada por La Equidad Seguros Generales, Organismo Cooperativo.

Esta circunstancia también fue obviada por el despacho y, entonces es una circunstancia grave también que afecta el debido proceso, porque están yendo más allá y vulnerando un principio, que es el principio de prelación de créditos y ese principio de prelación de créditos hacen que tengan que ustedes convertirse en los créditos postergados.

Bajo esa consideración, pues ruego, para qué tenga en cuenta esta serie de argumentaciones, argumentaciones que también aluden a la terminación del contrato de seguro y aluden también a la terminación del contrato de seguro por modificación del estado en riesgo por agravación del estado de riesgo, según mandato del Estatuto mercantil de Colombia.

Pero también tener en cuenta, la tipificación de riesgos del contrato, la liquidación propia en la compensación que fue enervada inicialmente como argumentos defensivos sobre la liquidación y la compensación, no dijo absolutamente nada el despacho, pero advierto que aquí hay una violación del debido proceso y prejuzgamiento cuando antes de tomar una decisión, antes de escucharme en alegatos de conclusión, decide iniciar dos medios de control de controversias contractuales uno que retira y uno subsecuente que vuelve a radicar.

Y ruego al despacho para que sea trasladada la demanda y en la totalidad del expediente de ambas circunstancias como material documental propio de los soportes de mi recurso, bajo esa consideración, creo que cuando ustedes radicarón la primigenia demanda, perdieron competencias sancionatorias, al igual que perdieron competencia liquidatoria, porqué decidieron que la revisión de la legalidad y el cumplimiento o no del contrato y la eventual liquidación del contrato esté al arbitrio del juez de lo Contencioso administrativo, tribunal administrativo de Cundinamarca.

Y bajo esas circunstancias, pues advierto que, en forma subsidiaria, el procedimiento de pago, qué es oficiará una oficina interna y que me den 10 días para pagar, no es un procedimiento contenido en la ley; el código de Comercio establece que hay un plazo de 30 días para el pago del siniestro, que está debidamente acreditado en su ocurrencia y en su cuantía.

Y los tres numerales del decreto 1082 que establecen qué y cómo se cobra un siniestro, pues advierten, primero, la imputabilidad y el cobro de esos emolumentos, independientemente de que se trate en multa cláusula penal, cuantificación de perjuicios, etc, primero a la Unión temporal reforzamiento hace mal cosa que no hace el acto administrativo sancionatorio le cobra directamente y solo tiene cargas económicas adversas para con mi cliente, para con este extremo y entonces siento que haber obrado con toda la lealtad procedimental

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

significó un menoscabo de los intereses de mi cliente y bajo esas consideraciones, ruego al despacho que sea revocado en su integridad el acto administrativo que es objeto de reproche de recurso, ruego, por favor, se acceda a las valoraciones probatorias que he solicitado y ruego de forma subsidiaria, se declare la proporcionalidad, exhibiéndome siempre de los criterios de legalización o amortización que han sido achacados en sus documentos y qué es lo que en suma usted solicita en el en la parte resolutive.

De forma subsidiaria que límite en la intervención únicamente a los 800 millones de qué habla, la prueba que les exhibí, habló en valores aproximados, pero de la intervención y de la presentación consta, cual fue el valor estricto que solicite y presente y bajo esa consideración ruego se accede a favorablemente a las pretensiones que esta vocalía presenta.

En suma, al no tener facultad liquidatoria, le solicitó se abstenga el cobro a la compañía de seguros hasta tanto, sea el tribunal administrativo de Cundinamarca el que decida la liquidación y/o eventual compensación del contrato, como quiera que no es competente en ninguna subdirección para emitir certificaciones que no sean achacables bajo el procedimiento administrativo sancionatorio, so pena del inicio de las acciones constitucionales que este servidor tenga a su alcance.”

Del mismo modo, el apoderado radicó un documento en donde desarrollo cada argumento el cual se tendrá en cuenta para las consideraciones de la entidad.

V. CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Como primer punto, es importante destacar que de acuerdo con la competencia que tienes la Subdirección de Contratación para revisar el posible incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal, en las condiciones dadas en la delegación Resolución 370 de 2020, se circunscriben únicamente y exclusivamente a la verificación de lo pactado en el contrato y la conducta adoptada por el contratista para determinar si procede o no el incumplimiento del contrato, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, penales o fiscales que a partir de las conductas de las partes hayan lugar a tener consecuencia a partir de lo debatido en el procedimiento administrativo sancionatorio.

Procede el IDRD, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines estatales buscados a través de la contratación, los cuales se logran únicamente a partir de una correcta ejecución de los contratos, a establecer si la Resolución 1452 del 27 de noviembre de 2022, debe ser revocada. La entidad analizará los motivos de inconformidad expuestos por los apoderados del Contratista y de la compañía garante, tal como se expone a continuación:

5.1 EN RELACIÓN CON LOS REPAROS MANIFESTADOS POR EL APODERADO DEL CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO ASEMMAIN IDRD.

a. NULIDAD DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.

Conforme con el argumento expuesto por el apoderado del contratista y bajo el cual el apoderado de la compañía garante también argumenta bajo el título de DEL ARGUMENTO POR NO DAR TRÁMITE A SOLICITUD DE RECUSACIÓN, se procede a realizar el análisis pertinente frente a estos dos argumentos presentados por lo apoderados así:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, no faculta a la Autoridades Administrativas para decidir los incidentes de nulidad interpuestos sobre las actuaciones desplegadas por las mismas, en el entendido que la referencia a las nulidades procesales contenida en el artículo 207 y siguientes del mentado código, se incluye en la Parte Segunda de la “*Organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y sus Funciones Jurisdiccional y Consultiva*”, condición de lo que deviene que dicha faculta fue dispuesta por el legislador en cabeza del Juez Administrativo, sin que estén habilitadas las Entidades Públicas, para ejercer control de sus actuaciones por dicho medio.

No obstante, de conformidad en lo enunciado en el 17 de la Ley 1150 de 2007, que establece que el debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria contractual, es procedente hacer análisis de las actuaciones surtidas con ocasión del proceso administrativo sancionatorio de naturaleza contractual adelantado, con el fin de establecer el apego de las mismas a derecho y por ende la observancia de las garantías constitucionales que le asistieron al contratista en el presente asunto, con el fin de determinar si existe asidero en la solicitud elevada.

Marco legal y referencia jurisprudencial.

El inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, determina que es “*Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso*”.

En forma adicional, la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, señala en su artículo 133, las causales de nulidad procesal en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

- 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.*
- 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.*
- 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.*
- 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.*
- 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.*
- 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.*
- 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.*
- 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PARÁGRAFO. *Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”.*

Ahora bien, se tiene que las referidas causales de nulidad pueden predicarse de los trámites administrativos por remisión expresa del artículo 208 del CPACA, Ley 1437 de 2011, en el que se señala que “*Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento civil y se tramitarán como incidente*”.

En tal sentido, las solicitudes de nulidad que se incoen con ocasión de la gestión desplegada en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio de naturaleza contractual, deben fundamentarse en hechos que se encuadren en las causales que fueron previstas por el constituyente y el legislador, según sea el caso, por cuanto, tales transgresiones son de naturaleza taxativa.

Desde esta perspectiva, es importante presentar un marco legal y referencia jurisprudencia frente a las nulidades procesales, que por remisión de los artículos 47, 207 y 208 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) se hace al Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso o de la nulidad de rango constitucional antes citada. En efecto, sea lo primero, conceptualizar el marco general con respecto al significado y alcance de una nulidad procesal, para acto seguido, ponderar las razones esgrimidas por el Representante Legal del Contratista en el presente asunto.

Bajo esta óptica, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en sentencia de Tutela - 125 del 23 de febrero de 2010, estableció que:

*“(…) Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia – sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. **A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.** (…).*

A su vez, el Consejo de Estado en fallo emitido por la Sección Tercera, con Rad 43049 del 6 de junio de 2012, y con ponencia de Olga Mérida Valle de la Oz, se manifestó sobre el régimen de las nulidades procesales en los siguientes términos:

“Las “Nulidades Procesales” están señaladas taxativamente en la ley y es así como en el artículo 140 del C. de P.C., aplicable a este caso por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A, consagra las causales de nulidad, y en los citados numerales dispuso que las irregularidades de las formas tanto en el proceso como en los actos procesales son causas que generan nulidad de carácter procesal, utilizándose el adverbio modal “solamente”, que denota exclusión, razón por la cual impide que otras causas puedan ser alegadas como tales, es decir, se estableció la taxatividad en esta materia, no siendo admisible en materia de nulidades interpretaciones extensivas o analógicas”.

(…)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Conforme al carácter extraordinario de esta figura, se ha precisado que, de una parte, las causales que lo sustentan así como los presupuestos de oportunidad y legitimación que lo rigen, deben interpretarse de manera restrictiva y, por otra, que el rigor y la carga argumentativa de quien alega la nulidad, debe alcanzar a mostrar y sustentar con claridad estricta en qué consiste la anomalía en la que se fundaría la pérdida de efectos de la providencia atacada. Se advierte que la causal de nulidad planteada, además de contener la carga argumentativa a que hemos hecho referencia, cumple además con todos los requisitos formales previstos en la legislación procesal, en razón a que fue alegada por un sujeto procesal legitimado para hacerlo, en este caso el representante del Ministerio Público.

Se tiene entonces que las nulidades procesales, buscan evitar que se conculque los derechos de los sujetos procesales en cualquier tipo de litigio, por cuanto tienen origen en una abierta y flagrante violación del debido proceso y por ende del derecho de contradicción y defensa, originándose con aquello la invalidez de todo lo actuado desde el momento mismo en que acaeció el hecho generador de nulidad, razón por la cual las mismas son de orden taxativo, sin que, tal y como se mencionó sean aplicables a otros eventos por analogía.

Siendo claro tal y como se enunció, la naturaleza y alcance de la figura de la nulidad y su aplicación procesal, se entra en este estado a hacer análisis de los argumentos que fueron esbozados por el contratista, en aras de verificar que no se haya vulnerado la normativa aplicable.

Para efectos de adoptar una decisión ajustada a la normativa vigente, con apego al principio del debido proceso, deben tenerse en cuenta las disposiciones de orden legal que rigen la materia, así:

La Ley 1437 de 2011, dispone:

“Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente.
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona interesada en el asunto.
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa: representante, apoderado, dependiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público.
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

indicados en el numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado.

6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal.

7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.

8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado.

9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima.

10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado en sociedad de personas.

11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración.

12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa.

13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver.

14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los dos períodos anteriores.

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin.

16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición.

Artículo 12. Trámite de los impedimentos y recusaciones. *En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales.

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente.

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior”.

Sea pertinente señalar que, ante el silencio de la oportunidad procesal para incoar la recusación en la Ley 1437 de 2011, es aplicable, por remisión expresa, lo dispuesto en el artículo 142 del Código General del Proceso, que cita:

“Oportunidad y procedencia de la recusación. Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la condena en concreto o de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares extraprocesales.

No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano (...).”.

Se tiene entonces que la causal que fue alegada por el contratista frente a la desestimación de una prueba practicada en el proceso, no fue referida entre las casuales de recusación dispuestas por el legislador, teniéndose al no disponerse de supuestos de derecho aplicables, no le era dable a este despacho actuación diferente a la de continuar con la audiencia, desestimando de plano la solicitud realizada.

Lo anterior como quiera que, en audiencia del 11 de junio de 2022, el apoderado del contratista, doctor Juan Carlos Quintero Cuervo, presentó una solicitud de recusación contra el suscrito, con la finalidad que fuera apartado del procedimiento referido y en su lugar se designará a otro funcionario para que dirimiera la controversia, esto con el fundamento de proteger el principio de imparcialidad.

De acuerdo con el trámite de la recusación, la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte emitió las resoluciones que a continuación se relacionan:

- *RESOLUCIÓN No. 441 DE 11 DE JULIO DE 2022 “Por la cual se resuelve una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para resolver recusación en contra de Subdirector de Contratación del IDRD”.*
- *RESOLUCIÓN No. 646 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 “Por la cual se resuelve Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación en contra de la Resolución No. 441 de 11 de julio de 2022, por medio de la cual se resolvió una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del Instituto de Recreación y Deporte para resolver la recusación en contra del*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Subdirector de Contratación del IDRD”, fijando como funcionario para resolver la recusación a la Subdirector técnico de Recreación y Deporte del IDRD.

Acatando lo resuelto por la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, la Subdirectora de Recreación y Deporte del IDRD, mediante la Resolución No. 1251 del 28-09-2022 “*Por la cual se resuelve la recusación presentada en contra del Subdirector de Contratación del IDRD, en el marco del Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra 2937 de 2017 suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN Y EL IDRD*”; resolvió lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO: No aceptar la recusación presentada por el Dr. JUAN CARLOS QUINTERO CUERVO, apoderado de la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, contra CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA, Subdirector de Contratación del IDRD, con base en las consideraciones expuestas en el presente acto”.

Conforme con lo resuelto, la Subdirección de Contratación citó a reanudación de audiencia a las partes convocando para el día 7 de octubre de 2022, con el fin de continuar con el desarrollo del orden del día, presentación de alegatos de conclusión por las partes. No obstante, el apoderado del contratista presentó nuevamente una recusación contra el Subdirector de Contratación, alegando la tacha del testimonio del apoyo a la supervisión “Ingrid Roper”, solicitud que fue rechazada de plano por el Subdirector, bajo lo cual se indicó que la misma fue presentada como “tacha de testimonio” y se decidiría en el pronunciamiento de fondo por parte de la Entidad.

En ese mismo sentido, en reanudación de audiencia del día 24 de octubre de 2022, el apoderado del contratista presentó nulidad, bajo la cual el despacho resolvió lo siguiente:

“Solicita el apoderado UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, en audiencia de fecha 24 de octubre de 2022, y mediante correo electrónico de la misma fecha, nulidad procesal, sustentando su solicitud de la siguiente manera:

JUAN CARLOS QUINTERO CUERVO, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.467.516 de Bogotá D.C., abogado portador de la Tarjeta Profesional No. 350.541 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, por medio del presente memorial presento solicitud de nulidad procesal en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:

1. HECHOS

1. La UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN y el IDRD suscribieron el contrato de Obra Pública No. 2937 de 2017, el cual se encuentra en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento del contratista, de acuerdo con lo reglado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

2. En el desarrollo de la audiencia llevada a cabo el pasado 7 de octubre del presente año, el suscrito presentó una recusación en contra del doctor Camilo Ernesto Quiroga Mora, en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.

3. Frente al particular, el doctor Quiroga tomó la decisión de rechazar de plano la solicitud hecha por el suscrito argumentando, en un primer momento, que el testigo ya había sido tachado de falso anteriormente y que la oportunidad procesal para resolver dicha solicitud sería al momento de emitir el fallo, situación que no fue de recibo por el suscrito pues la tacha de falsedad (artículo 211 del Código General del Proceso) y la recusación (artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011) son figuras procesales

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

independientes, con efectos y trámites diferentes, los cuales en todo caso no son excluyentes.

4. Luego de suspender la audiencia en dos oportunidades, el doctor Quiroga decidió nuevamente rechazar de plano la recusación formulada en su contra, argumentando que no daría el trámite correspondiente a la solicitud, pues en su criterio las actuaciones del suscrito eran dilatorias del procedimiento y temerarias, por lo que siguió el curso de la audiencia sin darle el trámite correspondiente a la recusación.

5. Así las cosas, el doctor Quiroga omitió su deber legal de suspender la audiencia y tramitar la recusación formulada en su contra, tal y como lo indica la norma, fijando fecha para emitir el fallo para el 24 de octubre de 2022.

6. El hecho de que el doctor Quiroga no haya suspendido el proceso deja en evidencia la nulidad procesal, pues precisamente el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 establece la obligación de suspender el procedimiento, pues en el evento en que el superior jerárquico del funcionario público recusado encuentre que éste se encuentra inmerso en una causal del impedimento o recusación, dicho funcionario no tendría la competencia para emitir un fallo. Así las cosas, seguir con el curso de la audiencia y emitir un fallo no solo es contrario a la norma, sino que vicia de nulidad todo lo actuado.

I. CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Conforme a la solicitud del apoderado, la Entidad se pronunciará en dos sentidos, primero, respecto del análisis de la solicitud de nulidad procesal incoada y segundo, precisando lo concerniente a la recusación formulada en desarrollo de la audiencia del 7 de octubre de 2022, de la siguiente manera:

1. *El curso del proceso sancionatorio se ha desarrollado, bajo los postulados y principios consagrados en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. – CPACA, que consagra lo siguiente:*

“Artículo 3º. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. (...)

En referencia a la anterior norma, la doctrina ha decantado en cuanto a la competencia administrativa:

“La visión constitucional del debido proceso administrativo se alude al juez natural o legal, esta noción para las actuaciones administrativas se concreta en el elemento competencia esencial para la validez de los actos administrativos; además configura una expresión del principio de eficacia ya que las actuaciones administrativas realizadas por autoridad incompetente no logran la finalidad de los postulados consagrados en el artículo 3º de la Ley 1474 de 2011, esto es afectando los derechos implícitos en las actuaciones administrativas, por ausencia del principio de eficacia (Subrayado fuera de texto)

“La competencia como manifestación del principio de legalidad, previsto en los artículos 6º, 121, y 122 Constitución Política, es un postulado esencial del Estado Social de Derecho y de toda actuación del poder público. Conforme a él, la actuación de las autoridades es legítima en tanto se desarrolla dentro del preciso ámbito funcional determinado por el legislador y proscribe su u omisión por parte de los servidores

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

públicos¹.

La competencia administrativa se encuentra definida en el artículo 5º de la Ley 489 de 1998,

ARTICULO 5o. COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo.

Desde esta perspectiva, es importante presentar un marco legal, jurisprudencial y doctrinal, referente a las nulidades procesales, que por remisión de los artículos 47, 207 y 208 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.) se hace al Código de Procedimiento Civil hoy Código General del Proceso. En efecto, sea lo primero, conceptualizar el marco general con respecto al significado y alcance de una nulidad procesal.

Bajo esta óptica, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que:

“(…) Las nulidades son irregularidades que se presentan en el marco de un proceso, que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente- les ha atribuido la consecuencia –sanción- de invalidar las actuaciones surtidas. A través de su declaración se controla entonces la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso.

La naturaleza taxativa de las nulidades procesales

Nuestro sistema procesal, como se deduce del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ha adoptado un sistema de enunciación taxativa de las causales de nulidad. La taxatividad de las causales de nulidad significa que sólo se pueden considerar vicios invalidadores de una actuación aquellos expresamente señalados por el legislador y, excepcionalmente, por la Constitución, como el caso de la nulidad que se presenta por práctica de una prueba con violación del debido proceso. Cualquier otra irregularidad no prevista expresamente deberá ser alegada mediante los recursos previstos por la normativa procesal, pero jamás podrá servir de fundamento de una declaración de nulidad. ²(…).

A su vez, el Consejo de Estado, se ha manifestado respecto del régimen de las nulidades procesales, así³:

“(…) Las nulidades procesales de que pueden adolecer los procesos que se adelantan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, únicamente pueden ser aquellas previstas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por expresa disposición del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, adicionados por la causal constitucional de pleno derecho, consagrada en el inciso final del artículo 29 Constitucional.

A propósito del régimen legal de las nulidades procesales, tanto la jurisprudencia de esta Corporación, como la de la Corte Constitucional han concluido que dicho régimen se encuentra orientado, entre otros, por los principios de i) taxatividad o especificidad y de ii) convalidación o saneamiento, con sujeción a los cuales se tiene, en virtud del primero, que no será posible invocar y menos aplicar causales de nulidad que no hubieren sido expresamente consagradas por el legislador -única autoridad, junto con el Constituyente, claro está, con facultades para establecer y definir las causales de nulidad- y, por razón

¹ Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Juan Manuel Laverde Álvarez, Legis Editores 2018.

² CORTE CONSTITUCIONAL, Ref T- 125 del 2010, MP, Sentencia 23 de Febrero de 2010 MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

³ CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, Rad: 25000-23-26-000-1999-02858-01(26886), Sentencia 12 de febrero de 2014, M.P. HERNAN ANDRADE RINCON

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

del segundo, que las causales de nulidad que no se propongan o no se aleguen en la oportunidad prevista en la ley para el efecto, desaparecen por razón de su saneamiento.”

En este sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que:

“Las nulidades procesales se encuentran establecidas, de forma taxativa, en el artículo 140 del C.P.C., (hoy 133 del CGP) lo anterior, como quiera que es al legislador a quien corresponde determinar y precisar de manera estricta, los supuestos fácticos y jurídicos que de acaecer, pueden generar la anulación del trámite procesal.

Ahora bien, en cuanto concierne al contenido y alcance del concepto de nulidad procesal, debe advertirse que la misma tiene como finalidad brindar un correctivo a ciertos vicios – saneables o insaneables- que se generan por el desconocimiento de presupuestos legales establecidos para la tramitación de determinado proceso.

(...) no es viable que las partes o sujetos procesales, formulen nulidades sin apoyo normativo estricto y preciso, lo contrario supone, indefectiblemente, desestimar la respectiva petición, como quiera que las nulidades procesales, en los términos anteriormente expuestos, deben interpretarse de forma estricta y restrictiva”.

“Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad.

La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación.”
(Negrilla fuera de texto)

Así mismo, la mencionada norma dispone en su artículo 136, lo siguiente

“Artículo 136. Saneamiento de la nulidad.

La nulidad se considerará saneada en los siguientes casos:

- 1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla.*
- 2. Cuando la parte que podía alegarla la convalidó en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.*
- 3. Cuando se origine en la interrupción o suspensión del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa.*
- 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa”*

En este marco normativo deberemos precisar que ni la especialidad del proceso sancionatorio contractual dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 ni las normas supletivas establecidas en el CPACA, contemplan la competencia para que una autoridad administrativa pueda resolver sobre solicitudes nulidad dentro de los procedimientos administrativos, pues dicha competencia tiene reserva judicial (Salvo en los casos expresamente previstos por el legislador, como en el caso de los procesos de responsabilidad fiscal). En tal sentido no es dable pronunciarse sobre la nulidad

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

procesal en tanto, ni la Entidad Contratante, ni las partes del contrato estatal, pueden fijar un procedimiento distinto ni complementar el procedimiento proscrito en la norma referenciada.

Situación que además se encuentra descrita en la Ley 2080 de 2021, “POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN”

ARTÍCULO 3. Modifíquese el párrafo del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 y adiciónese un párrafo al mismo artículo, así:

PARÁGRAFO 1. Las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. Esto es artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Subrayado fuera de texto)

Conforme lo anterior, se reitera que no resulta procedente la solicitud de nulidad procesal en tanto, ni el IDRD, ni las partes intervinientes en la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, son autoridades competentes para decidir sobre el particular.

2. En cuanto a la solicitud de recusación formulada la cual se rechaza de plano, es necesario precisar los argumentos facticos y jurídicos en que se basa la decisión en el marco del actual procedimiento administrativo así:

En audiencia llevada a cabo el 7 de octubre de 2022, una vez se otorga la palabra al apoderado del contratista para presentar alegatos de conclusión el apoderado especial Juan Carlos Quintero Cuervo, en vez de realizar la presentación de los alegatos en la oportunidad debida, presenta sorpresivamente una nueva recusación contra el Subdirector de Contratación del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), Doctor, Camilo Ernesto Quiroga Mora, indicando los siguiente:

(...)

En el curso de la audiencia establecida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 2937 de 2017, suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, cuyo objeto fue contratar por el sistema de precios unitarios fijos, las obras de la primera etapa del reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas, de la Unidad Deportiva El Salitre de Bogotá, se practicó el testimonio de la señora Ingrid Yurani Roperero Triviño.

2. La señora Roperero Triviño fungía como contratista de la entidad desempeñando labores de apoyo a la supervisión de la interventoría desde aproximadamente el mes de octubre de 2019, cuando en virtud de la cesión del contrato, el Consorcio Santa Paula 008 asumió la interventoría del contrato de obra No. 2937 de 2017.

3. Así las cosas, el pasado 15 de mayo de 2022 se practicó el mencionado testimonio, donde la testigo en varias oportunidades al contestar las preguntas formuladas por el doctor Camilo Quiroga se refirió a él con el denominativo “jefe”, situación que fue puesta de presente por la doctora Diana Carolina Barragán Vargas, apoderada del contratista para ese momento y quien ya había solicitado, en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso, la tacha de la testigo por su evidente falta de imparcialidad.

4. Lo anterior, deja en evidencia nuevamente la posición que tiene el IDRD frente al presente procedimiento sancionatorio que se adelanta en contra del contratista, pues haciendo un análisis de la relación que hay entre la testigo y el doctor Quiroga, no es posible predicar que exista una relación de subordinación laboral o de alguna otra índole,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

pues la señora Roperó Triviño no se encuentra vinculada por contrato laboral con la entidad ni tampoco labora para la Subdirección de Contratación.

5. Así las cosas, no se entiende como la testigo puede referirse al doctor Quiroga como su jefe, más allá de dejar absolutamente claro que el subdirector de contratación tuvo algún tipo de injerencia en la forma en que la testigo debía rendir su testimonio.

6. Nuevamente nos encontramos frente un hecho que revela la falta de imparcialidad y la posición que tiene la entidad respecto del presente proceso sancionatorio, pues valga la pena destacar, el doctor Camilo Quiroga ya ha sido recusado en dos oportunidades anteriores, la primera de ellas por el apoderado de la entidad garante, La Equidad Seguros, por la revelación de datos que estaban bajo reserva del proceso sancionatorio y por ende en custodia del doctor Quiroga, por parte de la directora general del IDRD en una rueda de prensa llevada a cabo en noviembre de 2021, donde se afirmó que el contratista había incumplido el contrato de obra sin que ello se haya demostrado hasta el momento, recusación que fue negada.

7. El 13 de junio de 2022, el suscrito presentó recusación formal en contra del doctor Quiroga por los hechos sucedidos con el testimonio de la señora Mónica Triviño, donde al finalizar la audiencia del 23 de marzo de 2021, el doctor manifestó que “le estaban sacando canas a Mónica, pero lo hizo bien”, situación que llevó al suscrito a solicitar la recusación del doctor Quiroga, pues era evidente la falta d imparcialidad y la violación a los diferentes principios con los que se deben adelantar las actuaciones administrativas, máxime cuando en un presunto intento de ocultar lo sucedido con la grabación de la audiencia, la entidad subió a SECOP I una copia de la misma donde se había extraído el aparte de la manifestación hecha por el doctor Quiroga. Dicha recusación nuevamente fue negada por la entidad.

8. Es absolutamente claro que el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, en cabeza del subdirector de contratación, quien fue facultado para dirimir la controversia por el presunto incumplimiento al Contrato de Obra No. 2937 de 2017, tiene una posición ya sentada frente a este caso, situación que ha sido denunciada en varias oportunidades a lo largo del proceso y que ahora nuevamente se deja en evidencia como el doctor Quiroga tiene una clara injerencia en la forma en que los testigos han rendido sus testimonios, lo que claramente se verá reflejado en las resultas del proceso.

(...)

SOLICITUDES

Con base en todo lo anterior, amablemente solicito:

1. Que sea tramitada la presente recusación en contra del doctor CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA, subdirector de contratación del IDRD, de acuerdo con lo establecido para tal fin, en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Que se suspenda el curso del proceso administrativo sancionatorio hasta que se haya decidido de fondo la recusación, de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto, del artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ante la nueva solicitud de recusación, el Despacho precisó todo lo actuado hasta la fecha y se motivó la decisión de rechazar de plano la recusación formulada conforme a los siguientes apartados de la audiencia que se transcriben a continuación:

(...)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

“Bueno, vamos a hacer una revisión general de lo actuado hasta este punto a fin de verificar la solicitud que hace, el apoderado del contratista.

Lo primero que es importante señalar es precisamente el histórico de la actuación administrativa y voy a hacer un recuerdo breve de las 50 audiencias, con las que con el día de hoy se completan en el marco de la actuación administrativa.

El procedimiento administrativo inició el día 9 de octubre de 2020, se presentaron descargos los días 20 y 27.

El 3 de noviembre hubo cambio de apoderado del contratista y se hizo una solicitud de nulidad.

El 12 de noviembre hubo presentación de descargos por la apoderada de contratista.

El 24 de noviembre al finalizar la presentación de descargos de 2020.

El 3 de diciembre 2020 se resolvió una recusación presentada en el marco del acto sentido, en términos generales.

El día 15 de diciembre de 2020 se emitió el acto administrativo que ordenó la práctica de pruebas

El día 20 de enero del 2021 se presentó la prueba por informe.

El día 27 de enero del 2021 continúa la presentación de la prueba por informe.

El 4 de febrero continuó la presentación de la prueba por informe

El 16 de febrero de 2021. Se hizo la práctica de pruebas testimoniales.

El 17 de febrero continuó con practicar pruebas testimoniales

El 19 de febrero de 2021 solicitud de suspensión por incapacidad médica de la apoderada del contratista,

El 25 de febrero de 2021 solicitud de nulidad del procedimiento.

El, 4 de marzo del 2021 el IDRD se resolvió solicitud de nulidad del procedimiento.

El, 12 de marzo del 2021 se emitió un nuevo administrativo que adopto decisión sobre práctica de pruebas.

El 23 de marzo 2021 se lleva a cabo práctica de pruebas testimoniales.

El 14 de abril de 2021 hubo renuncia del poder por parte del apodera del contratista.

El 26 de abril de 2021 reasumió la apoderada del contratista y solicitó nuevamente la suspensión de la audiencia. El día 3 de mayo de 2021 se continuó con la práctica de pruebas testimoniales.

El 4 de mayo 2021, continua práctica de pruebas testimoniales.

El, 12 de mayo del 2021 continuó la práctica de pruebas testimoniales.

El 20 de mayo del 2021 hubo suspensión por incapacidad médica.

El día 28 de mayo del 2021 se continuó con la práctica de pruebas testimoniales.

El 8 de junio del 2021, hubo práctica de pruebas testimoniales

16 de junio 2021 se continuó con la práctica de testimonios

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

El 22 de junio de 2021 se hizo revisión de las pruebas testimoniales que no se han podido practicar.

El 7 de julio del 2021 hubo solicitud de suspensión de la audiencia por el apoderado de la aseguradora.

El 16 de julio de 2021 se emitió acto administrativo que decidió sobre pruebas

El 27 de julio del 2021, nuevamente se verificó acto administrativo que ha sido sobre práctica de pruebas

el 15 de septiembre 2021, se tenía prevista la primera fecha para la presentación de alegatos de conclusión, pero hubo solicitud de suspensión de la audiencia por la apoderada del contratista.

El 28 de septiembre 2021 también se renueva para alegatos de conclusión, hubo solicitud de suspensión de la audiencia por la apoderada del contratista

El 7 octubre 2021 otra vez hubo solicitud el apodera del contratista sobre el control de legalidad de la prueba por informe.

El 13 octubre 2021 hubo solicitud de aclaraciones y observaciones de la prueba por informe

El día 2 de noviembre de 2021 hubo solicitud de suspensión por incapacidad médica.

El 10 de noviembre, 2021, se deja constancia que esa fecha se renueva audiencia, pero el 6 de noviembre 2021 se notificó la existencia de una acción de tutela que conoció el juzgado 64 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.

El 30 de noviembre 2021 conforme lo ordenado por el juez de tutela, se procedió a convocar la reanudación nuevamente para el día para el día 30 de noviembre 2021, notificado a las partes los oficios correspondientes

El 14 de diciembre, la apoderada manifestó la imposibilidad de asistir.

El día 3 de enero 2022, la apoderada manifestó la imposibilidad de asistir conforme con correo electrónico allegado

En audiencia del 24 de enero del 2022, hubo solicitud de suspensión de la audiencia por el representante legal del contratista.

El día 2 de febrero de 2022 llegó una nueva acción de tutela, ahora de conocimiento del juzgado 58 civil municipal de Bogotá de pequeñas causas.

el 18 de febrero del 2022 se había convocado a reanudación de audiencia, Sin embargo, el contratista no compareció a la misma, indicando que el fallo de tutela no ha cobrado firmeza ante la impugnación presentada.

El día 25 de marzo del 2022, se insistía exactamente en el mismo inconveniente ya había renunciado en ese momento la apoderada del contratista.

El 21 de abril de 2022 hubo una comunicación del representante legal del consorcio indica la posibilidad de reanudar audiencia, Pese a la citación que se ha enviado y a que digamos que el trámite de impugnación y no suspenderá los efectos de la actuación administrativa,

El día 5 de mayo del 2022 hubo una comunicación del representante legal donde nuevamente señala la imposibilidad de reanudar audiencia.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

El día 19 de mayo del 2022 de acuerdo con el fallo de tutela que decidió la impugnación de la última tutela, se convocó a la reanudación de la audiencia. Sin embargo, ese día el representante manifestó que no contaba con abogado y que necesitaba conseguirlo.

El día 26 de mayo 2022, se presentó audiencia el doctor Juan Carlos Quintero Cuervo como abogado del contratista.

El día 2 de junio del 2022, se dio lectura al acto administrativo por el cual se había solicitado que se había solicitado una nulidad en la actuación y se adoptó decisión.

El día 13 de junio, el doctor Juan Carlos Quintero presentó la solicitud de recusación que al inicio de esta audiencia se enuncio y se adoptó decisión correspondiente, sin embargo, al interior de la actuación de la administrativa y aun cuando hoy nos convocaba precisamente la presentación de los alegatos de conclusión, nuevamente el día de hoy se ha llegado a la actuación por parte del apoderado del contratista, una nueva solicitud de recusación, qué pudo haber sido formulada en su momento, aún más teniendo en cuenta varios elementos.

El primero de ellos es que cuando el apoderado del contratista allegó, solicitó el plazo del código general del proceso para presentar sus alegatos de conclusión, término de 10 días que fue otorgado por la entidad precisamente en garantía del derecho de defensa, de contradicción y el conocimiento que debía tener de la actuación administrativa.

Una vez reanudado el término desde los 10 días para presentar alegatos, se presentó la primera solicitud de recusación, el cual se dio curso en su momento. Hoy después de casi 3 meses, al momento de reanudación de la audiencia, nuevamente se presenta una solicitud de recusación que tiene una característica particular, y es que está fundamentando la recusación en una solicitud que en su momento la doctora Diana Barragán, como apoderada del contratista, presentó en audiencia, pero no como recusación, sino como la tacha de un testigo por imparcialidad.

En la audiencia del día 15 de mayo del 2021, la doctora Diana expresamente citó el artículo 211 del código general del proceso, en el que expone exactamente los mismos argumentos que aquí se están exponiendo ahora como causal de recusación en contra del suscrito, digamos que, en ese momento, y siguiendo precisamente las reglas establecidas en el artículo 211 del código general del proceso, resulta relevante indicar que cuando se presentan este tipo de solicitudes, el escenario propicio e idóneo para adoptar decisión sobre la procedencia o no de esas solicitud es precisamente el acto administrativo en el cual se adopta decisión en la actuación correspondiente. Y en esas condiciones, precisamente por solicitud de la doctora Diana, es una de las solicitudes que está pendiente de resolver, pero se resuelven de fondo precisamente cuando se adoptó decisión al interior de la actuación administrativa, situación que en este momento no ha ocurrido.

Importante destacar y eso se puede verificar en los audios correspondientes de la audiencia del día 15 de mayo, en el minuto 5 punto 12, en particular que es en donde ya hace la solicitud y entonces digamos que ahora lo que resulta sorpresivo, es que el argumento que se presenta sobre la tacha del testigo ahora se emplee con el mismo argumento como una recusación para impedir el avance de la actuación administrativa.

Eso resulta absolutamente sorpresivo y es necesario contarle y traerlo de presente a la actuación cuando uno verifique el contenido de los argumentos expuestos por la doctora Diana Barragán en su momento era precisamente eso y fue antes de la práctica, incluso del testimonio en el cual señaló que podría ser un testigo falso. un testigo tachado por imparcialidad, esas fueron la causal que invocó en su momento la doctora Diana Barragán como apoderada el contratista, siguiendo las reglas precisamente que establece el mismo código sobre el particular, esas tachas se resuelven, esto es precisamente el momento adoptar decisión cuando se consolida todo el acervo probatorio y cuando la administración se encuentra realmente en la posibilidad de

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

verificar la presencia o no de esas solicitudes, verificar el acervo probatorio y darle el valor probatorio a las pruebas allegadas y practicadas en el procedimiento según corresponda desde el punto de vista legal y esa es precisamente la solicitud que está pendiente de decidirse por parte de la entidad una vez lleguemos a esa etapa.

Otro elemento a tener en cuenta y que resulta fundamental es que cuando miramos el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la etapa de alegatos de conclusión no es una etapa prevista en el procedimiento. Sin embargo, desde el inicio de la actuación se ha dejado claro a las partes que ante la importancia y relevancia de la actuación administrativa, el contenido del acervo probatorio tan importante que existe en la actuación, resulta de especial relevancia la posibilidad que deben tener las partes de pronunciarse sobre las pruebas y el contenido del procedimiento previo adoptar decisiones sobre el particular.

Otro punto que es relevante e importante en la actuación administrativa es que cuando se cuando existe la sustitución de un abogado por la razón que corresponda, el abogado que llega a la actuación recibe el proceso en la etapa en que se encuentre y, en este sentido, digamos que advertir en este momento o en la situación que se presenta en el documento que entrega el apoderado del contratista, cuando desde hace más de casi un año estamos, es precisamente en el punto de presentar alegatos de conclusión, resulta ser una maniobra dilatoria para impedir la continuidad de la actuación administrativa.

Cuando hice el recuento de todas las actuaciones, son 50 audiencias, estamos pendientes de presentar alegatos de conclusión desde el año 2021, rodeado de una serie de circunstancias especiales y particulares, de las cuales ya hicimos trazabilidad y en la cual de alguna manera con este tipo de actuaciones lo que se ha puesto es la afectación de la actuación administrativa, que, como bien lo indica la apoderado del contratista en su documento, es una actuación que también se encuentra sujeto a los principios de economía, de efectividad, de celeridad, del interés público subyacente, al interior de la actuación, señalando argumentos que de alguna manera ya se han presentado en la actuación y sobre los cuales la administración se encuentra pendiente por decidir.

En este momento como ya lo indicado, nos convoca, es la presentación de los alegatos de conclusión y eso hace ya hace un año. Por eso de alguna manera, antes de suspender la audiencia, también le preguntaba al abogado doctor Juan Carlos si tiene alguna causal adicional, por favor, expóngala porque alguna manera resulta temerario que teniendo la posibilidad de verla presentado en la audiencia del mes de junio, cuando ya se le destinaba alegatos de conclusión, guardó silencio. Y tuvimos que de alguna manera surtir el trámite que se surtió, de casi 3 meses para que una vez decidida su solicitud nuevamente en audiencia, ahora presente una solicitud en relación a algo que era de su conocimiento porque les recuerdo doctor Juan Carlos que usted tuvo los 10 días que se que pidió y de hecho un poco más para poder revisar el interior de la actuación administrativa y proceder a la presentación de alegatos de conclusión, que es la etapa en la cual usted recibe el poder y frente a la cual estamos reanudando la actuación administrativa.

En ese sentido, doctor Juan Carlos, tengo que manifestar que no es de mi recibo el documento que usted presente la solicitud que usted presenta, aun cuando tuvo el tiempo más que suficiente para hacerlo, y quisiera leer por aquí un extracto muy importante y es que de alguna manera yo me veo en la necesidad en todo caso de remitir copia de la presente actuación en el Consejo Superior de la judicatura, precisamente, en razón a la exposición que estoy haciendo de toda la trazabilidad del procedimiento y cómo nuevamente el momento en que se va a presentar la etapa de alegatos de conclusión se presentó una solicitud diferente, usted tiene poder desde el día desde el mes de mayo de este año, cuando asumió el poder se le otorgó el término que usted mismo solicitó para presentar alegatos de conclusión, término que se le otorgó en respeto y garantía del derecho de defensa y de contradicción. Una vez renueva el término presentó la recusación que derivó en todos los documentos que ya han sido expuestos en esta audiencia y hoy, de manera sorpresiva, nuevamente se hace la

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

solicitud y aquí quisiera citar una parte de la Corte Constitucional en ese sentido, indica lo siguiente

“La actuación es entendida como la actitud de quien demanda o ejercer el derecho de contradicción, a sabiendas de que carece de razones para hacerlo o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso.

En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la corte, como aquella que supone una actitud torticera que delató un propósito es leal para obtener la satisfacción del interés individual a toda costa que expresa un abuso del derecho, porque deliberadamente, y si tener razón de mala fe, se instaura la acción o finalmente constituye un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de Justicia”.

Es importante recordarle doctor Juan Carlos, que cuando usted conoció la actuación y la totalidad de audios que nos costa, usted lo reviso ratificó que en el mes de mayo, el día 15 de mayo en la audiencia en la que se practicó el testimonio, como ya lo indica la doctora diana Barragán presentó la solicitud de tacha de testigo por imparcialidad y de hecho señaló algunos elementos de posible enemistad al momento de sustentar su solicitud con fundamento en el artículo 211 del código general del proceso, es decir, doctor Juan Carlos, que usted conoce de antemano que esa tacha está pendiente de decidirse y sobre esa solicitud ahora no me puede forjar una solicitud diferente, ahora bajo el amparo de recusación, cuando precisamente es uno de los asuntos que están pendientes de decidir al interior de la actuación administrativa. Entonces, en este contexto y previa exposición de los argumentos anteriormente indicados, lo primero es señalar que, rechazó la solicitud de documento que se presenta el día de hoy, precisamente ante las condiciones y el contexto que precisamente se ha presentado en esta audiencia. Como explicación de todo el contexto.

Segundo elemento es que se remitirá copia de lo actuado a la autoridad competente para que investigue la conducta en el marco de sus competencias, para saber si constituye o no una eventual falta disciplinaria y el tercer elemento es que el día de hoy nos convoca a la presentación de alegatos de conclusión y lo conminó para qué. De inmediato sin más dilaciones, por favor, proceda a presentar los alegatos de conclusión correspondientes, doctor Juan Carlos tienen uso de la palabra para presentar alegatos de conclusión correspondientes.

(...)

Dr. Juan Carlos, yo ratificó lo que ya indicamos sobre el tema y es una solicitud que ya se venía empleando y sobre la cual se adopta decisión sobre el final, digamos que en este momento y como es de su conocimiento desde el mes de mayo, nos convoca a la presentación de alegatos y lo invitó nuevamente a que presente de los alegatos, so pena de que pierda la oportunidad. Yo ratificó que el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, que regula este tipo de actuaciones administrativas, no tiene prevista la etapa, sin embargo, en garantía del debido proceso, precisamente sea entregado y se han mencionado desde inicio que lamentar entonces lo convirtió esa que so pena de que pierda la oportunidad de procesar para hacerlo, para que presente los alegatos de conclusión, si no los presenta hoy a la luz de la palabra, la compañía garante para lo pertinente.

(...)”

Como se logra evidenciar del desarrollo del procedimiento administrativo enmarcado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 adelantado en contra de la firma contratista UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAM por el presunto incumplimiento del contrato de Obra No. 2937-2017, pasó mas de un año, luego de diferentes situaciones procesales y judiciales, que dejaban en suspenso la presentación de alegatos de conclusión.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

La anterior situación obedeció a las distintas solicitudes realizadas por parte de los apoderados de la firma contratista, entre las que se encuentra la formulación de recusación presentada el pasado 13 de junio de 2022, previo a la reanudación de la audiencia para presentar alegatos de conclusión, por parte del apoderado de la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, en contra del Subdirector de Contratación del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), y de la cual se surtió el trámite legal correspondiente por cuanto se puso en conocimiento de la recusación al superior jerárquico del recusado, quien también fue objeto de recusación por parte de la firma contratista. Razón por la cual el trámite se elevó a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, como cabeza del Sector de Recreación y Deporte.

Posteriormente se interpuso recurso a la decisión tomada por parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ante la negativa del trámite de recusación y finalmente se decidió asignar como funcionario ad hoc a la Subdirectora de Recreación y Deporte del IDRDR, para decidir sobre el trámite de recusación correspondiente quien adoptó decisión al respecto, tramitando así la solicitud de recusación formulada, el pasado 13 de junio de 2022.

Que las resueltas finales después del trámite de recusación se justifican en los siguientes actos administrativos:

- RESOLUCIÓN No. 441 DE 11 DE JULIO DE 2022 “Por la cual se resuelve una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para resolver recusación en contra del Subdirector de Contratación del IDRDR”

- RESOLUCIÓN No. 646 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 “Por la cual se resuelve Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación en contra de la Resolución No. 441 de 11 de julio de 2022, por medio de la cual se resolvió una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del Instituto de Recreación y Deporte para resolver la recusación en contra del Subdirector de Contratación del IDRDR”

- RESOLUCIÓN No. 1251 de 28 de septiembre de 2022 “Por la cual se resuelve la recusación presentada en contra del Subdirector de Contratación del IDRDR, en el marco del Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra 2937 de 2017 suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRDR REFORZAMIENTO ASEMAIN Y EL IDRDR.”

De lo anterior se remitió las copias correspondientes a las partes intervinientes de la audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011, en donde en síntesis se inadmitió la solicitud de recusación y en ese sentido el Subdirector de Contratación del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), continua con las diligencias correspondientes, solicitando se presenten los alegatos de conclusión que se encontraban pendientes por presentar desde el pasado 24 de septiembre de 2021.

Es importante recordar al apoderado, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando se asume un poder para actuar en un proceso en curso, el nuevo apoderado lo asume en el estado en el que se encuentra la actuación administrativa o judicial, destacando en todo caso que desde el mes de mayo de 2022, el abogado Quintero que presentó la recusación asumió el poder, en una etapa de presentación de alegatos de conclusión, etapa que aunque no está prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción para controvertir las pruebas practicadas, la Entidad lo consideró relevante. Una vez asumido el poder el abogado solicitó el término de 10 días hábiles para presentar alegatos, término que la entidad le otorgó para el efecto, una vez reanudada audiencia el abogado no presentó alegatos sino que elevó una solicitud de recusación, que fue tramitada y decidida por la Secretaría de Cultura y la Subdirectora de Recreación y Deporte, con los actos previamente indicados en este acto administrativo, y pese a tal situación, en la reanudación de audiencia, como ya se dejó expuesto, para presentación de alegatos de

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

conclusión, expone de manera sorpresiva otra nueva solicitud de recusación, que fue objeto de rechazo en audiencia y sobre la cual ahora se pide trámite de nulidad.

Adviértase, además, que, en el desarrollo de las audiencias del proceso administrativo sancionatorio contractual, se han interpuesto 3 acciones de tutela que han sido desestimadas por las autoridades judiciales, de las cuales la última se relaciona con el trámite de la recusación que decidió la Secretaría de Cultura

Adicional a lo anterior, en las 50 audiencias grabadas se puede verificar las demás dilaciones injustificadas y maniobras realizadas a efectos de evitar continuar con lo reglado en el procedimiento sancionatorio contractual abusando del derecho enmarcado en lo que respecta al literal D, de la norma señalada que establece:

(...)

D) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

(...)

Habida consideración a lo anterior se demuestra que se le ha otorgado al contratista los plazos y medios necesarios para ejercer su derecho a la defensa y contradicción no obstante en virtud del principio de celeridad consagrado en el artículo 3º numeral 13 de la Ley 1437 de 2011, “las autoridades administrativas impulsaran oficiosamente los procedimientos e incentivarán las tecnologías de la información y comunicaciones a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas” ...⁴

Además de lo expuesto, resulta pertinente recordar lo señalado en audiencia en cuanto a que los hechos alegados para la formulación de recusación, ya se habían propuesto anteriormente en audiencia de 15 de mayo de 2021 por la entonces apoderada del contratista Diana Barragan, tachando de falso testigo por imparcialidad, citando expresamente el artículo 211 del Código General del Proceso, en donde expone los mismos argumentos que está indicando para la solicitud de recusación.

Al respecto, también la administración se había pronunciado sobre los argumentos esgrimidos de tacha de testigo por imparcialidad, indicando que su resolución será objeto de pronunciamiento en el fallo del procedimiento sancionatorio en curso, siguiendo las reglas precisamente establecidas en el artículo 211 del Código General del Proceso, razón por la cual esos argumentos deben resolverse en etapa de decisión, luego de presentarse los alegatos de conclusión pendientes.

Ahora bien, atando la solicitud de tacha del testigo por imparcialidad con la nueva solicitud de recusación, deberá afirmarse que el solicitante ya conocía de los hechos en que ahora basa la recusación y la apoderada del momento decidió continuar con la actuación administrativa sin miramientos sobre el particular, razón por la cual, en virtud del principio de lealtad procesal, no es de recibo el argumento de la nueva recusación. Sobre el particular es pertinente traer a colación, en virtud del principio de integración normativa, lo regulado en el Código General del Proceso, artículo 142, el cual indica:

ARTÍCULO 142. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECUSACIÓN. *Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la*

⁴ Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Juan Manuel Laverde Álvarez, Legis Editores 2018.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

sentencia, de la complementación de la condena en concreto o de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares extraprocesales.

No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano. (Subrayas y negrillas propias)

No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine por cambio de apoderado de una de las partes, a menos que la formule la parte contraria. En este caso, si la recusación prospera, en la misma providencia se impondrá a quien hizo la designación y al designado, solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales.

No serán recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben dirimir los conflictos de competencia, ni los funcionarios comisionados.

Cuando la recusación se base en causal diferente a las previstas en este capítulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso.

De lo anterior se colige que si bien la solicitud de recusación se puede formular en cualquier momento del procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso, en determinadas circunstancias no se permite tal posibilidad, cuando se actúa dentro del proceso administrativo con posterioridad al hecho que la motiva; es decir, conociendo el recusante los hechos en que se basa para la tacha del testigo, que a su vez son los mismos en que basa la recusación, decidió continuar la actuación administrativa y guardar silencio, razón por la cual es procedente el rechazo de plano de la recusación en virtud del código general del proceso.

Refuércese a su vez el rechazo de plano de la recusación, también en virtud del principio de integración normativa, lo contenido en el artículo 132 del CPACA:

ARTÍCULO 132. TRÁMITE DE LAS RECUSACIONES. *Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas:*

7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de las recusaciones no son susceptibles de recurso alguno.

En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que hubiere lugar. (Subrayado propio)

La decisión, en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de reposición.

Finalmente, es importante destacar que la petición de recusación no cumple con el rigor argumentativo y jurídico requerido, pues no establece cual es la causal de recusación invocada ni determina cuales son los supuestos “consejos o conceptos” que presuntamente dieron origen a la recusación, pues tal como lo reconoce la misma solicitud, no existe relación laboral ni jerárquica entre el Subdirector de Contratación y quien fungió como testigo, lo que se encuentra pendiente de decisión es la tacha por imparcialidad fundada en enemistad que su oportunidad adujo la apoderada del contratista, valoración que de acuerdo con el código general del proceso debe ser objeto de valoración al momento de adoptar decisión en la actuación administrativa, reiterando en todo caso que no puede invocar una recusación, quien teniendo la oportunidad para hacerlo no lo hizo y actuó en el procedimiento, razón por la cual se rechaza de plano la

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

solicitud de recusación por infundada en los términos del artículo 132 del CPACA aplicable en virtud del principio de integración normativa y por ende no resulta procedente la solicitud de nulidad invocada por el apoderado del contratista.

En consecuencia, el Subdirector de Contratación del IDRD,

R E S U E L V E:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de NULIDAD procesal presentada por el apoderado de la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMMAIN de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este acto.

Debe entenderse que la presunta vulneración del debido proceso por la no consideración de una prueba corresponde a un argumento de defensa y no a una causal de recusación por lo que, teniéndose que tal y como fue expuesto en el aparte pertinente del acto atacado, la valoración probatoria fue realizada de conformidad a lo decantado en el proceso, por lo que no tiene asidero a generación de nulidad a partir del rechazo de la recusación en el sentido de que la misma no era procedente.

Por lo que los argumentos esbozados por los apoderados tanto del contratista como el garante no están llamados a prosperar.

b. DE LOS REPAROS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NO. 1452 DE 27 DE OCTUBRE DE 2022

1. Pérdida de Competencia.

Los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, si bien disponen que las Entidades Públicas pueden adelantar trámites administrativos de naturaleza sancionatoria contractual, no enuncian expresamente el límite temporal en que tal facultad puede ser ejercida por parte de los Entes Estatales.

No obstante, lo anteriormente indicado, la Ley 1437 de 2011 en su artículo 52 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 52. CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el funcionario encargado de resolver.

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución.

La sanción decretada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la ejecutoria.”

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Sobre el término temporal que tiene la entidad para declarar incumplimientos por la ejecución de contratos estatales, se tiene que el Consejo de Estado, en diferentes pronunciamientos, ha sostenido que la Administración detenta la facultad de proferir lo pertinente no solo durante el plazo de ejecución, sino también cuando esta ha vencido, incluso hasta su liquidación, de manera que la culminación del término de ejecución no despoja a la Entidad de la competencia sancionatoria.

“Pues bien. Aquí se rectifica la tesis con el siguiente alcance: En los contratos de obra pública, de suministro o prestación de servicios, por ejemplo, en los cuales la nota de tracto sucesivo se ve clara, la Administración podrá declarar el incumplimiento del contratista luego de que haya vencido el plazo contractual sin que éste haya ejecutado la totalidad de la obra, entregado todos los bienes o prestado el servicio convenido, como medida obligada para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.”

“Con esta interpretación se estaba recortando evidentemente el poder de la Administración contratante; porque si bien ésta no puede caducar lo ya terminado, nada impide que se pronuncie sobre el incumplimiento del contratista, cuando precisamente el vencimiento del plazo pone en evidencia que ya el contrato no se puede ejecutar en su integridad. En otros términos, cuando el vencimiento del plazo, per se, muestra que hubo un incumplimiento en determinado porcentaje.

“Pero este poder de declarar el incumplimiento no podrá ejercerse en forma ilimitada en el tiempo porque no podrá declararse después de vencido el plazo que la Administración tiene para liquidar tales contratos. Es apenas obvio que no pueda cumplirse después de esa liquidación, háyase hecho en forma unilateral o de común acuerdo entre los contratantes. Si lo primero y la Administración guardó silencio de ese incumplimiento en su acto, no podrá revocarlo sin consentimiento del contratista ya que creó una situación individual o concreta a su favor. Y si lo segundo (liquidación de común acuerdo) el acto será intocable unilateralmente por conformar un acuerdo de voluntades logrado entre personas capaces de disponer.

“En suma, la Administración podrá declarar el incumplimiento después del vencimiento del plazo contractual de ejecución y antes de la liquidación o dentro del acto liquidatorio mismo, pero no después de la expedición de éste”.

“ En este orden de ideas, la Sala precisa que luego de terminado el plazo de ejecución del contrato..., lo procedente, actualmente, como se establece en la reforma que introdujo al régimen de contratación pública la Ley 1150 de 2007, será la declaratoria unilateral de incumplimiento del contratista por parte de la entidad pública contratante para hacer efectiva la cláusula penal y a la vez las garantías que amparen el contrato, como constitutivo ese hecho del siniestro que las hace exigibles, además, por supuesto, podrá ejercer la acción contractual por el incumplimiento.

Dichas posiciones fueron retomadas en fallo emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C de fecha 13 de febrero de 2015.

Como corolario de lo descrito tenemos que además de copiosos son claros los pronunciamientos en los que el Alto Tribunal se refiere a la competencia temporal de la que goza la Administración para adelantar procesos administrativos sancionatorios, teniéndose que los mismos podrán adelantarse para declarar la caducidad del contrato o imponer multas hasta por el término de su ejecución, en tanto que la declaratoria de incumplimiento, podrá llevarse a cabo hasta por el término de vigencia de la relación

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

jurídico negocial, esto es el término con el que se cuenta para su ejecución sumado en el periodo dispuesto para su liquidación.

En el caso en particular se presenta adicionalmente la siguiente línea de tiempo en la que se da cuenta de la interrupción de términos que se realizó sobre el trámite de liquidación es el siguiente:

Ministerio de Salud y Protección Social por medio de Resolución No 385 del 12 de marzo de 2020, *“Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID 19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”* declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y se adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID 19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Por esta razón, mediante Decreto 564 de 2020, se dispuso la suspensión de términos incluyendo los de la prescripción de la siguiente manera:

“Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios controllo presentar demandas la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o años, se encuentran suspendidos el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales.

El conteo los términos prescripción y caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura.”

Tal suspensión de términos de prescripción y caducidad, estuvo vigente hasta el día 30 de junio de 2020 de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura y sin perjuicio de la posibilidad que se otorgó a las autoridades administrativas para regular la suspensión de términos. Como consecuencia de ello, el IDRD no fue ajeno a esta situación y como resultado de ello, se expidieron las siguientes resoluciones:

- Resolución No 140 de 2020. “SUSPENDER los términos procesales de todas las actuaciones administrativas, sancionatorias y disciplinarias que se adelantan en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte desde el día diecinueve (19) de marzo de 2020 hasta el primero (1) de abril del mismo año;
- Resolución No 141 de 2020. “SUSPENDER los términos procesales de las actuaciones administrativas, sancionatorias y disciplinarias que se adelantan en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD- desde el 24 de marzo a las 23:59 hasta el 13 de abril de 2020 a las 00:00
- Resolución No 145 de 2020. “PRORROGAR la suspensión de los términos procesales de las actuaciones administrativas, contractuales, sancionatorias y disciplinarias en trámite, de que trata el artículo primero (1º) de la Resolución 141 del 24 de marzo de 2020, que se adelantan en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD- , a partir de las cero horas (00:00 am) del día 13 de abril de 2020 y hasta cuando se declare oficialmente el cese del aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de Bogotá D.C, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

- Resolución 284 de 2020. “LEVANTAR la suspensión de términos procesales de las actuaciones administrativas, contractuales, sancionatorias y disciplinarias en trámite que se adelantan en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR- a partir del 14 de septiembre de 2020, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.”

Conforme lo anterior, la entidad no ha perdido su competencia sancionatoria como quiera que el contrato termino el día cinco (5) de marzo de 2020, y bajo las suspensiones de términos judiciales y administrativos ocasionados por la pandemia del COVID 19, anteriormente señaladas, la entidad se encuentra dentro del término legal conforme para pronunciarse sobre el trámite administrativo sancionatorio y sancionar al contratista, del mismo modo hacer efectiva la cláusula penal y cobrar al garante el pago de los amparos conforme con el contrato de seguro y la póliza suscrita por el contratista.

1.1 Violación del principio de non bis in idem

El apoderado del contratista, pone de presente que el IDR- radicó una demanda por el medio de control de controversias contractuales en contra de la Unión Temporal ASEMAIN, que de acuerdo con el acta individual de reparto, la cual se adjunta al presente, le correspondió el número de radicado 25000233600020220043700, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual versa sobre el mismo Contrato de Obra que es objeto del presente trámite, con la cual solicita una vez más la declaración del incumplimiento del Contrato de Obra. Entonces el proceso instaurado ante la jurisdicción contenciosa claramente configura una violación al principio de non bis in idem, pues con el mismo se estaría juzgando por segunda vez a la Unión Temporal por los mismos hechos, reclamando de ella el pago de unos perjuicios y cláusula penal dos veces.

Sobre el argumento de violación a la cosa juzgada argumentado por el contratista y la aseguradora vale reiterar que el Código General del Proceso en su artículo 303 dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

En este mismo sentido el Consejo de Estado ha señalado lo siguiente:

“A la cosa juzgada o res judicata se le ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes, porque lo antes decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, es inmutable al tener plena eficacia jurídica. Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada por los artículos 303 del C.G.P. y 189 del C.P.A.C.A., en los cuales se establecen los elementos formales y materiales para su configuración. El elemento formal implica que no es posible volver sobre una decisión tomada en providencia ejecutoriada, dentro del mismo proceso o en otro en el que se debata la misma causa petendi e idénticos fundamentos jurídicos, lo cual tiene como propósito garantizar la estabilidad y la seguridad del orden jurídico”⁵

⁵ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil quince (2015) Radicación número: 13001-23-33-000-2013-00343-01(52120)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Nuevamente se señala sobre la cosa juzgada, que tiene por finalidad que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por lo tanto, de inmutable. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada, son: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

1.2 Pérdida de competencia al instaurar la demanda por el medio de control de controversias contractuales

Indica el apoderado del contratista que con la presentación de la demanda lo que pretendía el IDRD era dar aplicación a lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado en los casos en los cuales la entidad contratante pierde competencia para declarar el incumplimiento del contrato.

Vale recordar que la facultad sancionatoria del Estado, debe propender el cumplimiento de los principios y fines del derecho punitivo, pero como toda potestad, tiene un límite en el tiempo, pues las situaciones jurídicas no pueden estar a merced del paso del tiempo, en afectación de los derechos de los particulares y funcionarios, razón por la que si la administración no ejerce tal facultad en el término establecido, la misma pierde dicha facultad y; por tanto, no es posible su ejercicio. Al respecto de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la administración conserva la competencia para dar trámite al presente proceso sancionatorio, toda vez que el contrato no ha sido objeto de liquidación⁶, no ha operado la caducidad de la acción de controversias contractuales y el IDRD no ha sido objeto de notificación de auto admisorio de la demanda por parte del juez natural⁷.

En este orden, la jurisprudencia a través del resuelve de la demanda de inconstitucionalidad del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 señaló dentro de la facultad conferida a las entidades públicas, para cuantificar los perjuicios que se derivan del incumplimiento del contratista, lo siguiente en sus considerandos:

“(…)

4.5.1.2. La finalidad de los contratos estatales afecta de manera directa tanto los derechos como los deberes de las entidades estatales⁸ y de los contratistas⁹, que tienen una regulación diferente. Dado que la entidad estatal es la principal responsable de cumplir con los fines esenciales del Estado y, por tanto, la que dispone de recursos públicos, su tarea frente a la celebración y a la ejecución de los contratos implica una responsabilidad especial, que va mucho más allá de la mera responsabilidad contractual, y que puede comprometer la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal de los servidores públicos involucrados. Los contratistas, si bien no son ajenos a los fines de los contratos estatales, tienen otros intereses, como los que corresponden a su remuneración, a que se restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato, etc.

⁶ Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 13 de abril de 2011, Expediente 18878, con ponencia de la Doctora Olga Melida Valle De La Hoz.

⁷ Ley 80 de 1993, artículo 75.

⁸ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera CP: ENRIQUE GIL BOTERO junio 23 de 2010 Radicación número 16367

⁹ Consejo de Estado, entre otras, en sentencia del 13 de abril de 2011, Expediente 18878, con ponencia de la Doctora Olga Melida Valle De La Hoz.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

4.5.1.3. La particular finalidad del contrato estatal no sólo afecta los derechos y las obligaciones de las partes, que son diferentes, sino que también incide en la normatividad aplicable al mismo. Conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, las normas aplicables al contrato estatal son las comerciales y civiles, salvo en las materias reguladas de manera especial por la ley. Entre las materias que tienen una regulación especial, que difieren con claridad de lo que suele ocurrir en las normas comerciales y civiles, se encuentran las denominadas potestades excepcionales de las entidades estatales, que son aplicables y se entienden pactadas incluso si no se consignan de manera expresa en el contrato¹⁰ Estas potestades excepcionales no se reconocen a los contratistas.

(...)"

Bajo lo anterior indicado, resulta claro señalar que no existe violación al principio del "NON BIS IN ÍDEM" como quiera que si bien el IDRD radicó una demanda por el medio de control de controversias contractuales en contra de la Unión Temporal ASEMAIN, y que de acuerdo con el acta individual de reparto, le correspondió el número de radicado 25000233600020220043700, No. 25000233600020220043700, esta hace parte de una actuación judicial independiente, bajo la cual no se pierde competencia por parte de la entidad para imponer sanciones en sede administrativa, como quiera que la pérdida de competencia de la Entidad, por haberse iniciado un trámite judicial, **ocurriría una vez sea notificado el auto admisorio de la demanda que persigue la liquidación del contrato,** evento que no ha ocurrido ya que la misma se encuentra en reparto.

Lo anterior, conforme lo señala la jurisprudencia del consejo de estado, así:

"Es el caso concreto de la liquidación de los contratos estatales, respecto del cual ha expresado lo siguiente:

*"No obstante, la entidad contratante perderá la competencia si el contratista - dentro del término de caducidad de la acción contractual, obviamente -, pide al juez del contrato que proceda a liquidarlo **y se ha producido la notificación del auto admisorio de la demanda.** (subrayado fuera de texto)*

*Y es que mientras esté **en curso el término de caducidad de la acción contractual la administración mantiene la competencia** - salvo en el caso de haberse instaurado la acción judicial correspondiente, como quedó consignado.
(...)*

"CONTRATO ESTATAL - Eventos en que la entidad pierde competencia para liquidarlo / CADUCIDAD - Liquidación del contrato / LIQUIDACIÓN DE CONTRATO - Improcedencia por expiración del término de caducidad.

La expiración del término de caducidad o la notificación del auto admisorio de la demanda del contratista que persigue la liquidación del contrato, hace perder competencia a la administración para estos efectos y, por lo tanto, sólo mientras esté en curso el término de caducidad es viable proceder a la liquidación del contrato. **De lo expuesto se concluye que vencido el término de caducidad de la acción contractual, o notificado el auto admisorio de la demanda en la forma dicha, deviene la incompetencia de la entidad estatal contratante para liquidar**

¹⁰ Ley 80 de 1993, artículo 75.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

***el contrato unilateralmente** y, para el contratista, la imposibilidad de obtenerla en sede judicial o de común acuerdo y, por lo mismo, en tal supuesto, no es jurídicamente viable extender, unilateralmente o por mutuo acuerdo con el contratista, "un documento de balance final o estado de cuenta para extinguir definitivamente la relación contractual", dado que el término de caducidad es perentorio e improrrogable y por que ello equivaldría a revivir, convencionalmente, los términos de caducidad de la acción que, como es sabido, son indisponibles. Al respecto, valga recordar que la conciliación no es un mecanismo destinado a sustituir el procedimiento de liquidación del contrato previsto en la ley contractual y que "no habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado", conforme al parágrafo 2° del artículo 81 de la ley 446 de 1998, reformatorio del 61 de la ley 23 de 1991 compilado, a su vez, por el decreto 1818 de 1998, artículo 63"¹¹.*

Bajo este entendió, no son de recibo los argumentos del apoderado, como quiera que no existe una pérdida de competencia por parte de la entidad ni violación del principio del NON BIS IN IDEM, ya que el documento probatorio traído en sede de recurso hace parte de un trámite judicial en donde sus etapas son autónomas e independientes a las adelantadas en sede administrativa.

2. No existió incumplimiento del Contrato de Obra imputable a la Unión Temporal

Señala el apoderado del contratista que en la Resolución No. 1452 el IDRD expone las razones por las cuales considera que la Unión Temporal incumplió el Contrato de Obra, sin embargo, pierde de vista que la razón del incumplimiento en la mayoría de los casos se debe a hechos imputables a la entidad contratante, debido a la fehaciente violación al principio de planeación que no solo modificaron el alcance del contrato, sino que provocaron que el contratista incurriera en cuantiosos costos adicionales".

Bajo lo anterior expone la violación al principio de planeación por parte del IDRD, así:

2.1 Violación al principio de planeación por parte del IDRD

Argumenta el apoderado que la entidad vulneró el principio de planeación, como quiera que *"inició el proceso de licitación para la adjudicación del Contrato de Obra con unos diseños para la cimentación y el reforzamiento estructural de la obra del año 2010, los cuales el contratista de obra debía acogerse, así mismo, que al empezar la obra se pudo establecer que los diseños entregados a la Unión Temporal estaban desactualizados, pues no contemplaban el carácter técnico que se debía implementar respecto de las normas de sismo resistencia (NSR-10). Adicionalmente que, en la ejecución del Contrato de Obra se conoció que el bien inmueble en donde se iba a ejecutar la obra había sido declarado bien de interés cultural a nivel distrital mediante Decreto 606 de 2001, lo cual no solo impacto en la cimentación, la cual no fue contemplada en los diseños, sino también que el inmueble era de interés cultural, situación que impactó de manera considerable en los tiempos de obtención de la licencia y generó además unos sobrecostos que tuvieron que ser asumidos por la Unión Temporal"*:

Consideraciones de la Entidad.

¹¹ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 31 de octubre de 2001, radicación 1.365

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Como quiera que el argumento presentado por el apoderado del contratista también fue citado por el apoderado del garante, se expondrán las consideraciones de la entidad en el apartado de la argumentación del garante. No obstante, se puntualiza lo siguiente frente a título de introducción del argumento:

Como lo indica el apoderado del contratista, si el contratista identificó la inoperancia de los diseños y no informó, en el periodo referido, lo correspondiente a la Entidad contratante, o si por el contrario el estudio realizado no fue suficiente y no pudo determinar dicha inoperancia, asumió el riesgos de las presuntas inexactitudes de la subsiguiente construcción y pudo a la entidad en la confianza legítima de la viabilidad de su construcción, por cuanto surtido el periodo de ajuste, las deficiencias que se presentaran tendrían necesario origen en la errada valoración de los diseños entregados y por ende le eran imputables.

Ahora bien sobre la carga que tienen las partes para probar sus argumentos, es importante dejar constancia que, de conformidad con el principio del *“onus probandi incumbit actori”*, principio desarrollado en los artículos 1604 del Código Civil, que dispone que: *“La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega (...)”*; y el artículo 1757 ídem, según el cual *“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.”*, a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso que establece que: *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (...)”*

Así las cosas, el contratista no cumplió con la carga probatoria de sus propias pretensiones e hitos de defensa, teniéndose que no existe en el expediente documento, análisis técnico, dictamen o prueba afín que verse sobre la falta de tecnicismo o rigurosidad de los diseños, o que individualicen errores estructurales de los mismos que pudieran llevar a su invalidación, por lo que no está llamado a prosperar su alegato en dicho sentido.

Adicionalmente, de los argumentos presentados por el apoderado del garante y el contratista, a través de la doctrina y la jurisprudencia, el principio de planeación debe entenderse, en el marco del Contrato Estatal, como aquella exigencia que recae en la Entidad contratante de realizar estudios previos adecuados, con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, estructurar debidamente su financiación, por lo que, resulta claro señalar que las Entidades Estatales deben realizar un juicioso estudio de planeación identificando sus necesidades y los medios para satisfacerlas. La planeación requiere de la Entidad Estatal un proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus partícipes para utilizar sus recursos de la manera más adecuada y satisfacer sus necesidades generando mayor valor por dinero en cada una de sus adquisiciones.

Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo ha definido como el deber de planeación, que tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

5.2 EN RELACIÓN CON LOS REPAROS MANIFESTADOS POR EL APODERADO DE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. GARANTE DEL CONTRATO.

I. DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Señala el apoderado del contratista y el apoderado del garante en la sustentación del recurso presentado contra la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, la vulneración por parte de la Entidad de los principios que rigen la contratación estatal en particular el principio de buena fe y de planeación, bajo lo cual resulta pertinente embozar los preceptos constitucionales, legales y jurisprudencias que soportan las actuaciones tanto de los particulares como de las entidades estatales, para determinar su observancia y aplicación en las actuaciones realizadas tanto por el contratista y la entidad en la etapa precontractual, contractual y poscontractuales del Contrato de Obra No. 2937 de 2017.

a. PRINCIPIO DE BUENA FE

Conforme lo señaló el Despacho en las consideraciones de la Resolución No. 1452 de 2022, en referencia al principio de la buena fe, la legislación jurídica Colombia señalada que el contrato es Ley para las partes por ser expresión de la autonomía de la voluntad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, así mismo, el artículo 1603 dispone que los contratos deben ser ejecutados de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley le pertenecen a ella sin cláusula especial. Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción parecida al artículo 1603 del Código Civil, se desprende que en todo el *iter* contractual, esto es antes, durante y después de la celebración del contrato, y aún después de su extinción, se impone a los intervinientes el deber de obrar de conformidad con los postulados de la buena fe.

En esta línea, el Consejo de Estado ha indicado que a ninguna parte le es permitido adicionar o suprimir el alcance de las obligaciones, so pretexto de ejecutar las suyas, porque desconocería el acuerdo de voluntades que comprometía al otro a actuar en un sentido distinto, “(...) en las obligaciones contraídas en un negocio jurídico, las partes quedan forzadas a cumplir lo pactado en los términos en que fueron establecidos, y que nadie está forzado a ejecutar una prestación distinta, de la misma manera que no es posible exigir más de lo acordado, ni entregar menos de lo pactado, porque esto se convierte en ley para las partes. Lo anterior no tiene por qué variarse con la interpretación que una parte haga de sus obligaciones, –salvo el ejercicio de los poderes exorbitantes de modificación unilateral o de interpretación unilateral, cuando proceda-, en aquellos casos en que considera que lo acordado es insuficiente para dar cumplimiento a sus obligaciones. No cabe duda que para hacerlo se necesita llegar a un nuevo acuerdo de voluntades, que autorice exigir de la otra parte el cumplimiento de nuevas prestaciones.”¹² (Subrayado fuera de texto).

En este mismo sentido, el Consejo de Estado ha indicado sobre la buena fe que no es una convicción subjetiva que lleva a pensar que se está obrando conforme a derecho, sino que tal actuación implica condiciones objetivas; bajo lo cual se ha manifestado lo siguiente:

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

*“(…) con frecuencia inusitada se cree que la buena fe a que se refiere estos preceptos consiste en la convicción de estar obrando conforme a derecho, en la creencia de que la conducta se ajusta en un todo a lo convenido y, en general, en el convencimiento de que se ha observado la normatividad y el contrato, independientemente de que esto sea efectivamente así por haberse incurrido en un error de apreciación porque se piensa que lo que en verdad importa es ese estado subjetivo consistente en que se tiene la íntima certidumbre de haber actuado bien. Empero nada más lejano de la realidad que esa suposición porque **la buena fe contractual no consiste en creencias o convicciones de haber actuado o estar actuando bien, es decir no es una buena fe subjetiva, sino que estriba en un comportamiento real y efectivamente ajustado al ordenamiento y al contrato y por consiguiente ella, tal como lo ha señalado ésta Subsección, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”, es decir, se trata aquí de una buena fe objetiva** y “por lo tanto, en sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho” o conforme al contrato, pues tales convencimientos son irrelevantes porque, habida cuenta de la función social y económica del contrato, lo que en verdad cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal realización de estas funciones dentro del ámbito de la legalidad y de la lealtad y corrección, esto es, ajustados en un todo al ordenamiento jurídico y a lo convenido.”¹³ (Subrayado y negrilla fuera de texto)*

De esta manera, la buena fe contractual, es la objetiva, **“consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”¹⁴** (subrayado y negrilla fuera de texto).

En esta misma línea, el apoderado de la compañía garante señala en el escrito del recurso que: “El principio de buena fe contractual se encuentra profundamente arraigado en nuestro sistema jurídico, tanto así que el Código Civil, en su artículo 1603, preveía que “los contratos deben ejecutarse de buena fe”, estableciéndose que, el contrato con todos aquellos deberes que emanan de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella, es consecuencia directa del principio de buena fe. El anterior precepto se encuentra igualmente recogido en el Código de Comercio de Colombia, en su art. 863 en lo relativo a la aplicación de la buena fe objetiva en el periodo precontractual, disponiéndose a literalidad que “Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”. Por otra parte, el art. 871 (ibidem) extiende la aplicación de la buena fe a la celebración y

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 22043.

¹⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

ejecución de los contratos y dispone que, “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.

De otro lado, a partir de la Constitución Política de 1991, elevo el principio de buena fe a un precepto constitucional, en tanto el art. 83 establece a literalidad que “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas,” lo que deviene en una particular importancia de este principio en el ejercicio de los derechos y de las obligaciones entre particulares y en la gestión institucional del Estado.

Sobre el principio de la buena fe en el marco de la contratación estatal, la Corte en Sentencia C-892 de 2001 (ibidem), indicó que:

“En el ordenamiento jurídico colombiano, la buena fe es reconocida como un principio general de derecho a través del cual se adopta el valor ético y social de la confianza. Este principio se encuentra consagrado expresamente en el artículo 83 de la Carta Política y, por su intermedio, se le impone a los particulares y a las autoridades públicas el deber moral y jurídico de ceñir sus actuaciones a los postulados que la orientan -lealtad y honestidad-, estableciéndola como presunción en todas las gestiones que ‘aquellos adelanten ante estas’.

*La circunstancia de que el principio de la buena fe tenga un claro fundamento constitucional, es de gran trascendencia en el área del derecho público. **De un lado, por cuanto permite su aplicación directa y no subsidiaria en el espectro de las actuaciones administrativas y, del otro, por cuanto contribuye a establecer límites claros al poder del Estado, buscando impedir el ejercicio arbitrario de las competencias públicas, y a humanizar las relaciones que surgen entre la Administración y los administrados.***

*En materia contractual, igual a lo que ocurre con el principio de reciprocidad, **la buena fe comporta entonces uno de los criterios de imputación dentro de la teoría de la equivalencia de los contratos estatales y, por ese aspecto, se convierte en la causa jurídica de la que surge la obligación para la Administración Pública de reconocerle al contratista los mayores costos y las pérdidas que haya podido sufrir, como consecuencia del surgimiento de algunas contingencias extraordinarias o anormales que alteran la ecuación financiera prevista en el acuerdo de voluntades.***

*Las exigencias éticas que se extraen del principio de la bona fides, **coloca a los contratantes en el plano de observar con carácter obligatorio los criterios de lealtad y honestidad, en el propósito de garantizar la óptima ejecución del contrato que, a su vez, se concreta en un conjunto de prestaciones de dar, hacer o no hacer a cargo de las partes y según la naturaleza del contrato, las cuales comprenden, inclusive, aquella de proporcionarle al contratista una compensación económica para asegurarle la integridad del patrimonio en caso de sufrir un daño antijurídico. Con buen criterio, el Consejo de Estado ha venido considerando en su extensa jurisprudencia, acorde con la que ya ha sido citada en esta Sentencia, que el principio de la buena fe debe reinar e imperar durante el periodo de celebración y ejecución del contrato, concentrando toda su atención en la estructura económica del negocio jurídico, con el propósito específico de mantener su equivalencia económica y evitar que puedan resultar afectados los intereses patrimoniales de las partes.***

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

El principio de la buena fe, como elemento normativo de imputación, no supone, en consecuencia, una actitud de ignorancia o creencia de no causar daño al derecho ajeno, ni implica una valoración subjetiva de la conducta o del fuero interno del sujeto. En realidad, tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. Por ello, tal como sucede con el principio de reciprocidad, el desconocimiento por parte de la Administración de los postulados de la buena fe en la ejecución del contrato conlleva el surgimiento de la obligación a cargo de ésta de responder por los daños antijurídicos que le haya ocasionado al contratista. Estos efectos jurídicos de la buena fe en materia contractual, según lo afirma la propia doctrina, son una clara consecuencia de la regla según la cual todo comportamiento contrario a la misma, en cuanto ilícito, trae implícita la obligación de pagar perjuicios". (Negrilla fuera de texto)

Adicionalmente, en audiencia pública de sustentación del recurso indicó el apoderado del garante que: “en virtud del principio de buena fe, los contratos todos tienen que ejecutar de buena fe y ellos se basan no solamente en el artículo 1602 de la codificación civil, sino también el artículo 1603.

A su turno, el primero establece el pacta sunt servanda y el artículo 1603 dice que estos contratos y que esta ley para las partes, deben ejecutarse de buena fe, y para ello también hay que advertir que la Corte Constitucional, en distintas sentencias, habló en este caso de la sentencia C- 892 del 2001, indicó y habló sobre la procedencia que de buena fe de las partes, de ambos extremos sinalagmáticos en el período pre contractual y de la entidad estatal, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen.

“La circunstancia de que el principio de la buena fe tenga un claro fundamento constitucional es de gran trascendencia en el área del derecho público, de un lado, por cuanto permite su aplicación directa y no subsidiaria en el espectro de las actividades administrativas y del otro, por cuanto contribuye a las necesidades claras al poder del Estado, buscando impedir el ejercicio arbitrario de las competencias públicas y a humanizar las relaciones que surgen entre la administración y los administrados”.

Adicionalmente a las jurisprudencias citadas tanto por el despacho como por el apoderado del garante, es importante señalar lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia C- 1194/08 en cuanto señala que: “la buena fe como un principio que de conformidad con el artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario.

La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un principio general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

En este mismo orden, la *jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que “exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)””*. *Así la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”*.

Bajo estos términos, importa tanto a los particulares como a las entidades estatales la observancia del principio de buena fe contractual en sus actuaciones, las cuales deben ajustarse a comportamientos honestos y leales que brinden en la relación contractual sinalagmática confianza jurídica a la otra parte en su actuar, conllevando al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estatal.

En este sentido, como bien lo anota el apoderado de la compañía garante, concierne a la entidad estatal el cumplimiento de una serie de deberes como lo es el de la *transparencia en su obrar, el deber de cooperación y lealtad, el deber del adecuado manejo de la información y el deber de DILIGENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, para el logro de los fines del estado en el marco de la contratación estatal*. Sin embargo, olvida que también les concierne a los particulares, tanto proponentes como contratistas, el cumplimiento de deberes que impone la ley colombiana, como quiera que estos se constituyen en colaboradores o instrumentos de la entidad estatal para la realización de actividades o prestaciones que interesan a los fines públicos.

En efecto, al revisar la aplicación del principio de buena fe en la etapa precontractual, al igual que las entidades públicas también se prevé para los proponentes interesados, el deber de actuar con la debida diligencia, transparencia y reciprocidad en la verificación de los términos y condiciones técnicas requeridas por la entidad y formular oportunamente los comentarios y observaciones que de los documentos publicados se llegaren a generar.

Ahora bien, al momento de revisar el desarrollo de la etapa precontractual que origino la suscripción del Contrato de obra No. 2937 de 2017, se encuentra la publicación de los estudios previos, condiciones técnicas, pliegos de condiciones y demás documentos base, así como observaciones realizadas por los interesados a estos documentos. Sin embargo, no se evidencia comentario ni observaciones realizadas por el hoy contratista frente condiciones técnicas requeridas y las obligaciones a desarrollar para cumplir con la obra requerida, frente al particular, no se solicitó aclaraciones ni se realizaron observaciones a la obligación del ajuste a los estudios y diseños base primordial para ejecutar el contrato. Como tampoco, propuso en la audiencia de asignación de riesgos incluir como riesgo la no construcción del diseño entregado por ser incompatible con la realidad.

Como se puede evidenciar del análisis del principio de buena fe, la Entidad puso a disposición de los interesados los documentos, los estudios y diseños y las condiciones requeridas para ejecutar el proyecto que tenía como finalidad el reforzamiento estructura de la Unidad Deportiva del Salitre, y fue el contratista quien no garantizó la observancia del principio de buena fe con su actuar, ya que al no presentar observaciones y manifestar su interés puso a la entidad en la expectativa de cumplimiento del proyecto presentado.

En tal sentido, es claro que el contratista actuó con ligereza en la etapa precontractual, como quiera que no presentó observaciones que conllevaran a la entidad a determinar que los estudios y diseños base para desarrollar la obra no eran construibles o que adolecían de errores y que hubieran permitido el análisis de las situaciones en el

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

momento oportuno, como tampoco indicó que los diseños que debían realizar ajuste, no contenían criterios técnicos o que no se encontraban ajustados a las prerrogativas que establece la norma para realizar el reforzamiento estructural requerido, como experto en el tema requerido por la entidad, así lo estableció el pliego de condiciones de la licitación pública del año 2017. Ello implica que si el entonces proponente y hoy contratista estimaba que los documentos no eran suficientes y que adolecían de hierros que lo hacían inviable debía advertir a la entidad tal situación e incluso se encontraba en el deber de abstenerse de presentar oferta si estimaba que el proyecto no era construible o que la información técnica era insuficiente, pues como experto en el área de conocimiento y profesional experto, está llamado a verificar el contenido de los documentos y es por eso que los documentos precontractuales señalaban lo siguiente :

<p>1.13.ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.</p> <p>Los interesados que tuvieran dudas sobre el contenido o alcance de cualquiera de los numerales consignados en el presente pliego de condiciones, podrán solicitar las aclaraciones y/o modificaciones que estime pertinentes hasta la fecha prevista en el cronograma en la dirección electrónica contratacion@idrd.gov.co o directamente en la Calle 63 N° 59A-06 Área de Apoyo a la Contratación, en el horario comprendido entre las 7:00 horas y las 16:30 horas de Lunes a Viernes.</p> <p>Las Adendas constituyen modificaciones al pliego de condiciones y se podrán expedir hasta dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, en aquellos casos en que se requiera modificar, aclarar y/o adicionar el pliego y/o modificar o prorrogar cualquiera de los plazos aquí previstos. Estas adendas se numerarán consecutivamente.</p> <p>Las respuestas, aclaraciones y adendas serán publicadas en la Página Web del SECOP www.colombiacompra.gov.co y en la Página Web de Contratación a la Vista www.contratacionbogota.gov.co, siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 527 de 1999.</p> <p>Tales documentos deben ser tenidos en cuenta por los interesados, toda vez que forman parte integral de los documentos soporte del proceso de selección y del contrato.</p> <p>1.12. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS</p> <p>El IDRD realizará una audiencia de aclaración de pliegos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas, de acuerdo con lo establecido en el cronograma del proceso. Así mismo, se precisará el contenido y alcance de los mismos y escuchará a los interesados en participar en el proceso.</p> <p>En la misma audiencia se revisará la asignación de riesgos de que trata el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva.</p> <p>Realizada la audiencia y definida la asignación de riesgos previsibles, el proponente no podrá alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que no fue puesto en consideración por el IDRD en la audiencia, y por lo tanto, con la presentación de la respectiva oferta, este consiente y acepta la asignación y distribución de los riesgos, establecidos para la presente contratación.</p> <p>Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el IDRD expedirá las modificaciones pertinentes a los documentos del proceso y prorrogará, si fuere necesario.</p> <p>Se suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté publicada. El costo de las copias y la atención de las peticiones presentadas se realizarán de acuerdo con las reglas previstas en la Ley 1755 de 2015.</p>

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174445>

A contrario sensu, de la interpretación de la jurisprudencia citada por el apoderado del garante, la corte constitucional en sentencia C-207 DE 2019 8M.P. Cristina Pardo Schlesinger), manifestó que, *dentro de los deberes que impone la buena fe contractual se habla del “deber de cooperación”, o de solidaridad contractual que se resume en la idea de que cada contratante debe tener en cuenta y respetar el legítimo interés de su cocotrantante. Y lo que se acaba de expresar se realza y adquiere mayor entidad en los terrenos de la contratación estatal porque en ésta **la finalidad que se persigue es la satisfacción del interés general mediante la prestación de los servicios públicos y por consiguiente aquí ese deber de cooperación o de solidaridad contractual se torna esencial toda vez que en últimas su observancia, más que proteger el interés de cada contratante individualmente considerado, protege el interés de la colectividad.***”(Subrayado fuera de texto)

Dicho deber de cooperación no se tuvo en cuenta por parte del contratista en la etapa precontractual, toda vez que, ante la manifestación de interés en el proceso y la presentación de la propuesta en los términos requeridos por la entidad, y sin haber realizado comentario u observación alguna, puso en expectativa de cumplimiento del proyecto a la entidad estatal, sin que a la fecha exista la entrega de la obra o la entrega

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

de cuentas de los dineros entregados a título de anticipo. Situación que claramente vulnera el principio de buena fe contractual de la actuación realizada por el contratista desde la etapa precontractual como quiera que su actuar desencadenó no solo en la no entrega de la obra contratada sino en la apropiación de recursos públicos bajo los cuales el IDR D le entregó en confianza de la entrega del proyecto construido, y del cual a la fecha no se soporta su inversión ni su finalización.

B. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN.

Luego de hacer referencia al concepto del principio de planeación y su aplicación en la celebración de contratos públicos son soporte en fallos emitidos por el Consejo de Estado, el apoderado del Garante concluye que *“al ser evidente que la responsabilidad de presentar unos Estudios y Diseños previos serios, completos y adecuados a la obra que se pretendía contratar, que reflejaran la realidad jurídica de los bienes o estructuras a intervenir, correspondía al IDR D y no al contratista de la obra, como lo pretende hacer ver la Entidad en la Resolución aquí impugnada, y en tal sentido, mal puede trasladársele las obligaciones de la Administración al contratista, más aún cuando, a pesar de las fallas tan reprochables del IDR D en la planeación contractual, el contratista procuro continuar y cumplir con la ejecución que se le había contratado y en consecuencia esta actitud diligente y cuidadosa no se puede castigar a efectos de hacer exigible la cláusula penal, y mucho menos considerar afectar la póliza expedida por mi representada”*.

Consideraciones de la Entidad:

Tal y como fue ampliamente argumentado en el acto administrativo atacado, en estricta ejecución de la relación jurídico negocial celebrada al contratista ejecutor le era propio del deber de información al dueño de la obra, referente a las condiciones de naturaleza técnica que, a su juicio, impedían la debida construcción de la edificación encomendada.

Dicha información, que en todo caso debió ser oportuna, debió versar sobre aquellas condiciones que pudieran hacer inviable el proyecto, con el fin de que la Entidad adelantará los trámites pertinentes para adecuar la ejecución, o en el evento de demostrarse la imposibilidad de materialización del objeto, determinar la resolución de lo contratado.

El suministro de la información referida en la condiciones de suficiencia y oportunidad requerida, son lo que se demanda del actuar diligente del contratista ejecutor, más lo que se puede concluir del análisis del comportamiento contractual del hoy recurrente durante el plazo de la ejecución del contrato y de lo que va corrido de su liquidación, es que no se realizaron estudios acuciosos ni acertados que pudieran llevar a la Entidad contratante y por ende dueña de la obra a tomar decisiones diferentes a las adoptadas, las que correspondieron a las prórrogas y modificaciones para garantizar la debida materialización del objeto del vínculo contractual.

Cabe recordar que en proyectos de la naturaleza y complejidad como el que no ocupa, en la mayoría de los casos se debe adecuar los estudios y análisis realizados por cuanto los mismos no se compadecen en integridad con el desarrollo de la obra o no pudieron, en el marco de los mismos, preverse hechos sobrevinientes que incidieron en su ejecución. A tal condición no puede dársele el tratamiento de yerros en la planeación por cuanto es propio e intrínseco a la actividad desplegada su ajuste, en pro de garantizar que el resultado supla a cabalidad la necesidad que antecedió a la celebración del contrato. Es con fundamento en aquello que la ley permite al operador proponer a la entidad contratante en forma directa las modificaciones, adiciones o prórrogas que permitan llevar la ejecución del contrato a feliz término.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Por lo anterior, si lo que se pretendía era demostrar que las presuntas falencias que se predicen de los estudios y análisis en los que soportó la entidad la contratación, tanto el contratista como su garante debieron exponer con la suficiencia técnica demandada por qué bajo las condiciones dispuestas en los diseños y demás documentación de alcance técnico, la obra no podía ser edificada o el resultado de su estructuración distaba de lo pretendido. No obstante, analizado el acervo probatorio se tiene que los intervinientes se limitaron a realizar aseveraciones genéricas sobre la ya referida falta de planeación sin individualizar las condiciones técnicas que, tal y como se adujo, impidieron la materialización de lo contratado.

Así mismo, es importante tener en cuenta que el contrato dispuso un periodo para que en el que el contratista debía ajustar y apropiar los diseños que fueron suministrados por la Entidad, es decir, que conocidas por el Ente contratante las vicisitudes que pueden presentarse en la ejecución de obras civiles de la complejidad que se predica de la que nos cupa, se le otorgó al constructor un espacio dentro del lapso de ejecución del contrato, para que, de la mano de su conocimiento y pericia demostrada en el proceso de selección, pudiera identificar todas aquellas falencias que requirieran una necesaria adecuación, aclaración, corrección o eliminación; según sea el caso, por lo que y de determinarse que los diseños eran inejecutables, el contratista debió informar lo pertinente a la Entidad en dicha oportunidad.

Debe entenderse que si el contratista identificó la inoperancia de los diseños y no informó, en el periodo referido, lo correspondiente a la Entidad contratante, o si por el contrario el estudio realizado no fue suficiente y no pudo determinar dicha inoperancia, asumió el riesgos de las presuntas inexactitudes de la subsiguiente construcción y pudo a la entidad en la confianza legítima de la viabilidad de su construcción, por cuanto surtido el periodo de ajuste, las deficiencias que se presentaran tendrían necesario origen en la errada valoración de los diseños entregados y por ende le eran imputables.

Ahora bien sobre la carga que tienen las partes para probar sus argumentos, es importante dejar constancia que, de conformidad con el principio del *“onus probandi incumbit actori”*, principio desarrollado en los artículos 1604 del Código Civil, que dispone que: *“La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega (...)”*; y el artículo 1757 ídem, según el cual *“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.”*, a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso que establece que: *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (...)”*

Así las cosas, el contratista no cumplió con la carga probatoria de sus propias pretensiones e hitos de defensa, teniéndose que no existe en el expediente documento, análisis técnico, dictamen o prueba afín que verse sobre la falta de tecnicismo o rigurosidad de los diseños, o que individualicen errores estructurales de los mismos que pudieran llevar a su invalidación, por lo que no está llamado a prosperar su alegato en dicho sentido.

Adicionalmente, de los argumentos presentados por el apoderado del garante y el contratista, a través de la doctrina y la jurisprudencia, el principio de planeación debe entenderse, en el marco del Contrato Estatal, como aquella exigencia que recae en la Entidad contratante de realizar estudios previos adecuados, con el fin de precisar el objeto del contrato, las obligaciones mutuas de las partes, estructurar debidamente su financiación, por lo que, resulta claro señalar que las Entidades Estatales deben realizar un juicioso estudio de planeación identificando sus necesidades y los medios para

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

satisfacerlas. La planeación requiere de la Entidad Estatal un proceso encaminado al conocimiento del mercado y de sus partícipes para utilizar sus recursos de la manera más adecuada y satisfacer sus necesidades generando mayor valor por dinero en cada una de sus adquisiciones.

Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo ha definido como el deber de planeación, que tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden.

Bajo esta óptica, y en observancia del principio de planeación, el IDRD, en el año 2009 realizó el proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos para contratar los estudios y diseños técnicos y ajuste arquitectónico de la Unidad Deportiva el Salitre “UDS”, bajo la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido por la ley y con la finalidad de reducir la amenaza por sismo en las instalaciones de la Unidad Deportiva del Salitre y de realizar la instalación de redes hidráulicas y eléctricas, toda vez que la UDS está destinada para la atención de emergencias según el “Plan Institucional de respuesta a Emergencia” PIRE, y era necesario garantizaran una adecuada funcionalidad del escenario en dichos eventos.

Dicho proceso de selección, fue adjudicado a la firma PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA suscribiendo el Contrato de Consultorio No. 097 de 2009, bajo el cual el contratista realizó la entrega de las memorias y los planos que contenían los estudios y diseños y ajuste arquitectónico de la unidad deportiva el salitre en el año 2010.

En esa misma línea, en el año 2012, el IDRD, inicio un proceso de contratación bajo la modalidad de concurso de méritos con el fin de contratar el ajuste de los diseños y estudios técnicos de reforzamiento estructural del coliseo de la unidad deportiva el salitre, toda vez que en el año 2010 se expidió el Decreto 523, por medio del cual la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó la nueva micro-zonificación sísmica de Bogotá D.C., derogando el Decreto 074 de 2001 con el cual se habían desarrollado los estudios y diseños entregados en el año 2010.

Dicho proceso de selección fue adjudicado a la firma Construcción SAS – CAYCO INGENIERIA SAS bajo el contrato de consultoría No. 1134 de 2012, entregando el ajuste a los estudios y diseños en el año 2012.

De lo anteriormente señalado, se colige el cumplimiento por parte de la Entidad en la planeación para desarrollar el reforzamiento estructural de la Unidad Deportiva del Salitre, toda vez que desde el año 2009 ha realizado las acciones tendientes para obtener los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar la viabilidad económica y técnica para ejecutar la obra que tanto requieren los capitalinos como lo es el funcionamiento en óptimas condiciones de la Unidad Deportiva del Salitre sede de nuestros deportistas.

Una vez el IDRD, adelantó la planeación del proyecto de inversión y obtuvo los estudios y diseños, junto con las memorias y los planos, procedió a dar inicio a la selección del

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

contratista que desarrollara dicha obra. Así fue como en el año 2017 se dio apertura a la licitación pública No. 017-2017 con el objeto de CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS”.

Dentro de los estudios previos y documentos que formaron parte del proceso de selección, la entidad dio a conocer las consideraciones requeridas para el desarrollo del proyecto, encontrándose definida la necesidad bajo el entendido que “en el marco del proyecto Construcción y Adecuación de Parques y Equipamientos para Todos, con el fin de brindar espacios adecuados para la recreación, el deporte, y aprovechamiento del tiempo libre y en cumplimiento de la norma Sismo Resistente NSR-10 y la micro zonificación sísmica de Bogotá de tal forma que se garanticen la seguridad y la protección de las vidas de las personas que usan el coliseo y gimnasios alternos de la Unidad Deportiva el Salitre UDS, es necesario contratar las obras de reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas de dicho escenario”.

Del mismo modo, se dio a conocer las especificaciones técnicas bajo las cuales se debía ejecutar el contrato, determinado en dicho documento las estas del proyecto, encontrándose las siguientes: 1. Etapa de coordinación, frente a la cual el contratista seleccionado debía entregar dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del acta de inicio los planes, programas e insumos relacionados, 2. Etapa de trámite de licencia, bajo la cual se señalado como obligación del contratista realizar todos los trámites relacionados con la obtención de la licencia de construcción, también se determinó como obligación del contratista, **realizar la revisión, verificación y validación de los estudios y diseños elaborados por las firmas PCA y CYECO**. Indicando, además, la obligación a cargo del contratista de realizar los ajustes que sean necesarios a los estudios y diseños tanto en planos como en memorias de cálculo para proceder al trámite de obtención de la licencia de construcción, asumiendo el contratista con el grupo de especialistas la responsabilidad de los estudios y diseños ajustados y tomar la vocería y atención de los requerimientos que tenga la Curaduría Urbana. Esta obligación debía garantizarse con los especialistas que formaban parte de su equipo de trabajo como lo eran geotecnia, el diseño estructural y el diseño arquitectónico y, por último, 3. Etapa de construcción, bajo lo cual se indicó como obligación la de presentar la caracterización de los materiales a utilizar en la ejecución de la obra realizando ensayos de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de la ejecución de las mismas.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

6.4.2 Etapa de trámite de licencia

El contratista realizara todos los tramites relacionados con la obtención de la licencia de construcción, para lo cual realizara la radicación, el seguimiento del trámite y la atención de las observaciones de la Curaduría Urbana.

Sera obligación del contratista realizar una revisión, verificación y validación de los estudios y diseños elaborados por las firmas PCA y Cyeco.

Sera obligación del contratista de realizar los ajustes que sean necesarios a los estudios y diseños tanto en planos como en memorias de cálculo para proceder al trámite de obtención de la licencia de construcción.

El contratista de esta forma asumirá con el grupo de especialista la responsabilidad de los estudios y diseños ajustados (si es necesario) y tomara de esta forma la vocería y atención de cualquier requerimiento que tenga la Curaduría Urbana.

Sera obligación del contratista una vez verificados los estudios y diseños en comento, realizar carta escrita de aceptación y aprobación de los mismos.

Sera obligación del contratista que sus especialistas en geotecnia, diseño estructural y diseño arquitectónico, atender los requerimientos de la Curaduría Urbana y firmar los formularios relacionados con el trámite de licencia de construcción.

Los costos de personal profesional, personal administrativos, costos administrativos, fotocopias, heliográficas, trasportes, ensayos de verificación, impuestos, pólizas, imprevistos, utilidad, etc., serán asumidos por el contratista dentro del valor indicado en su propuesta económica para el ítem de trámites definido en el presupuesto oficial.

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174445>

Obsérvese entonces que conforme lo señalado el despacho en la Resolución recurrida por las partes, el principio de planeación implica tanto a la Entidad Estatal como al contratista, cuando el contratista se presenta al proceso de selección, infiere que él es el experto en la materia y tuvo la oportunidad para realizar observaciones en la etapa previa al proceso de selección, de hecho tanto es así que si un proyecto no es construible, no tiene sentido que un contratista se presente para después presentar reclamaciones, y si él hubiera advertido la situación, no debió haber presentado oferta o debió haber presentado las observaciones del caso en la etapa precontractual.

Por lo que, debe reiterarse en el caso en estudio, que la obligación respecto de revisar las actividades a realizar y verificar las especificaciones y las normas técnicas que debía cumplir el proceso de selección, la tenían todos los proponentes interesados en la adjudicación del contrato, toda vez que la etapa precontractual es el momento para realizar las evaluaciones y estimaciones que hubieren sido necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de conformidad con el Pliego de Condiciones referido; así como en el Anexo técnico del Contrato de Obra No. 2937 de 2017, donde se especifica que el contratista debería realizar los ajustes que sean necesarios en la consultoría entregada por **PCA y CYECO** con el fin de obtener la licencia de construcción para la ejecución de la obra.

Adicionalmente, es claro, que la UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMMAIN entregó con su oferta un presupuesto específico para el ajuste del diseño, obligándose a cumplir con lo requerido, no solo con la curaduría urbana, sino con cualquier obtención de permiso u autorización propia al desarrollo del objeto del proyecto

Sobre este aspecto el Consejo de Estado se ha pronunciado en extenso, en fallo del 27 de enero de 2016, Rad: 54415, con ponencia del Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en la que se reiteró que:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

“ha de tenerse en cuenta que el inciso 2º del artículo 3º de la Ley 80 de 1993, señala que los particulares “tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que¹⁵ colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones” y por consiguiente de este precepto se desprende que el deber de planeación también abarca a estos colaboradores de la administración puesto que no sólo tienen el deber de ponerle de presente a la entidad las deficiencias de planificación que adviertan para que sean subsanadas sino que además deben abstenerse de participar en la celebración de contratos en los que desde entonces ya se evidencie que, por fallas en su planeación, el objeto contractual no podrá ejecutarse o su ejecución va a depender de situaciones indefinidas o inciertas por depender de decisiones de terceros, como por ejemplo el que estos se decidan a enajenar predios sobre los cuales han de construirse las obras que son o serán materia del contrato¹⁶ (Negrita y subraya propia)

“(…) Pero la planeación no solo mira hacia la administración. Naturalmente, los contratistas también están en el deber de planificar las acciones y gestiones necesarias para cumplir cabalmente sus prestaciones. De hecho, el profesionalismo con que debe actuar un contratista habitual del Estado, lo obliga a estar bien informado sobre las gestiones, proyectos, iniciativas, que la administración esté promoviendo a efecto de proponer, si es del caso, ofertas de contratos capaces de responder a las expectativas de la administración.

No puede admitirse que empresas y empresarios conocedores de todas las variables de sus negocios digan que firman contratos a oscuras, en la ignorancia, y que luego son sorprendidos por el Estado.

Y todo eso hace parte de un principio básico del contrato, que no es otro que el de la buena fe contractual, que va más allá del comportamiento cabal y honesto, puesto que implica el conocimiento de las condiciones en que se desarrollará el vínculo jurídico, en orden a asegurar la mutua confianza de las partes.

La buena fe reina en la etapa contractual, pues es la base de todas las relaciones o vínculos obligacionales. De hecho, la aplicación del principio de buena fe incluye la formación del contrato, como lo asegura Rodrigo Escobar Gil¹⁷”

En ese sentido, conforme lo manifestado, la entidad evidentemente está en la obligación de aplicar en sus procesos selectivos el principio de planeación contractual, pero el contratista, en ese momento proponente, también la tiene, respecto de observar las situaciones que considere pueden afectar el normal desarrollo del contrato, por lo que transgrede también el referido principio de planeación cuando conociendo por su experiencia posibles situaciones que pueden impactar de manera negativa la ejecución del contrato que se adjudicará de acuerdo con la forma en que está estructurado, prefiere guardar silencio en curso del proceso selectivo y ante el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio, usa ese silencio en su favor para argumentar su defensa en la falta de planeación de la entidad.

¹⁵ El aparte omitido de este inciso fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

¹⁶ En este entendido, no podrán pretender los contratistas, el reconocimiento de derechos económicos puesto que esto sería tanto como aspirar al reconocimiento de una apropiación indebida de los recursos públicos.

¹⁷ Ver nota 14

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Por lo indicado, no es de recibo para la entidad los argumentos expuestos en sede de recurso por el apoderado del contratista al señalar que existió una violación del principio de planeación por parte del IDRD bajo el argumento que *“se inició el proceso de licitación para la adjudicación del Contrato de Obra, el IDRD ya había celebrado y finalizado un contrato con el fin de establecer los diseños para la cimentación y el reforzamiento estructural de la obra que se iba a realizar, los cuales se remontan al año 2010. Así las cosas, era claro que el contratista al cual se le iba adjudicar el Contrato de Obra debía acogerse, en principio, a dichos diseños con el fin de ejecutar el contrato, partiendo de la base de que los diseños eran viables, situación de la que debió asegurarse el IDRD.*

Una vez fue adjudicado el Contrato de Obra a la Unión Temporal, se adelantaron todas las labores tendientes a iniciar con la ejecución de la obra, sin embargo, al empezar la misma se pudo establecer que los diseños entregados a la Unión Temporal estaban desactualizados, pues no contemplaban el carácter técnico que se debía implementar respecto de las normas de sismo resistencia (NSR-10) además de estar incompletos, situación que quedó acreditada en el proceso con el testimonio del ingeniero Eduardo Fernández Rincón, el cual al ser interrogado por los apoderados del contratista y de la compañía garante, afirmó que los diseños efectivamente habían sido entregados incompletos.”

Lo anterior, como quiera que el despacho no tomo la decisión contenida en la resolución recurrida por capricho ni mucho menos por ser arbitrario en la interpretación legal, jurisprudencial y doctrinal del principio de planeación, sino porque a todas luces se evidenció en el acervo probatorio recaudado que la Entidad desarrolló el proceso de selección para contratar la ejecución de las obras de reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas de la Unidad Deportiva el Salitre, contrato y obtuvo los estudios y diseños, producto de procesos de selección anteriores, y bajo los cuales el contratista seleccionado con la licitación del año 2017 debía **realizar la revisión, verificación y validación de los estudios y diseños elaborados por las firmas PCA y CYECO**, y fue el contratista quien no hizo una debida planeación del proyecto a ejecutar, cumpliendo las etapas propuestas contenidas en el anexo técnico del contrato.

Ahora bien, frente al argumento del apoderado del contratista en donde indica que *“Se aclara que la Unión Temporal solo pudo conocer de ello cuando ingresó al lugar en donde se iba a ejecutar la obra y de ello advirtió a la entidad contratante, pues dicha situación generaba un cambio en el alcance del Contrato de Obra, dado que la Unión Temporal tuvo que realizar nuevos diseños, lo que generó a su vez una serie de gastos que no se encontraban inicialmente previstos en el Contrato de Obra porque se reitera, los diseños aportados por el IDRD eran abiertamente inconsistentes para poder ejecutar el contrato. Además, el tema de los diseños también incidió de manera significativa en el trámite de la obtención de la licencia a cargo de la Unión Temporal, pues con los diseños aportados por la entidad contratante era imposible adelantar el trámite y la obtención de la licencia.*

En este punto, resulta necesario precisar que en varias oportunidades la Unión Temporal solicitó acceso al lugar donde se iba a ejecutar la obra, pero el IDRD no fue diligente en coordinar la entrada al mismo con el fin de revisar lo relacionado con la cimentación. Solo hasta cuando hubo una evaluación de la cimentación por parte de la Unión Temporal, se pudo establecer que los diseños que aportó el IDRD eran inviables, no se podía simplemente hacer un ajuste en los mismos, sino que por el contrario, se requerían diseños completamente nuevos y diferentes.”

Es importante indicar, que en el acervo no obra prueba que en la ejecución del contrato el Contratista hubiera manifestado y dejado sentado su posición frente a la inviabilidad de ejecutar el contrato de obra con los estudios y diseños entregados, argumento que hoy es

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

el principio de su defensa, lo que si se logró evidenciar a lo largo de la actuación, es que el contratista solicitó suspensiones y prorrogas para repeler las circunstancias presentadas en la etapa de licencias, las cuales siempre fueron tramitadas por la entidad e informadas a la compañía garante tal como consta en los anexos modificatorios de la garantía. En este sentido, lo que se determina en el acervo probatorio, es que, si los diseños no eran viables y el contratista hubiera realizado el estudio en la etapa inicial del contrato, entonces, no hubiera solicitado el desembolso del anticipo ante un proyecto que en su voz no era viable.

Dicha situación a todas luces vulnera los principios de la contratación estatal los cuales desencadenaron no solo en la no entrega de la obra contratada, perjuicio grave demostrado a lo largo de la actuación administrativa grave para la entidad, sino en la indebida destinación de dineros públicos bajo los cuales se desconoce en gran parte su destino en relación con el anticipo, a partir de las pruebas de la actuación administrativa.

Señala el apoderado del contratista bajo esta misma línea argumentativa, la violación al principio de planeación de la Entidad, bajo el entendido que *“Sumado a lo anterior, durante la ejecución del contrato de obra se conoció que el bien inmueble en donde se iba a ejecutar la obra había sido declarado bien de interés cultural a nivel distrital mediante el Decreto 0606 del 2001, situación que no se contempló en la consultoría contratada con el IDRD y que fue la base del proceso licitatorio del contrato de obra.*

Dicha situación influye de manera directa en la obtención de la licencia, pues al ser un bien de interés cultural, la obra debía adelantarse con base en unos diseños que tuviesen en cuenta la naturaleza del inmueble, es decir, no sobre la cimentación no fue contemplada los diseños, sino también que el inmueble era de interés cultural, situación que impactó de manera considerable en los tiempos de obtención de la licencia y generó además unos sobrecostos que tuvieron que ser asumidos por la Unión temporal, hechos que se encuentran ampliamente acreditada en el proceso.”

Argumento que fue por demás abordado ampliamente en la Resolución 1452 de 2022, bajo la cual se enfatizó en la aprobación de las solicitudes de modificaciones que dieron origen al imprevisto presentado dentro de la ejecución del contrato como lo fue la identificación del bien a patrimonio cultural.

Resulta necesario señalar lo indicado y el análisis realizado frente al particular, y al respecto indicó la resolución objeto de recurso que en el peor de los escenarios y encontrando que de acuerdo con el acervo probatorio en la ejecución del contrato se presentaron imprevistos como la afectación del bien por parte del IDPC como patrimonio cultural, también resulta evidente en el acervo probatorio que la Entidad garantizó las modificaciones contractuales para superar y atender estos imprevistos, tan así, que el contrato se suspendió y se prorrogó conforme la solicitudes del contratista y el aval del interventor, lo que de ante mano prueba que el contratista estuvo de acuerdo en surtir los tramites de las modificaciones que se hicieron para dar continuidad al objeto del contrato, y el contratista nunca puso objeción para indicar que el objeto no era construible, no hay ninguna evidencia documental donde el contratista manifieste que el contrato no era construible o viable, antes bien lo que se encontró, de acuerdo con el acervo, es aceptación de las modificaciones, de las suspensiones, de las prórrogas, para culminar el objeto del contrato, por lo que en este momento no es dable que el contratista le atribuya un falta de planeación a la Entidad, cuando en la etapa precontractual nunca lo observó y ante un hecho sobreviniente lo que hace es surtir, aceptar y consentir las modificaciones contractuales que en principio de buena fe vinculan a las partes sin indicar que ante el hecho sobreviniente que el objeto no podía llevarse a cabo.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Entre otros apartes el acto administrativo indicó lo siguiente:

“Lo anterior, indica claramente que el contratista no advirtió que el objeto del contrato no era construible o que no era posible de ejecutarse, por el contrario, con la aceptación y suscripción de las modificaciones contractuales realizadas en la ejecución del contrato y bajo tal consideración a la luz del principio de buena fe, el principio “Pacta sunt servanda”, “los contratos están para cumplirse” y cuando las partes aceptan una modificación, porque es claro que existió un hecho sobreviviente, conocido por las partes y la Entidad y el contratista aceptan voluntariamente las condiciones sin presentar objeción que identificara que no puede cumplirse el objeto del contrato.

Ahora bien, ante la existencia de los hechos sobrevinientes, se estima que las modificaciones contractuales, consienten, validan y adoptan las medidas solicitadas para avanzar en la ejecución del contrato, sin que el contratista hubiese presentado objeciones manifestando que no era construible lo presentado. En este sentido, el contratista siguió ejecutando el contrato, poniendo a la Entidad a la expectativa y confianza legítima de que puede culminar su ejecución, así mismo, los conceptos emitidos por la interventoría tampoco indicaron a la entidad que no era construible el proyecto, por el contrario, lo que hicieron las partes en la ejecución del contrato, fue surtir un proceso de modificación contractual para llevar a feliz término actividad.

En este punto es de resaltar que tal y como lo han expresado los órganos contencioso – administrativos en diferentes oportunidades, el contratista al suscribir un contrato se convierte en un colaborador esencial de la administración pública y debe enmarcar todas sus actuaciones en el principio de transparencia y por ende debe guiar a la Administración hacía una efectiva ejecución de los compromisos contractuales que se le han encomendado, advirtiendo cualquier error o inconsistencia que pueda conllevar a una deficiente o incorrecta ejecución del objeto contractual. Tan es así, que incluso el deber de planeación contempla a los particulares como coagentes y responsables de la retroalimentación al Estado en la etapa precontractual, para que estos apoyen en la definición y estandarización de los documentos y demás información relevante o esencial para la ejecución del futuro contrato.”

Tal como lo indicó el apoderado de la compañía garante, las modificaciones del contrato tuvieron como justificación las situaciones presentadas en la ejecución del contrato frente a las afectaciones del bien como patrimonio cultural, y también se encontró que la entidad y el contratista consintieron de mutuo acuerdo las correspondientes modificaciones conforme lo indicó el contratista y el interventor, así lo denotan los documentos probatorios frente a las modificaciones surtidas que demuestran que la entidad le garantizó al contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, lo necesario para la culminación exitosa de la etapa de tramites del contrato No. 2937 de 2017, tal y como se demuestra a continuación:

Fecha	Actividad	Responsable	Trazabilidad
12 de febrero de 2018	Se suscribe acta de suspensión del contrato No. 1, amparados en el tiempo que se toma la curaduría urbana No. 5 en la revisión de los diseños.	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184100173463 se legaliza acta de suspensión de los contratos por un lapso de 30 días.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

14 de marzo de 2018	Se suscribe acta de ampliación 1 a la suspensión No. 1, amparados en el nuevo plazo para la valoración patrimonial solicitada por el IDPC y la revisión de la misma por parte de la curaduría.	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184100215333 se legaliza acta de ampliación 1 de la suspensión 1 por un lapso de 60 días.
11 de mayo de 2018	Se suscribe acta de ampliación 2 a la suspensión No. 1, amparados en que se radicó ante IDIGER la solicitud de visita técnica y no se ha recibido respuesta.	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184100365413 se legaliza acta de ampliación 2 de la suspensión 1 por un lapso de 30 días.
12 de junio de 2018	Se suscribe acta de ampliación 3 a la suspensión No. 1, amparados en que se debe realizar adición al contrato para obtener el estudio de valoración de patrimonio.	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184100365413 se legaliza acta de ampliación 3 de la suspensión 1 por un lapso de 15 días.
27 de junio de 2018	Se suscribe acta de ampliación 4 a la suspensión No. 1, amparados en que aún no se han superado la totalidad de las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato.	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184100413353 se legaliza acta de ampliación 4 de la suspensión 1 por un lapso de 15 días.
06 de julio de 2018	Se suscribe acta de reinicio No. 1	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184100432443 se legaliza acta de reinicio del contrato.
09 de julio de 2018	Se suscribe Modificadorio No. 1 en el cual se prorroga la etapa de tramites del contrato	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando Modificadorio 1 se legaliza prórroga del contrato por un lapso de 1 mes a la etapa de trámites.
09 de agosto de 2018	Se suscribe acta de suspensión No. 2, amparados en que se está a la espera de la respuesta de la curaduría urbana No. 5 y del IDPC.	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184100526663 se legaliza acta de suspensión 2 por un lapso de 30 días.
07 de septiembre de 2018	Se suscribe acta de ampliación 1 suspensión No. 2, amparados en que subsisten los causales	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184200629753 se legaliza acta de ampliación 1 de la suspensión 2 por un lapso de 30 días.
5 de octubre de 2018	Se suscribe acta de ampliación 2 suspensión No. 2, amparados en que subsisten los causales	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184200660383 se legaliza acta de ampliación 2 de la suspensión 2 por un lapso de 30 días.
6 de	Se suscribe acta de ampliación 3	Interventoría –	Mediante memorando

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

noviembre de 2018	suspensión No. 2, amparados en que subsisten los causales	Contratista - IDRD	20184200751523 se legaliza acta de ampliación 3 de la suspensión 2 por un lapso de 30 días.
28 de noviembre de 2018	Se suscribe acta de reinicio No. 2	Interventoría – Contratista - IDRD	Mediante memorando 20184200757633 se legaliza acta de reinicio del contrato.
26 de enero de 2019	Se realiza entrega física de la licencia ejecutoriada No. 18-5-0557 con sus respectivos anexos	Interventoría– Contratista	Mediante radicado 20192100022022 se remite la documentación correspondiente al IDRD.

Lo anterior indica que, para la culminación exitosa de la etapa de trámites, bajo la cual se obtuvo la aprobación de licencia por parte de la curaduría, se suspendió el Contrato de Obra No 2937 de 2017 las veces que fue requerido, a fin de salvaguardar los tiempos contractuales. En este mismo orden, la entidad realizó una prórroga a la etapa de licencias por un mes más con el objeto de culminar con éxito dicha etapa.

Así se evidencio en las justificaciones de las modificaciones contractuales que se realizaron y de las cuales resulta importante relacionar:

a. Modificación No. 1 del 9 de julio de 2018

<p>i. HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE MODIFICACIÓN:</p> <p>PRIMERO: Que el Instituto Distrital de Recreación y Deportes y el contratista suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 2937 de 2017 el día 27 de septiembre de 2017. SEGUNDO: Que las partes acordaron como plazo de ejecución el termino de trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo cual ocurrió el 16 de noviembre de 2017. TERCERO: Que se acordó como valor del contrato la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MCTE (\$11.816.242.707). CUARTO: Que el 12 de febrero de 2018 se produce una suspensión al contrato, la cual se amplió en cuatro oportunidades, según consta en actas de suspensión y reinició, teniendo como consecuencia que la etapa de trámite de licencias vence el 09 de julio de 2018, plazo a partir del cual se comenzará a contar los 10 meses de la etapa de obra. QUINTO: Que mediante memorando dirigido a la Subdirección de Contratación con radicado IDRD No. 20184000412923 del 05 de julio de 2018, al cual se le dio alcance de memorando radicado IDRD No. 20184000420663 del 09 de julio de 2018, el Subdirector Técnico de Construcciones solicita adelantar los trámites administrativos que permitan la suscripción de la prórroga No. 1 al contrato No. 002937 de 2017, allegando Solicitud de Modificación Contractual suscrita por el supervisor donde manifestó: "...El 04 de julio de 2018 el Representante Legal de la Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento ASEMAIN solicitó a la interventoría "...la probación y el consecuente tramite de licencias de treinta (30) días calendario, para lograr el ajuste al diseño estructural que contiene el análisis y el diseño de todos los elementos que hacen parte de la estructura y que deben cumplir con la normatividad de Norma Sismo Resistente MRS10, en conjunto con los lineamientos de patrimonio exigidos por el IDPC...". A su vez, el Consorcio SB, firma interventora del contrato de obra, radicó oficio con radicado IDRD No. 20182100190232 del 05 de julio de 2018 en el que manifestó: "...En cumplimiento de lo establecido en el</p>
--

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

contrato de interventoría No. 2999 de 2017, y de acuerdo a lo solicitado por el contratista según oficio UT S-A-2937-030 recibido el 4 de Julio de 2018, la interventoría CONSORCIO SB solicita una prórroga a los contratos tanto de ajuste y construcción de obra (contrato 2937 de 2017) como al de interventoría (contrato 2999 de 2017) en la etapa de trámites de licencia de construcción, por un tiempo de 30 días calendario contados a partir del 6 de Julio de 2018. El contratista cuenta con 20 días calendario para realizar el ajuste a los diseños estructurales y arquitectónicos cumpliendo con la presentación de la valoración patrimonial y los lineamientos requeridos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la interventoría contara con 10 días calendario para que realice la debida revisión de los documentos para su posterior radicación ante el IDPC y la Curaduría Urbana No.5...". Revisado el avance de las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra, como de interventoría, se aprecia que se han ejecutado, entre otras, las siguientes actividades, según informe presentado por el interventor: (i) El 30 de enero de 2018, la Unión Temporal radicó ante la Curaduría Urbana No. 5 solicitud de licenciamiento de proyecto, obteniendo respuesta en el mes de febrero de 2018, oportunidad en la que se efectuaron observaciones, dentro de las que se destaca la siguiente: "...el predio corresponde a un inmueble de interés cultural del Distrito, por lo que la intervención propuesta debe contar con una aprobación del Instituto Distrital de Patrimonio. Es preciso señalar que si dentro del estudio de la solicitud se llegase a modificar el proyecto inicialmente presentado y aprobado por patrimonio y sus documentos anexos (planos y estudios), se debe solicitar revisión y ajustes de documentos por parte de dicha entidad... (Resaltado fuera del tex-to)". (ii) El interventor del proyecto informa que: "...el día 1 de Marzo de 2018, se logró efectuar una reunión en las instalaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural la cual se realizó con la presencia de algunos funcionarios del instituto (...) contratista (...) interventoría (...) con el fin de presentar el contrato al IDPC para la evaluación correspondiente; en esta reunión el IDPC nos indica que para ellos es interesante el tema del reforzamiento ya que esto garantiza la seguridad de las personas que lo ocupan y su mejor funcionamiento pero que es necesario proteger este bien patrimonial; los encargados del IDPC comentaron que la información que fue radicada por el contratista el 7 de Febrero de 2018 no era suficiente para ellos emitir un concepto sobre el trato al edificio por lo tanto solicitaron que se realizara una nueva reunión en la cual se presentaran entre otros, una valoración patrimonial del edificio de las ligas, realizada por un experto en el tema y una memoria descriptiva sobre el proyecto a realizar, con una justificación sobre cómo se haría la intervención sin afectar las fachadas...". Al leer el anexo técnico denominado "condiciones para la ejecución del contrato - obligaciones del contratista", publicado en el proceso de selección IDRD-STC-LP-017-2017, el cual hace parte integral del contrato No. 002937 de 2017, se evidencia que se pactó en el numeral 6.4.2. lo siguiente: "...6.4.2. Etapa de trámite de licencia. El contratista realizará todos los trámites relacionados con la obtención de la licencia de construcción, para lo cual se realizará la radicación, el seguimiento del trámite y la atención de las observaciones de la Curaduría Urbana. Será obligación del contratista realizar una revisión, verificación y validación de los estudios y diseños elaborados por la firma PCA y Cyeco. Será obligación del contratista de realizar los ajustes que sean necesarios a los estudios y diseños tanto en planos como memorias de cálculo para proceder al trámite de obtención de la licencia de construcción. El contratista de esta forma asumirá con el grupo de especialistas la responsabilidad de los estudios y diseños ajustados (si es necesario) y tomará de esta forma vocería y atención de cualquier requerimiento que tenga la Curaduría Urbana...". En consideración a lo anterior, para el trámite de licencia y obtención de autorización de intervención del bien objeto del contrato, y la solicitud presentada por el Contratista Unión Temporal San Antonio IDRD Reforzamiento ASEMAIN, y avalada por el interventor del contrato, Consorcio SB, surge la necesidad de continuar con los trámites administrativos que permitan atender las observaciones presentadas por la Curaduría Urbana No. 05, en especial la relacionada a que el proyecto cuente con la aprobación de intervención por parte del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura - IDPC, razón por la cual se hace procedente atender la solicitud de prórroga del contrato por un término de 30 días calendario. Así las cosas, es pertinente adelantar los trámites administrativos que permita la prórroga del plazo de ejecución del contrato - etapa de trámites de licencia, por un término de 30 días calendario, lo que permitirá dar continuidad al cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales a cargo del contratista de obra. La presente prórroga del contrato es viable en consideración a que se encuentra justificada y no genera costos adicionales.

b. Suspensión No. 1 del 14 de marzo de 2018

B. CAUSAS DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN	
Se requiere una suspensión por un periodo de 60 días contados a partir del 14 de Marzo de 2018, considerando que el tiempo de suspensión otorgado por 30 días, para la revisión y la aprobación de la licencia de construcción y otros aspectos administrativos por parte de la curaduría urbana, al igual que el IDPC y el DADEP, se prolonga dado que no se dio aval de parte del IDPC para continuar con el proceso. Este trámite claramente corresponde a terceros diferentes al contratista y a la entidad, según se sustenta en los oficios INTER-12-03-2018-036 suscrito por la interventoría y el oficio UT-S-A 2937-015 suscrito por el contratista.	
C. OBSERVACIONES	
El día 7 de febrero de 2018 se radicó ante el IDPC información del proyecto para su revisión, posteriormente se realizó comité el 1 de Marzo de 2018 entre las partes (IDRD, IDPC, UT SAN ANTONIO Y CONSORCIO CB) donde se socializó el proyecto al IDPC el cual se encuentra motivado por la intervención a realizar en la unidad deportiva El Salitre (UDS); luego de la revisión de la documentación, el IDPC establece ampliar la información ya radicada para poder emitir un concepto, por lo cual se programa un comité para el día 7 de marzo de 2018 en sus instalaciones en donde se establece por parte del IDPC que se debe realizar una valoración patrimonial para proceder con el trámite de revisión; dicha valoración tiene un tiempo estimado de 30 días. Por lo anterior se establece que las causas de la justificación de la suspensión #1 no se han superado y se solicita prorrogar la suspensión por un periodo de sesenta (60) días contando con los 30 días para realizar la valoración patrimonial y con otros 30 días de revisión de la información por parte de las entidades IDPC, DADEP y Curaduría Urbana No.5.	
El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante y a actualizar las pólizas correspondientes, las cuales entregará al interventor del contrato (según corresponda) para la revisión y aprobación correspondiente por parte del Área de Apoyo a la Contratación del IDRD.	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los <u>14</u> días del mes de <u>MARZO</u> de <u>2018</u>	

c. Suspensión No. 2 del 11 mayo del 2018

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

B. CAUSAS DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN	
<p>Se requiere ampliar la suspensión por un periodo de 30 días contados a partir del 13 de Mayo de 2018, dado que se esta a la espera de la respuesta del IDIGER, relacionado con el riesgo de la edificación y que fue solicitado en el oficio con radicado IDRD 20184100051611 del 28 de marzo del 2018. Dicho pronunciamiento es necesario de acuerdo a los parámetros que sustentaran la valoración patrimonial para definir el grado e intervención de los elementos no estructurales.</p> <p>Nota: Se aclara que el documento de fecha 12-feb-2018 SUSPENSIÓN No. 1 presenta error de digitación en la fecha de terminación del contrato, toda vez que se estableció en el mismo el 14-ene-2019 cuando en realidad fue el 16-ene-2019, en consecuencia las fechas se corrigen en el presente documento y serán las que deben entenderse para efectos de contabilización de los plazos.</p>	
C. OBSERVACIONES	
<p>De la misma forma el IDRD costeará en este periodo el valor del estudio de valoración patrimonial solicitado por el IDPC y los tiempos estimados para elaborar dicho estudio, aspectos que estan siendo analizado por el Interventor y el Supervisor ya que dicha actividad no estaba incluida en costo inicial determinado en el proceso de selección.</p> <p>El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante y a actualizar las pólizas correspondientes, las cuales entregará al interventor del contrato (según corresponda) para la revisión y aprobación correspondiente por parte del Area de Apoyo a la Contratación del IDRD.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los <u>11</u> días del mes de <u>MAYO</u> de <u>2018</u></p> <p><i>(Firma)</i> <i>(Firma)</i> NATALIA VEGA DURAN Contratista FABIAN ANDRÉS VALLEJO PACHÓN Interventor</p>	

Adicionalmente, del análisis efectuado en la Resolución 1452 de 2022, resulta necesario indicar que frente a la suspensión No. 2, el IDRD siempre le garantizó al contratista el reconocimiento del estudio realizado y bajo el cual no estuvo contemplado en los costos iniciales del proyecto, como quiera que surgió en la etapa de trámite de la obtención de la licencia, por lo que el argumento del apoderado que desvirtuado con lo aceptado por el contratista con la suscripción de la suspensión de marras.

d. Suspensión No 3 del 12 de junio de 2018

B. CAUSAS DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN	
<p>Se esta realizando el trámite para solicitud de prorroga por 30 días al contrato, esta prorroga necesita una adición en costos que se debe consensuar entre el contratista, la interventoria y el IDRD. Una vez consensuado el IDRD deberá adelantar los trámites administrativos internos para su convalidación ante el Área de Costos y la obtención del certificado de disponibilidad Presupuestal. La adición recae sobre la necesidad de obtener el estudio de valoración de patrimonio del inmueble objeto del contrato, documento solicitado por el IDPC, sin el cual no se puede continuar con los trámites de licenciamiento. Por lo anterior no es posible continuar con la ejecución del contrato, sin que previamente se haya definido la adición y prorroga de este, por tal motivo se requiere ampliar la suspensión por un periodo de 15 días contados a partir del 12 de Junio de 2018 para definir el valor de la adición y realizar se el trámite pertinente para la obtención de la misma.</p>	
C. OBSERVACIONES	

e. Suspensión No. 4 del 27 de junio de 2018

se hace necesario ampliarla por el termino de 8 días.

C. OBSERVACIONES	
<p>Una vez aprobado el costo de la valoración patrimonial por las partes incluido el IDRD, se continuara con el tramite de prorroga a la etapa de ajuste a los diseños y tramites ante curaduría.</p> <p>El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante y a actualizar las pólizas correspondientes, las cuales entregará al interventor del contrato (según corresponda) para la revisión y aprobación correspondiente por parte del Area de Apoyo a la Contratación del IDRD.</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los <u>veintisiete</u> días del mes de <u>JUNIO</u> de <u>2018</u></p> <p><i>(Firma)</i> <i>(Firma)</i> Contratista Interventor</p>	

f. Suspensión del 9 de agosto de 2018

C. OBSERVACIONES	
<p>El día 26 de Julio se radicó ante la Curaduría Urbana No.5 y ante el IDPC con Radicado No. 20185110065652 la información para adelantar los trámites de licencia de construcción y anuencia de intervención respectivamente, de las cuales aún no se ha obtenido respuesta, por lo cual se solicita una suspensión al contrato por treinta (30) días en espera de dichas respuestas por parte de las entidades anteriormente mencionadas.</p> <p>El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante y a actualizar las pólizas correspondientes, las cuales entregará al interventor ó supervisor del contrato (según corresponda) para la revisión y aprobación correspondiente por parte del Area de Apoyo a la Contratación del IDRD.</p>	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

g. Suspensión del 6 de noviembre de 2018

JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN
<p>Objeto de la suspensión:</p> <p>Esta ampliación a la suspensión, como medida de carácter temporal y excepcional, se suscribe con el propósito de satisfacer adecuadamente los principios de la contratación estatal y con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual, considerando que de acuerdo al seguimiento adelantado por la interventoría se evidenció que las actividades referentes al "Trámite de licencia de reforzamiento estructural de la UDS y el aval de intervención por parte del IDPC no han concluido", lo cual implica que el contratista haya solicitado la ampliación a la suspensión con el fin de adoptar y manejar las acciones y riesgos que le competen, previa revisión de los hechos por parte de la Interventoría.</p> <p>La suspensión no exime ni al contratista de obra como tampoco a la interventoría del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tanto es en oportunidad como tampoco en forma, especialmente del primero de conservar bajo su absoluta responsabilidad, en buen estado y bajo celosa seguridad, las obras ejecutadas, hecho por el cual, la Subdirección Técnica de Construcciones no ha aceptado ni acepta salvedades, exenciones o modificaciones motu proprio, dado que la suspensión concedida se da sobre la base de otorgar la oportunidad con la que se pretende satisfacer el contrato y no, con el fin de modificar cualquier otra condición u obligación del mismo. Esta suspensión no dará a favor de los solicitantes y en contra del IDRD, la facultad de promover resarcimientos por cualquier efecto patrimonial y/o de daños o perjuicios (incluyendo daño emergente y lucro cesante y, además, sin ser limitativos, mayor permanencia), con fundamento en los hechos que dan lugar al trámite que ahora nos ocupa.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante y a actualizar las pólizas correspondientes, las cuales deberá remitir para la revisión y aprobación a la Subdirección de Contratación del IDRD y entregar copia al interventor o supervisor del contrato (según corresponda).</p> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los</p> <p style="text-align: right;">seis de</p>

Como se puede observar, las consideración para las modificaciones suscritas por las partes, que todas estuvieron encaminadas a garantizar al contratista el tiempo necesario para concluir la etapa de la obtención de la licencia, y bajo las cuales el contratista jamás indico o rechazo la suscripción de tales, por el contrario fue el mismo quien solicito las suspensiones y no la terminación del contrato, en caso que el argumento que hoy trae al proceso sancionatorio hubiera sido el de imposibilidad de ejecutar el contrato por la inviabilidad de los estudios y diseños entregados por la entidad.

h. Prórroga No. 1 del 1 de noviembre del 2019

I. HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRESENTE MODIFICACIÓN:
<p>PRIMERO: Que el Instituto Distrital de Recreación y Deportes y el contratista suscribieron el Contrato de Obra No. 2937 de 2017, con fecha 27 de septiembre de 2017. SEGUNDO: Que de acuerdo con lo estipulado en el PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato, éste se pactó en TRECE (13) MESES. TERCERO: Que conforme a lo establecido en el contrato, el valor se pactó por la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS (\$11.816.242.707) M/CTE. CUARTO: Que el día 16 de noviembre de 2017 se suscribió el acta de iniciación firmada por quien ejerce la interventoría del contrato, teniendo como fecha de terminación inicial el 15 de diciembre de 2018. QUINTO: Que el día 09 de julio de 2018, las partes acordaron prorrogar el plazo de ejecución un (1) mes más, contado a partir del 10 de julio de 2018 hasta el 09 de agosto de 2018. SEXTO: Que las partes mediante modificatorio No. 2 de fecha 12 de marzo de 2019, aclararon que las actividades de obra pública del contrato No. 2937 de 2017, están exentas de IVA.... SEPTIMO: Que de conformidad con el Acta de Suspensión-Reinicio No. 1, 2 y 3 y sus respectivas ampliaciones, el plazo de ejecución del contrato de obra No. 2927 de 2017 es hasta el 04 de noviembre de 2019. OCTAVO: Que mediante solicitud dirigida a la Subdirección de Contratación con radicado IDRD No. 20198000390392 de fecha 01 de noviembre de 2019, el Subdirector Técnico de Construcciones requiere la prórroga del Contrato de Obra No. 3438 de 2018, allegando Solicitud de Modificación Contractual emitida por la interventoría en la cual se manifiesta: (...)De acuerdo entonces, a las solicitudes realizadas anteriormente mediante oficios UT S-A 293 y con fundamento a los oficios ya mencionados (los cuales se anexan a la presente solicitud), el plazo de prórroga se fundamenta para terminar la ejecución de las obras, las cuales en su mayor porcentaje son No previstas y que fueron producto de condiciones externas e imprevisibles como es la afectación patrimonial y otras que han surgido de los hallazgos en obra, generando análisis, diseños y obras adicionales, incurriendo en mayores actividades y por consecuencia mayores plazos de ejecución. Del mismo modo al ser una construcción existente y antigua, se ha podido evidenciar que durante el desarrollo de la obra, esta ha sido sujeta a que surjan actividades nuevas las cuales deben tener un análisis adicional que se acondicionen a las restricciones o parámetros de tipo patrimonial. (...) NOVENA: Que analizada la solicitud de prórroga al contrato de obra No. 2937 de 2017, se considera pertinente y viable conforme a las razones expuestas anteriormente por parte de la interventoría del contrato, que forma parte integral del presente documento, por las razones expuestas anteriormente.</p>

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Cabe destacar el origen que dio lugar a la suscripción de la Prórroga No. 1, fue solicitada por el contratista bajo radicado No. 20192100362382 de fecha 08 de octubre de 2019 oficio UT S-A-2937:339, donde solicitó prorrogar por cinco (5) meses el contrato realizando la trazabilidad de los inconvenientes presentados, los cuales fueron aprobados y avalados por el interventor en oficio No. 20192100383672 IDRD-CES2999-2019-00022, y bajo solicitud de modificación contractual con radicado IDRD 20198000390392 de fecha 01 de noviembre de 2019, en donde se presentaron las explicaciones frente a las circunstancias y actividades que generaron los mayores tiempos, las cuales se resumen así:

1. Temas patrimoniales del edificio de ligas:
 - Implementación del diseño/ afectación en tiempo
 - Anclajes provisionales
 - Estabilidad de los muros
 - Prefabricación de terraza núcleo central
2. Demoras e Imposibilidad de acceder a las ligas por el tardío desalojo del sitio de obra
3. Hallazgos de condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos de obra
4. Actividades adicionales de reforzamiento
5. Afectación de los planos finales de taller de la estructura por las condiciones encontradas
6. Montaje de la Nueva Estructura Metálica de reforzamiento
7. No intervención del Auditorio por temas de presupuesto
8. Ítems no previstos
 - Concretos – fundición de cimentación accesos ligas
 - Concreto – Fundición de pedestales
 - Anclaje para 18 Ménsulas
 - Demolición de ménsulas
 - Reparación Ménsulas Epóxido
 - Retiro estructura existente
 - Desmontaje mobiliario boxeo
 - Cimentación 4 columnas
9. Reforzamiento baños accesos (4 columnas)
10. Fabricación, despacho, pintura y montaje de estructura
11. Ajuste de tornillería
12. Grouting de nivelación

Expuestas las razones del contratista de obra UT ASEMAIN, la Interventoría del contrato de obra, Consorcio Santa Paula 08 en oficio No. 20192100383672 del 25 de octubre de 2019 y radicado interno IDRD-CES2999-2019-00022, entregó a la Entidad el concepto de viabilidad y la solicitud de prórroga ante el IDRD en los siguientes términos:

“Una vez analizadas las razones expuestas en el documento y verificando el estado actual de la obra el consorcio Santa Paula 008 se permite considerar los siguientes aspectos:

Para la fecha se encuentran subsanadas la totalidad de observaciones evidenciadas durante la ejecución del contrato en cuanto a diseños estructurales, geotécnicos y planos de taller. De la misma manera se aclara que debido a los ajustes en materia de diseño e imprevistos no atribuibles a las partes, el presupuesto inicialmente previsto se ajustó mediante balance de obra actualizado, flujo de caja y programación de obra, los cuales vigilaremos en ejecución; esto sí y solo sí la entidad viabiliza la otorgación de plazo realizada

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

por la interventoría de un plazo de 3 meses. Indicamos que mencionado lo anterior, será necesario analizar la procedencia de realizar adición al contrato de obra, la cual deberá ser estudiada de acuerdo a las necesidades del contrato.

Es importante mencionar que se requiere financiación de parte de la UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN con el fin de realizar las obras del alcance contractual, la cual permita desarrollar en los tiempos previstos. De la misma manera el contratista de obra deberá realizar la entrega inmediata de las garantías únicas de cumplimiento que cubra la modificación de ser aprobadas por la Entidad IDRD. ...” (subrayado propio).

Como resultado, se tramitó la solicitud de la interventoría del Consorcio Santa Paula 008 bajo el radicado No. 20198000390392 del 1 de noviembre de 2019 por el IDRD.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

No. 20198000390392 Código Web: 854U&4

FECHA: 01-11-2019 09:25:33 FOLIOS: 54
RADICADOR: ANYELLY PAOLA OSORIO TRUJILLO
DESTINO: SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
VITENTE: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
JUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CT
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 08 PBX: 660 5400

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud	31/10/2019	Área de Origen	STC- ÁREA DE INTERVENTORÍA	Contrato	X	Convenio	
Número contrato año	2937-2017	Prorroga	x Adición	Adición y Prorroga		Modificación	Aclaración
Número de Expediente Virtual				20178000701500020E			
Otra	Especifique cuál?:						

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del Contratista (Conveniente):	Fecha de Suscripción: 27/09/2017	Fecha de Inicio: 16/11/2017
UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN	Plazo Inicial: 13 MESES	Fecha de Terminación: 15/12/2018
	Plazo Final a la fecha: 14 MESES	
Interventor/ Supervisor: CONSORCIO SANTA MONICA / MONICA B. LILIANA MENDEZ TRIVIÑO		
Valor Inicial: \$ 11.816.242.707	Valor final a la fecha: \$ 11.816.242.707	
Objeto	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS"	
Valor total ejecutado a la última factura/cuenta	\$1.701.066.463	

II. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No: N/A	Tiempo: 1 MES	- MODIFICACION 1
Valor:		
CDP No:	Tiempo: N/A	- MODIFICACION 2
Valor:		
CDP No:	Tiempo:	
Valor:		
Suspensión		

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN	
1.Descripción general de la solicitud	
Causa(s) de la solicitud(es)	<p>...</p> <p>En su calidad de Interventoría del contrato de la referencia, tal como había sido solicitado con antelación al anterior Interventor Consorcio SB mediante oficios UT S-A 2937: 251, UT S-A 2937: 277 y UT S-A 2937: 339 de fechas 11 de julio, 25 de julio y 8 de octubre de 2019 y atendiendo la solicitud de la entidad respecto a nuestra comunicación de prórroga No. 20192100362362, nos permitimos dirigirnos a ustedes con el ánimo de presentar solicitud de prórroga de 3 meses contados a partir de la fecha de terminación actual del mismo respectivamente.</p> <p>El motivo de la prórroga solicitada, obedece a razones excepcionales que se presentaron en la ejecución del contrato, que justifican dicha ampliación de plazo y eventualmente la constitución de reservas de apropiación, de acuerdo con las normas vigentes.</p> <p>A continuación se explican las circunstancias y actividades que generaron mayores tiempos:</p>
<p>1. Temas Patrimoniales del edificio de Ligas:</p> <p>El tipo de afectación que tiene la Unidad Deportiva el Salitre, clasificado como un Bien de Interés Cultural categoría de Conservación Integral, de acuerdo al Decreto 606 de 2001, generó diseños adicionales, obras y actividades No Previstas, esto en atención a los requerimientos y parámetros establecidos por el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural – IDPC. El tipo y antigüedad de la construcción ha redundado en menores rendimientos de los procedimientos constructivos ya que es necesario tener un especial cuidado con respecto a este tipo de edificación, afectando en mayores plazos el tiempo contractual puesto que las actividades a desarrollar conllevaron menores rendimientos en su ejecución.</p> <p>A continuación se explican las afectaciones que generaron plazos adicionales debido a la declaratoria del bien patrimonial:</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementación del diseño / afectación en tiempo: Este tipo de clasificación impuso al contratista una carga adicional en el ámbito técnico al cambiar los parámetros inicialmente planteados contractualmente con respecto al reforzamiento. Debido a esto se diseñó un exoesqueleto en estructura metálica (Reforzamiento menos invasivo) que se adaptara a las directrices emitidas por el IDPC y Curaduría. Esta condición alteró negativamente el balance y la programación contractual. <p>Contractualmente dentro de las actividades a desarrollar se tenía contemplado demoler y reemplazar la ventanería así como los prefabricados conexos a esta, pero debido a la condición patrimonial no se permitió realizar dicha intervención. Esta situación fue alertada al Consorcio SB mediante oficio UT S-A 2937 del 9 de abril de 2019 en el cual se informó que al tener que conservar la ventanería se afectó el proceso constructivo, así mismo se le solicitó a la Interventoría determinar el procedimiento a seguir. Como respuesta la Interventoría solicitó la evaluación de las nuevas alternativas de intervención generando actividades no previstas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anclajes provisionales: Debido a la restricción de demolición de la ventanería y la mala condición de los prefabricados, se determinó cambiar el procedimiento constructivo, por lo que fue necesario demoler quirúrgicamente las ménsulas que sostenían las cerchas existentes, por ello se implementaron unas planitas y anclajes provisionales los cuales sostuvieron dicha estructura antigua, para posteriormente desarrollar la demolición de las ménsulas, desmontar las cerchas para que permita el izaje de la estructura metálica, finalmente hay que retirar los anclajes provisionales.	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

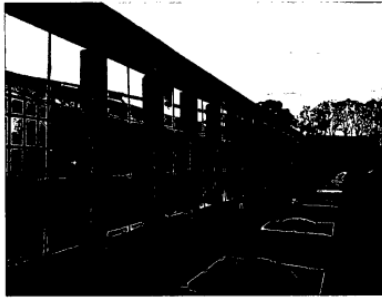


Ilustración 1: Ventanería y prefabricados existentes.

- **Estabilidad de los muros:** La interventoría Consorcio SB consideró que, debido al retiro de las correas y algunos elementos estructurales de la cubierta, los muros iban a desestabilizarse, razón por la cual sugirió el desarrollo de unos elementos diferentes a los contractualmente planteados como el acodalados, por lo que se sugiere ahcer unos templetos para dar estabilidad a los muros (oficio UT S-A 2937:227 con fecha del 21 de junio de 2019). La interventoría Consorcio SB, al evaluar dicha solución determino que esta no era la más adecuada y se llegó al conceso de retirar la estructura existente principal solamente a días previos al izaje de la nueva estructura. Razón que genera plazo adicional por que dicha actividad se tenía proyectada a ejecutarse de forma continua y para satisfacer la restricción (patrimonial y las encontradas en sitio) obligo hacer la actividad deforma parcial y por fases con actividades nuevas previas al izaje, por lo que se tuvieron que desarrollar 108 puntos de anclaje actividad que todavia se encuentra en proceso de ejecución .

Los tiempos transcurridos entre el diseño, la aprobación de los mismos y los procesos constructivos generaron un mayor tiempo, 4 meses, que no se encontraba contemplado inicialmente. Estas actividades descritas depende una de la otra, por lo que no pueden desarrollarse simultáneamente, cumpliendo así un procedimiento lógico constructivo.



Ilustración 2: Cara interna fachadas con ventanería, ménsulas a demoler y cerchas a sostener.

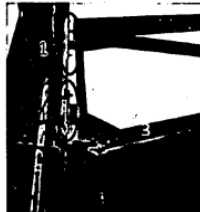


Ilustración 3: actividades que generaron mayores tiempos de ejecución 1) Anclajes 2) Demolición quirúrgica de ménsulas 3) estructura antigua a desmontar.

Es importante aclarar que es necesario realizar el desmontaje de la estructura metálica existente, para el realizar el montaje o izaje de la nueva estructura metálica, por lo que podemos evidenciar que las actividades no previstas previas necesarias para iniciar el montaje generaron una mayor permanencia en obra y por lo tanto un mayor plazo, tiempo acumulado que se perdió, razón por la cual hace parte de la justificación de la solicitud de la presente prorroga.

- **Prefabricados de terraza núcleo central:** Otra actividad necesaria no prevista, que aparece al no permitir la demolición de las ventanas, es el diseño de unos elementos estructurales que contuvieran los prefabricados superiores horizontales de la terraza del núcleo central. Esta es una actividad que debe desarrollarse y que afectara el rendimiento del montaje de la estructura ya que se encuentra dentro de los preliminares al izaje de esta zona del núcleo en concreto. La fabricación de dichos elementos de refuerzo, cercha invertida, desde el proceso de análisis de alternativa implementar, concertación, diseño, fabricación e instalación toma tres meses para una longitud de 150 metros dicha propuesta está en proceso de concertación por parte de la interventoría.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

suscrito expresó y dejó constancia de retrasos a los que iba a estar sometida la obra, hasta tanto no se contara con la claridad en su totalidad del diseño de cimentación. Finalmente la responsabilidad del diseño de cimentación fue asumida por el IDRD quien se comprometió a entregar en fase III los diseños, es decir con ingeniería de detalle y memorias de cantidades, compromiso que se cumplió el 21 de junio de 2019, por lo que se puede evidenciar claramente que pasaron más de seis meses contados desde la fecha de reinicio del Contrato hasta que se formalizo el diseño de cimentación por parte de la Entidad.

Esto afectó negativamente la programación quitando tiempo efectivo para la ejecución de obra, ya que la cimentación es la actividad preliminar más representativa para el izaje de estructura, pues ésta se convierte en parte de la ruta crítica del Contrato. Es necesario aclarar que paralelamente se avanzó en obra con aquellas actividades que fueron autorizadas para desarrollar como levantamiento topográfico de detalle, ítems presentes dentro de los capítulos de preliminares y demoliciones, desmonte de cubierta, desmonte de correas y otras actividades contractualmente pactadas que se podían ejecutar, como se evidencia en la facturación mensual.

4. Actividades adicionales de reforzamiento:

a. **Actividades de protección para la conservación Patrimonial previo a las Demoliciones :** Al momento de evaluar las actividades preliminares que deben ser ejecutadas para el izaje de la estructura metálica se pudieron evidenciar una serie de elementos prefabricados que hacen parte de la fachada hacia la terraza del núcleo en concreto. De acuerdo al diseño estructural de esta zona, donde se encuentran unas vigas que conectan ambos costados de las ligas, haciendo que la estructura metálica funcione como un elemento, es necesario realizar una serie de demoliciones que pueden afectar negativamente la integridad de estos prefabricados. El Contratista ha hecho entrega del diseño de reforzamiento de dichos elementos, acogiendo las observaciones realizadas por la Entidad. Nos encontramos a la espera de la autorización y liberación de dicho reforzamiento lo cual permitirá poder empezar a realizar las actividades directamente relacionadas que son preliminares al izaje de los elementos estructurales de esta zona.

b. **Reforzamiento de 4 columnas en el núcleo central:** Debido a las variaciones encontrada producida a partir de la inexactitud presente dentro de los estudios preliminares adelantados durante la consultoría anterior, al momento de empezar a realizar las demoliciones en aquellos sectores donde se debía proceder al izaje de la estructura, especialmente en la zona correspondiente a los baños que se encuentran en los accesos entre módulos 1-2 y 2-3 se lograron evidenciar una serie de vigas las cuales interferían con el trayecto de la estructura metálica propuesta. Debido a esto las vigas deben ser demolidas, y al ser un elemento estructural existente se corre el riesgo de debilitar considerablemente la estructura en concreto de este sector. Como contratistas planteamos el reforzamiento de dichas zonas, diseño el cual está siendo analizado por parte de la Interventoría y el IDRD para así poder realizar las actividades relacionadas, actualmente se están haciendo demoliciones adicionales para determinar el alcance de dicha intervención.

Estas actividades mencionada no podían ser previsibles y fueron encontradas en el proceso constructivo, las cuales han generado plazos adicionales de 2 meses.

5. **Afectación de los planos finales de taller de la estructura por las condiciones encontradas:** Es importante aclarar que no es posible desligar este componente de la cimentación, dado que cada uno de los cambios, nuevo diseño, localización y niveles, pedestales, afectó los planos de taller, por ende, la programación de fabricación, izaje y todas aquellas actividades que se encuentran concatenadas a la estructura metálica se

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

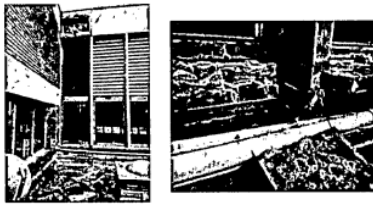


Ilustración 3: Condiciones actuales de los prefabricados núcleo terraza.

- 2. Demoras e Imposibilidad de acceder a las ligas por el tardío desalojo del sitio de obra:** Esto no permitió el inicio real luego de la entrega de la licencia de construcción (25 diciembre 2018) solo se pudo tener acceso a las ligas hasta el mes de febrero de 2019, esto debido a las reiteradas negativas expresadas por los representantes de las ligas, situación que se puede evidenciar mediante el oficio SB-IDRD-2999-TEC-119 donde la Interventoría, Consorcio SB, remite al IDRD el informe del desalojo de las ligas del edificio.

Finalmente al obtener el acceso total a las ligas, el 9 de abril de 2019 según bitácora de obra, el contratista junto con su comisión topográfica logran realizar la implantación total de los diseños desarrollados bajo los insumos entregados como resultado de la consultoría llevada a cabo durante el 2010 – 2011 por las firmas PCA y Ceyco. Como resultado de dicha implantación se evidenciaron inconsistencia en las dimensiones presentes en planos, especialmente aquellos relacionados con montaje y fabricación de la estructura metálica, lo cual generó que se tuvieran que realizar cambios en los planos de taller. Posterior a dicha modificación se dio liberación de los planos de taller mediante oficio SB-IDRD-2999-TEC-223 del 21 de mayo de 2019 afectando en un aculado negativo para esta actividad en cinco meses.

- 3. Hallazgos de condiciones diferentes a las inicialmente previstas por la Entidad en los terrenos de obra:**

Se encontraron condiciones diferentes a las iniciales previstas, situación contemplada por la entidad contratante en la matriz de riesgos. Teniendo en cuenta que los diseños iniciales contractuales no fueron susceptibles a ser implementados, esto de acuerdo a las condiciones expresadas anteriormente entre las que se encuentran su declaratoria como Bien de Interés Cultural, posterior a la entrada a obra y la realización de diversas exploraciones sobre la estructura existente, se pudieron evidenciar, entre otras cosas, la condición real de la cimentación. Esta se desarrolla a partir de una placa de contrapiso que está conformada por un reticular celular en concreto, unas zapatas corridas y otros como zapatas en forma de diamante, oficio UT-SA-2937:106 del 26 de febrero de 2019. Esta condición del tipo de cimentación no se logró evidenciar dentro de los planos entregados por el IDRD producto de la consultoría realizada por las firmas PCA y CEYCO por lo que se convirtió en una condición excepcional, y conllevó el desarrollo de varios diseños de alternativas de cimentación, oficio UT S-A 2931:119 y UT S-A 2937:122 del 19 y 20 de marzo de 2019.

Debido a esto se alteraron los plazos de ejecución efectivos en obra ya que fue necesario hacer demoliciones, estudios, diseños y presupuestos que permitieran seleccionar la mejor alternativa para implementar en obra. Este aspecto se encuentra plenamente descrito en los oficios UT-SA-2937:106 del 26-02-2019 y UT-SA-2937:170 del 30-04-2019, en los cuales el

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

han visto afectada como se alertó mediante oficio UT-SA-2937:102 del 14-03-2019.

6. Montaje de la Nueva Estructura Metálica de reforzamiento: Para el desmontaje de la estructura metálica existente, se deben retirar las cerchas principales que actualmente se apoyan en las columnas de concreto existente las cuales, como se explica anteriormente, tienen unas ménsulas de concreto que soportan las cerchas existentes y que coinciden con la posición de las nuevas columnas diseñadas, por lo que será necesario demoler estas ménsulas antes de izar las columnas metálicas. Este proceso de demolición, debido al peso de la cercha y la función estructural que cumple, debe ser delicado y cuidadoso por lo que genera un gran consumo de tiempo afectando gravemente el rendimiento y costo de las actividades a desarrollar previas al montaje de la estructura metálica.

Para tratar de mejorar estos tiempos, la UT propuso varias soluciones a la Interventoría sin que se obtuviera una respuesta técnica formal. Todo este tiempo sin definición afectó



directamente los avances en 3 meses, especialmente la preparación del área de montaje de la estructura metálica.

7. No intervención del Auditorio por temas de presupuesto: Frente a esta decisión tomada por parte de la Entidad contratante de no intervención de esta zona, la UT San Antonio solicita un tiempo adicional de una semana para la implementación del diseño de capitel de esta zona, veinte días para realizar los cambios o modificaciones de planos de taller, tres días para revisión, aprobación y liberación de planos de taller por parte de interventoría, tres semanas de fabricación en taller y una semana y media para pintura y montaje.

A continuación se describen los cambios que se generan y por lo tanto requieren mayor plazo en su ejecución lo cual hace parte de la justificación de solicitud de prórroga, siendo estas modificaciones considerables que afectan respecto al diseño del reforzamiento estructural. Como prevención, de acuerdo a las actividades que se describen a continuación, el izaje de este módulo, será el último en desarrollarse.

a. **Modificación de Tipo de Capitel:** El Auditorio se encuentra ubicado entre los ejes 2 – 3 y H – G, y comparte los capiteles del eje 3 con la liga de Esgrima. El tipo de capitel indicado en este eje es Tipo 1 y Tipo 2, ambos tipos intervienen el área interna del auditorio por lo cual estos deben ser modificados a un Tipo 3 o similar, es decir un tipo de cimentación que siendo contemplada para un lindero o borde no afecte el lado del auditorio. En el eje 2-H también se debe modificar capitel para no intervenir área de auditorio y sólo intervenir la zona correspondiente al costado de la liga de Baloncesto y Esgrima.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

	<p>b. <i>Empalme de Cubierta de Techo:</i> Se debe analizar y concertar en obra el empalme a emplear con respecto al cambio de la geometría de las cubiertas. Debido a la intervención que se realizará sobre la Liga de Esgrima, la cual implica el retiro y cambio de la cubierta por una más eficiente energéticamente en Standing Seam tipo sandwich, se puede evidenciar como dentro del catálogo ofertado de esta última no se cuenta con un perfil que se acople óptimamente a la cubierta existente. Es necesario evaluar cómo se realizará este empalme, puesto que en caso de no realizarlo correctamente se podrá incurrir en posibles filtraciones que repercutan directamente en los elementos internos del auditorio y de la Liga de Esgrima a la vez que se genere humedad dentro de estos espacios.</p> <p>c. <i>Reubicación de Columna 2H:</i> Esta columna se encuentra dentro del área del Auditorio y para su instalación es obligatorio intervenir Auditorio. Esta columna conecta con la estructura que viene de Baloncesto y es obligada su colocación, el no intervenir el Auditorio debemos reubicar esta Columna y rediseñar su cimentación. Se debe aclarar este tema, ya que esta modificación afectaría directamente los planos de taller de la estructura Metálica. Sin definir este tema no podríamos tener avance en la fabricación y posterior izaje de la estructura Metálica.</p> <p>d. <i>Arrostramientos estructural de techo:</i> Los arrostramientos y diagonales que hacen parte de la estructura de cubierta, y son necesarios para la transmisión de cargas del reforzamiento, van a sufrir modificaciones de acuerdo a la solución que se le brinde al reforzamiento del auditorio. De acuerdo a esto de igual forma se modificaran planos de taller de la estructura metálica y se deberán realizar los correspondientes chequeos al modelo estructural ya que podría cambiar el comportamiento del conjunto de la estructura.</p> <p>e. <i>Rediseño canal de aguas de lluvia:</i> En área de Auditorio se tendría que rediseñar el trazado de los canales de aguas de lluvia ya que deben llegar con el nuevo canal hasta la Liga de Lucha, manteniendo el canal existente en el área del Auditorio. Entre ambos canales se debe modificar la zona de empalme, ya que serían independientes y conllevarían por lo tanto trazados alternos paralelos.</p> <p>8. Items no previstos: En consideración a la modificación del proyecto, a las recomendaciones del IDPC, a la intervención en el proyecto y a las nuevas condiciones encontradas no previsibles se generaron item no previstos (NP), los cuales por su complejidad técnica requirieron estudios, análisis y fueron aprobados mediante el Acta de Actividades No Previstas no. 1 suscrita, generando mayores plazos. Estos Items han sido unos de los componentes que han generado alta incidencia dentro de los mayores plazos contractuales ya que:</p> <p>a. El 100% de los anclajes de cimentación son Item no previstos (NP), a la fecha se han ejecutado 540 anclajes de diferentes tipos para cimentación.</p> <p>b. El Item no previsto de la estructura metálica Acero Estructural Compleja cambia de 45.8 kg a 608.000 kg. Análisis de precio unitario que fue entregado a interventoría para su análisis según oficios relacionados y solo cuatro meses después se logró su aprobación, en necesario resaltar que paralelamente se desarrollaron actividades de planos de taller, topografía, compra de material.</p> <p>Se han elaborado los correspondientes NP's los cuales se han presentado a la interventoría como se puede evidenciar en los oficios adjuntos UT-SA-2937:108 del 27-02-2019, UT-SA-2937:132 del 27-03-2019, UT-SA-2937:143 del 04-04-2019, UT-SA-2937:157 del 16-04-2019, UT-SA-2937:171 del 30-04-2019, UT-SA-2937:188 del 14-05-2019, UT-SA-2937:208 del 07-06-2019, UT-SA-2937:209 del 11-06-2019, UT-SA-2937:236 del 05-07-2019, UT-SA-2937:241 del 10-07-2019, UT-SA-2937:267 del 22-07-2019, UT-SA-2937:292 del 31-07-2019, Item no previstos ha afectado implícitamente el desarrollo normal del contrato.</p>
--	---

	<p>Todos lo anteriormente expuesto, es lo que ha generado mayores tiempos y plazos perdidos donde no se lograron ejecutar actividades presentes la ejecución del contrato 2937 de 2017, por causas externas vale la pena ratificar siempre hemos estado prestos a dar cumplimiento a las solicitudes de la Interventoría y la Entidad contratante, presentando diseños, alternativas de solución, planes de contingencia y reprogramaciones de obra de acuerdo a todos los cambios a los que ha sido sujeto el contrato de obra, tal como se puede evidenciar en los oficios UT-SA-2937:206 del 01-06-2019, UT-SA-2937:277 del 25-07-2019, UT-SA-2937:312 del 12-08-2019, los cuales no se han resuelto de manera ágil o cédere como lo requiere este tipo obras de reforzamiento por parte de la anterior interventoría; esta falta de celeridad en tomar decisiones y dar soluciones con el personal profesional idóneo requiendo en obra en obra, a falta de decisión oportuna, esto se convirtió en otro factor afecto el plazo contractual en si, restando tiempo real de que disponíamos para lograr ejecutar la obra.</p> <p>Del mismo modo vale la pena resaltar la respuesta emitida por la Interventoría anterior mediante oficio SB-IDRD 2999-TEC-363 del 22-08-2019, en la cual esta viabiliza una prórroga contractual como vemos a continuación:</p> <p><u>"(…)esta interventoría, recomienda a la entidad realice la revisión de los pendientes de diseños que a la fecha se han venido manifestando formalmente y en los diferentes comités técnicos, los cuales son necesarios definir de carácter urgente, para así establecer un plazo cierto de ejecución de los faltantes del Edificio de ligas de la Unidad Deportiva El Salitre-UDS, toda vez que se requiere evaluar el PDT, presentado por el ejecutor y de igual forma recomendar a la entidad una prórroga clara para poder culminar con el objeto contractual(…)"; "(…sin embargo es necesario que la entidad haga las entregas definitivas de los diseños pendientes para estimar la fecha límite de entrega, de lo contrario se estima un PDT parcial con tendencia a incrementar.(…)"</u> "(…)Para colegir (sic), esta interventoría, recomienda a la entidad que realice la revisión de los pendientes de diseño que a la fecha se han venido manifestando formalmente y en los diferentes comités técnicos, por la interventoría, los cuales son necesarios definir de carácter urgente, para así establecer un plazo cierto de ejecución de los faltantes de edificio de Ligas de Unidad Deportiva El Salitre – UDS, toda vez que se requiere evaluar PDT presentado por el ejecutor y de igual forma recomendar a la entidad una prórroga clara para culminar el objeto contractual (…)" (subrayado fuera del texto)</p> <p>Ahora bien, al momento de entrar a evaluar las actividades requeridas pendientes por ejecutar, mediante las cuales se sustenta la presente solicitud de prórroga son:</p> <p>1. Concretos – fundición de cimentación accesos ligas: Al momento de recibir los diseños de cimentación definitivos se evidencio que existían algunas columnas, presentes dentro del diseño metálico, las cuales no contaban con elementos donde apoyarse, especialmente en los accesos a las ligas de Karate, Boxeo, Judo y Esgrima. A partir de esto se planteó un nuevo diseño para estas zonas como se puede evidenciar a continuación;</p>
--	--

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

PROYECTO: CAMPIO DE FERIA Y UNICOMA

En el momento de ser intervenidos de acuerdo a los diseños de cimentación entregados no se evidenciaba reforzamiento en estos puntos, por lo cual posterior a ajustes de diseño se entregó el mismo como se evidencia en la imagen anexa, la fundición de estos capiteles esta prevista a realizar en una semana.

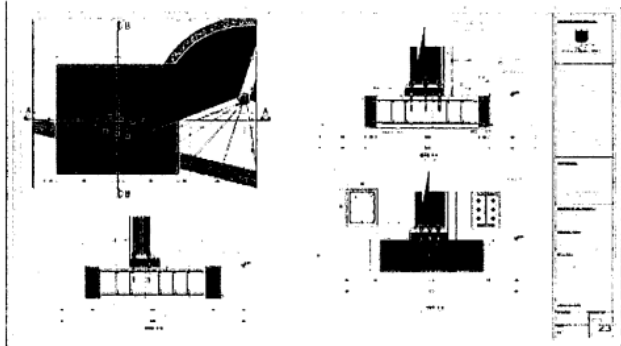


Ilustración 2: Cimentación acceso ligas.

2. **Concreto - Fundición de pedestales:** Posterior al proceso de anclajes de cimentación, es necesario proceder a la fundición de los mismos. El 100% de la obra tiene prevista la construcción de 90 pedestales de los cuales a la fecha faltan por fundir 67, esta actividad está prevista para ser realizada en dos semanas.
3. **Anclaje para 18 Ménsulas:** Esta actividad genero un ítem No Previsto (NP), la actividad fue liberada por la interventoría Consorcio SB de acuerdo al detalle adjunto y requiere de tres semanas para su ejecución.

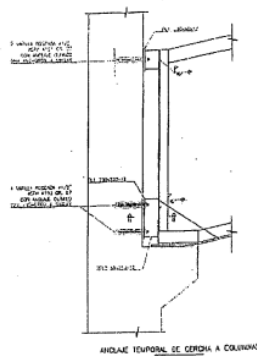


Ilustración 3: Diseño ménsulas cerchas existentes.

4. **Demolición de ménsulas:** Esta actividad género un ítem No Previsto (NP), dado que es una demolición quirúrgica de ménsulas con trabajo en alturas. Esta actividad esta previsto en una duración de tres semana de acuerdo a la programación propuesta.
5. **Reparación Ménsulas Epóxico:** Esta actividad genero un ítem No Previsto, esta es una recomendación por parte del Ingeniero encargado del reforzamiento de la cimentación y de la interventoría Consorcio SB, actividad que consiste en realizar un resane a la cara exterior de las ménsulas una vez ancladas, mediante el uso de los epóxicos Zika Top y Zika Armatek, de acuerdo a la programación es una actividad que requiere de tres semanas para su ejecución.
6. **Retiro estructura existente:** La actividad de desmontaje de cerchas y arrostramientos es necesario culminarla con el fin de liberar los espacios para el izaje de la estructura metálica. Es necesario realizarla posterior al desmontaje de cubierta, al anclaje y demolición de ménsulas, lo cual está previsto para ser realizado en ocho semanas. Esta actividad no se desarrollara de forma continua ya que ira paralela al izaje de la nueva estructura.
7. **Desmontaje mobiliario boxeo:** En la liga de boxeo, se encuentra un andamiaje que al momento de izar la estructura metálica se va a interponer, como se evidencia en la imagen anexa, por lo tanto, es necesario que proceda a realizar la actividad de desmontaje, lo cual está previsto para ser realizado en una semana.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

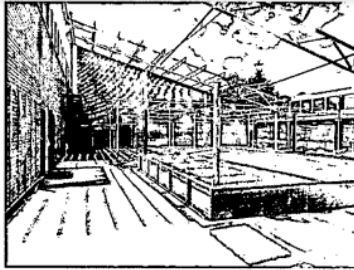


Ilustración 4: Mobiliario Liga de Boxeo

8. **Cimentación 4 columnas:** En el momento de realizar actividades de cimentación, se evidencio que en los puntos en los baños de las entradas de las ligas de Karate, Boxeo, Judo y Esgrima, las columnas de la estructura metálica presentaban interferencia con las vigas de concreto existentes, lo cual no estaba evidenciado en los diseños entregados por lo cual se procede a la entrega de dicho diseño como se evidencia en imagen adjunta, con el fin de ser aprobado por la interventoría y la entidad, para la realización de esta actividad se requiere de tres semanas.

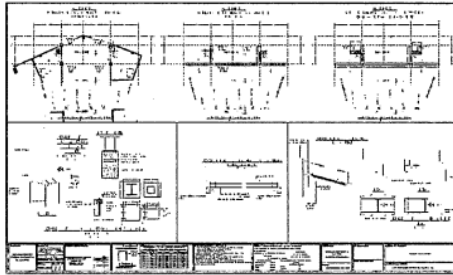


Ilustración 10: Diseño reforzamiento cuatro columnas

9. **Reforzamiento baños accesos (4 columnas):** Posterior a la aprobación del diseño anteriormente mencionado, en el momento en que se entregue el diseño de cimentación, se procederá a la ejecución del mismo, lo cual requiere cinco semanas para su ejecución.

10. **Fabricación, despacho, pintura y montaje de estructura:** Este es uno de los ítems que afecto en mayor porcentaje tanto el balance económico y genero mayor tiempo contractual puesto que inicialmente se habían contemplado 45 tn dentro del ítem "AceroEstructural (portico)Compleja+ pintEsmaAlquid" el cual se modificó, debido a los requerimientos de tipo patrimonial, adaptándose al nuevo diseño de reforzamiento, modificando la actividad por el "Suministro, Instalación - montaje Acero estructural ASTM A-572 ,grado 50 (Est compleja + pintAlquid)", aumentando considerablemente las cantidades, pasando a 608 tn. Variando en porcentaje esta actividad en el contrato del 4,76% al 72,43%

Debido a los evidentes cambios consecuencia de la afectación patrimonial y teniendo en cuenta que la estructura diseñada y aprobada por IDPC en conjunto con la curaduría, cuenta con elementos estructurales que no son comerciales y requieren un proceso de fabricación en taller, pre dimensionamiento, corte, armado, soldadura, transporte a obra y pintura; se realiza un proceso complejo de mayor demanda técnica y con diferentes rendimientos a los inicialmente proyectados, los cuales permiten establecer según experiencia de fabricado y ejecutado con un rendimiento aproximado de 150 ton mensuales de fabricación. Estableciendo un plazo de 3 meses para la fabricación del restante de estructura contemplada según diseño del exoesqueleto metálico.

11. **Ajuste de tornillería:** Posterior al izaje se realiza esta actividad, la cual tendrá una duración de ocho semanas con el fin de realizar los remates necesarios para la nivelación de la estructura.

12. **Grouting de nivelación:** Esta actividad es un ítem No Previsto, se realiza posterior al izaje de columnas dado que se generan vacíos entre la misma y la placa de contrapiso. Esta actividad se realizara posterior al izaje de cada módulo, requiriendo tres semanas a partir de la finalización del izaje de cada uno de ellos.

De acuerdo entonces, a las solicitudes realizadas anteriormente mediante oficios UT S-A 293 y con fundamento a los oficios ya mencionados (los cuales se anexan a la presente solicitud), el plazo de prórroga se fundamenta para terminar la ejecución de las obras, las cuales en su mayor porcentaje son No previstas y que fueron producto de condiciones externas e imprevisibles como es la afectación patrimonial y otras que han surgido de los hallazgos en obra, generando análisis, diseños y obras adicionales, incurriendo en mayores actividades y por consecuencia mayores plazos de ejecución. Del mismo modo al ser una construcción existente y antigua, se ha podido evidenciar que durante el desarrollo de la obra, esta ha sido sujeta a que surjan actividades nuevas las cuales deben tener un análisis adicional que se acondicionen a las restricciones o parámetros de tipo patrimonial. Agradecemos su buena y oportuna gestión, esperando una favorable respuesta.

FUENTE: Radicado No. 20198000390392 del 01/11/2019

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

De los documentos que formaron parte de la suscripción de la prórroga No. 2, resulta claro para la entidad y plenamente probado, que el hecho de la afectación a patrimonio y los demás temas de los estudios y diseños entregados por los contratista de los contratos de consultoría, obedecieron a imprevistos al momento de ejecutar la obra, y bajo los cuales la entidad actuó conforme le solicito el contratista y el interventor, es decir suscribiendo las modificaciones respectivas para avanzar en la materialización del proyecto.

Además, se evidencia claramente que el contratista no advirtió que el objeto del contrato no era construible o que no era posible de ejecutarse, por el contrario, realizó el análisis de las circunstancias presentadas en la ejecución del contrato y solicitó prórrogas, suspensiones y un posterior ajuste de costos, pero jamás indicó que no era construible la obra encomendada, demás indicar que con la aceptación y suscripción de las modificaciones contractuales realizadas en la ejecución del contrato y bajo tal consideración a la luz del principio de buena fe, el principio "*Pacta sunt servanda*", "*los contratos están para cumplirse*" y cuando las partes aceptan una modificación, porque es claro que existió un hecho sobreviviente, conocido por las partes y la Entidad y el contratista aceptan voluntariamente las condiciones sin presentar objeción que identificara que no puede cumplirse el objeto del contrato.

Ahora bien, ante la existencia de los hechos sobrevinientes, se estima que las modificaciones contractuales, consienten, validan y adoptan las medidas solicitadas para avanzar en la ejecución del contrato, sin que el contratista hubiese presentado objeciones manifestando que no era construible lo presentado. En este sentido, el contratista siguió ejecutando el contrato, poniendo a la Entidad a la expectativa y confianza legítima de que puede culminar su ejecución, así mismo, los conceptos emitidos por la interventoría tampoco indicaron a la entidad que no era construible el proyecto, por el contrario, lo que hicieron las partes en la ejecución del contrato, fue surtir un proceso de modificación contractual para llevar a feliz término actividad.

En este punto es de resaltar que tal y como lo han expresado los órganos contencioso – administrativo en diferentes oportunidades, el contratista al suscribir un contrato se convierte en un colaborador esencial de la administración pública y debe enmarcar todas sus actuaciones en el principio de transparencia y por ende debe guiar a la Administración hacia una efectiva ejecución de los compromisos contractuales que se le han encomendado, advirtiendo cualquier error o inconsistencia que pueda conllevar a una deficiente o incorrecta ejecución del objeto contractual. Tan es así, que incluso el deber de planeación contempla a los particulares como coagentes y responsables de la retroalimentación al Estado en la etapa precontractual, tal como se ha expuesto ampliamente para que estos apoyen en la definición y estandarización de los documentos y demás información relevante o esencial para la ejecución del futuro contrato.

En esta medida la Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 64033 de 2021 expresa: *"...Es con fundamento en su calidad de experto en el desarrollo de la tarea que se le asigna, que es considerado un verdadero colaborador de la Administración en el cumplimiento de sus fines estatales y no un simple ejecutor material. Lo dicho se traduce en que, una vez celebrado el contrato, el contratista se convierte en una pieza clave y aliado fundamental de la entidad para llevar a buen término el proyecto y, en razón de ello, se espera del particular una actitud proactiva, diligente y eficiente que contribuya al logro del cometido estatal y no que despliegue conductas que puedan poner en riesgo su satisfacción..."*

En este sentido, para el caso particular, no es admisible que el contratista hubiera aceptado e incluso propuesto la suscripción de modificaciones, prórrogas y suspensiones

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

al contrato, sin presentar objeciones y guardando silencio respecto de los aspectos que consideraba inviables para el ejercicio y desarrollo del objeto contractual que tenía a cargo, ocasionando con ello hacer incurrir en error a la Administración Distrital, al continuar ahondando en la búsqueda de alternativas para lograr la ejecución de las actividades contractuales a cargo del contratista y lograr con ello el cumplimiento de los fines del Estado.

En este contexto, resulta vinculante tanto para el contratista como para la entidad las condiciones de las modificaciones que se hubiesen surtido, para lo cual la Entidad en cumplimiento del principio de la buena fe, estuvo presta al objeto del contrato tanto que surtió los procesos de modificación del contrato, de acuerdo con la solicitud que realizó el contratista y avaló el interventor.

Las anteriores consideraciones sin perjuicio de que de acuerdo con el acervo probatorio recaudado, se evidencia que mediante oficios y actas de reunion al parecer se estaban generando orientaciones al contratista, que pedían al contratista la no intervención del modulo C de la UDS y el reconocimiento de nuevos APUS, hecho que de acuerdo con la normatividad vigente debía estar precedido de modificación contractual, que definiera los alcances respectivos, razón por la cual, en todo caso, se ratifica, se remitirá copia de esta actuación a la oficina de control interno disciplinario del IDRD por lo de su competencia, sin desconocer tampoco que el contratista como experto en su área y con experiencia en contratación estatal, dejara de cumplir con las obligaciones y alcances contractualmente definidos que son el elemento vinculante para las partes en la debida ejecución del contrato.

Por otro lado, es necesario indicar que conforme lo contemplado dentro de la matriz de riesgos se contempló lo siguiente frente al 22, el cual es claro con lo anteriormente relacionado frente a la suscripción de las modificaciones contractuales que el IDRD aplicó lo relacionado con el tratamiento de presentarse el riesgo:

RIESGO 22: “Problemas presentados por inestabilidad en el terreno”;
Tratamiento del riesgo: “realizar estudios previos. Determinar el impacto del cambio y realizar ajuste al contrato ...”;
Porcentaje asumir de acuerdo con el monto del evento presentado: con un porcentaje de riesgo de 70% contratista y IDRD 30%, como se muestra en la imagen:

N°	Descripción	Etapas	General	especifica	Identificación y Valoración del Riesgo		Tratamiento del riesgo						Porcentaje de riesgo a asumir por parte del IDRD	Porcentaje de riesgo a asumir por parte del contratista																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Interna	Externa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	Problemas presentados por inestabilidad en el terreno	Contractual	No	Si		De la Naturaleza	Atrasos en el desarrollo del contrato	Pasible	3	Mediana	3	Riesgo medio	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Como bien se indicó en la Resolución No. 1452 de 2022, la subdirección no desconoce el contenido de las justificaciones de las prórrogas que dieron cabida a los aspectos sobrevinientes y que no fueron evidenciados en la publicación del proceso de selección en el año 2017, que, de acuerdo con el acervo probatorio son la afectación de bien de interés cultural de la UDS y de la adecuación de la norma de sismo resistencia NSR10-2010, pese a lo cual con la suscripción de las modificaciones el contratista aceptó dar continuidad al proyecto, si su intensión hubiese sido otra, ante los cambios evidenciados, se encontraba en el deber legal y de hecho contractual de abstenerse de suscribir las modificaciones y de advertir a la entidad de continuar con el proyecto en las condiciones inicialmente previstas, ello en aplicación del principio de buena fe objetiva y cuando las partes aceptaron una modificación de un hecho sobreviviente, el contratista consintió las

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

nuevas modificaciones ante las condiciones sobrevivientes y no presentó objeción para señalar que no puede cumplirse el objeto del contrato.

A modo de conclusión, del análisis de los argumentos indicados por el apoderado del contratista en la sustentación del recurso, queda claro y demostrado que 1. El contratista debió en la etapa precontractual realizar los comentarios u observaciones pertinentes respecto al documento técnico en lo relacionado a su obligación de realizar la etapa de trámite de la licencia y las actividades que debían realizarse, 2. En la ejecución del contrato se presentaron imprevistos bajo los cuales el contratista solicitó la realización de suspensiones y prórrogas, pero nunca manifestó la imposibilidad de ejecutar el contrato, y 3. El contratista solicitó el desembolso del anticipo pese a hoy indicar en el trámite del proceso sancionatorio que la obra era inviable por los estudios y diseños que le entregó el IDRD desde el año 2017.

Adicionalmente, indicó el apoderado del garante como complemento al documento de sustentación del recurso en audiencia que:

“encontramos sistemáticas violaciones del principio de la buena fe en cabeza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

La primera circunstancia fue haber iniciado una actividad precontractual, esto es una licitación sin el lleno de los requisitos técnicos exigidos para adelantar ese proceso, con el convencimiento de no sólo el oferente que derivó en ser contratante, sino de muchos oferentes y para ese momento habían transcurrido alrededor de más de 12 años entre la afectación de él bien, como bien de interés público y la fecha en la cual se había elaborado la consultoría que derivó en la contratación.

Y a su turno, se saben que existe una subdirección específica representada, entre otras cosas, por la arquitecta Charlotte Gaviria en su momento o por el arquitecto Mauricio Reina Manosalva, profesionales acompañados de un ejército, también de ingenieros, abogados, especialistas y arquitectos a los cuales le era oponible estas circunstancias, no solamente, la afectación del contenido patrimonial o del interés público y patrimonial sobre el bien, bien de interés público patrimonial, sino también achacable, los graves yerros metodológicos en los cuales se incurrió la consultoría que derivó en el presente contrato.”

Bajo el análisis de este argumento, como se indicó anteriormente con relación a la etapa precontractual que se llevó a cabo a través de la licitación pública 017-2017, del acervo probatorio recaudado en el proceso administrativo, se validó que el IDRD obtuvo los estudios y diseños base para iniciar la etapa de construcción del proyecto a través de la firma Construcción SAS – CAYCO INGENIERIA SAS, los cuales fueron incluidos como obligaciones en el documento de la licitación pública, para ser ajustados por el contratista seleccionado, documentos que los proponentes, como bien lo indica el apoderado de la compañía garante, fueron de público conocimiento y bajo los cuales se tuvo la oportunidad para realizar los comentarios y observaciones a dichas obligaciones hoy materia de discusión y de interpretación subjetiva, comentarios y observaciones que como se indicó, no se realizaron por parte del contratista.

Bajo esa misma premisa, la interpretación de lesión del principio de buena fe y planeación por parte del IDRD bajo la óptica del apoderado de la compañía garante, es de por sí apartada de los conceptos que rigen a estos dos principios, como quiera que la entidad no está “achacando” o declarando el incumplimiento al contratista por las condiciones negativas ocasionadas por los imprevistos que se presentaron en la ejecución del contrato, por el contrario, como quedó demostrado en el análisis de los argumentos que dieron origen a las suspensiones y prórrogas, la entidad garantizó al contratista las

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

modificaciones contractuales que afectaron el tiempo de ejecución de las etapas de licencias y de obra, pero lo que sí es atribuible al contratista, es que pese a haberse buscado todas las soluciones posibles, al suscribir las modificaciones contractuales puso en expectativa a la entidad de cumplir y entregar la obra, situación que es la llamada a reprocharle al contratista, la no entrega de la obra y la indebida utilización del anticipo entregado,.

Entonces, la pregunta que surge es porque la Entidad en palabras del apoderado tuvo que intervenir con el “Ejercito” o “legión” de arquitectos e ingenieros para seguir adelante con la ejecución del contrato, bajo lo cual debe analizarse el acervo probatorio recaudado para entender que ante los diseños requeridos para la cimentación del proyecto, el supervisor del contrato de su momento le solicitó al contratista presentar una propuesta que estuviera acorde con la cimentación que necesitaba el contrato, bajo la cual el contratista presento algunas opciones, las cuales todas no se encontraban acorde al presupuesto de la entidad, pero no fue por voluntad propia que tuvo que validar una propuesta de cimentación acorde con los precios del mercado, sino fue producto de un costos presentado por el contratista.

Efectivamente, posterior a la aprobación de la licencia de construcción por parte de la curaduría No. 5, el contratista UT ASEMAIN, radicó un modelo de cimentación el cual no incluía los parámetros necesarios al nuevo modelo estructural adoptado en su ajuste de diseños. También se encuentra que el IDRD con posterioridad a las alternativas altamente onerosas, y calificadas por la entidad como inviables en los espacios existentes, para la estructura, fueron opciones entregadas por la UT ASEMAIN y el Consorcio SB, desbordando el alcance del proyecto de reforzamiento. Sin embargo, se encontró que las partes acudieron a una alternativa acordada con los especialistas de obra e interventoría, cumpliendo con la totalidad de normativa NSR-10.

Ante el aval de la nueva cimentación, se inicia la ejecución en obra y se procede por parte del IDRD a desembolsar la totalidad de los costos de la cimentación, la cual contaba con la viabilidad de la interventoría esto es, el Consorcio SB, por lo que no es llamado a prosperar el argumento de reproche del apoderado, como quiera que no existe falta de reconocimiento al contratista frente al construcción de la cimentación avalada.

En este sentido la entidad al no obtener una solución efectiva y viable jurídica económica y técnica de la cimentación, y bajo la cual era obligación del contratista, adoptó medidas para la entregar de la tipología que se acomodaba al nuevo modelo estructural, salvaguardando la continuidad del desarrollo y culminación del proyecto contratado, alternativa que fue de conocimiento y aceptación por parte del contratista y avalado por la interventoría.

Bajo lo indicado, se puede concluir que la decisión tomada por la entidad no fue arbitraria, sino que, a partir de los soportes y actas de reunión, la alternativa se planteó por parte del área técnica del IDRD para dar solución al imprevisto presentado, y entonces llama la intención porque si se creía que el IDRD está obrando en contra de la normatividad técnica, el contratista no objetó la no realización de la obra bajo el estudio entregado por el IDRD.

Relaciona además el apoderado del contratista y del garante el testimonio del señor Eduardo Fernández Director de Interventoría, para soportar que los diseños no eran viables y que los entregados por el IDRD para la cimentación también no eran viables técnicamente, frente a lo cual debe resaltarse que el señor Fernández avaló los planos entregados a la curaduría con este tipo de cimentación, y después cuando no continuo en

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

el proyecto le solicitó al curador su exclusión como avalador de dichos planos, frente a lo cual la curaduría la respuesta referida y que es importante traerla de presente, así:

APROBACIÓN O ACEPTACIÓN **PARA ESTUDIO**

Estimado Señor, yo **Eduardo Fernández Rincón**, identificado con C.C. 2.877.346 y matrícula profesional 000007367 CND, actualmente soy el Revisor Externo del diseño del Reforzamiento Estructural de Edificio de Ligas de la Unidad Deportiva El Salitre, este diseño cubre cálculos vulnerabilidad sísmica, reforzamiento a partir de un exoesqueleto en estructura metálica, reforzamiento de algunos sectores en concreto y las adecuaciones arquitectónicas necesarias del bien localizado sobre la avenida 68 con calle 63 en la ciudad de Bogotá. Durante la fase de diseño intervine como Revisor Externo, de acuerdo al Decreto 945 de 2017, y Director de Interventoría del Consorcio SB, del Contrato mediante el cual el IDRD se encuentra adelantando las respectivas obras. Debido a esto hice parte, ante esta Curaduría, del proceso de aprobación de los diseños del reforzamiento antes en mención:

De acuerdo a lo enunciado anteriormente la razón por la cual amablemente me dirijo ante usted es para solicitarle relevarme de la responsabilidad como Revisor Externo de la Licencia de Construcción 18-5-1281 emitida el 24 de diciembre de 2018 correspondiente a los Cálculos del nuevo diseños estructural de Vulnerabilidad Sísmica y Reforzamiento Estructural de la Unidad Deportiva El Salitre realizados por la Unión Temporal San Antonio. Inicialmente la Unión Temporal San Antonio había empleado los diseños realizados por

Ing. Eduardo Fernández – Teléfono: 317 764 6551 / 736 4470 – Dirección: Av. Cr 15 no. 127^a – 32 apto 404

Ingeniero Civil
Eduardo Fernández Rincón

PCA y Cayco para la radicación ante la Curaduría pero posteriormente estos fueron rechazados de acuerdo a los requerimientos de patrimonio por lo cual el contratista realizó un nuevo diseño que es el que se encuentra actualmente vigente.

Esta solicitud radica en los siguientes motivos o razones:

1. Los diseños de la cimentación, elaborados directamente y bajo la responsabilidad de IDRD, pueden presentar riesgos estructurales graves debido a que no están cumpliendo con la NSR-10. De la misma forma estos no han sido aprobados de mi parte de ahí que no haya firmado ningún plano de cimentación, ni he autorizado firmas en mi nombre, ni como director de interventoría, ni como revisor externo, por lo que en mi concepto los diseños de cimentación pueden afectar gravemente la nueva estructura metálica diseñada que actualmente está en construcción.

Así mismo, el documento de respuesta del curador frente a la solicitud realizada:


CURADURÍA URBANA 5
Bogotá D.C. mayo de 2020

ING. MARIANO PINILLA POVEDA
CURADOR URBANO

DJ-DP-201-20

OF No: **SIN-20500204** Fecha: 26/05/2020
Solicitud Información Exped/Con

Señor:
EDUARDO FERNANDEZ RINCON
AK 15 127 A 32 AP 404
Ciudad.

Ref.: Oficio No.241. / LC 18-5-1281.

Cordial saludo:

En respuesta al escrito de la referencia, nos permitimos informarle lo siguiente:

De conformidad con la Ley 1796 La labor del revisor externo se suscribe al momento de formulación de la solicitud de licencia y dentro del estudio y trámite de la misma, y la misma consiste en verificar que la solicitud presentada cumple con los requisitos de la NSR.10. Al respecto dispone el artículo 3 de la Ley 1796 de 2016

"Artículo 3º. Modifíquese el párrafo del artículo 15 de la Ley 400 de 1997, el cual quedará así:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Parágrafo. La revisión de los diseños estructurales de las edificaciones cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso, será realizada a costo de quien solicita la licencia, con un profesional particular, calificado para tal fin, de conformidad con los requisitos establecidos en el Capítulo III Título VI de esta ley, diferente del diseñador e independiente laboralmente de él, el cual luego de corregidos los ajustes solicitados mediante el acta de observaciones emitida por el curador urbano o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la expedición de licencias de construcción, por medio de un memorial dirigido a esta certificará el alcance de la revisión efectuada, el cumplimiento de las normas de la presente ley y sus decretos reglamentarios y firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión. ..."

CURADURÍA URBANA 5
BOGOTÁ D.C.

Por lo tanto, la labor del revisor externo finaliza con la aprobación de la solicitud de licencia aprobada, y no se extiende a la fase de ejecución de la obra aprobada, pues la responsabilidad se traslada tanto al constructor responsable, como al eventual supervisor técnico de la construcción conforme a los artículos 4 y 5 de la Ley 1796 de 2016, que disponen:

"Artículo 4º. El artículo 18 de la Ley 400 de 1997, quedará así:

Artículo 18. Obligatoriedad. Las edificaciones cuyo predio o predios permitan superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso, deberá someterse a una supervisión técnica independiente del constructor, de acuerdo con lo establecido en este título y en los decretos reglamentarios correspondientes.

Las edificaciones cuyo predio o predios no permitan superar más de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso, deberá ejecutarse conforme lo aprobado en la licencia de construcción recayendo la responsabilidad sobre el constructor, diseñador estructural, y quienes hayan ostentado la titularidad del predio y de la licencia de construcción. En los casos en que en virtud de la existencia de un patrimonio autónomo sea el fiduciario quien ostente la titularidad del predio y/o de la licencia de construcción, se deberá prever en el correspondiente contrato fiduciario quien es el responsable de esta obligación.


En todo caso el diseñador estructural o ingeniero geotecnista podrá exigir supervisión técnica a las edificaciones cuya complejidad, procedimientos constructivos especiales o materiales empleados la hagan necesaria, consignando este requisito mediante memorial que se anexará al proyecto estructural y/o al estudio geotécnico correspondiente.

Cuando la edificación que se pretende desarrollar tenga menos de dos mil (2.000) metros cuadrados de área construida, pero cuente con la posibilidad de tramitar ampliaciones que permitan alcanzar los dos mil (2.000) metros cuadrados exigidos, en la evaluación inicial del diseño estructural se analizará si el mismo soporta la futura ampliación en cuyo caso la edificación pese a tener menos de dos mil (2.000) metros cuadrados, deberá contar con la supervisión técnica.

17. SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Es del caso señalar que el artículo 101 de la Ley 388 de 1997 dispone que el Curador Urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias urbanísticas a petición del interesado en adelantar proyectos de parcelación, urbanización, edificación, demolición o de loteo o subdivisión de predios, y que implica el ejercicio de una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, **a través del otorgamiento de licencias**, siendo este el marco dentro del cual ejerce sus competencias, y que como se afirmó, no puede extenderse a aspectos policivos, para lo cual ustedes existen los mecanismos previstos en el Código Nacional de Policía (querrela policiva), para prevenir y denunciar eventuales contravenciones que se presenten por estos aspectos.

Cordialmente,


Mariano Pineda Poveda
Curador Urbano No 5 de Bogotá D.C.
Elaboró JAGS



Resalta el Despacho de la respuesta dada por la Curaduría al señor Fernández, que la misma obedece a la lógica que si el señor Fernández fue el que firmó los planos y presentó su aval frente a los planos y documentos remitidos por el contratista para la licencia no puede ahora solicitar el retiro de su firma de documentos que ya tenían licencia aprobada.

vienen este mismo sentido, conforme lo indica el apoderado de la compañía garante en sus alegatos finales, debe traerse a colación tanto el testimonio como documentos soportados en su integridad por el director de la interventoría, Señor Eduardo Fernández,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

bajo el entendido que la obligación del contratista era la de ajustar los diseños para el correspondiente trámite de la licencia, donde indicó lo siguiente:

PREGUNTA APODERADO GARANTE: ¿quisiera tocar un tema del que usted hace referencia al inicio de su intervención, usted hablaba de la afectación patrimonial que tiene la edificación, usted recuerda que disidencias tuvo esa afectación sobre esos diseños iniciales?,

RESPUESTA: lo que pasa es que el diseño que trato de hacer PSA era un diseño que no existía la parte patrimonial incluso usted podía cortar las columnas por los ladrillos en la parte de las columnas córtalas y por ejemplo hacer un anillado en las columnas, eso ya no lo permitía hacer la está de patrimonio, los elementos estructurales pues era cortar y meter una viñetas para que soltaran las parte de arriba los muros, para que las varillas que se meten en esas partes de concreto el muro no afecte las columnas, el nuevo código hace eso en los elementos estructurales y eso lo plantearon ellos porque en el plano que dieron ellos estaban elementos no estructurales, ahorita ya no se podía hacer eso, por eso se cogieron nuevos diseños eran una serie de columnas y vigas horizontales para que los muros quedaran metidos dentro de esas columnas, lo otro es que para la aprobación de eso, tuvieron que presentar unos proyectos arquitectónicos y unificando parte de eso para que nos exigían ellos también entonces pues el proyecto arquitectónico y estructural fueron nuevos, pero eso nos obligó hacerlo las de patrimonio”.

PREGUNTA DE LA APODERADA DEL CONTRATISTA: ¿la primera pregunta, usted como director de interventoría tuvo acceso a los diseños preliminares entregados por el IDRD y el contratista?,

RESPUESTA: sí, señorita,

PREGUNTA DE LA APODERADA DEL CONTARTSITA: ¿que nos puede decir de esa información que le entregaron?,

RESPUESTA: mire es que esos diseños estaban incompletos habían como de tres domos que presentaron en una parte habían dos faltaba uno y de seis domos faltaban cinco, muchos de esos domos correspondían a la etapa que iba en coliseo y parte de los diseños le tomaron muestras la patología de esos edificios”

PREGUNTAS POR PARTE DEL IDRD

PREGUNTA: ¿intervino usted en el trámite de la licencia de construcción que gestión la unión temporal, el contratista?,

RESPUESTA: yo estuve allá, ellos tienen planos que aprobé como revisor externo fue el que aprobé eso a la curaduría.

PREGUNTA: ¿firmo usted algún documento para el trámite de la licencia?,

RESPUESTA: si yo firme,

PREGUNTA: ¿que documentos?,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

RESPUESTA: la licencia, y se presentó una carta a la curaduría pidiendo que me aceptaran como revisor externo y esa la aprobó curaduría también,

PREGUNTA: ¿firmo usted algún plano para la obtención de la licencia?,

RESPUESTA: firme todos los planos,

PREGUNTA: ¿recuerda usted algún plan?,

RESPUESTA: planos pues del proyecto nuevo, en esa licencia de construcción se presentó el proyecto sin impresión, y se hizo un acuerdo con la curaduría y el IDRD una vez se iniciaran los estudios de suelos, se presentaban el diseño sin impresión a la curaduría, ese fue el acuerdo que se hizo con la curaduría y el IDRD,

PREGUNTA: ¿recuerda usted en qué fecha aproximada firmo los planos para el trámite de la licencia?, eso era noviembre del 2018,

PREGUNTA: ¿usted aquí ha indicado que dirigió una carta a la curaduría, que es la que nos va allegar indicando que lo exornaran de ese tema, usted recuerda cual es la fecha de esa carta que radico en la curaduría?,

RESPUESTA: yo le mande carta copia de esta radicación a la directora del IDRD y a la subdirectora de construcciones, fue como el 28 de febrero del 2020 y a ustedes se la radique como el 3 de marzo del 2020, se la radique también al contratista y le mande una copia al consorcio simón bolívar,

PREGUNTA: ¿ósea esta actuación se hizo con posterioridad a que el consorcio SB dejo de ser el interventor?,

RESPUESTA: sí señor,

De los documentos aportados en la práctica del testimonio, se encuentra claramente que el director de interventoría aprobó, avaló y firmó los planos bajo los cuales se expidieron las licencias correspondientes, y que ante la no continuidad del consorcio interventor SB por la inhabilidad sobreviviente que le aconteció en la ejecución del contrato, y por lo tanto la no continuidad del testigo en la ejecución del contrato, fue cuando manifestó que no estaba de acuerdo con lo que había firmado, tal y como se indica en los documentos remitidos a la curaduría y la respuesta de la curaduría.

Ahora bien, tal como se expuso en el acto administrativo objeto de recurso que existe un hecho que no puede ser objeto de declaratoria de incumplimiento en el presente acto administrativo por razón de tipicidad de la conducta y principio de legalidad, pero que no puede ser desconocido y si impacta y prueba la falta de planeación del contratista en ejecución de sus obligaciones y es el hecho subyacente en la actuación administrativa, relacionado con la ejecución de actividades de obra de una cimentación diferente a la autorizada en la licencia de construcción. Al respecto a partir de los testimonios practicados, se indica que el contratista parcialmente adelantó actividades de cimentación diferentes a la autorizada en la licencia de construcción, (metodología de pilotes y zapatas) hecho que tiene prohibición legal porque un contratista profesional y experto en su materia no puede realizar actividades diferentes a las aprobadas en la licencia de construcción ni construir en condiciones diferentes, hasta tanto se obtenga la correspondiente modificación de la licencia, hecho que amerita en todo caso remitir copia de la presente actuación al COPNIA para que en el marco de sus competencias adelante

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

las investigaciones disciplinarias a que haya lugar en contra de las personas que intervinieron en tales acciones.

En este orden de ideas, debemos tomar el testimonio rendido por el testigo en conjunto, entendiendo que él firmó los planos y demás documentos para la obtención de la licencia y no puede indicarse solamente que él conocía de los procesos anteriores por otras personas, es claro que uno de los temas que se presentaron en la ejecución del contrato fue la afectación a patrimonio y los ajustes que se tuvieron que hacer a los estudios y diseños entregados por contratistas anteriores, pero es claro que las obligaciones del contratistas eran ajustarlos y así lo hizo.

De acuerdo con lo descrito, el argumento esbozado por el apoderado del garante no está llamado a prosperar como quiera que si los estudios y diseños entregados fueron considerados como “nefastos”, el contratista debió apartarse de ejecutarlos más aun sabiendo que técnicamente eran imposibles de construir, toda vez que dentro de su equipo de trabajo tenía un experto en cimentación, situación que no ocurrió, por el contrario como se ha indicado a lo largo del presente documento, fue el mismo contratista solicitó las modificaciones y puso en expectativa de cumplimiento a la entidad, para llegar a la conclusión final que no era viable la construcción de la obra con los estudios y diseños entregados por la entidad y que valga la pena aclarar diferentes a los aprobados por la curaduría y bajo los cuales se aprobó una licencia de construcción, para justificar su falta de cuidado e idoneidad en la ejecución del contrato y claramente el uso indebido de los recursos públicos entregados a título de anticipo, de los cuales a la fecha gran parte y de acuerdo con la prueba documental se desconoce su debida inversión.

Del mismo modo, del alegato de los apoderados de las partes por la falta de planeación, señalan la ausencia en la entrega de documentos en la etapa precontractual por parte de la entidad, frente a lo cual conforme se encuentra en el acervo probatorio los estudios y diseños fueron entregados al contratista para dar inicio a su evaluación y ajuste correspondiente en el marco de las obligaciones pactadas, bajo lo cual, debe precisarse que los documentos señalados por los apoderados no entregados al contratista o no dispuestos en la etapa precontractual, fueron constituidos como obligaciones a ser realizadas por el contratista seleccionado, como lo fue el ajustar los estudios y diseños y tramitar las licencias correspondientes.

Acorde con lo señalado por el apoderado del garante la “*exceptio non adimpleti contractus*” aplica incluso para este contrato, pero no bajo el entendido que el IDRD no tuvo una conducta ajustada a la honestidad, rectitud de qué habla la sentencia C -207 de 2019, sino por el contrario, como lo demuestran los documentos probatorios que hacen parte del proceso, el contratista no cumplió en debida forma con las obligaciones pactadas en el contrato, no realizó una planeación de las actividades a ejecutar, jamás puso en conocimiento a la entidad sobre la imposibilidad de desarrollar la obra, quedo demostrado que actuó sin el deber de cuidado que por su idoneidad y conocedor o experto en el tema debía ejecutar el contrato, de manera que el IDRD tuvo que adoptar medidas frente al desasosiego en el que la obra fue intervenida por el contratista.

Entonces acá no estamos frente a una análisis jurídico real que sustente una exclusión de culpa para el contratista por la no ejecución de las obras encomendadas, acá nos encontramos ante un análisis subjetivo frente al cual se pretende utilizar la jurisprudencia en una sola vía y hacer ver a la Entidad como la culpable frente a un análisis poco ajustado a la realidad de la vulneración de principio de planeación y trasladar la no entrega de las obras contratadas y la indebida utilización del anticipo entregado al contratista, bajo el argumento simple de que los estudios y diseños no podían ejecutarse, para cubrir la realidad de lo acontecido en la ejecución del contrato, y es precisamente el

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

uso indebido de un anticipo, dineros públicos aportados por los habitantes del distrito capital, entregado a un contratista en donde quedó demostrado que no fueron invertidos en la obra de interés distrital y bajo la cual hoy 5 años después tienen en limbo a los deportistas que se beneficiaban de este sitio emblemático del Distrito Capital.

Adicionalmente, cuando el contratista tenía la obligación de revisar los documentos entregados por la ENTIDAD y presentar un informe dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio, en dicho informe debió indicarse todas las manifestaciones bajo las cuales hoy se pretenden proponer como eximentes de responsabilidad del contratista, ello con el fin que la entidad hubiera podido resolver esas inquietudes desde el inicio del contrato.

6.4 Etapas del proyecto.

6.4.1 Etapa de Coordinación.

Debe entenderse como etapa de coordinación los quince (15) primeros días de ejecución del contrato, los cuales contarán a partir de la suscripción del acta de inicio.

Dentro de los TRES (3) días siguientes la firma del Acta de Iniciación del contrato, el contratista deberá entregar para aprobación de la Interventoría los documentos exigidos para la acreditación del **PERSONAL MINIMO**, así como los **PLANES, PROGRAMAS e INSUMOS**, que se relacionan a continuación, los cuales deben cumplir con los requisitos descritos en cada uno de los capítulos:

1. Programa de Gestión Social	7. Plan de Calidad.
2. Programa de Salud Ocupacional	8. Programación de Obra Gantt y Valor Ganado (archivo digital en el software de cálculo).
3. Programa de Manejo Ambiental.	9. Flujo de Inversión.
4. Programa Gestión Integral RCD	10. Análisis de Precios Unitarios.
5. Programa de Inversión del Anticipo.	
6. Plan de Manejo de Tráfico.	

La documentación de Personal Mínimo, Planes, Programas e Insumos se entregará para revisión y aprobación por parte de la Interventoría dentro de los TRES (3) días siguientes a la firma del acta de inicio; en los cinco (5) días siguientes serán revisados, y se deberán realizar los ajustes correspondientes con anterioridad a la terminación de esta etapa.

Adicionalmente, en este periodo el contratista está obligado a revisar la documentación suministrada por el IDRD, y realizar un informe dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del acta de inicio. En los cinco (5) días siguientes a la radicación del precitado informe, el IDRD y el Interventor o quien éste designe revisará dicho informe y resolverá las inquietudes planteadas en el mismo.

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174445>

En este sentido, no son de recibo las manifestaciones y conclusiones a las que llega el apoderado de la compañía garante, como quiera que lo cierto y demostrado dentro de la actuación administrativa sancionatoria, es el incumplimiento sistemático por el contratista, ya que antes de iniciar con el trámite y obtención de la licencia y de todos los tramites a realizarse, solicitó de mala fe el desembolso del anticipo a través de empresas bajo las cuales no se soportaron a la fecha la correcta inversión de los dineros entregados a título de anticipo, para luego en el trámite de un proceso sancionatorio argumentar que es culpa de la administración como quiera que no entregó unos estudios y diseños validos a su juicio, cuando era deber y responsabilidad del contratista advertir tal circunstancia y apartarse de presentar una propuesta o de solicitar la terminación del contrato por inviabilidad de ejecutar la obra, situación que no puede ser desconocida y equivocadamente indilgada a la entidad.

Finalmente, acorde a las jurisprudencias citadas por el apoderado del garante, en donde indica que:

“ Y es que es tal el grado de responsabilidad de las Entidades Estatales de cumplir a cabalidad con el principio de planeación, que el Consejo de Estado- Sección Segunda en Sentencia del 18 de agosto de 2011, dentro del radicado 25000- 23-25-000-2007-00753-01(0532-08) con ponencia del C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, dispuso: “A efectos de determinar qué debe contener un estudio previo, resulta necesaria la referencia a lo que consideró la Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia de 29 de agosto de 2007. En esa providencia, se reiteró que, en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación, pues resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un proceso de selección...”

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

(...) La violación del deber legal de efectuar los estudios previos, vulnera los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad, selección objetiva, eficiencia, entre otros y, además, incide tanto en la etapa de formación del contrato, como en la etapa de ejecución. En la primera porque puede afectar el proceso de evaluación de las propuestas, por cuanto impide la comparación objetiva de las mismas; y, en la segunda, porque en el momento de la ejecución del contrato las omisiones de la Administración por falta de estudios y diseños definitivos generan serias consecuencias, en desmedro del interés general, los fines de la contratación y el patrimonio público; pues en los más de los casos conducen a modificar los precios, las cantidades y las condiciones técnicas inicialmente pactadas, generan el incremento de los costos del proyecto y, en el más grave de los casos, conducen a la paralización del contrato o a la imposibilidad de cumplir su objeto, situaciones que generalmente culminan en cuantiosos pleitos judiciales.” (Negrilla fuera de texto)

Es clara la interpretación que se realiza, en el sentido que es *responsabilidad intransmisible de la Entidad contratante, elaborar y contar para la apertura del proceso de contratación, y la suscripción misma de los contratos, con los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica, que se ajustaran a la necesidad y realidad de la obra y los bienes a intervenir*, y en efecto, la Entidad garantizó lo señalado, como quiera que la entidad realizó la contratación de los estudios y diseños para ejecutar las obras de reforzamiento de la UDS, detallando en los pliegos de condiciones de la licitación 017-2017, todos los aspectos relativos a tener en cuenta por los proponentes al momento de resultar adjudicatarios del contrato para realizar el objeto encomendando, determinó y ponderó los factores objetivos para la selección del contratista obrando de buena fe y en cumplimiento de los principios de la actividad contractual. Quedando claro, además, que el contratista seleccionado cumpliera por su profesionalismo y experiencia en el tema a ejecutar, con la entrega de la obra, situación que claramente no fue así, y que terminó con la no ejecución del contrato de obra 2937 de 2017 como quedó demostrado a lo largo del trámite sancionatorio.

Se concluye de los argumentos esgrimidos que la referida violación al principio de planeación que fue contemplada en el recurso presentado por el Garante, no puede darse como probada y por ende las pretensiones expuestas derivadas de la misma no serán reconocidas.

C. DECLARATORIA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL.

Se aduce por el apoderado del Garante que teniendo en cuenta que el inmueble a intervenir gozaba de la calidad de bien de interés cultural, dicha condición debía ser conocida desde la etapa de planeación del contrato, circunstancia esta que impidió la ejecución en debida forma del contrato. Adicionalmente expone ampliamente la normatividad respecto a la declaratoria y procedimiento de intervención de los bienes de interés cultura.

Consideraciones de la Entidad:

Es necesario tener en cuenta, tal como se ha explicado con anterioridad que las especiales condiciones que le eran atribuidos al bien objeto de intervención, hizo necesario realizar las modificaciones pertinentes en el marco del contrato a fin de introducir las mismas y con aquello la observancia de los mandatos legales que en materia de requerimientos técnicos y de licencias son dispuestos sobre bienes de interés cultural, una vez fue advertida tal situación.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Al ser incluidas en la ejecución del contrato las previsiones correspondientes, culminada la obra la misma debería observar dichas condiciones, por cuanto le eran exigibles al contratista ejecutor de conformidad con las obligaciones dispuestas.

Si bien es claro que la intervención de bienes de interés cultural amerita el otorgamiento de licencias que inicialmente no fueron previstas por lo que dicha condición pudo representar el despliegue de actividades adicionales y por ende la inversión de un mayor tiempo en obra, debe tenerse presente que tal falencia fue suplida en el contrato por cuanto se realizaron las modificaciones y prórrogas pertinentes.

Como bien lo indica el apoderado de la compañía garante, el bien objeto de intervención fue declarado bajo el Decreto 606 de 2001 como bien de interés cultural, frente a lo cual deben revisarse dos aspectos de por si abordados por el apoderado. El primero, el marco legal bajo el cual se declaran los bienes como patrimonio cultural y, el segundo, el marco legal para la intervención de los bienes declarados como interés cultural.

El primero, claramente lo esboza el apoderado del garante, dentro del cual la legislación colombiana se determinó el procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural, bajo el Art. 4 de la Ley 397 de 1997 modificado por el Art.1 de la Ley 1185 de 2008, Decreto 2359 de 2019, por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015,

Así mismo, la ley 1185 de 2008, en su artículo 5, establece el procedimiento a tenerse en cuenta para la declaratoria de bienes de interés cultural.

Dentro de lo cual, se tiene que mediante el Decreto Distrital 606 de 2001, la Unidad Deportiva el Salitre fue declarado como bien de interés cultural bajo la categoría CI (Conservación Integral), desde el año 2001,

Bajo lo anterior, en primer lugar, es claro que el ordenamiento colombiano tiene un procedimiento para declarar los bienes como interés cultural y bajo el cual se encuentra el bien de la UDS, dicha situación pudo ser incluso consultada por el contratista como quiera que sus obligaciones contemplaban las de realizar la solicitud de todos los permisos y licencias que requiriera la intervención del bien.

Ahora, lo que si ocupa y debe tratarse es el marco legal para realizar la intervención de los bienes declarados bienes de interés cultural, dentro del procedimiento se tiene lo siguiente:

“Para la intervención de bienes declarados de interés cultural, el Art. 11 de la Ley 397 (ibidem), dispuso que:

“Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los bienes materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente Régimen Especial de Protección:

1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.

Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de bienes, las características del espacio donde están ubicados, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.

(...)

2. Intervención. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si este fuese requerido.

La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, según el caso. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al Instituto Colombiano de Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico.

Asimismo, la intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá contar con la autorización de la entidad territorial que haya efectuado dicha declaratoria.

La intervención solo podrá realizarse bajo la supervisión de profesionales en la materia debidamente registrados o acreditados ante la respectiva autoridad.

La autorización de intervención que debe expedir la autoridad competente no podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna otra clase de autorización o licencia que corresponda expedir a otras autoridades públicas en materia urbanística.

*Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o que sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá comunicarlo previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. **De acuerdo con la naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener en el bien inmueble de interés cultural, la autoridad correspondiente aprobará su realización** o, si es el caso, podrá solicitar que las mismas se ajusten al Plan Especial de Manejo y Protección que hubiera sido aprobado para dicho inmueble.*

El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, territorial, por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la realización de acciones materiales sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá garantizar el cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección si este hubiere sido aprobado.” (Negrilla fuera de texto)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

De otro lado, el Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del sector cultura, estableció en su art. 2.4.1.4.1. respecto a la intervención de los bienes declarado de interés cultural que:

“ARTÍCULO 2.4.1.4.1. Definición. Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al BIC o que afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste existe.

La intervención comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, hasta la ejecución de obras o de acciones sobre los bienes.” (Negrilla fuera de texto)

Igualmente se dispone en el art. 2.4.1.4.2. (ibidem), se indica que:

“ARTÍCULO 2.4.1.4.2. Autorización. Toda intervención de un BIC, con independencia de si el BIC requiere o no de un Plan Especial de Manejo y Protección, deberá contar con la previa autorización de la autoridad competente que hubiera efectuado la declaratoria.” (Negrilla fuera de texto)

Ahora bien, bajo el marco normativo para tal fin establecido en Bogotá, teniendo en cuenta que la Unidad Deportiva del Salitre fue declarada bien de interés cultural bajo la clasificación conservación integral, el Decreto 606 de 2001, estableció parámetros para la intervención de los bienes inmuebles de conservación integral, indicando en su artículo 6 que:

“ARTÍCULO 6º. OBRAS PERMITIDAS. Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 619 de 2000, las obras permitidas en los inmuebles objeto de ésta reglamentación, son las siguientes: restauración, adecuación funcional, ampliación, liberación, mantenimiento, consolidación, reconstrucción parcial, reparación locativa y subdivisión por propiedad horizontal. La definición de los diferentes tipos de obra se encuentra en el ANEXO No. 2, que hace parte integral del presente Decreto.”

Así mismo, se dispone en el art. 26 (ibidem), respecto al procedimiento para intervenciones, que:

“ARTÍCULO 26º. INTERVENCIONES. Todo tipo de obra propuesto para los Inmuebles objeto de la presente reglamentación, requiere de un anteproyecto aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, previo concepto del Comité Técnico Asesor de Patrimonio, como requisito previo a la solicitud de licencia ante la Curaduría Urbana.

Para las obras de mantenimiento o reparación locativa, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital debe emitir concepto, sin tener en cuenta el uso que se desarrolle en el mismo, con el fin de garantizar la preservación de la edificación. El concepto del Departamento Administrativo de Planeación Distrital no implica aprobación del uso.

Las intervenciones diferentes a la obra nueva, que se realicen en las edificaciones colindantes y que no modifiquen las condiciones de la edificación

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

en relación con los Inmuebles de Interés Cultural, no requieren concepto del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Las Intervenciones en predios colindantes con los inmuebles clasificados como de Conservación Integral o Conservación Tipológica, localizados en los sectores objeto de esta reglamentación, requieren concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en relación con la volumetría, aislamientos y empates con el predio de conservación, hasta tanto se expida la reglamentación específica del sector.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de lo expuesto anteriormente, el apoderado del garante erróneamente llega a la conclusión que era obligación de la entidad señalar en los estudios previos la situación del bien y proceder conforme a los procedimientos y el tipo de intervención que se podía efectuar en la Unidad Deportiva, cuando indica: “si la Unidad Deportiva del Salitre, se encontraba declarada como bien de interés cultural desde el 2001, indefectiblemente correspondía a la Entidad, en la etapa precontractual, prever y proceder conforme a los procedimientos y el tipo de intervención que se podía efectuar en la Unidad Deportiva, y este procedimiento, en aplicación al principio de planeación y por mandato legal conforme al Decreto 1080 de 2015, se debió realizar incluso desde el momento en que se elaboraron los estudios previos, y no una vez se suscribe el contrato, con unos estudios y diseños en todo sentido deficientes”. Sin embargo, omite que el trámite de los permisos y licencias eran obligación del contratista tal y como lo previo el anexo técnico.

Entonces, se tiene que si bien la Unidad Deportiva del Salitre UDS fue declarado como bien de interés cultura por el IDPC, era obligación del contratista UT ASEMAIN realizar el trámite de permisos para su intervención, como quiera que el desarrollo del contrato previo una etapa de trámite de la licencia, la cual claramente debía el contratista realizar los trámites relacionados con la obtención de la licencia de construcción, pero solo hasta la radicación de los documentos en la curaduría fue avisada por la Curaduría la situación del bien como patrimonio cultural, lo que quiere decir, que los profesionales especialistas contratos por el contratista para la etapa de la licencia no realizaron las consultas de manera oportuna y eficiente para poder ajustar los estudios y diseños a la norma respecto a la intervención de bienes considerados patrimonio cultural.

Dicha situación, fue prevista en la matriz de riesgos originada del proceso licitatorio del cual fue fuente de aporte por parte del contratista bajo la audiencia de aclaraciones de pliegos, en donde se determinó el siguiente riesgo:

1. DESCRIPCION: Impresiones en APU’S, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, diseños y estudios técnicos.

ETAPA: Precontractual

Asignación: IDRD-CONTRATISTA

N°	Descripción	Etapas	Clase				Identificación y Valoración del Riesgo					Tratamiento del riesgo					Indicador de riesgo a medir en el contrato	Indicador de riesgo a medir en el contrato	Monitoreo y revisión			
			General	Específica	Interna	Externa						Evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Reducir el riesgo	Aceptar el riesgo	50%				50%	Seguimiento al cumplimiento de la licencia de construcción	
1	Impresiones en APU's, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas y estudios técnicos.	Pre-Contractual	si	-	Financiero	Presupuestal	Se debe realizar evaluaciones que conlleven a la negociación	Possible	3	Mediano	3	Riesgo medio	3	Evitar el riesgo	Publicar en el SECCP a información técnica, obligación del contratista de revisar la información técnica digital y física del proceso y realizar las observaciones oportunas para verificación de la entidad	Teniendo en cuenta que el contrato durante el proceso licitatorio presentado debe verificar los costos y análisis del contrato, cualquier información que se presente en los procesos oficiales del contrato, y que sea necesario alertar para la ejecución del contrato, para su cumplimiento entre el CONTRATISTA Y EL IDRD.	IDRD - Contratista	Desde la aprobación de la póliza	Hasta la vigencia de la póliza	50%	50%	Seguimiento al cumplimiento de la licencia de construcción

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Así mismo, se estableció dentro de la matriz de riesgos el número 5, como la demora en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones de intervención necesarios para el desarrollo del contrato, asignándose el 100% al contratista.

5	Demora en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones de intervención necesarios para el desarrollo del contrato.	Contractual	si	-	-	Trámite y gestión de entidades	Si se puede iniciar la obra	Posible	3	Mayor	4	Riesgo Alto	4	Evitar el riesgo	Realizar los trámites de permisos y licencias antes del inicio de las obras. Planeación adecuada del proceso, garantizando la obtención de los permisos, licencias o autorizaciones de intervención necesarios para la ejecución del contrato.	Medio del evento presentado asumido por el contratista.	El Contratista	0%	100%	Informes mensuales de avance y de inversión	Informe mensual de supervisión
---	--	-------------	----	---	---	--------------------------------	-----------------------------	---------	---	-------	---	-------------	---	------------------	--	---	----------------	----	------	---	--------------------------------

128

Por lo descrito no es de recibo que la inclusión de la naturaleza del bien intervenir fuera el hecho generador de la inejecución de la obra y por ende del desconocimiento de obligaciones a cargo del contratista, por cuanto, y en forma similar a la presunta vulneración del principio de planeación que fue tratada en párrafos que anteceden, los sujetos procesales estaban llamados a determinar las razones por las cuales la referida naturaleza hacía más gravoso el cumplimiento del contrato a punto de la imposibilidad de su ejecución; condición que no fue probada, limitándose el recurrente, como en el caso anterior, a realizar afirmaciones en dicho sentido sin soportarlas en medio probatorio alguno.

Así las cosas, tampoco fue desvirtuada la necesaria causalidad que existe entre el desconocimiento de actividades a cargo del contratista y la generación del daño que hoy le es imputable.

D. CONTRATO ADICIONAL Y LA ADICIÓN CONTRACTUAL

Realizado por el recurrente análisis sobre las figuras de contrato adicional y adición contractual, se concluye por el mismo que la realización de las obras efectuadas en la ejecución del contrato, no fueron en su gran parte objeto del contrato principal, sino que implicaron una variación al mismo que derivaron en básicamente obras nuevas, diferentes a las inicialmente contratadas, por hechos imputables al IDRDR por falta a su deber de planeación, y en tal sentido, estas nuevas obras, no podían ser implementadas sobre meras modificaciones contractuales, y exigir a partir de ellas indemnización de perjuicios que no son exigibles al contratista de obra, ni mucho menos afectar la póliza de cumplimiento estatal, en los términos establecidos en la Resolución impugnada.

Consideraciones de la Entidad:

Se concluye de los argumentos que fueron expuestos en el texto del recurso, que a juicio del Garante la inclusión de obras nuevas bajo la figura de modificaciones contractuales y no de contratos adicionales, determina su inejecución en el marco del vínculo contractual que nos ocupa.

Tal y como lo indica la jurisprudencia del consejo de Estado ampliamente relacionada por el apoderado en la sustentación del recurso, el contrato adicional es un nuevo contrato como quiera que cambia sustancialmente el objeto del contrato inicialmente planeado y la adición contractual, corresponde únicamente a una modificación del contrato en ejecución cuando se requiere agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto contratado, la diferencia con el contrato adicional se fundamenta en el principio de autonomía o independencia de cara al contrato principal, ya que mientras las modificaciones simples o de forma son meras adiciones accesorias de éste, el contrato adicional encierra una modificación de fondo, es decir, un cambio sustancial del objeto convenido.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Así lo indica el apoderado del garante y bajo lo cual es clara la jurisprudencia cuando indica que: “*respecto a estos dos conceptos, se ha planteado en reiterados pronunciamientos que comprende una adición contractual o que comprende un contrato adicional, tal como se recoge en la Sentencia C-300 de 2012, en la que se indica:*

*“Por último, es preciso resaltar que **la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato.** En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales. (Subrayado fuera de texto).*

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha señalado que el plazo es un elemento accidental del contrato –no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmó:

“Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato.”

Lo mismo ocurre con el precio, cuya adición, de conformidad con esta misma providencia, es además expresamente autorizada por el artículo 40 de la ley 80, siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial.

Respecto del objeto, existe un amplio debate jurisprudencial, como la Sala destacó al examinar su competencia para ocuparse de la demanda bajo estudio. En efecto, con fundamento en el artículo 58 del decreto ley 222 de 1983 que disponía: “En ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos, ni prorrogarse su plazo si estuviese vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse prórrogas automáticas”, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 15 de marzo de 1990 – antes de la expedición de la ley 80- sostuvo:

*“De la lectura de esta norma se deduce claramente que el legislador extraordinario denominó equivocadamente contratos adicionales a las modificaciones del plazo y del valor de los contratos administrativos, pues estas son simples reformas que **no implican cambio radical en el contrato.***

Sólo cuando se hace necesario reformar el objeto del contrato se está frente a la celebración de verdaderos contratos adicionales, porque ello implica una modificación fundamental del convenio inicial. Por lo mismo, debe entenderse

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

que cuando la norma se refiere a la celebración de un contrato adicional por modificación del plazo o del valor se está frente a una mera reforma del contrato. Y que se celebra un contrato adicional cuando las partes contratantes acuerdan una modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato; como por ejemplo cuando en un contrato de obras públicas se pacta la construcción de un determinado tramo de una carretera y una vez en ejecución se determina que el tramo debe ampliarse; ese cambio obviamente redundaría en la modificación del objeto, del plazo y del valor del contrato principal, lo que conlleva necesariamente la celebración de un contrato adicional”.

Por lo que resulta claro señalar que, la diferencia radical entre el contrato adicional y la adición del contrato radica principalmente en el cambio sustancial del objeto pactado, para el caso en particular, las modificaciones realizadas al Contrato de Obra No. 2937 de 2017 no desbordaron el objeto convenido por las partes, prueba de ello la justificaciones de las modificaciones relacionadas anteriormente, y que en resumen fueron justificadas para garantizar el reforzamiento estructural y arquitectónico de la Unidad Deportiva del Salitre “UDS”, como quiera que las suspensiones fueron con el fin de tramitar la licencia y demás permisos requeridos y las prórrogas y los APUS estuvieron orientados a desarrollar objeto pactado, por lo que no están llamados a prosperar las argumentaciones del apoderado del garante, en el entendido que los imprevistos presentados no generaron la ejecución de una obra nueva, por el contrario estuvieron delimitados a realizar un reforzamiento del cual siempre se ha mantenido su naturaleza jurídica y acorde con el objeto pactado.

Frente a lo referido, y si en gracia de discusión se admitiera que las variaciones de las obras previstas debían ser incluidas en el contrato bajo la figura de contrato adicional y no por la vía de modificación, no es claro para la administración las razones por las cuales dicha condición determinaría que las obras si podrían ser cumplidas.

Debe entenderse que lo que determina el cumplimiento de una previsión contractual, son las debidas condiciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para su materialización y el despliegue diligente de las actividades a cargo del contratista ejecutor, más no la forma en que las mismas fueron previstas en términos contractuales.

Así las cosas, y se reitera, en el hipotético caso en que las obras debían preverse por medio de contrato adicional y no modificación contractual, tal condición no genera una suerte de exclusión de responsabilidad a favor del contratista en la debida edificación de lo contratado; o por lo menos la misma no es explicada ni detallada en los argumentos que fueron esbozados por el recurrente.

Si bien es cierto que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, omite definir la adición de los contratos estatales, sí la autorizó hasta el 50% del valor inicial en SMLMV, siempre y cuando, respete los principios de planeación y economía. Es decir, procede cuando en desarrollo de la ejecución del contrato surjan circunstancias excepcionales en el proyecto y en los estudios técnicos iniciales, sin que con ello se autorice hacer nugatorio el proceso licitatorio establecido por la ley.

Como en los casos antes estudiados el garante se limita a hacer referencia en forma genérica a la imposibilidad de la ejecución del contrato por el hecho aludido, lo que imposibilita que se pueda controvertir de fondo el planteamiento, de lo que deviene que será desestimado.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

D. DE LA CLÁUSULA PENAL Y LA PROPORCIONALIDAD

Como argumento de reproche por parte del apoderado del garante se encuentra que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1592 del Código Civil, la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal, en tal sentido, la cláusula penal constituye en principio una tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad o del incumplimiento definitivo del contrato, bajo lo cual, la cláusula penal es una tasación anticipada y definitiva de perjuicios, que debe ser impuesta atendiendo a la ejecución parcial sobre el objeto del contrato, en aplicación al principio de proporcionalidad, ello conforme a lo establecido en el artículo 1596 del Código Civil.

Consideraciones de la entidad:

Como bien lo indico la sentencia recurrida, la legalidad de la imposición de una sanción-cláusula penal- en los contratos estatales, como ejercido de la potestad sancionadora del Estado, se debe verificar si dicha potestad se encuentra autorizada por la ley y en el contrato mismo; lo anterior toda vez que la administración debe tener en cuenta que siempre que se acuda a una de estas figuras en materia contractual, deberá cumplirse, previamente, con los postulados propios del principio de legalidad, como se dijo en acápite anterior.

En efecto, respecto a la cláusula penal, la Ley 80 de 1993 no reguló expresamente la figura de la cláusula penal pecuniaria, pues solo en algunos apartes se hace una referencia indirecta de la misma; es con la Ley 1150 de 2007 y posteriormente en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en donde se contempla la facultad de las entidades estatales de imponer multas y la cláusula penal pecuniaria que hubieran sido pactadas, ambas figuras jurídicas de naturaleza civil y comercial aplicables a los contratos estatales, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993.

En este orden de ideas, debe entonces precisarse que la cláusula penal pecuniaria es una sanción cuya naturaleza deviene ab initio de la norma legal, pero además y sobretudo, del contrato mismo, pues cuando la administración recurre al ejercicio de la potestad sancionatoria, recurre en primera instancia al contenido del contrato.

Sobre la cláusula penal pecuniaria, el Consejo de Estado ha señalado que:

“(…) la cláusula penal consiste entonces en la estipulación contractual según la cual, el contratista se obliga a pagar a título de tasación anticipada de perjuicios, la cuantía que contractualmente se haya determinado, en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el evento en que se declare el incumplimiento del mismo, aún vencido el plazo de ejecución del contrato. Lo anterior, sin que sea necesario demostrar el perjuicio percibido por la administración, aunque deberá sí declararse el incumplimiento mediante acto administrativo motivado, una vez se haya garantizado el debido proceso al contratista.

La doctrina también se ha referido a la cláusula penal pecuniaria, en los siguientes términos:

La cláusula penal es, por su naturaleza y la forma en que es convenida entre las partes, secundaria y accesorio a una obligación primitiva y principal. Ella no existe, si no existe la obligación primitiva que constituye el vínculo obligatorio

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

*entre los contratantes y al cual accede con la finalidad de reforzarlo y asegurar así su cumplimiento, porque sean más firmes o mejor guardadas las obligaciones. Su causa se encuentra en el temor del incumplimiento de la obligación principal; y su fuente, en la libre voluntad de las partes*¹⁸ (Negrita y subraya propia).

Es innegable entonces que, ante un inminente incumplimiento del objeto contractual, cuando el plazo de ejecución ha expirado sin que presuntamente se cumpliera con lo pactado, la figura jurídica idónea para ejercer la potestad sancionatoria por parte de la entidad es la declaratoria de incumplimiento y la afectación de la cláusula penal pecuniaria pactada contractualmente por las partes, por los incumplimientos probados y su atribución exclusiva al contratista.

Ahora bien, ya en acápite precedente se verificó que no hubiere aplicado el fenómeno de la caducidad de la potestad sancionatoria desde lo preceptuado en la normatividad vigente; no obstante, también la jurisprudencia ha consagrado un factor temporal para la imposición de las sanciones contractuales y ejercer la facultad exorbitante de la declaratoria de caducidad, que para efectos de la figura de la cláusula penal pecuniaria se entiende en los siguientes términos:

*“(...) la Sección Tercera también se ha pronunciado en relación con la posibilidad de declarar el incumplimiento del contrato, pero sólo para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Al respecto sostiene, invariablemente, que no sólo puede hacerlo durante el plazo de ejecución, sino también cuando ha vencido, incluso hasta su liquidación, de manera que la vigencia del plazo no limita la competencia sancionatoria. (...)*¹⁹ (subraya propia)

De lo anterior se desprende que el factor temporal que ha establecido de manera reiterada el Consejo de Estado para efectos de sancionar al contratista con la declaratoria de incumplimiento y la afectación de la cláusula penal pactada; no se ha superado, como quiera que si bien es cierto el plazo de ejecución expiró, también lo es que aun en los plazos establecidos para la liquidación, podría declararse el incumplimiento del Contrato, tal y como acontece en el presente asunto.

En el marco del fundamento legal y jurisprudencial anteriormente indicado, la cláusula penal fue pactada en el contrato No. 2937 de 2017, en su cláusula segunda de la siguiente manera:

“... CLÁUSULA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL. SI EL CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del presente contrato, pague al IDR, el veinte por ciento (20%) del valor del mismo como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se declare la caducidad del contrato y se impongan las multas a que haya lugar. El IDR podrá hacer efectivo el valor de la cláusula penal imponiéndola mediante resolución motivada. PARÁGRAFO: el valor pagado como cláusula penal, no es impedimento para solicitar adelante el juez del contrato la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal.”

De lo anterior, si bien las entidades del Estado están investidas de la facultad para declarar directamente el siniestro ocurrido en relación con la ejecución del contrato estatal celebrado y hacer efectiva la garantía constituida a su favor, mediante la expedición de un

¹⁸ Sección Tercera, Sentencia del 13 de noviembre de 2008 (Rad: 17009), M.P: Enrique Gil Botero.

¹⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de octubre de 2013 (Rad: 24697), M.P: Enrique Gil Botero.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

61,2% de incumplimiento

X

$$\begin{array}{r} X = 61.2 \times \$ 2.363.248.541 \\ \hline 100 \end{array} = \$ 1.446.308.108$$

E. DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL.

Frente a las presuntas falencias en los procesos de planeación que antecedieron la celebración del contrato como a la imposibilidad de la realización de la obra por cuanto no se previó desde la fase precontractual la naturaleza del bien a ser intervenido, aténgase a lo resuelto en los acápites pertinentes de este proveído.

Ahora, frente a que lo acaecido se constituye en un riesgo no asegurable, se tiene que tener presente que las modificaciones surtidas en el contrato, entre las que se contaron la inclusión de actividades a desarrollar con ocasión de la naturaleza de bien que se refiere a la propia de interés cultural, fueron puestas en conocimiento por parte de la Entidad a la aseguradora en estricto cumplimiento del deber de información, por lo que las modificaciones contractuales le son oponibles en su integralidad, sin que se haya determinado en ese momento por el Garante que las inclusiones previstas no fueran asegurables.

Tal y como se señalado por la entidad en la resolución No. 1452 de 2022, sobre el contrato de seguro el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

“Respecto del contrato de seguro, cabe hacer las siguientes precisiones; el Código de Comercio enseña que dicho contrato es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva (art. 1036, modificado ley 389 1997, art. 1); que su objeto es asegurar un riesgo. Y el riesgo está definido legalmente como “el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgo y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento” (art. 1.054 ibídem). Como puede verse el contrato de seguro crea obligaciones condicionales, que se caracterizan porque penden de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no. Se destaca entonces que las obligaciones en el contrato de seguro respecto del asegurador se originan, se repite, con la realización del riesgo asegurado, es decir cuando se da la condición del aseguramiento (art. 1.054 ibídem).”²¹ (Subrayado fuera de texto)

En este sentido, resulta claro que la finalidad de la garantía de cumplimiento, es amparar los riesgos surgidos de las obligaciones y prestaciones contenidas en el contrato y sobre el particular el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

“(…) En tratándose de la garantía de cumplimiento, si la misma se hace a través de entidades aseguradoras el inciso I. del artículo 25.19 de la Ley 80 de 1993 determina que ésta deberá consistir en garantía única, que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado.

Por garantía única se entiende aquella que consiste en una sola póliza de seguros regida por unas estipulaciones comunes que contienen una pluralidad de amparos. El contrato de seguro de cumplimiento es único; de ahí que las modificaciones que se introduzcan durante la vigencia del contrato estatal amparado deban hacerse en anexo a la misma, por ejemplo, para ampliar

²¹ CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de diciembre de 2002. Exp. 22.511

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

*vigencias, modificar cuantías, o incluso para incorporar nuevos amparos. A esta conclusión se llega de la lectura del Decreto Reglamentario 679 de 1994. (...)*²²

Es de advertir que la naturaleza y regulación especial que aplica al contrato de seguro que tiene por objeto garantizar el cumplimiento del contrato estatal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, al Ley 1150 de 2007 y la jurisprudencia del Consejo de Estado que sobre el particular ha indicado lo siguiente:

“Sobre el particular, resulta necesario señalar que los contratos de seguro que se originan para garantizar el cumplimiento de un contrato estatal, si bien están regidos por las normas de derecho privado y particularmente por las disposiciones del Código de Comercio, también están sujetos, en determinados aspectos, a normas de derecho público.

En efecto, el estatuto de contratación estatal se ocupó de regular los aspectos generales y fundamentales de los contratos de seguro que se celebren para garantizar el cumplimiento de los contratos estatales, lo cual evidencia que los mismos también se encuentran sometidos a sus disposiciones, normatividad especial que, al menos, da lugar a la configuración de un régimen legal de carácter mixto que en modo alguno puede tildarse como integrado exclusivamente por normas de derecho privado, (...), por ende, de obligatorio cumplimiento tanto para las entidades estatales contratantes como para los contratistas particulares, quienes no podrán negociar sobre su contenido ni eludir su observancia.

Reiteradamente se ha reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado que el contrato de seguro de cumplimiento se rige primordialmente por las normas especiales que lo regulan y no le son aplicables todas las normas previstas para el contrato de seguro del Código de Comercio²³, si bien se lo reconoce como una clase de seguro de daños, bajo la normativa del citado Código Mercantil” 24.

El Consejo de Estado, ha sostenido que el contrato de seguro tiene su génesis en el contrato administrativo, estando necesariamente atado al que garantiza su ejecución, y no puede escindirse su valoración respecto de aquél, en razón a que se quebrantaría la continencia del origen. (...) la jurisdicción contencioso administrativa es la que conoce no solo del contrato suscrito por una entidad pública para cumplir con los cometidos estatales, sino también de los negocios jurídicos bilaterales que celebren los particulares cuyo objeto sea asegurar el cumplimiento del contrato administrativo, toda vez que se encuentra ligado con el desarrollo, ejecución y desarrollo del objeto del contrato principal. (...) el contrato de seguro no puede tener una hermenéutica ajena a la del contrato administrativo principal cuya ejecución garantiza, ni el conocimiento de la controversia suscitada con ocasión de aquél puede deslindarse del que está asignado para el negocio jurídico bilateral principal. (...) el contrato de seguro, si bien no puede ser interpretado con total independencia de aquél acuerdo de voluntades cuya ejecución garantiza, no es menos cierto que al mismo no se le pueden aplicar las cláusulas y disposiciones acordadas en el contrato principal, que no fueron incluidas en el mismo, y que en consecuencia, son ajenas a las partes suscribientes de la póliza de seguro²⁵.

²² CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Sentencia del 22 de abril de 2009. Exp.14667.

²³ Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo, Julio 10 de 1997, expediente No. 9286, Contratos. Actor: Gonzalo Moreno Lemos, Demandada: Fondo Nacional de Ahorro.

²⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 22 de abril de 2009, Consejera Ponente: Myriam Guerrero de Escobar, radicación número: 19001-23-31-000-1994-09004-01(14667), actor: Seguros Generales Aurora S.A., demandado: Departamento del Cauca, referencia: acción contractual.

²⁵ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION C, Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ, Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015) Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00148-01(53317)

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

El contrato de seguro, y al respecto, cabe mencionar que este se encuentra regulado en el Título 5to, entre los artículos 1036 a 1162 del Código de Comercio. Si bien en el código no se define al contrato de seguro, de las características que establecen, se puede construir una definición del mismo.

Es así como de la consensualidad, se desprende que el contrato de seguro solo puede entenderse perfeccionado, cuando ha habido un acuerdo o consenso entre las partes, libre de cualquier vicio. La bilateralidad alude a que ambas partes se obligan a cumplir con una carga; el asegurador se obliga a responder por la suma asegurada cuando ocurra el siniestro, y el tomador tiene la obligación de pagar la prima. La onerosidad implica que debe existir un pago; en este caso el de la prima, para que el asegurador se comprometa a responder por la ocurrencia del siniestro asegurado. La aleatoriedad constituye la esencia del contrato de seguro, pues no se conoce a ciencia cierta si el siniestro va a ocurrir, y mucho menos cuándo, pero, sin embargo, se constituye la misma, aun cuando nunca se materialice el siniestro. Se dice que el contrato de seguro es de ejecución sucesiva porque las prestaciones no se agotan en un solo momento.

No hay que dejar de lado, que el carácter de un contrato de seguro, es indemnizatorio, toda vez que está encaminado a reparar a favor del asegurado, los daños que ocurran cuando el siniestro se presente, hasta el monto del valor asegurado.

Adicionalmente se destaca que, de acuerdo con la Jurisprudencia del Consejo de Estado, ha reiterado que la administración cuenta con la prerrogativa de declarar el siniestro del contrato en ejecución de contratos estatales en los siguientes términos.

“(…) La Sala reitera el criterio que de años atrás ha consolidado en el sentido de que la Administración goza de la prerrogativa de declarar el siniestro derivado de la ejecución de los contratos estatales, de hacer efectiva la garantía que ha sido constituida a su favor, y en esta oportunidad precisa que tal prerrogativa conlleva la de cuantificar el perjuicio, aún después de la terminación del contrato mediante la expedición de actos administrativos, los cuales están sujetos al control gubernativo y judicial, en consecuencia, podrán ser impugnados ante la propia Administración mediante la interposición de los recursos que la ley ha previsto para el efecto y por vía judicial mediante el ejercicio de la acción contractual.

En relación con las prerrogativas que posee la Administración frente a las garantías contractuales, también resulta pertinente establecer, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala, que en materia de contratación estatal no aplica el procedimiento previsto en los artículos 1075 y 1077 del Código de Comercio, relativos a la reclamación por parte del asegurado y a la objeción que puede formularle el asegurador, toda vez que tal reclamación se suple a través de la expedición de un acto administrativo mediante el cual la Administración unilateralmente declara ocurrido el siniestro y ordena la efectividad de las garantía sin la aquiescencia del asegurador, decisión que puede ser impugnada por éste y también por el contratista, administrativa y judicialmente”²⁶

Conforme lo expuesto, se analizará los argumentos expuestos por el apoderado del garante frente al amparo de cumplimiento y el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Finalmente, frente al argumento de la prescripción de las acciones derivadas del Contrato de Seguro, es importante poner presente que los hechos de incumplimiento que son objeto de declaratoria de siniestro y efectividad de la cláusula penal, son aquellos que generan perjuicios consolidados en la cabeza del beneficiario del contrato de seguro, esto

26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Sentencia del 22 de abril de 2009. Radicación 190012331000199409004-01. Número interno 14667.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

es el IDRD. Lo anterior por cuanto la simple mora o retardo del contratista en el cumplimiento de sus actividades no genera perjuicios ni por ende la afectación de la cláusula penal por dicho concepto²⁷.

Es por dicha razón que solo hasta que se haya constatado que el actuar del contratista generó un daño resarcible, es que se puede dar inicio al trámite reglado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, con miras a la afectación de cláusula penal por cumplimiento, por cuanto y como ya se mencionó en párrafos anteriores, el juicio de responsabilidad en sede administrativa tiene naturaleza indemnizatoria.

Ahora bien, si en forma previa se hicieron requerimientos al contratista para que diera cumplimiento a las actividades a su cargo, los mismos actuaron como medida de apremio, por cuanto y consonancia con lo definido el daño para ese momento no estaba consolidado.

Es por las razones descritas que en interpretación del Consejo de Estado, la potestad sancionatoria del Estado, se encuentra en cabeza de la Entidad contratante hasta por el termino de liquidación, por cuanto en atención a la complejidad de los vínculos contractuales, es solo hasta esa instancia que se podrá constatar el incumplimiento definitivo del contratista o su cumplimiento imperfecto, condición que determina el amparo del contrato de seguro que deberá hacerse efectivo como consecuencia del proceso administrativo correspondiente

Por lo descrito no le asiste la razón al Garante en el argumento interpelado referente a la caducidad de la acción del contrato de seguro.

A. Amparo de cumplimiento

Advierte el apoderado del garante, la exigencia de una exclusión para la afectación de las pólizas de cumplimiento en favor de la entidad, bajo la contenida en el artículo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015 que en la literalidad de la póliza AA027962 indica:

“5.2.1.1.2.1 Causa Extraña, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de la víctima”.

Bajo lo cual indica el abogado de la compañía garante, que debe ordenarse el cierre de la actuación administrativa con fundamento en la excepción de culpa exclusiva de la víctima, por las deficiencias en la planeación del proceso de selección al no advertir en los documentos precontractuales que la UDS tenía la afectación por parte del IDPC.

Al respecto es importante tener en cuenta de una parte, los análisis, argumentos y pruebas ampliamente expuestos en los incumplimientos relacionados con el objeto del contrato y el anticipo, que dan cuenta de las decisiones adoptadas en la presente actuación administrativa y que sustentan ampliamente las razones de hecho y de derecho que llevan a la entidad a adoptar las decisiones aquí dispuestas.

Pese a lo anteriormente indicado, también vale la pena precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el titulo de culpa exclusiva de la víctima no en todos los casos y no siempre se materializa como un eximente de responsabilidad civil, tal como se cita a continuación:

²⁷ Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación 38.797. del 1º de julio de 2015. M.P. Jaime Orlando Santofimio.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Sentencia CE-SEC3-EXP1990-N3260 del 1 de marzo de 1990, que señala:

“se debe anotar que la culpa de la víctima en el ámbito de responsabilidad administrativa, no es más que la violación de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado. La violación entonces, por parte de la víctima, de las obligaciones que en cada caso concreto pesan sobre la responsabilidad de la administración. Así, en los eventos en que la falta de servicio o la culpa de la víctima son provocadas por la otra parte. La responsabilidad no puede ser compartida. Y ello es apenas lógico en la medida en que la causa que origina el perjuicio pierde ser atribuida a la otra parte, mas no a ambas.

Este enunciado genérico permite sostener, entonces, que cuando la falta del servicio ocasionada por un comportamiento culposo de la víctima, su responsabilidad no puede ser siquiera compartida y, menos aún, declarada en contra de la entidad estatal, a condición obviamente, de que el comportamiento de la víctima haya sido de tal naturaleza que pueda calificarse de originario del perjuicio.”

De lo anterior, se destaca, en lo referente a la culpa exclusiva de la víctima que es necesario también evaluar la conducta del contratista, una cosa es el nexo de causalidad y otra la simultaneidad, lo que quiere decir es que no en todos los casos se exonera de responsabilidad del contratista con culpa exclusiva de la víctima, sino se debe revisar la conducta del contratista para determinar si existió una conducta compartida, y bajo este postulado, la conducta compartida no siempre es excluyente de responsabilidad se debe entrar a verificar las condiciones de cada sujeto y en este caso, la actividad las gestiones y las acciones del contratista en estricto sentido lo que hicieron fue incidir en la ejecución del contrato llevando a la entidad a tomar decisiones específicas para su ejecución, tan es así que se realizaron la suspensiones y prórrogas requeridas, para cumplir el objeto del contrato y en este orden de ideas el contratista estuvo presto a dar continuidad a las acciones aun cuando existían dos hechos que resultaban únicamente ajenos a las condiciones inicialmente prevista, en especial por el tema de patrimonio y por tema de sismo resistencia, estas conductas en todo caso llevan a la administración a tener la confianza legítima del cumplimiento de la ejecución, por lo que en este momento no tiene sentido que una vez finalizado el contrato nos imputen o se legue una culpa exclusiva de la víctima, cuando el contratista estuvo de acuerdo con la continuidad del objeto el contrato.

Dicho argumento, se encuentra sustentado así mismo en sentencia CE-SEC3-EXP1999-N11815, donde se resalta tal posición:

“Cabe recordar que la culpa a exclusiva de la víctima ha sido concebida dentro del ámbito de la responsabilidad administrativa, como la violación de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, de tal forma que dicha violación por parte de la víctima, puede conducir hacia una exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, de acuerdo con la transcendía y grado de participación del afectado o afectados en la producción del daño.

Ahora bien, esta sala en reiteradas oportunidades ha señalado que no toda conducta de la víctima se puede invocar como factor que destruya el vínculo de causalidad existente entre el hecho y el daño. En efecto, para que la culpa de la víctima exonere de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir estos requisitos:

A) Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si la culpa del afectado fue la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total; si esa culpa no tuvo incidencia alguna en la producción del evento perjudicial, se impondrá entonces la declaratoria de responsabilidad total de la

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

administración, a condición de que se configuren los restantes elementos estructurales de esas responsabilidades, según el régimen aplicable a la actividad administrativa, dentro de cuya órbita de produjo el hecho dañoso. Ahora bien, si la actuación de la víctima fue una causa concurrente, se producirá una liberación parcial, por la aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño previsto por el artículo 2357 del código civil.

B) El hecho de la víctima debe ser extraño y no imputable al ofensor. Si el obrar de la víctima fue provocado, propiciado o impulsado por el ofensor de tal manera que no sea ajeno, no podrá exonerarse de responsabilidad la administración.

C) Que el hecho de la víctima sea ilícito y culpable, características indispensables y necesarias para que tal conducta configure un delito.”

De acuerdo con lo anteriormente indicado y atendiendo los argumentos expuestos, el contrato se ejecutó y se modificó ante un hecho sobreviniente, que fue conocido y aceptado voluntariamente por las partes mediante modificaciones contractuales debidamente firmadas y publicadas y que dan fe, confianza legítima y de la intención de las partes de culminar la ejecución del contrato.

En este sentido, advertido el deber de planeación que no es aplicable sólo a la entidad estatal sino también al contratista, en aplicación de los postulados de la buena fe objetiva y del *pacta sunt servanda*, no es admisible que solo ante el incumplimiento del contrato, se advierta un elemento de esta naturaleza cunado ni para la suscripción ni la ejecución del contrato se señaló y en este sentido recogiendo las conclusiones de la jurisprudencia precedente, la conducta de los involucrados, o mejor de las partes del contrato, es un elemento que debe ser valorado al adoptar decisión y resulta claro que la conducta de las partes, pretendían el cumplimiento del contrato, aun con la existencia del hecho sobreviniente.

b. Del amparo de buen manejo y correcta inversión de anticipo.

Conforme con los argumentos expuestos por el apoderado del garante, y teniendo en cuenta lo expuesto en el capítulo del anticipo de la sentencia recurrida, se procede aclarar en lo pertinente de la resolución recurrida que no se demostró dentro del proceso la inversión del anticipo y por ende la amortización del mismo.

Es claro que la amortización refiere a demostrar que la inversión del anticipo realmente fue demostrada, acá nos encontramos en la clara muestra conforme con el acervo probatorio se aclara que el daño imputado al contratista es la NO INVERSION DEL ANTICPO y por lo tanto su no amortización conforme lo pactado por las partes, por lo que es claro que el contratista no hizo la inversión del anticipo en lo que debía hacerse para el contrato de obra No. 2937 de 2017 como quiera que no demostró la inversión y tampoco su amortización.

Conforme lo anterior se aclara la resolución recurrida en este sentido.

“DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Bajo lo consagrado legalmente, los anticipos contractuales se encuentra en el tenor del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993²⁸, dentro del cual se determina a la existencia de un límite

²⁸ En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

porcentual, del cincuenta por ciento del valor del contrato, al monto que es posible reconocer al contratista en el marco de un contrato estatal.

En este mismo sentido, el siniestro bajo el amparo de manejo y correcta inversión del anticipo bajo la luz del artículo 2.2.1.2.3.1.10 del decreto 1082 de 2015 indica:

“El amparo de buen manejo y correcta inversión el anticipo cubre a la entidad contratante de los perjuicios sufridos como consecuencia de los siguientes riesgos:

- a. no inversión del anticipo.*
- b. uso indebido del anticipo.*
- c. apropiación indebida del anticipo.*

El valor asegurado del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo debe ser del ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, ya sea en dinero o en especie. esta cobertura debe estar vigente hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.

la vigencia del amparo debe ser desde la fecha de desembolso del anticipo, hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo.

esta cobertura debe solicitarse en todos los contratos en donde pacten el desembolso de un anticipo, como por ejemplo en los contratos de obra²⁹.

Ahora bien, para determinar el concepto de anticipo es necesario recurrir a las definiciones que frente a esta figura han manejado la doctrina y la jurisprudencia, para lo cual la Sala en sentencia del 13 de septiembre de 1999 (Exp. No. 10.607) y la sala de decisión No. 003 sentencia No. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar radicado 13-001-23-33-000-2013-00328-00, en relación con el anticipo se ha expresado:

“La doctrina³⁰ y la jurisprudencia nacional, al unísono, han señalado como características conceptuales del anticipo las siguientes: (i) funda su entrega en un verdadero préstamo por parte de la entidad contratante al contratista, (ii). Es necesario en ciertos contratos para que el particular cuente con el resorte financiero requerido para dar inicio a la ejecución del objeto contractual, (iii) el cual mantiene su naturaleza pública, y (iv) se amortiza paulatinamente en función de los pagos que a favor del contratista se vayan causando. Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado lo siguiente³¹:

“En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del contrato. Se convierte así este pago en un factor económico determinante para impulsar la ejecución del contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales

²⁹ <https://colombiacompra.gov.co/content/que-es-el-amparo-de-buen-manejo-y-correcta-inversion-del-anticipo#:~:text=2017%20%2D%2011%3A38-.El%20amparo%20de%20buen%20manejo%20y%20correcta%20inversi%C3%B3n%20del%20anticipo.dinero%20en%20calidad%20de%20a>

[nticipo.](https://colombiacompra.gov.co/content/que-es-el-amparo-de-buen-manejo-y-correcta-inversion-del-anticipo#:~:text=2017%20%2D%2011%3A38-.El%20amparo%20de%20buen%20manejo%20y%20correcta%20inversi%C3%B3n%20del%20anticipo.dinero%20en%20calidad%20de%20a)

³⁰ Así por ejemplo, ha señalado el Profesor Ernesto Matallana: “Para el Consejo de Estado el anticipo es una retribución que se otorga en contratos de tracto sucesivo antes o paralelamente a la iniciación del contrato, y que va con destinación a cubrir sus costos iniciales. Son recursos que deberán amortizarse en proporción a la ejecución del contrato pues se trata de una especie muy particular de préstamo. Lo anterior tiene consecuencias muy importantes, porque se trata de recursos públicos administrados por un particular (contratista), y en esa medida cualquier desviación de estos recursos a fines distintos a los contemplados dentro del contrato podrá propiciar las correspondientes acciones de carácter penal”. v. MATALLANA CAMACHO, Ernesto. Manual de Contratación de la Administración Pública. Reforma de la Ley 80 de 1993. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2 ed., 2009, p. 854 y ss

³¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001, Exp. No. 13436, CP. Dr. Ricardo Hoyos Duque.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Ya la Sala en sentencia del 13 de septiembre de 1999 (Exp. No. 10.607) en relación con el anticipo expreso: “no puede perderse de vista que los dineros que se le entregan al contratista por dicho concepto son oficiales o públicos. **El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra.** No es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se amortice durante la ejecución del contrato en cada acta parcial de cobro”

En estas condiciones, si el anticipo se entrega al contratista antes o simultáneamente con la iniciación del contrato, esto es, cuando aún el contratista no ha prestado el servicio, ejecutado la obra o entregado los bienes y precisamente espera dicha suma para iniciarlo y la fecha de ese pago marca la pauta para el cómputo del término del contrato, el pago de la suma de dinero que las partes convengan a ese título se hace en calidad de préstamo.

Esto significa que las sumas entregadas como anticipo son de la entidad pública y **esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión y manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato**³²(Negritas y subrayas fuera de texto)”.

En este mismo sentido, la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC3893-2020 radicación No. 11001-31-03-032-2015-00826-01 de 19 de octubre de 2020, señaló frente al aseguramiento del anticipo en contratos de obra, que:

“3.2. Preciado lo anterior, debe señalarse que si bien el anticipo carece de definición legal, ha 'sido concebido por la jurisprudencia y la doctrina patrias como un mecanismo de financiación², propio de los contratos en los que la remuneración está supeditada a la entrega -total o parcial de la obra, en virtud del cual el contratante entrega al contratista dinero u otros bienes, con el compromiso de que este último los utilice para sufragar determinados costos y gastos imprescindibles para la ejecución del encargo.

Por vía de ejemplo, el dinero dado en anticipo puede proveer la liquidez inicial que requiere el contratista para costear la compra de insumos y equipos, el pago de honorarios del personal, el levantamiento de campamentos de obra y, en general, cualquier otra erogación preestablecida convencionalmente, orientada a viabilizar el inicio de las construcciones.

Con base en ello, y sin perder de vista lo que al respecto estipulen las partes, el contratista podrá exigir el pago que corresponda al avance -total o parcial- del objeto comercial, previa compensación con el importe recibido a título de anticipo; en consecuencia, la amortización de dicho anticipo, entendida como su retorno al patrimonio del contratante, estará directamente vinculada con la progresión de la ejecución de la obra.

3.3. En el escenario expuesto, la entrega del adelanto hace surgir para el contratante una expectativa primaria, consistente en que esos recursos se empleen para cubrir las expensas de la obra, en los términos señalados en el contrato; **y si ello ocurre, aflorará para aquel una expectativa secundaria: la de recomponer su acervo patrimonial, mediante la efectiva amortización del anticipo.** Similarmente, **debe admitirse que la apropiación, la incorrecta inversión y la falta de amortización del anticipo, constituyen riesgos potenciales, que amenazan por sendas distintas el patrimonio del contratante; por consiguiente, este tiene interés en transferirlos lícitamente al**

³² Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001, Exp. No. 13436, CP. Dr. Ricardo Hoyos Duque

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

asegurador, a través de la contratación de amparos especiales, que pueden incluirse como coberturas accesorias al seguro de cumplimiento".³³(subrayado y negrilla propio).

De las anteriores citas jurisprudenciales, el legislador en aras de salvaguardar la permanencia de la titularidad estatal en torno a los recursos desembolsados por conceptos de anticipo, contemplaron que el buen manejo y correcta inversión de los recursos entregados a las contratistas en la ejecución de un contrato estatal, estuvieran incluidas dentro de la garantía única de cumplimiento diseñada para afianzar el buen devenir del contrato estatal, tal cual hoy se prevé en la norma.

Adicionalmente, se resalta que cuando en un proceso contractual la Entidad plantee la entrega de dineros por concepto de anticipo, los cuales como ya se indicó la entidad estatal le entrega al contratista en calidad de préstamo con el objeto de que este último lo, debe solicitar el amparo para garantizar la inversión única y exclusivamente en la ejecución del contrato y sean devueltos en el marco de la ejecución del contrato, bajo la amortización en las actas de avance de obra.

Conforme con lo pactado en el contrato, en la forma de pago se pactó que el ANTICIPO DE OBRA: Se pagará un anticipo equivalente al 50% de los COSTOS DIRECTOS de los capítulos de obra de infraestructura, el cual será entregado al contratista previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y una vez terminada la etapa de coordinación. El anticipo será girado por el IDRD a la entidad fiduciaria. El anticipo se amortizará en el porcentaje otorgado de las actas mensuales de ejecución de obra y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación. El anticipo es para ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales, transporte de equipos o de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto; con el fin de garantizar la adquisición de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados o incorporados en el proyecto para su feliz término; por lo cual es necesario realizar el pago de un anticipo del 50% de los costos directos

En este mismo sentido, en los documentos adicionales del expediente publicado en la plataforma SECOP I³⁴, se encuentra el ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS, donde se establecen en "CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), lo siguiente frente al anticipo:

"(...)

3.5 PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO

En los contratos de obra el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo en una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera, para lo cual **se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes reglas:**

1. El anticipo únicamente deberá destinarse para el pago de los rubros aprobados en el plan de inversión de anticipo aprobado por el interventor y **que sean necesarios para la ejecución de la obra, objeto del presente contrato.**
2. Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o patrimonio autónomo, deberá ser autorizado previamente por el INTERVENTOR.
3. La fiducia o patrimonio autónomo **deberá realizar los giros directamente a los proveedores después de la presentación ante la fiduciaria. Por parte del CONTRATISTA, de la factura correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe estar debidamente aprobada por el INTERVENTOR.** Las copias de los anteriores documentos aprobados por el INTERVENTOR deberán ser presentados por el CONTRATISTA en el informe del siguiente mes.

³³ <https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/11/SC3893-2020-2015-00826-01.pdf>

³⁴ <https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-174445>

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

4. Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo y entregado los recursos del anticipo, la misma será irrevocable, salvo autorización expresa y por escrito por parte del ordenador del gasto delegado por el IDRD.

5. El término de la duración de la fiducia o encargo fiduciario será el necesario, para la amortización del anticipo, termino dentro del cual el CONTRATISTA deberá autorizar la totalidad de los recursos que reciba a título de anticipo.

(...)

9. De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, la información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, como también por el IDRD.

10. Entiéndase como fideicomitente el CONTRATISTA, FIDUCIARIO la sociedad fiduciaria autorizada para funcionar como tal por la Superintendencia Financiera y el beneficiario el IDRD y los proveedores del CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato.

(...)

Se debe elaborar un plan detallado de inversión del anticipo, previo al desembolso de los recursos, el cual debe contar con la aprobación de la interventoría y hará parte integral del contrato de fiducia para el buen manejo y correcta inversión de los recursos que se reciban a título de anticipo.

El anticipo debe ser invertido exclusivamente en la compra o el arriendo de equipos, compra de materiales, transporte de equipos o de materiales y pago de mano de obra no calificada del proyecto.

El fin del anticipo es garantizar La adquisición de manera oportuna de insumos, materiales o equipos o elementos que requieran ser instalados o incorporados en el proyecto, así como la mano de obra no calificada del mismo.

AMORTIZACIÓN: La amortización, entendida como la forma en que el contratista extingue la deuda contraída con la entidad por el préstamo de los recursos públicos desembolsados a título de anticipo, se hará descontando de cada acta de pago el mismo porcentaje a aquel pactado por concepto de anticipo, hasta completar el monto total de este, (Los impuestos y retenciones que se causen por el desembolso del anticipo están a cargo del contratista).

INVERSION Y LEGALIZACIÓN: Para los pagos que se hagan con los recursos del anticipo se deben contar con el visto bueno de la Interventoría presentado un oficio remitido de autorización de pago dirigido a la fiduciaria, anexando los soportes contables requeridos para soportar el desembolso. Estos desembolsos deben corresponder al plan detallado de inversión del anticipo.

El plazo máximo para la legalización del anticipo, será a la firma del acta del recibo final del contrato. Dicha legalización deberá estar acompañada del informe final de inversión del anticipo, el cuadro consolidado de desembolsos respecto al plan e inversión vigente, el reporte rendimientos financieros generados y los soportes de las respectivas devoluciones al IDRD, igualmente deberá remitirse el cierre de la fiducia y la certificación de paz y salvo ante la fiduciaria.

INFORME DE INVERSIÓN: Deberán presentarse informes mensuales de inversión de anticipo el cual será presentado por el contratista a más tardar dentro del mes siguiente a la inversión de los recursos y deberá contar con todos los soportes requeridos. Bajo ninguna circunstancia, podrá legalizarse el anticipo con ofertas mercantiles ni demás títulos ejecutivos previstos en la ley mercantil. (...). (Negrillas y Subrayado propios).
(...).

Frente al programa de obra, estableció el documento contractual que el contratista debería presentar el programa de Obra del proyecto a ejecutar, en el numeral 3.8 indico lo siguiente:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

(...)

3.8 PROGRAMA DE OBRA, GANTT DE SEGUIMIENTO

El programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto, siguiendo un desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones, modo y lugar en condiciones típicas del sitio de ejecución de las obras, el programa del proyecto deberá tener un único nodo de inicio y un único nodo de fin.

El contratista deberá determinar las actividades de obra necesarias para ejecutar el proyecto, pero como mínimo deberá incluir cada una de las actividades constructivas definidas en el presupuesto oficial, para ello se deberá realizar la descomposición del trabajo requerido en el grado de detalle que permita asignar recursos, definir duración, definir costos y realizar el control del proyecto (...). Se deberá presentar de manera anexo el cuadro que permita sustentar la duración estimada para cada actividad. Cada una de las actividades debe permitir la identificación de recursos asignados y se debe comprobar que no se presenten sobre asignaciones y que estos sean coherentes con la actividad a ejecutar (...).

El contratista se compromete a cumplir con los porcentajes de avance de obra indicados en la siguiente tabla; si el avance real de obra es menor al indicado se entiende que se genera un incumplimiento del contrato, por lo que el IDRDR aplicará la efectividad de las pólizas correspondientes.

Conforme con lo anterior, se pactó en el numeral 3.9 FLUJO DE INVERSION que “el contratista debe determinar el flujo de inversión del proyecto discriminado semanalmente y mensualmente, además del flujo acumulado semanal y determinando para cada mes conforme a las actividades programadas el valor de la inversión mensual, por lo que el flujo de inversión debe ser coherente con el cronograma de obra (...).”

a. PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Conforme con el documento aprobado por el interventor cedente consorcio SB, mediante acta del día 29 de noviembre de 2017, estableció que el plan estaba compuesto por 4 conceptos del plan de inversión del anticipo, determinado

- 1. Mano de obra con el 30%,*
- 2. Compra y suministro de materiales y elementos de ferretería por el 65%,*
- 3. Transporte de materiales, alquiler equipos con el 4.60% y,*
- 4. Pago GFM (4X MIL) por el 0.40%, tal y como ilustra el siguiente documento:*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

4	5/12/2018	\$ 286.157.892	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
5	21/12/2018	\$ 133.730.000	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
6	21/12/2018	\$ 143.060.000	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
7	20/02/2019	\$ 30.000.000	900432371	Esmecol Ingenieria SAS	Consig. Davivienda - Esmecol Ingenieria SAS 457269982080
8	20/02/2019	\$ 433.742.389	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
9	20/02/2019	\$ 326.328.688	900432371	Esmecol Ingenieria SAS	Consig. Davivienda - Esmecol Ingenieria SAS 457269982080
10	11/03/2019	\$ 200.000.000	830084028	Industrias Cruz Ferreteria SAS	Consig. BBVA - Industrias Cruz Ferreteria SAS 494003239
11	11/03/2019	\$ 90.573.886	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
12	15/03/2019	\$ 147.937.346	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
13	28/03/2019	\$ 138.331.074	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
14	16/04/2019	\$ 200.000.000	900482944	AC Ingenieria Diseño y Contruccion S.A.S	Consig. Banco de Bogota - AC Ingenieria Diseño y Construcccion SAS 592562540
15	16/04/2019	\$ 186.746.949	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
16	22/05/2019	\$ 158.734.907	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

17	30/05/2019	\$ 134.924.671	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
18	13/06/2019	\$ 40.000.000	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
19	13/06/2019	\$ 74.685.970	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
20	21/06/2019	\$ 200.000.000	830084028	Industrias Cruz Ferreteria SAS	Consig. BBVA - Industrias Cruz Ferreteria SAS 494003239
21	28/06/2019	\$ 89.977.443	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
22	28/06/2019	\$ 40.000.000	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
23	11/07/2019	\$ 20.000.000	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
24	11/07/2019	\$ 57.986.460	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
25	16/07/2019	\$ 15.000.000	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
26	16/07/2019	\$ 73.384.654	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
27	25/07/2019	\$ 20.000.000	900432371	Esmecol Ingenieria SAS	Consig. Davivienda - Esmecol Ingenieria SAS 457269982080
28	25/07/2019	\$ 30.000.000	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259
29	25/07/2019	\$ 5.353.862	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC- TRANNINGCO SAS 24076335259

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

30	31/07/2019	\$ 14.000.000	900432371	Esmecol Ingenieria SAS	Consig. Davivienda - Esmecol Ingenieria SAS 457269982080
31	31/07/2019	\$ 6.000.000	900432371	Esmecol Ingenieria SAS	Consig. Davivienda - Esmecol Ingenieria SAS 457269982080
32	31/07/2019	\$ 33.000.000	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC-TRANNINGCO SAS 24076335259
32	31/07/2019	\$ 8.364.018	900509148	Tranningco sas	Consig. Banco Caja Social BCSC-TRANNINGCO SAS 24076335259
TOTAL		\$ 4.283.710.155			

Conforme con los rubros del plan de inversión del anticipo, a continuación, se relacionan los conceptos de giro y los documentos soporte presentados por los proveedores del contratista:

GIRO	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO GIRO	RUBRO P.I.A	DOCUMENTOS SOPORTE GIRO
1	25-01-2018	Inversiones grandes proyectos de construcción SAS	\$363.023.305	Suministro de materiales anexo 1 de contrato (acero estructural, refuerzo acero, malla electrosoldada, recalce, encamisado, vigas áreas de concreto, placa de contrapiso, graderías áreas de concreto, placa ligera, escaleras de concreto, columna de concreto)	Compra suministros materiales y	1. Cuenta de Cobro Nro. 1, suscrita por Paola Mier correo contacto@igpc.com.co dirección Carrera 14ª . 119 -83 oficina 302. 2. RUT 3. Cámara de Comercio
	25-01-2018	Tranningco SAS	382.666.641	Por concepto de: Suministro materiales anexo 1 de contrato (Cubierta Standing Seam Sandwich Cal)	Compra suministros materiales y	1. Cuenta de cobro Nro. 1 suscrita por Gisel Eugenia Franco Sánchez representante legal, contactos de la factura email: contacto@asecaf.com.co 2. RUT 3. Cámara de Comercio 4. Contrato de Suministro de materiales No. 1.1
	5-12-2018	Tranningco SAS	200.000.000	Suministro de materiales anexo 1 de contrato (preliminares e inicio de obra) anexo 2 de contrato (Redes eléctricas y Redes Hidráulicas)	Compra suministros materiales y	1. Cuenta de cobro Nro. 2 de fecha 21 de noviembre suscrita por Lizeth Johana Mosquera Velandia representante legal, contactos de la factura email: contacto@tranningco.com.co 2. RUT 3. Cámara de Comercio

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

2	5-12-2018	Tranningco SAS	286.157.892	Suministro de materiales anexo 1 de contrato (preliminares e inicio de obra) anexo 2 de contrato (Redes eléctricas y Redes Hidráulicas)	Compra y suministro materiales	1. Cuenta de cobro Nro. 3 de fecha 21 de noviembre suscrita por Lizeth Johana Mosquera Velandia representante legal, contactos de la factura email: contacto@tranningco.com.co 2. RUT 3. Cámara de Comercio
3	21-12-2018	Tranningco SAS	143.060.000	Fabricación en taller mano de obra anexo 1 de contrato derivado (preliminares e inicio de obra) anexo 2 de contrato derivado (Transporte y erección montaje en sitio)	Mano de Obra	1. Cuenta de cobro Nro. 004 de fecha 17 de diciembre de 2018, suscrita por Lizeth Johana Mosquera Velandia representante legal, contactos de la factura email: contacto@tranningco.com.co 2. RUT 3. Cámara de Comercio
	21-12-2018	Tranningco SAS	133.730.000	Fabricación en taller mano de obra anexo 1 de contrato derivado (preliminares e inicio de obra) anexo 2 de contrato derivado (Transporte y erección montaje en sitio)		1. Cuenta de cobro Nro. 005 de fecha 17 de diciembre de 2018, suscrita por Lizeth Johana Mosquera Velandia representante legal, contactos de la factura email: contacto@tranningco.com.co 2. RUT 3. Cámara de Comercio
4	20/02/2019	Esmecol Ingeniería SAS	30.000.000	Transporte material e insumos	Transporte material e insumos	1. Cuenta de cobro No. 002 a favor de Esmecol Ingeniería SAS
	20/02/2019	Esmecol Ingeniería SAS	\$ 326.328.688	Estructura metálica - Reforzamiento	Compra y suministro de materiales y elementos de ferretería.	1. Cuenta de cobro No. 001 a favor de Esmecol Ingeniería SAS
5	20/02/2019	Tranningco SAS	\$ 433.742.389	Desmante tejas de asbesto, desmante estructura metálica cubierta, disposición tejas asbesto y demoliciones correspondientes a las ligas de pesas, lucha olímpica, karate Do, Gimnasio multifuerza, ajedrez.	Mano de obra	1. Cuenta de cobro No. 006 2. contrato de suministro materiales No. 11 entre el contratista y Tranningco SAS.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se realiza un resumen de los valores girados a los proveedores por concepto de anticipo, identificando el objeto social de cada proveedor y el representante legal:

- Proveedor:** INVERSIONES GRANDES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN SAS

Objeto social: Prestación de servicios de asesoría, consultoría para la realización y ejecución de actividades relacionadas con la ingeniería civil en todas sus fases (...) entre esos suministros.

Representante Legal: Paola Liccet Mier Torres

Total Girado: \$ 363.023.305

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

GIRO	VALOR	RUBRO PLAN ANTICIPO
1	\$ 363.023.305	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

SOPORTE DEL GIRO:

Contrato de suministro materiales
Fecha firma: 15 de enero de 2018
Objeto: “EL PROVEEDOR” suministrará los materiales de obra especificados en el anexo No. 1. En los tiempos y oportunidades que “EL SUMINISTRADO” solicite durante la vigencia y ejecución del presente contrato.
Valor y forma de pago: \$ 907.558.262 incluido iva
Anexo No. 1:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIALES UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN – INVERSIONES GRANDES PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES SAS Página 4 de 9	
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$907.558.262), incluido el impuesto al valor agregado IVA.	
ANEXO 1:	<ul style="list-style-type: none">• Acero Estructural (pórtico) Compleja+pint EsmaAlq• Acero Estructural (pórtico)Sencillo. Inc pint esmal• Refuerzo acero fy=60000psi• malla electrosoldada d=5.5mm@0.15 (área 6x2.35)• Malla electrosoldada d=6 mm@0.15 (área 6x2.35)• Recalce o encamisado column 4000psi gf f+aire• vigas aéreas en concreto 4000psi**• Recalce Vigas Aéreas Concreto.4000 psi• Placa de contrapiso C:210 kg/cm2**• Graderías Aéreas concreto 3000 psi sin refuerzo• Placa aérea aligerada+conc-210 - 0.50 m **• Escaleras en concreto 4000 psi**• Columna En Concreto 4000psi G.C. (Inc. formaleta).
NOTA 1: En el presente contrato, no se establece una cantidad o precio fijo por cada material a suministrar, sino un monto de dinero agotable según despachos.	

2. **Proveedor:**

Objeto social:
- TRANININGCO SAS
La sociedad prestara servicios de transporte de carga terrestre cubriendo las necesidades de logística, transporte y distribución de las empresas y personas naturales generadores de carga
- Representante**
Legal:
- Lizeth Johana Mosquera Velandia
- Total Girado:**
- \$ 2.924.358.162

NUMERO	VALOR	CONCEPTO
1	\$ 382.666.641	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
3	\$ 200.000.000	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
4	\$ 286.157.892	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

5	\$ 133.730.000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS
6	\$ 143.060.000	MANO DE OBRA
10	\$ 433.742.389	MANO DE OBRA
12	\$ 90.573.886	MANO DE OBRA
13	\$ 147.937.346	MANO DE OBRA
14	\$ 138.331.074	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
16	\$ 186.746.949	MANO DE OBRA
17	\$ 158.734.907	MANO DE OBRA
18	\$ 134.924.671	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
19	\$ 40.000.000	MANO DE OBRA
20	\$ 74.685.970	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
22	\$ 89.977.443	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
23	\$ 40.000.000	MANO DE OBRA
24	\$ 20.000.000	MANO DE OBRA
25	\$ 57.986.460	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
26	\$ 15.000.000	MANO DE OBRA
27	\$ 73.384.654	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
29	\$ 30.000.000	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
30	\$ 5.353.862	MANO DE OBRA

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

33	\$ 33.000.000	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
34	\$ 8.364.018	MANO DE OBRA
TOTAL	\$ 2.924.358.162	

SOPORTE DEL GIRO:

Contrato suministro materiales
Fecha firma contrato: 17 de enero de 2018
Objeto: “EL PROVEEDOR” suministrará las cubiertas especificadas en el anexo No. 1, de acuerdo a la necesidad, los lineamientos, dimensiones, diseños y en los tiempos y oportunidades que “EL SUMINISTRADO” solicite durante la vigencia y ejecución del presente contrato”.
Valor y forma de pago: \$1.275.555.471 incluido el impuesto de valor agregado IVA.
Anexo No. 1:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN – TRAININGCO SAS
Página 4 de 10

ANEXO 1:

• CUBIERTA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y VISTO BUENO DE LA INTERVENTORÍA


NOTA 1: En el presente contrato, no se establece una cantidad o precio fijo por las cubiertas a suministrar, sino un monto de dinero total agotable según despachos.

El contrato se pagará de la siguiente manera:

1. Treinta por ciento (30%) del valor del contrato de forma anticipada POR UN VALOR DE TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE \$382.666.641
2. Una vez entregado el equivalente al treinta por ciento (30%) de las cantidades de material pactado para el suministro, se pagará el valor restante los materiales entregados hasta completar el cien por ciento (100%) del valor del contrato. En todo caso, si por cualquier razón no se llegase a entregar el total del material, se pagará el porcentaje de entrega. Si las entregas llegasen a ser inferiores al valor del pago anticipado “EL PROVEEDOR” restituirá el valor pagado o abonado sin que haya lugar a ninguna deducción por costos de transferencia o impuestos.

Conforme con las pruebas que obran en el plenario, el contratista frente a un requerimiento efectuado por la interventoría sobre el anticipo realizado en octubre de 2019, respondió y adjunto lo siguiente.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A199289163FD0F

27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 HORA 12:35:28

AA19928916 PÁGINA: 1 DE 3

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:

NOMBRE : TRANINGCO SAS
N.I.T. : 900509148-2 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:
MATRICULA NO: 02194137 DEL 16 DE MARZO DE 2012
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE JUNIO DE 2019
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
ACTIVO TOTAL : 2,180,207,859
TAMAÑO EMPRESA : PEQUEÑA

CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 132 B NO. 95 - 22
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONTACTO@TRANINGCO.COM.CO
DIRECCION COMERCIAL : CL 132 B NO. 95 - 22
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : CONTACTO@TRANINGCO.COM.CO

CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 12 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 16 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01617191 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA JK PRO SOUND SAS.

CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02048707 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: JK PRO SOUND

Firma válida
del primer
registro
trujillo

2016, INSCRITA EL 26 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02152444 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: TRANSPORTES TRRG SAS POR EL DE: TRANINGCO SAS.

CERTIFICA:
SE ACLARA QUE POR ACTA NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NÚMERO 02048707 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: JK PRO SOUND SAS POR EL DE: TRANSPORTES TRRG SAS. SIGLA TRRG SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO. INSC.
002 2013/12/18 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/12/19 01791277
SIN NUM 2015/12/15 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2015/12/28 02048707
01 2016/07/18 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2016/10/26 02152444
002 2018/06/19 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2018/06/20 02350968

CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PRESTARÁ SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE CUBRIENDO LAS NECESIDADES DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES GENERADORES DE CARGA, CONTANDO CON PERSONAL COMPROMETIDO Y CON EXPERIENCIA PARA GARANTIZAR AL SERVICIO SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO CON TODAS LAS GARANTÍAS QUE SE REQUIEREN PARA EL EJERCICIO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. MANEJO DEL TRANSPORTE DE MASIVOS A LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS PARA SU ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, MANEJO, ALMACENAJE Y ENTREGA PUERTA A PUERTA. TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE MERCANCÍA SOLO A ENTIDADES PREESTABLECIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS ESPECIALIZADO CON VEHÍCULOS HOMOLOGADOS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EXPERIENCIA PARA PRESTAR UN ÓPTIMO SERVICIO. EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL OBJETO PRINCIPAL O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE LA MISMA. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR TODA CLASE DE INMUEBLES O RECIBIRLOS A TÍTULOS DE ARRENDAMIENTO, IMPORTAR O COMPRAR DENTRO DEL PAÍS LA MAQUINARIA QUE REQUIERA PARA LA TÉCNICA Y EFICAZ REALIZACIÓN DE SUS OBJETIVOS, HIPOTECAR O ENAJENAR TODA CLASE DE OBLIGACIONES CIVILES, COMERCIALES O BANCARIAS Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS VINCULADOS AL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL. FORMAR PARTE DE OTRA U OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS, PRESENTAR O CONTRATAR SERVICIOS A OTRAS PERSONAS O SOCIEDADES. PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, TOMAR INTERESES O PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES Y/O EMPRESAS; ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, GRABARLOS EN CUALQUIER FORMA, EFECTUAR CONSTRUCCIONES, REALIZAR PRESTAMOS CON O SIN GARANTÍA EN ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS, TOMAR O DAR EN MUTUO CON O SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS, DE CRÉDITO, ADUANERAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, CEDER, ACEPTAR, ANULAR, CANCELAR, COBRAR, RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, ADQUIRIR A CUALQUIER TÍTULO, CONCESIONES, PERMISOS DE MARCAS, PATENTES, FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES Y DEMÁS BIENES Y DERECHOS MERCANTILES Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Frente a los soportes entregados por los proveedores del contratista, se identifica que el proveedor *Traningco SAS*, se le entregó la suma de \$ 2.924.358.162 por concepto de anticipo por los rubros de 1. COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA.2. MANO DE OBRA, y 3. TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS, identificando en su cámara de comercio que su objeto social es el servicio de transporte, situación que denota una falta de idoneidad en los proveedores al suministrar materiales de ferretería, mano de obra indispensables para el manejo y control del anticipo.

Ahora bien, el interventor frente a los giros realizados a este proveedor indico lo siguiente:

❖ **Observaciones:**

- La cuenta de cobro soporte del desembolso especifica los siguiente:

Cuenta de Cobro 004

DEBE A:

TRANINGCO S.A.S

NIT : 900.509.148-2

\$(143.060.000,00)

Por concepto de: Fabricación en taller mano de obra anexo 1 de contrato derivado (Preliminares e inicio de obra) anexo 2 de contrato derivado (Transporte y erección montaje en sitio)

SON: Ciento cuarenta y tres millones sesenta mil pesos moneda corriente.

Imagen tomada del folio 343, archivo “13. Anexos informe incumplimiento contrato IDR 2937 de 2017”, adjunto a la citación a la audiencia de posible incumplimiento del contrato de obra No. 2937 remitida por el IDR mediante la cuenta de correo electrónico *camilo.quiroga@idrd.gov.co* al contratista *UT SAN ANTONIO IDR REFORZAMIENTO ASEMAIN* a las direcciones de correo electrónico: *contacto@asecaf.com.co*, *incoesas@yahoo.com*, *licitaciones@asecaf.com.co*, y *asis.licitaciones@construccionesmaja.com.co*

Dentro de los soportes allegado a esta interventoría no se evidencian el anexo 1 y el anexo 2 del contrato citado, desconociéndose la mano de obra que *TRANINGCO SAS* debía disponer para el proyecto, lo cual impide realizar la verificación exacta de la mano de obra financiada en este desembolso

3. Proveedor: Esmecol Ingeniería SAS

Objeto social:

Representante

Legal:

Total Girado: \$ 396.328.688

NUMERO	VALOR	CONCEPTO
7	\$ 30.000.000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

9	\$ 326.328.688	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
27	\$ 20.000.000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS
30	\$ 14.000.000	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS
31	\$ 6.000.000	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
TOTAL	\$ 396.328.688	

Soporte del giro:

 12 de febrero de 2019 UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN NIT. 901.118.265-1 Cra 14A No. 119 - 83 Of 302 Tel. 7500141 Cuenta de Cobro 001 DEBE A: ESMECOL INGENIERIA S.A.S NIT : 900.432.371-6 \$(326.328.688,00) Por concepto de: Anticipo según contrato de estructura metálica y reforzamiento fase 01, UDS SON: Trescientos veintiséis millones trescientos veintiocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos con cero centavos moneda corriente. Cordial saludo,  JUAN GABRIEL SANCHEZ BABATIVA C.C 79.917.530 REPRESENTANTE LEGAL	 12 de febrero de 2019 UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN NIT. 901.118.265-1 Cra 14A No. 119 - 83 Of 302 Tel. 7500141 Cuenta de Cobro 002 DEBE A: ESMECOL INGENIERIA S.A.S NIT: 900.432.371-6 \$(30.000.000,00) Por concepto de: Transporte de material e insumos. SON: treinta millones de pesos moneda corriente. Cordial saludo,  JUAN GABRIEL SANCHEZ BABATIVA C.C 79.917.530 REPRESENTANTE LEGAL
--	---

4. **Proveedor:** Industrias Cruz Ferretería SAS
Objeto social:
Representante
Legal:
Total Girado: \$ 400.000.000

NUMERO	VALOR	CONCEPTO
10	\$ 200.000.000	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
20	\$ 200.000.000	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
TOTAL	\$ 400.000.000	

5. **Proveedor:** AC INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Objeto social:
Representante

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Legal:

Total Girado: \$ 200.000.000

NUMERO	VALOR	RUBRO
14	\$ 200.000.000	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
TOTAL	\$ 200.000.000	

Conforme con los documentos que soportaron el giro por concepto de anticipo a los proveedores del contratista, es claro indicar que no se relacionaron cantidades que permitan determinar lo correspondiente en cada acta de avance de obra, de igual forma no se pueden identificar en los soportes las cantidades determinadas para el giro aprobado, toda vez que las cuentas de cobro presentadas por los proveedores, indicaban solamente valores generales, omitiendo cantidades para cada ítem contratado y los valores unitarios de la propuesta que permitieran validar lo requerido en obra y que hicieran parte del plan de inversión del anticipo.

Del mismo modo, los giros a los proveedores por suministro de ítems acero estructura, malla electrosoldada, vigas aéreas en concreto, placa de contrapiso, y una cubierta no identificada si no sujeta al requerimiento de la entidad, no cuentan con una identificación detallada de cantidades y su relación no guarda coherencia con el plan de trabajo dispuesto para el proyecto.

Es importante destacar que, dentro del acervo probatorio que obra dentro del expediente, se encontró que los proveedores del contratista también hacen parte de su personal de trabajo, tal como es el caso de la contadora del contratista de obra, la señora PAOLA MIER, que rindió testimonio en la actuación administrativa en el cual se determinó que también funge como representante legal de la empresa Inversiones Grandes Proyectos de Construcción SAS, es decir, que era la contadora del contratista de obra 2937 de 2017, y al mismo tiempo, a través de la empresa Inversiones grandes proyectos de construcción SAS era proveedora de material y recibió recursos del anticipo, lo cual determina un riesgo para el control y manejo del anticipo.

Del mismo modo, es importante indicar que, en el mes de enero de 2018, se realizó el primer giro del anticipo por el valor de \$745.689.946, los cuales se realizaron con el fin que los proveedores mantuvieran precios del año 2017 y no generar sobrecostos para el proyecto en cuanto a insumos y proveedores por el cambio de precio a 2018. Sin embargo, el contrato fue suspendido en razón a las solicitudes del IDPC, anticipo que fue girado sin contar con la licencia de construcción aprobada, y sin contar con la relación clara de materiales y cantidades a entregar por los proveedores.

Por otro lado, con el fin de garantizar el control en el manejo y correcta inversión del anticipo el contratista debía presentar informes mensuales de inversión del anticipo dentro del mes siguiente al giro de los recursos, entregando los soportes requeridos. Sin embargo, para el giro 1 se encontró que el proveedor presento factura de venta No. 16018 de fecha enero del 2019, dicha factura en primer lugar fue legalizada un año después del giro efectuado que fue soportado por una cuenta de cobro, y por otro lado, contiene el ítem del AIU por un valor total de \$ 50.269.980, situación que determina la omisión en el cumplimiento de lo pactado contractualmente, toda vez que como se identificó en el anexo técnico del contrato, la obligación de legalizar el anticipo era dentro del mes siguiente a su giro y los valores por concepto de anticipo eran sobre valores netos de costos directos y sin AIU.

Lo anterior, conforme lo establecido en el anexo técnico frente a la amortización del anticipo, la cual indica que (Los impuestos y retenciones que se causen por el desembolso del anticipo están a cargo del contratista) por lo que los valores definidos en el plan de manejo del anticipo deben estar libres de impuestos y AIU.

En este mismo orden, es importante relacionar el último informe presentado por el interventor cedente (por inhabilidad sobreviniente) del contrato de interventoría CONSORCIO SB, dentro del

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

cual se destaca las actividades realizadas por el contratista referentes a cada rubro que compone el anticipo:

a. Informe 28 marzo al 28 abril presentado el 20192100328342 de fecha 9 de septiembre de 2019, indicando como actividades realizadas las siguientes:

- Labores de desmonte de correas y canales de cubierta en modulo tres
- Realización labores desmonte de cubierta en módulo 2
- Demolición en placa anden para preparación labores excavación de cimentación

Frente al reporte de actividades en el ítem control y materiales, indica el informe que en el periodo reportado esta actividad no se generó, ya que la obra no se encontraba en ejecución.

b. Informe del 28 de abril al 28 de mayo entregado mediante oficio Nro. 20192100328362 de fecha 09 de septiembre de 2019, indicando la trazabilidad de materiales e insumos con respecto a la obra ejecutada, indicando:

9. TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS CON RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA

Para el correspondiente periodo el contratista adquirió los siguientes materiales pétreos (se adjunta certificado de materiales en informe ambiental del periodo comprendido 28 de Abril al 28 de Mayo de 2019).

MES	VOLUMEN	TIPO DE MATERIAL
Mayo	45	Arena de río = 22 m3 Grava ¾ = 23 m3 (tecniagregados)

Tabla 11. Materiales pétreos adquiridos en el periodo

Maquinaria y equipos

INFORME MENSUAL DE CALIDAD DE INTERVENTORIA –3
28 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2019

Versión: 0.0 Página 35 de 45 Código: FOPS-33

CONSORCIO
SB

Rotomartillos	4	Bosch	Demolición de estructura de concreto
Pulidora	3	Bosch	Corte de acero estructural
Taladro	2	Bosch	Perforaciones en estructura de concreto reforzado existente
Minicargador	1	Bosch	Retiro de RCD trasiego de materiales de obra a almacén

Tabla 12. Equipos y maquinaria usada en el periodo

El informe indica que las actividades realizadas en el periodo fueron las siguientes:

- Demoliciones de placa piso para destapar capiteles de cimentación de todas las columnas a intervinieren edificio ligas.
- Realización de labores de desmonte de maderamen de las ligas de boxeo, baloncesto, karate y tenis de mes
- Demolición de graderías en ligas

El Informe periodo de 28 de mayo al 28 de junio de 2019, remitido mediante oficio Nro. 202192100330052 de fecha 10 de septiembre de 2019, en donde se indicó como actividades de obra realizadas las siguientes:

- Labores de demolición de enchapes, muros divisorios, sobre-pisos mesones, desmonte de puertas y aparatos sanitarios den baños de las diferentes ligas, y desmonte de cielo raso y casetón

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

- *Desmante cubierto en módulo 1*
- *Exploración de cimentación a través de apliques para determinar estado y la tipología de esta.*
- *Continuación levantamiento tipográfico.*

De igual forma, se incluyó la verificación del siguiente material y maquinaria en el periodo:

9. TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS CON RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA


Par el correspondiente periodo el contratista adquirió los siguientes materiales pétreos (los certificados de materiales fueron adjuntados en el informe mensual ambiental).

MES	VOLUMEN	TIPO DE MATERIAL
JUNIO	45	Arena de río = 22 m3 Grava 3/4 = 23 m3 (tecnigregados)

Tabla 11. Materiales pétreos adquiridos en el periodo

Para el correspondiente periodo son conto con la siguiente maquinaria

EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
Rotomartillos	4	Bosch	Demolición de estructura de concreto
Pulidora	3	Bosch	Corte de acero estructural
Taladro	2	Bosch	Perforaciones en estructura de concreto

	INFORME MENSUAL DE CALIDAD DE INTERVENTORIA - 4 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO			CONSORCIO SB
	Versión: 0.0	Página 36 de 40	Código:FOPS-33	

EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
			reforzado existente
Minicargador	1	Bobcat	Retiro de RCD trasiego de materiales de obra a almacena

Tabla 12. Maquinaria y equipos usados en el periodo por el contratista

Fuente: Oficio Nro. 202192100330052 de fecha 10 de septiembre de 2019

Informe del Periodo del 28 de junio al 28 de julio de 2019, remitido mediante oficio Nro. 20192100330042 de fecha 10 de septiembre de 2019, en donde se indica la trazabilidad de los materiales e insumos respecto a la obra ejecutada así:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825


9. TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS CON RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA

Para el correspondiente periodo el contratista adquirió los siguientes materiales pétreos (los certificados de los materiales fueron adjuntados en el informe mensual ambiental)

MES	VOLUMEN	TIPO DE MATERIAL
JULIO	51	Arena de río = 26 m3 Grava ¾ = 25 m3 (ferreteriales)

Tabla 11 . Materiales pétreos adquiridos en el periodo

INFORME MENSUAL CALIDAD DE INTERVENTORIA # 5

	INFORME MENSUAL DE CALIDAD DE INTERVENTORIA - 5 28 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2019			CONSORCIO SB
	Versión: 0.0	Página 36 de 40	Código:FOP5-33	

EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
Rotomartillos	4	Bosch	Demolición de estructura de concreto
Pulidora	3	Bosch	Corte de acero estructural
Taladro	2	Bosch	Perforaciones en estructura de concreto reforzado existente
Minicargador	1	Bobcat	Retiro de RCD trasiego de materiales de obra a almacena

Tabla 12. Equipo usado en el periodo

Fuente. Oficio Nro. 20192100330042 de fecha 10 de septiembre de 2019.

Informe periodo del 28 de julio al 28 de agosto de 2019, entregado mediante oficio Nro. 20192100331272 de fecha 10 de septiembre de 2019, reportando las siguientes actividades:

- Se adelantaron labores de anclaje y armado de refuerzo de vigas en las diferentes ligas intervenidas
- Labores de perforación de vigas en las diferentes ligas
- Labores de anclaje y armado de refuerzo de vigas
- Labores de mezcla en sitio y fundición de vigas en concreto en ligas
- Labores de perforación y anclaje de refuerzos de 5/8" y 1 ½" par a pedestales estructura
- Puesta en sitio de material estructura metálica (85.000kg)

9. TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES E INSUMOS CON RESPECTO A LA OBRA EJECUTADA

Para el correspondiente periodo el contratista no adquirió materiales pétreos

Se manejaron los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	ACTIVIDAD DESARROLLADA
Rotomartillos	4	Bosch	Demolición de estructura de concreto
Pulidora	3	Bosch	Corte de acero estructural
Taladro	2	Bosch	Perforaciones en estructura de concreto reforzado existente
Minicargador	1	Bobcat	Retiro de RCD trasiego de materiales de obra a almacena

Tabla 11. Equipos usados en el periodo

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Del mismo modo, en el mes de agosto de 2019, el interventor advirtió sobre el cambio de destinación del recurso girado en la orden 1 y 2 del anticipo y que había sido girado desde mes de enero de 2018. Así lo consigna el informe manejo del anticipo realizado por el consorcio cedente SB mediante oficio Nro. 20192100286672 del día 08 de agosto de 2019, indicando sobre el giro No.1 que, “El contratista a la fecha no ha soportado el cambio de destinación de los recursos, esta interventoría aprobó los recursos para la adquisición de la cubierta que es parte del objeto contractual, en dicho giro. En la revisión de las facturas presentadas que soportan los recursos si se evidencia la utilización de estos en la fabricación de la estructura metálica, pero no el cambio de destinación, de acuerdo a lo presentado en el giro No.1”, de igual forma, indica en el informe presentado frente al gro No.2 que “(..) a la fecha no se ha soportado el cambio de destinación ya que esta actividad no se va a realizar y para la cual fue aprobada por parte de esta interventoría. Por lo anterior no se ha recibido por parte del contratista hacia esta interventoría ninguna solicitud de cambio de destinación de recursos asignados a actividades específicas”.

Lo anterior denota, que los proveedores no entregaron los materiales conforme los giros realizados por la ENTIDAD, lo que configura el inadecuado manejo de la inversión del anticipo.

En este sentido, es importante señalar lo presentado por el interventor en la prueba por informe frente a la pregunta de las ACTAS DE AVANCE DE OBRA Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, lo que además se encuentra identificado en los documentos del contrato de obra que conforman el acervo probatorio, en donde indico lo siguiente:

“a continuación, se relacionan las actas de obra pagadas al contratista y los valores amortizados por concepto de anticipo:

# ACTA	PERIODO	VALOR	AMORTIZACION ANTICIPO
Acta parcial No.1		46.508.779	\$ 18.203.984,00
Acta parcial No. 2		\$75.321.238	\$ 29.435.888,00
Acta parcial No. 3		\$ 166.663.880,00	\$ 65.133.014,00
Acta parcial No. 4		\$ 134.419.956,00	\$ 52.531.940,00
Acta parcial No. 5		\$ 207.234.790,00	\$ 80.988.313,00
Acta parcial No. 6		\$ 45.954.594,00	\$ 17.959.268,00
Acta parcial No. 7		\$ 396.489.253,00	\$ 154.949.831,00
Acta parcial No. 8		\$ 472.545.697,00	\$ 184.673.041,00
Acta parcial No. 9		\$ 552.236.324,00	\$ 215.816.506,00
Acta parcial No. 10		\$ 694.870.226,00	\$ 271.558.493,00
Acta parcial No. 11		\$ 553.828.533,00	\$ 216.438.748,00
Acta parcial No. 12		\$ 1.540.767.077,00	\$ 602.138.888,00
TOTAL, OBRA EJECUTADA		\$ 4.886.912.347,00	\$ 1.909.827.914,00

De acuerdo con lo anterior y los preceptos indicados que originan el anticipo, no se logró demostrar ni probar el buen manejo del anticipo por parte del contratista de las sumas entregadas a sus proveedores las cuales no se encuentran soportadas en obra y de las cuales no se amortizaron tampoco.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

INVERSIÓN DEL ANTICIPO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

Una vez revisadas las ordenes de giro mediante las cuales se desembolsó el anticipo junto con las actas parciales de obra pagadas al contratista (Actas parciales de la 1 a la 12), esta interventoría ha estimado la inversión del anticipo en las actividades de obra de la siguiente forma:

ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

Dentro de las actividades de demolición del contrato de obra pública No. 2937 de 2017 se evidencian que se han pagado mediante actas parciales los siguientes ITEMS que involucran DEMOLICIONES:

CODIGO CIO	CODIGO NP	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo
2634		MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb	hr	\$54.515	386,90	\$ 21.091.898,00
15163		Demolicion placa de contrapiso incl.cargue+retiro	m3	\$156.345	234,39	\$ 36.645.472,00
11427		Demolición quirurjica concreto (carg+retir) nudos	cm3	\$2,96	1.052.924,00	\$ 3.119.919,00
15136		DEMOLICION MUROS 0.25 - TOLETE(Trasieg+Retiro)	m2	\$24.192	441,56	\$ 10.682.103,00
10149		Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	m2	\$14.853	535,83	\$ 7.958.700,00
11558		Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*	m2	\$11.290	564,15	\$ 6.369.478,00
15120		DEMOLICION ENCHAPE DE MUROBaldosa(Trasie+Carg+ret)	M2	\$7.652	560,37	\$ 4.287.790,00
14144		Demolicion meson en concreto + Enchape hp=0.06m	m2	\$13.826	35,74	\$ 494.066,00
9		Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasi+retir+Andamios)	m2	\$14.822	132,67	\$ 1.966.490,00
15123		EscarificadoManualZapataConcretoE=6cm(Tras+carg+re	m2	\$7.818	1,08	\$ 8.443,00
12495		DEMOLICION MUROS 0.15 + Trasiego	M2	\$17.701	1.491,05	\$ 26.392.437,00
16229		Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	M3	\$229.727	40,83	\$ 9.379.783,00
843	NP 07	Demolición de escalera en concreto	m2	\$ 57.699,00	31,59	\$ 1.822.711,00
n.a.	NP 18	demolición cielo Raso Falso Inc. Andamio certificado	m2	\$ 34.478,00	1.637,40	\$ 56.454.277,00
n.a.	NP 19	DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA Inc. Andamio certificado	m2	\$ 17.559,00	1.331,00	\$ 23.371.029,00
845	NP 11	DEMOLICION MUROS DE CONCRETO(Cargue+	m3	\$ 195.737,00	31,62	\$ 6.189.204,00
n.a.	NP 21	Demolicion Manual Vigas y Columnas +retito	m3	\$ 163.802,00	12,00	\$ 1.965.624,00
13664	NP 12	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.12M	m2	\$ 18.330,00	17,78	\$ 325.907,00
13391	NP 14	Demolición de Dintel en conc. reforzado+	m	\$ 13.849,00	50,00	\$ 692.450,00
Total						\$ 219.217.781,00

Como se mostró en el capítulo **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente informe, las cuentas de cobro no permiten establecer las cantidades ejecutadas por cada orden de giro, así las cosas, la ejecución de esta

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

actividad se incluye en los desembolsos si la cuenta de cobro enuncia la actividad como se muestra:

No. Orden	Valor	Rubro		Soportes de Giro	Justificación
5	\$ 433.742.389,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 006 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIONES correspondientes a las ligas de pesas, lucha olímpica, Karate Do, Gimnasio multifuerza, ajedrez
6	\$ 90.573.886,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 007 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIONES correspondientes a las ligas de pesas, lucha olímpica, Karate Do, Gimnasio multifuerza, ajedrez
7	\$ 147.937.346,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 008 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIONES correspondientes a las ligas de pesas, lucha olímpica, Karate Do, Gimnasio multifuerza, ajedrez
8	\$ 138.331.074,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 009 a favor de Traningco SAS	Suministro de materiales: EXCAVACIONES, desmonte, DEMOLICIONES
10	\$ 158.734.907,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 011 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIÓN, escarificado manual concreto (tras+carg+ret) desmonte estructura metálica
11	\$ 134.924.671,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 012 a favor de Traningco SAS	Desmonte, DEMOLICIONES, anclaje y acero de refuerzo para cimentación
12	\$ 74.685.970,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 013 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIONES, perforaciones para anclaje, acero de refuerzo para cimentación y materiales para concreto de 4000 PSI
	\$ 40.000.000,00	1	MANO DE OBRA		
14	\$ 89.977.443,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 014 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIONES, perforaciones para anclaje, acero de refuerzo para cimentación y materiales para concreto de 4000 PSI
	\$ 40.000.000,00	1	MANO DE OBRA		
15	\$ 57.986.460,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 015 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIONES, perforaciones para anclaje, acero de refuerzo para cimentación y materiales para concreto de 4000 PSI
	\$ 20.000.000,00	1	MANO DE OBRA		
16	\$ 15.000.000,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro	DEMOLICIONES,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

	\$ 73.384.654,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	No. 016 a favor de Traningco SAS	perforaciones para anclaje, acero de refuerzo para cimentación y materiales para concreto de 4000 PSI
18	\$ 30.000.000,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 017 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIONES, perforaciones para anclaje, acero de refuerzo para cimentación y materiales para concreto de 4000 PSI
	\$ 5.353.862,00	1	MANO DE OBRA		
19	\$ 8.364.018,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 018 a favor de Traningco SAS	DEMOLICIONES, perforaciones para anclaje, acero de refuerzo para cimentación y materiales para concreto de 4000 PSI
	\$ 33.000.000,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA		

Nota 1: Para el ITEM 2634: MINICARGADOR BOBCAT+Oper C/Comb, se tiene en cuenta en las demoliciones considerando que las memorias de cuantificación anexas al presente, que incluyen la siguiente descripción “Cargue de residuos de demolición y construcción para transporte a escombrera, apoyo en el traslado de material de excavación, movimiento e ingreso de materiales granulares a almacén”.

ACTIVIDADES DE DESMONTE

Dentro de las actividades de desmonte del contrato de obra pública No. 2937 de 2017 se evidencian que se han pagado mediante actas parciales los siguientes ITEMS que involucran DESMONTES:

CODIGO CIO	CODIGO NP	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo
10016		Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	ml	\$6.914	118,54	\$ 819.574,00
21		DESMONTE VENTANAS(Trasiego+Retiro)	m2	\$11.334	12,38	\$ 140.256,00
19		Desmonte Aparatos Sanitarios	und	\$21.348	94,00	\$ 2.006.726,00
14908		DESMONTE PUERTA+ MARCO METAL.(Trasiego+Retiro)	und	\$16.924	81,00	\$ 1.370.863,00
14056		DESMONTE MARCO+ PUERTA(Trasiego+retiro)	m2	\$8.332	34,29	\$ 285.712,00
11221		Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**	und	\$17.172	246,00	\$ 4.224.349,00
11299		Desmonte y retiro de red electrica Interna**	mL	\$4.682	4.228,02	\$ 19.794.313,00
13789		Desmonte estruc metal Cubierta para coliseos*	kg	\$7.664,5520	17.328,68	\$ 132.816.585,00
16198		DESMONTE MANUAL DE CASETON (Cargue + retiro)	m2	\$8.885	2.367,27	\$ 21.034.021,00
10791		Desmonte y reinstalacion señales cívicas **	und	\$33.354	101,00	\$ 3.368.718,00
10948		Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+ transporte	m2	\$31.327	4.948,85	\$ 155.032.065,00
n.a.	NP 17	Desmonte de ventanas (Trasiego+Retiro)Inc. Andamio certificado	m2	\$ 6.543,00	9,48	\$ 62.028,00
12256	NP 08	Desmonte Alfaja Perim.concreto a>=0.50m**	m	\$ 9.917,00	13,92	\$ 138.045,00
12785	NP 10	Desmonte Divisiones Metálicas +cargue y retiro	m2	\$ 21.828,00	305,51	\$ 6.668.672,00
n.a.	NP 20	Desmonte Columnas en Metal 0.20x0.20	UND	\$ 43.194,00	6,00	\$ 259.164,00

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

n.a.	NP 22	Desmonte division, panel Dry Wall inc. Andamio certificado	m2	\$ 17.299,00	154,75	\$ 2.677.020,00
14142	NP 13	Desmonte Piso Machimbre Est.	m2	\$ 7.827,00	1.862,56	\$ 14.578.257,00
n.a.	NP 23	Desmonte entrepiso metálico Inc. Andamio certificado	m2	\$ 12.695,00	104,13	\$ 1.321.930,00
11615	NP 16	DESMONTE Y RETIRO PUERTA VIDRIO	m2	\$ 5.698,00	10,24	\$ 58.348,00
Total						\$ 366.656.646,00

Como se mostró en el capítulo **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente informe, las cuentas de cobro no permiten establecer las cantidades ejecutadas por cada orden de giro, así las cosas, la ejecución de esta actividad se incluye en los desembolsos si la cuenta de cobro enuncia la actividad como se muestra:

No. Orden	Valor		Rubro	Soportes de Giro	Justificación
5	\$ 433.742.389,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 006 a favor de Traningco SAS - Contrato de suministro de materiales No 11 entre UT San Antonio IDRD Reforzamiento ASEMAIN y Traningco SAS	DESMONTE tejas de asbesto, desmonte estructura metálica cubierta, disposición tejas asbesto y demoliciones correspondientes a las ligas de pesas, lucha olímpica, Karate Do, Gimnasio multifuerza, ajedrez
6	\$ 90.573.886,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 007 a favor de Traningco SAS	DESMONTE tejas de asbesto, desmonte estructura metálica cubierta, disposición tejas asbesto y demoliciones correspondientes a las ligas de pesas, lucha olímpica, Karate Do, Gimnasio multifuerza, ajedrez
7	\$ 147.937.346,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 008 a favor de Traningco SAS	DESMONTE tejas de asbesto, desmonte estructura metálica cubierta, disposición tejas asbesto y demoliciones correspondientes a las ligas de pesas, lucha olímpica, Karate Do, Gimnasio multifuerza, ajedrez
8	\$ 138.331.074,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 009 a favor de Traningco SAS	Suministro de materiales: Excavaciones, DESMONTE, demoliciones
9	\$ 186.746.949,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 010 a favor de Traningco SAS	Demolición, escarificado manual concreto (tras+carg+ret) DESMONTE estructura metálica
10	\$ 158.734.907,00	1	MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 011 a favor de Traningco SAS	Demolición, escarificado manual concreto (tras+carg+ret) DESMONTE estructura metálica

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

11	\$ 134.924.671,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 012 a favor de Traningco SAS	DESMONTE, demoliciones, anclaje y acero de refuerzo para cimentación
----	-------------------	---	---	--	--

ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN

Dentro de las actividades de excavación del contrato de obra pública No. 2937 de 2017 se evidencian que se han pagado mediante actas parciales los siguientes ITEMS que involucran EXCAVACION:

CODIGO CIO	CODIGO NP	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo
27		EXCAVACION ZANJA h=2M Material Compactado	M3	\$ 47.675,00	4,12	\$ 196.422,00
106086		Vale Excavación RCD-Arcilla/Recebo (Vj:15m3)	M3	\$ 4.316,00	104,51	\$ 451.070,00
106089		Vale Excavación RCD-Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	\$ 5.570,00	10,00	\$ 55.696,00
12175	NP 02	Excavación manual con retiro en recebo **	m3	\$ 40.932,00	80,53	\$ 3.296.254,00
13195	NP 03	Excavación manual con retiro suelo blando**	m3	\$ 34.193,00	133,84	\$ 4.576.391,00
Total						\$ 8.575.833,00

Como se mostró en el capítulo **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente informe, las cuentas de cobro no permiten establecer las cantidades ejecutadas por cada orden de giro, así las cosas, la ejecución de esta actividad se incluye en los desembolsos si la cuenta de cobro enuncia la actividad como se muestra:

No. Orden	Valor	Rubro	Soportes de Giro	Justificación
8	\$ 138.331.074,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 009 a favor de Traningco SAS	Suministro de materiales: EXCAVACIONES, desmonte, demoliciones

ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA

Dentro de las actividades de estructura del contrato de obra pública No. 2937 de 2017 se evidencian que se han pagado mediante actas parciales los siguientes ITEMS que involucran ESTRUCTURA:

CODIGO CIO	CODIGO NP	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo
11774		ACERO DE REFUERZO 60000 **	kg	\$2.851	34.266,71	\$ 97.711.177,00
14492		Malla electrosoldada d=6 mm @0.15 (area 6x2.35)**	kg	\$2.956	4.513,10	\$ 13.341.563,00
Total						\$ 111.052.740,00

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Como se mostró en el capítulo **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente informe, las cuentas de cobro no permiten establecer las cantidades ejecutadas por cada orden de giro, así las cosas, la ejecución de esta actividad se incluye en los desembolsos si la cuenta de cobro enuncia la actividad como se muestra:

No. Orden	Valor	Rubro	Soportes de Giro	Justificación
1	\$ 363.023.305,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 001 a favor de Inversiones Grandes proyectos de construcción SAS	Suministro de materiales: acero estructural, REFUERZO ACERO, MALLA ELECTROSOLDADA, Recalce o encamisado, vigas aéreas de concreto, placa de contrapiso, graderías áreas de concreto, placa aérea, ligera, escaleras de concreto, columna en concreto.
11	\$ 134.924.671,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 012 a favor de Traningco SAS	Desmante, demoliciones, anclaje y ACERO DE REFUERZO para cimentación
12	\$ 74.685.970,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 013 a favor de Traningco SAS	Demoliciones, perforaciones para anclaje, ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIÓN y materiales para CONCRETO DE 4000 PSI
	\$ 40.000.000,00	1 MANO DE OBRA		
14	\$ 89.977.443,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 014 a favor de Traningco SAS	Demoliciones, perforaciones para anclaje, ACERO DE REFUERZO para cimentación y materiales para CONCRETO DE 4000 PSI
	\$ 40.000.000,00	1 MANO DE OBRA		
15	\$ 57.986.460,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 015 a favor de Traningco SAS	Demoliciones, perforaciones para anclaje, ACERO DE REFUERZO para cimentación y materiales para CONCRETO DE 4000 PSI
	\$ 20.000.000,00	1 MANO DE OBRA		
16	\$ 15.000.000,00	1 MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 016 a favor de Traningco SAS	Demoliciones, perforaciones para anclaje, ACERO DE REFUERZO para cimentación y materiales para CONCRETO DE 4000 PSI
	\$ 73.384.654,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA		
18	\$ 30.000.000,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cuenta de cobro No. 017 a favor de Traningco SAS	Demoliciones, perforaciones para anclaje, ACERO DE REFUERZO para cimentación y materiales para CONCRETO DE 4000 PSI
	\$ 5.353.862,00	1 MANO DE OBRA		
19	\$ 8.364.018,00	1 MANO DE OBRA	Cuenta de cobro No. 018 a favor de Traningco SAS	Demoliciones, perforaciones para anclaje, ACERO DE REFUERZO para cimentación y materiales para CONCRETO DE 4000 PSI
	\$ 33.000.000,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA		

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

ACTIVIDADES DE ESTRUCTURA METÁLICA

Dentro de las actividades de estructura metálica del contrato de obra pública No. 2937 de 2017 se evidencian que se han pagado mediante actas parciales los siguientes ITEMS que involucran ESTRUCTURA METÁLICA:

CODIGO CIO	CODIGO NP	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo
n.a.	NP 01	Suministro, instalación-montaje Acero estructural ASTM A57 (Grado 50) (SUMINISTRO) (\$4440)	Kg	\$ 4.440,00	149.862,96	\$ 665.391.522,00
		Suministro, instalación-montaje Acero estructural ASTM A57 (Grado 50) (FABRICACION) (\$4390)	Kg	\$ 4.390,00	74.931,48	\$ 328.949.187,00
		Suministro, instalación-montaje Acero estructural ASTM A57 (Grado 50) (SUMINISTRO) (\$4440)	Kg			\$ 994.340.709,00

Como se mostró en el capítulo **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente informe, las cuentas de cobro no permiten establecer las cantidades ejecutadas por cada orden de giro, así las cosas, la ejecución de esta actividad se incluye en los desembolsos si la cuenta de cobro enuncia la actividad como se muestra:

No. Orden	Valor	Rubro	Entidad	Soportes de Giro	Justificación
4	\$ 326.328.688,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Esmecol Ingenieria SAS	Cuenta de cobro No. 001 a favor de Esmecol Ingenieria SAS - Contrato estructura metálica	ESTRUCTURA METÁLICA - REFORZAMIENTO
6	\$ 200.000.000,00	2 COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cruz Ferreterias SAS	Cuenta de cobro No. 001 a favor de Cruz Ferreterias SAS - Anticipo factura proforma 201903 02	Lamina Plancha A-572 Gr50 6 mm 8x20, Lamina Plancha A-572 Gr50 8 mm 8x20, Lamina Plancha A-572 Gr50 9 mm 8x20, Lamina plancha A-572 Gr50 1/2 8x20, Lamina Plancha A-572 Gr50 15 mm 8x20, Lamina Plancha A-572 Gr50 19 mm 8x20, Lamina Plancha A-572 Gr50 25 mm 8x20, Lamina Plancha A-572 Gr50 31,75 mm 8x20

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

9	\$ 200.000.000,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	AC Ingeniería, diseño y construcción	Cuenta de cobro No. 27-2019 AC a favor de AC Ingeniería, diseño y construcción	Cimentación en obra y suministro de materiales ESTRUCTURA METÁLICA UDS
13	\$ 200.000.000,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Cruz Ferreterías SAS	Cuenta de cobro No. 002 a favor de Cruz Ferreterías SAS - Anticipo factura de venta CF-162	Anticipo factura No. CF-162 Compra de láminas (varias) Acero A572G50
17	\$ 20.000.000,00	3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS	Esmecol Ingeniería SAS	Cuenta de cobro No. 97 a favor de Esmecol Ingeniería SAS	Transporte ELEMENTOS ESTRUCTURALES obra reforzamiento estructural
20	\$ 6.000.000,00	2	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA	Esmecol Ingeniería SAS	Cuenta de cobro No. 98 a favor de Esmecol Ingeniería SAS	Transporte y materiales de ESTRUCTURA METÁLICA
	\$ 14.000.000,00	3	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALQUILER DE EQUIPOS			

Nota 1: Para el ítem NP 01: Suministro, instalación-montaje Acero estructural ASTM A57 (Grado 50), se tiene en cuenta el suministro de la totalidad de la estructura metálica que se pagó al contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN para la Unidad Deportiva el Salitre y la mitad del costo de la fabricación, lo anterior teniendo en cuenta que las órdenes de giro que enuncian estructura metálica suman un valor de: \$996.328.688,00.

Nota 2: La orden de giro No. 1 NO es tenida en cuenta pues el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN no demostró el cambio de proveedor o el cambio de Rubro.
CONSOLIDADO - ANTICIPO INVERTIDO EN OBRA

En consideración a lo expuesto en los capítulos 0, 0, 0, 0, **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, 0, 0 del presente informe, se muestra el consolidado de actividades realizadas en obra con recursos del anticipo:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO 2937 DE 2017	VALOR PAGADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES	GIROS DEL ANTICIPO RELACIONADOS
DEMOLICIONES	\$ 219.217.781,00	5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 19
DESMONTES	\$ 366.656.646,00	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
EXCAVACIONES	\$ 8.575.833,00	8
ESTRUCTURA	\$ 111.052.740,00	1, 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 19
ESTRUCTURA METÁLICA	\$ 994.340.709,00	4, 6, 9, 13, 17, 20
TOTAL	\$ 1.699.843.709,00	

Nota 1: La columna “Valor pagado mediante actas parciales” corresponde al costo directo de las actividades desarrolladas en la obra, en consideración a que el anticipo corresponde al 50% de los COSTOS DIRECTOS del contrato de obra pública No. 2937 de 2017.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Finalmente, de acuerdo con lo solicitado por la entidad en el Anexo 10 – Memorias de cantidades del presente informe, se remiten las copias de las memorias de cada uno de los ítems pagados mediante actas parciales de obra que se relacionan con los recursos del anticipo, en las cuales se evidencia la actividad y la zona de intervención (módulo A, B o C) y el listado consolidado que muestra la sumatoria de los ítems.

Del mismo modo, conforme lo indico el interventor manifestó que de la relación de las actas de obra los ítems que no corresponden a rubros del anticipo obedecieron a los siguientes:

ITEM 12508: Día de Trasiego con 2 ayudantes**

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	12508		
Dia de Trasiego con 2 ayudantes**			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 1	día	144,00	En la memoria, por error secretarial, está mal digitado el ITEM – El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100104292 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 2	día	128,00	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100104292 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 3	día	398,00	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100104302 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 6	día	172,53	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100104302 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 7	día	151,00	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100253632(CONSORCIO SB)
Acta parcial 9	día	75,50	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100317132 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 11	día	5,00	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100450002 (CONSORCIO SANTA PAULA 008)
Total		1074,03	
Valor pagado actas parciales		\$	100.336.545,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo para TRASIEGO, por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.

En concordancia, para este ítem en el capítulo estructura se presentan las siguientes cantidades, sin embargo, por lo expuesto las mismas no son tenidas en cuenta:

ITEM	12508		
Día de Trasiego con 2 ayudantes**			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 10	día	396,00	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

		20192100352732 (CONSORCIO SB)
Total	396,00	
Valor pagado actas parciales	\$	36.994.564,00

ITEM 13789: Desmonte estrucmetal Cubierta para coliseos*

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	13789		
Desmonte estruc metal Cubierta para coliseos*			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 4	kg	10548,15	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100181552 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 5	kg	11409,70	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100195242 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 11	kg	24136,20	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100450002 (CONSORCIO SANTA PAULA 008)
Acta parcial 12	kg	5892,23	Se anexa memoria de cantidades (Anexo 11)
Total		51986,28	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100450032 (CONSORCIO SANTA PAULA 008)
No realizado con el anticipo		34657,52	
Valor pagado actas parciales		\$ 265.633.169,33	

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo para DESMONTES, NO ES POSIBLE EVIDENCIA A CIENCIA CIERTA LA CANTIDAD PACTADA, por tanto, NO se considera realizada con recursos del anticipo la totalidad de la actividad.

ITEM 12500: Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	12500		
Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
	m3		En la memoria, por error secretarial, está mal digitado el ITEM – El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100104292 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 1		18,00	
Total	m3	18,00	
Valor pagado actas parciales		\$	1.100.922,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS PARA ACTIVIDADES DE RELLENOS, por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.

ITEM 12724: Relleno material seleccionado excava (Apiso+Retro)

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	12724		
Relleno material seleccionado excava (Apiso+Retro)			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 11	m3	4,12	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100450002 (CONSORCIO SANTA PAULA 008)
Total	m3	4,12	
Valor pagado actas parciales	\$		103.784,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS PARA ACTIVIDADES DE RELLENOS, por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.

ITEM 0.6: Puente de adherencia sikadur 32 primer*

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	0,6		
Puente de adherencia sikadur 32 primer*			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 7	m2	819,00	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100253632(CONSORCIO SB)
Acta parcial 9	m2	23,76	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100317132 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 10	m2	189,03	No fue posible ubicar la memoria correspondiente a este ítem, no obstante, se aclara que la documentación reposa en los archivos de la entidad, pues se allegó la información mediante radicado IDRD 20192100352732 (Enviado por el CONSORCIO SB)
Acta parcial 11	m2	48,70	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100450002 (CONSORCIO SANTA PAULA 008)
Total	m2	1080,49	
Valor pagado actas parciales		\$	46.255.648,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD PUENTE ADHERENCIA SIKADUR, por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.

ITEM 14116: Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2" **

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	14116
Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2" **	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 7	M3	15,30	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100253632 (CONSORCIO SB)
Total	M3	15,30	
Valor pagado actas parciales	\$		8.586.032,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD PLACA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI, por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.

ITEM 11387: Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin refuer**

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	11387		
Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin refuer**			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 7	M3	197,00	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100253632(CONSORCIO SB)
Acta parcial 9	M3	20,28	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100317132 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 10	M3	14.73	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100352732 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 11	M3	13.87	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100450002 (CONSORCIO SANTA PAULA 008)
Total	M3	245.88	
Valor pagado actas parciales		\$	159.066.582,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin refuer**, por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.

ITEM 11528 – NP 04: Cerram.obra vara roll.Teja de zinc y polis.h=3.0**

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	11528 - NP 04		
Cerram.obra vara roll.Teja de zinc y polis.h=3.0**			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 8	m	91,13	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100281302 (CONSORCIO SB)
Total	m	91,13	
Valor pagado actas parciales		\$	8.789.944,00

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

No obstante, la actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo, pues el cerramiento es una actividad incluida en los costos administrativos del contrato de acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico del contrato de obra pública No. 2937 de 2017 como se muestra en la siguiente imagen:

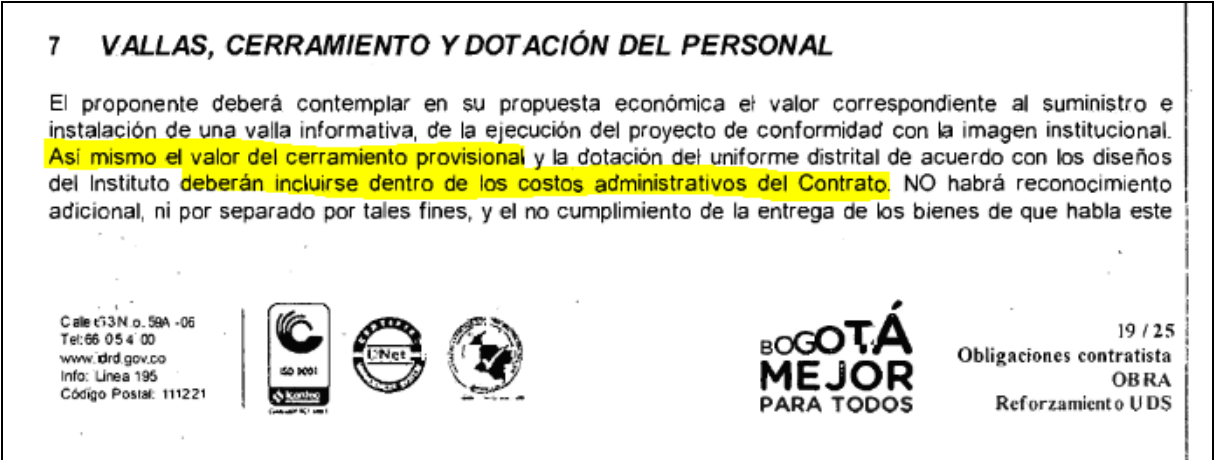


Imagen tomada del Anexo técnico, pág 19, del contrato 2937 de 2017.

ITEM 10526 – NP 06: Cerramiento lona h=2,20 mts(Exc+base conc)**

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	10526 - NP 06		
Cerramiento lona h=2,20 mts(Exc+base conc)**			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 8	m	148,72	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100281302 (CONSORCIO SB)
Total	m	148,72	
Valor pagado actas parciales		\$	2.882.788,00

No obstante, la actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo, pues el cerramiento es una actividad incluida en los costos administrativos del contrato de acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico del contrato de obra pública No. 2937, tal y como lo muestra la imagen de la página 19.

ITEM 17344 – NP 09: ANDENES e=0.10m CONCRETO F'C 21 MPA

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	17344 -NP 09		
ANDENES e=0.10m CONCRETO F'C 21 MPA			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 8	m2	30,00	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100281302 (CONSORCIO SB)
Total	m2	30,00	
Valor pagado actas parciales		\$	1.528.650,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS PARA CONCRETO DE 21 MPa (3000 PSI), por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.
ITEM 11379 – NP 30: Abujardado mecánico "Abuzard" superficie m2

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	11379 - NP 30		
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 8	m2	782,64	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100281302 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 9	m2	57,20	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100317132 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 10	m2	211,48	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100352732 (CONSORCIO SB)
Acta parcial 11	m2	48,70	El original firmado de la memoria reposa en el IDRD bajo radicado 20192100450002 (CONSORCIO SANTA PAULA 008)
Total	m2	1100,02	
Valor pagado actas parciales		\$	16.623.502,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS PARA ABUJARDADO MECÁNICO, por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.

ITEM 730 – NP 31: ASEO GENERAL

En lo correspondiente a esta actividad se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

ITEM	730 - NP 31		
ASEO GENERAL			
ACTA PARCIAL	UN	CANT	OBSERVACIONES
Acta parcial 10	m2	9600,00	No fue posible ubicar la memoria correspondiente a este ítem, no obstante, se aclara que la documentación reposa en los archivos de la entidad, pues se allegó la información mediante radicado IDRD 20192100352732 (Enviado por el CONSORCIO SB)
Total	m2	9600,00	
Valor pagado actas parciales		\$	34.454.400,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS por CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA ESTA ACTIVIDAD, por tanto, NO se considera realizada con recursos del anticipo.

ACTIVIDADES DE ANCLAJE

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

En lo correspondiente a estas actividades se evidencia su ejecución y pago en actas parciales como se muestra en la siguiente tabla:

CODIGO CIO	CODIGO NP	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo
12525		Anclaje epóxico 1/2" Estructural 0.15m Anchorfix4**	und	\$ 17.641	60,00	\$ 1.058.479,00
N.A.	NP 25	Anclaje epoxico 3/4" estructural 0.30m + adhesivo	UND	\$ 25.758,00	5.885,00	\$ 151.585.830,00
N.A.	NP 26	Anclaje epoxico 3/4" estructural 0.15m + adhesivo	UND	\$ 10.595,00	8.940,00	\$ 94.719.300,00
N.A.	NP 27	Anclaje epoxico 5/8" estructural 0.15m + adhesivo Inc planta eléctrica	UND	\$ 15.396,00	968,00	\$ 14.903.328,00
N.A.	NP 28	Anclaje epoxico 7/8" estructural 0.35m + adhesivo Inc planta eléctrica	UND	\$ 31.976,00	890,00	\$ 28.458.640,00
N.A.	NP 29	Anclaje epoxico 3/8" estructural 0.15m + adhesivo Inc. Planta eléctrica	UND	\$ 10.270,00	11.718,00	\$ 120.343.860,00
Total						\$411.069.437,00

No obstante, una vez revisada cada una de las cuentas de cobro mediante las cuales el contratista UT SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN solicitó el desembolso del anticipo NO SE EVIDENCIAN DESEMBOLSOS REALIZADOS PARA ANCLAJE EPÓXICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE CADA ITEM, por tanto, esta actividad NO se considera realizada con recursos del anticipo.

ITEM – NP 01: Suministro, instalación-montaje Acero estructural ASTM A57 (Grado 50)

En resumen, de los anteriormente expuesto es posible determinar que, de las actividades ejecutadas en obra, no se consideran realizadas con recursos del anticipo las enunciadas a continuación:

CODIGO CIO	CODIGO NP	DESCRIPCION	UN D	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo
12500		Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD exten+comp	m3	\$ 61.162,00	18,00	\$ 1.100.922,00
13789		Desmonte estruc metal Cubierta para coliseos*	kg	\$7.664,55	34.657,36	\$265.633.169,00
12508		Día de Trasiego con 2 ayudantes**	dd	\$93.421,00	1.074.03	\$100.336.545,00
12724		Relleno material seleccionado excava (Apiso+Retro)	M3	\$ 25.190,00	4,12	\$ 103.784,00
0,6		Puente de adherencia sikadur 32 primer*	m2	\$ 42.810,00	1.080,49	\$ 46.255.648,00
14116		Placa contrapiso 3000 psi sin reforz.Grav-1/2" **	M3	\$561.179,00	15.30	\$8.586.032,00
11387		Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin refuer**	M3	646.928,00	245,88	\$159.066.582
12508		Día de Trasiego con 2 ayudantes**	dd	\$93.421,00	396,00	\$36.994.564,00
11528	NP 04	Cerram.obra vara roll.Teja de zinc y polis.h=3.0**	m	\$ 96.455,00	91,13	\$ 8.789.944,00
10526	NP 06	Cerramiento lona h=2,20	m	\$ 19.384,00		\$ 2.882.788,00


INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

		mts(Exc+base conc)**			148,72	
17344	NP 09	ANDENES e=0.10m CONCRETO F'C 21 MPA	m2	\$ 50.955,00	30,00	\$ 1.528.650,00
11379	NP 30	Abujardado mecánico "Abuzard" superficie m2	m2	\$ 15.112,00	1.100,02	\$ 16.623.502,00
730	NP 31	ASEO GENERAL	m2	\$ 3.589,00	9.600,00	\$ 34.454.400,00
12525		Anclaje epóxico 1/2"Estructural 0.15m Anchorfix4**	und	\$ 17.641	60,00	\$ 1.058.479,00
N.A.	NP 25	Anclaje epoxico 3/4" estructural 0.30m + adhesivo	UN D	\$ 25.758,00	5.885,00	\$ 151.585.830,00
N.A.	NP 26	Anclaje epoxico 3/4" estructural 0.15m + adhesivo	UN D	\$ 10.595,00	8.940,00	\$ 94.719.300,00
N.A.	NP 27	Anclaje epoxico 5/8" estructural 0.15m + adhesivo Inc planta eléctrica	UN D	\$ 15.396,00	968,00	\$ 14.903.328,00
N.A.	NP 28	Anclaje epoxico 7/8" estructural 0.35m + adhesivo Inc planta eléctrica	UN D	\$ 31.976,00	890,00	\$ 28.458.640,00
N.A.	NP 29	Anclaje epoxico 3/8" estructural 0.15m + adhesivo Inc. Planta eléctrica	UN D	\$ 10.270,00	11.718,0 0	\$ 120.343.860,00
n.a.	NP 01	Suministro, instalación-montaje Acero estructural ASTM A57 (Grado 50) (FABRICACION) (\$4390)	kg	\$ 4.390,00	74.931,4 8	\$ 328.949.187,00
		Suministro, instalación-montaje Acero estructural ASTM A57 (Grado 50) (MONTAJE) (\$2075)	kg	\$ 2.075,00	149.862, 96	\$ 310.965.642,00
		Descuento por concepto de ajuste a estructura metálica izada(TORQUE)(\$2075)	%	\$ 2.075,00	- 14.986,3 0	\$ - 31.096.564,00
		TOTAL, Suministro, instalación- montaje Acero estructural ASTM A57 (Grado 50)	kg			\$ 608.818.265,00
TOTAL, OBRA EJECUTADA NO CONSIDERADA EN LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO			\$ 1.702.244.232,00			

Obteniéndose un valor total de \$1.702.244.232,00 correspondiente a actividades ejecutadas y pagadas mediante acta parcial de obra, que NO se consideran realizadas con recursos del anticipo”

Adicional a lo anterior, no se debe dejar por fuera que el contrato contemplaba un documento de plan de adquisidores, dentro de lo cual es importante tener en cuenta, que el contratista no cumplió con la entrega del plan de adquisidores, bajo el cual, la interventoría y el IDRD hubieran podido hacer seguimiento a las cantidades que reflejaban los dineros entregados por concepto de anticipo en obra, tal y como en diferentes requerimientos el interventor realizo al contratista:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825



CONSORCIO SANTA PAULA 008

NIT 901.326.500-1

6. Componente de calidad


Para este componente esta interventoría ha venido requiriendo la entrega por parte del contratista UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN de:

- Asistencia del profesional de calidad, de acuerdo a los términos establecidos contractualmente.
- Soportes de calidad de los materiales.
- Liberación de actividades ejecutadas hasta el 28/08/2019, las cuales se generaron por parte del CONSORCIO SB; esto con el fin de dar cierre a las obras antes ejecutadas y liberadas por dicha interventoría.
- Plan de Inspección y ensayos actualizado, correspondiente a las actividades a ejecutar a partir del reinicio de las actividades de obra del contrato 2937 de 2017
- Trazabilidad Grafica de las actividades ejecutadas en el periodo de octubre.
- Trazabilidad y cantidad de materiales ingresados a obra a partir del 07 de octubre del 2019.
- Plan de compras y adquisiciones.
- Hojas de vida de elementos estructurales.
- Control de cambios (este si fue solicitado desde el inicio del contrato, dado que el mismo permite conocer la trazabilidad de los cambios a la fecha generados, especialmente en el componente de diseño estructural y arquitectónico, toda vez que la construcción tiene componente patrimonial).
- Informe mensual de calidad del mes de octubre subsanando observaciones.
- PNC abierto sin obtener respuesta.

REQUERIMIENTO	MEDIO DE SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	FECHA ACTUAL	DIAS DE ATRASO	OBSERVACIONES
Asistencia de Profesional de calidad	Actas de comité y mesas de trabajo	16/10/2019	21/11/2019	-36	Se presento por parte del contratista hoja de vida del profesional de calidad la misma fue avalada por esta interventoría y mediante comité de seguimiento del 07/11/2019 se citó a mesa de trabajo a la cual no se hizo presente, sin embargo, cabe resaltar que esta solicitud se realizó desde el comité del 16/10/2019.
Soportes de calidad de los materiales.	Acta Comité	10/10/2019	21/11/2019	-42	El contratista remitió mediante calidad de octubre cert materiales, sin embargo, no de validar toda vez que no s contra que parámetros y tra

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48 - 55, Bogotá D. C.

TELEFONO: 7653016 - 301-3942384. Email: proyectos@colinsas.com - civil.delgado@hotmail.com



CONSORCIO SANTA PAULA 008

NIT 901.326.500-1

Liberación de actividades ejecutadas hasta el 28/08/2019	Acta comité	10/10/2019	21/11/2019		deben presentar los ensayos de dichos materiales. A la fecha del presente informe se cuenta con una información preliminar que requiere de un complemento con respecto a la ubicación y el detalle.
Plan de Inspección y ensayos actualizado	Acta comité	10/10/2019	21/11/2019	-42	A la fecha no se cuenta con un documento que cumpla con los mínimos requerimientos de un plan de inspección y ensayos como son parámetros de aceptación y frecuencia de toma de ensayos.
Trazabilidad Grafica de las actividades ejecutadas en el periodo de octubre	Acta comité	13/11/2019	21/11/2019	-8	A la fecha no se cuenta con esta trazabilidad.
Plan de compras y adquisiciones	Acta comité	10/10/2019	21/11/2019	-42	A la fecha no se cuenta con este insumo.
Hojas de vida de elementos estructurales.	Acta comité	10/10/2019	21/11/2019	-42	A la fecha no se cuenta con este insumo.
Control de cambios	Acta comité	10/10/2019	21/11/2019	-43	A la fecha no se cuenta con este insumo.
Informe mensual de calidad del mes de octubre subsanando observaciones	Lista de chequeo	13/11/2019	21/11/2019	-8	A la fecha no se cuenta con este informe.
PNC	OFICIO	24/10/2019	21/11/2019	-28	A la fecha no se cuenta con el tratamiento del PNC.

7. Componente SST

Para este componente esta interventoría ha venido requiriendo la entrega por parte del contratista UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN de:

- Listado de personal que labora y laboro en la obra con fechas de ingreso, fechas de retiro, fechas de afiliaciones, fechas de pago de seguridad social, fechas de examen médico, etc.
- Actualización al Plan De Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Examen de egreso, paz y salvos o cartas de traslado de proyectos, de los trabajadores que realizaron actividades puntuales en le proyecto que ya fueron retirados.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

CONSORCIO SANTA PAULA 008
NIT 901.326.500-1

IDRD-CES2999-2019-00020

Bogotá D. C., 17 de octubre de 2019

Señor:
RAFAEL PALACIOS DORADO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SAN ANTONIO

Referencia: CONTRATO DE OBRA No.2937 de 2017 cuyo objeto es "CONTRATAR POR LE SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALTIRE DE BOGOTA DC, PARQUE SIMON BOLIVAR - 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".

Asunto: **OBSERVACIONES OFICIO UT S-A 2937:246 ANTICIPO**

Cordial Saludo,

De manera atenta esta interventoría se permite realizar las siguientes observaciones para que en un plazo no mayor a tres (3) días los remitan a esta interventoría para la respectiva revisión; Por medio de comunicado UT S-A 2937:246 se remitieron algunas aclaraciones con las siguientes observaciones:

- Se solicita remitir FORMULARIO DE COMPRAS (Se remite por correo) totalmente diligenciado para realizar la respectiva clasificación de orden de giro con su debida legalización. Donde se relaciona el número de órdenes, rubros, cantidad de materiales y el número de factura legalizada. Lo anterior con el fin de que la información sea clara, el cuadro adjunto no es claro ya que no indica a que orden de pago pertenece cada factura. El oficio mencionado UT- S-A 2937:316 no tiene soportes para verificar la notificación que se le hizo a la interventoría respecto al cambio de materiales con la debida legalización.
- Se requiere hacer aclaración del destino del dinero de las órdenes de giro No 1,2,3 ya que no es claro e indican que se cambiaría de proveedor porque la actividad o los materiales no realizarían. Enviar soportes de destinación de los recursos con soporte de devolución del dinero.

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48 - 55, Bogotá D. C.
TELEFONO: 7653016 - 301-3942384. Email: proyectos@solunas.com - rob.delgado@hotmail.com

RECIBIDO
17 OCT 2019
RECEBIMOS PARA SU REVISION
NO CONSTITUYE ACEPTACION

Frente a las solicitudes, el contratista manifestó realizar la entrega, pero no fue aportada al contrato para efectuar el control y seguimiento a los materiales y/o rubros girados por concepto de anticipo

UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD
REFORZAMIENTO ASEMAIN CTO 2937-2017

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2019

Señores:
CONSORCIO SANTA PAULA 008
Ing. Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Ciudad.

Fecha: 23-10-2019
Hora: 10:45 Am
Recebe: Karen Sabojal
Recibido para revisión
no implica aceptación

Ref.: Contrato de Obra N° 2937 de 2017 cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALTIRE DE BOGOTA D.C., PARQUE SIMON BOLIVAR - 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".

Asunto: Respuesta oficio IDRD-CES2999-2019-0020 Observaciones oficio UT S-A 2937:346 ANTICIPO

Respetados Señores:

Nos permitimos a dar claridad a los puntos mencionados en el citado oficio referente al manejo y legalización del Anticipo

1- Se solicito remitir FORMULARIO DE COMPRAS, dicha información sería enviada al correo electrónico, como no fue recibida, se implementa y complementa información con el formato entregado por el IDRD, en mesa de Trabajo del día 18 de octubre de 2019, INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO (anexos mes a mes, con los soportes correspondientes a la orden de giro, información del Proveedor o contratista, cuenta de cobro o factura, rendimientos financieros, extractos y conciliación), esto con el fin que sean verificados por ustedes y firmados como aceptación del proceso.

2- Con respecto a los giros No. 1 el cual inicialmente se realizó para "CUENTA DE COBRO 0001 SUMINISTRO DE MATERIALES ANEXO 1 DE CONTRATO (CUBIERTA STANDING SEAM SANDWICH CAL)", el contrato correspondiente a esta actividad fue cancelado en mutuo acuerdo en fecha 17 de enero de 2018, y se realizó respectivo cambio de rubro a Suministro de Materiales anexos 1 Preliminares de Obra por Valor de \$382.666.641 (trescientos

1

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Se referencia además la relación de ítems que no concuerdan con dineros girados por concepto de anticipo así.

OBJETO DEL CONTRATO					
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR, 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS."					
CODIGO CIO	CODIGO O NP	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT
					Vr Parcial Directo
CAPITULO 1 (PRELIMINARES)					
2634		MINICARGADOR BOGOTÁ Oper OComb	hr	\$64.516	378,00 \$
12508		Día de Traslado con 2 ayudantes**	di	\$93.421	1,008,03 \$
15163		Demolicion placa de contrapiso incl cargue+retiro	m3	\$156.345	233,43 \$
11427		Demolicion quinipla concreto (cargue+retiro) nudos	cm3	\$3	692.500,00 \$
15136		DEMOLICION MUROS 0.25 + TOILETE (Trasiego+Retiro)	m2	\$24.189	441,56 \$
10149		Demolicion anden con corte 0.10 incl. cargue y ret *	m2	\$14.853	535,83 \$
11559		Demolicion enchape y alisado de piso en 4cm*	m2	\$11.280	564,15 \$
15120		DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS/Baldosa (Trasie+Car+ret)	m2	\$7.652	260,37 \$
14144		Demolicion mezon en concreto + Enchape 10+0.00m	m2	\$13.826	35,74 \$
8		Demolic Muro 0.15-Toilete (Tras+retiro+Andamios)	m2	\$14.822	132,67 \$
15123		Escarificado-Manual Zapata Concreto 1-6cm (Tras+cargue+ret)	m2	\$7.819	1,08 \$
12495		DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslado	m2	\$17.701	1.495,05 \$
16229		Demolicion de Estructura con Esqueleto+retiro	m3	\$229.727	40,83 \$
10016		Desmonte y retiro malla existente 1x2.0 m	ml	\$8.914	118,54 \$
21		DESMONTE VENTANAS (Trasiego+Retiro)	m2	\$11.334	12,38 \$
19		Desmonte Aparatos Sanitarios	und	\$21.348	86,00 \$
14908		DESAMONTE PUERTA+ MARCO METAL (Trasiego+Retiro)	und	\$16.924	81,00 \$
14056		DESAMONTE MARCO+ PUERTA (Trasiego+retiro)	m2	\$8.332	34,29 \$
11221		Desmonte y retiro de luminaria fluorescente*	und	\$17.177	246,00 \$
11295		Desmonte y retiro de red electrica litena**	ml	\$4.682	4.728,02 \$
13785		Desmonte estufa metal Cubierta para colchaca*	kg	\$7.665	21.957,85 \$
16189		DESAMONTE MANUAL DE CASITON (Cargue + retiro)	m2	\$6.885	2.367,27 \$
10791		Desmonte y reinstalacion "señales coicas **	und	\$33.354	101,00 \$
10248		Desmonte Cubierta "Acilamio" Seguridad transporte	m2	\$31.327	4.948,85 \$
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
100086		Vare Excavacion RCD- Arcilla/Recebo (V) 15m3	M3	\$4.316	104,51 \$
100089		Vare Excavacion RCD- Arcilla/Recebo (V) 6m3	M3	\$5.570	10,00 \$
ESTRUCTURA					
11774		ACERO DE REFUERZO 60000 **	kg	\$2.851	34.266,71 \$
14492		Malla electrosoldada Ø=3 mm Ø0.15 (area 6x2.35)**	kg	\$7.956	4.513,10 \$
12508		Día de Traslado con 2 ayudantes**	di	\$93.421	390,00 \$
ITEMS NO PREVISTOS					
12175	NP 02	Excavación manual con retiro en recebo **	m3	\$ 40.932,00	80,53 \$
13195	NP 03	Excavación manual con retiro uso blando**	m3	\$ 34.193,00	133,84 \$
843	NP 07	Demolicion de escalera en concreto	m2	\$ 57.680,00	31,56 \$
n.a.	NP 17	Desmonte de ventanas (Trasiego+Retiro)Inc. Andamio certificado	m2	\$ 6.543,00	9,48 \$
12286	NP 08	Desmonte Alfajala Perin concreto 4"-8.50m**	m	\$ 9.917,00	13,92 \$
n.a.	NP 16	demolicion ciclo Razo Falso Inc. Andamio certificado	m2	\$ 34.478,00	1.637,40 \$
n.a.	NP 19	DEMOLICION PARETE CIELO RASO PLACA Inc. Andamio certificado	m2	\$ 17.559,00	1.331,00 \$
12785	NP 10	Desmonte Divisiones Metalicas +cargue y retiro	m2	\$ 21.828,00	305,51 \$
n.a.	NP 20	Desmonte Columnas en Metal 0.20x0.20	UND	\$ 43.184,00	6,00 \$
845	NP 11	DEMOLICION MUROS DE CONCRETO(Cargue+ret)	m3	\$ 185.737,00	31,82 \$
n.a.	NP 22	Desmonte division, panel Dry Wall Inc. Andamio certificado	m2	\$ 17.295,00	154,75 \$
n.a.	NP 21	Demolicion Manual Vigas y Columnas +retiro	m3	\$ 163.802,00	12,09 \$
13684	NP 12	DEMOLICION PLACA DE CONTRAFISO H=0.12M	m2	\$ 18.330,00	17,78 \$
14142	NP 13	Desmonte Pino Machimbre Est.	m2	\$ 7.827,00	1.862,56 \$
n.a.	NP 23	Desmonte entripio metalico Inc. Andamio certificado	m2	\$ 12.695,00	104,13 \$
13391	NP 14	Demolicion de Dintel en conc. reforzada+	m	\$ 13.849,00	50,00 \$
11615	NP 15	DESAMONTE Y RETIRO PUERTA VIDRIO	m2	\$ 5.698,00	10,24 \$
NP		Suministro, instalacion+montaje Acero estructural ASTM A57 (Cada 30) (SUMINISTRO) (54440)			204.195,00 \$
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 1.782.622.696,00

OBJETO DEL CONTRATO					
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR, 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS."					
CODIGO CIO	CODIGO O NP	DESCRIPCION	UND	Vr Unit Directo	CANT
					Vr Parcial Directo
ITEM			CANTIDAD ACTAS		CANTIDAD ANTICIPO
					RESTANTE
DEMOLICIONES			\$ 217.563.587	\$ 833.234.253	\$ 615.670.666
DEMONTES			\$ 402.137.144	\$ 897.178.292	\$ 495.041.148
ACERO			\$ 111.082.740	\$ 383.033.308	\$ 271.950.565
ESTRUCTURA			\$ 908.825.798	\$ 1.043.118.688	\$ 134.292.890
ORDENES Y Y 2				\$ 868.254.533	\$ 868.254.533
TOTAL POR LEGALIZAR			\$		\$ 2.277.429.792

Bajo lo cual el contratista argumenta lo propio frente al anticipo, sin embargo, no determina lo solicitado por el interventor frente a lo cual no es considerado dentro de las actas parciales de obra aprobadas como recursos del anticipo:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Asunto: Respuesta oficio IDRD-CES2999-2019-087 Solicitud legalización de cantidades anticipo

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos pronunciamos con respecto a las observaciones realizadas y allegadas por ustedes mediante el oficio en el asunto. Como se puede evidenciar estas cantidades están conciliadas hasta el Acta Parcial de Obra No. 10, remitida a ustedes mediante oficio UT SA-2937:361. Después de nuestra revisión se pudo evidenciar que, dentro de las cantidades acumuladas presentes en esta acta se encuentran actividades que no están siendo tomadas en cuenta a la hora de realizar las respectivas cuantificaciones de la inversión del anticipo. Es fundamental que estas actividades sean tenidas en cuenta, subrayadas en verde según Anexo 1, para la proyección de amortización del Anticipo ya que estas suman un valor de \$677.505.744 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE) en costo directo. Adicionalmente se anexan cuadro con ejecución de cantidades hasta el Acta Parcial de Obra No. 11, ver Anexo 2, en la cual se actualizan las cantidades acumuladas con respecto al último corte presentado ante ustedes.

Cabe destacar que adicionalmente en obra se encuentra material y se han realizado actividades que hacen parte del Acta Parcial de Obra no. 12 la cual se espera dejar en firme mediante la radicación

1

Anexando el siguiente cuadro

CANTIDADES EJECUTADAS HASTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10					
OBJETO DEL CONTRATO			"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR. 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1002 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS."		
ANEXO NO. 01					
CÓDIGO CIO	CÓDIGO LIP	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES CONTRACTUALES	ACUMULADO
				Vi Unit Directo [M]	CANT [N] Vi Parcial Directo [I]
ITEMS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN					
N/A		Costo de trámite de licencia, Costos operativos, de revisión y ajustes a los diseños según requerimientos curaduría y control de los diseños, seguimiento, seguimiento y utilidad del contratista. (incluye pólizas e impuestos)	GL	\$ 52 800 850	-
CAPITULO I (PRELIMINARES)					
2834		REINTEGRADOR BOBAC Oper C/Comb	hr	\$54 515	378.00
12506		Dia de Traslado con 2 ayudantes**	di	\$53 421	1 069.03
15163		Demolicion placa de contrapiso incl carga+retiro	m3	\$156 345	233.43
11427		Demolicion quercia concreto (carga+retiro) nudos	cm3	\$3	692 500.00
15136		DEMOLICION MUROS 0.25 TOLETEL (Tras+retiro)	m2	\$24 189	444.56
10149		Demolicion andenes coner a=0 10 incl. carga y ret *	m2	\$14 853	535.63
11558		Demolicion enchape y aislado de piso a=4cm*	m2	\$11 290	564.15
15120		DEMOLICION ENCHAPE DE MURO (Baldosa) (Tras+ Carga+ret)	m2	\$7 652	560.37
14144		Demolicion mezon en concreto + Enchape 10x10x0.6m	m2	\$13 826	35.74
9		Demolo Muro 0 15-Tolete (Tras+retiro+Andamos)	m2	\$14 822	132.67
15123		EscarificadoManualZapataConcretoE=6cm(Tras+carga+re	m2	\$7 818	1.08
12495		DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslado	m2	\$17 781	1 481.95
16229		Demolicion de Estructura con Equipos+retro	M3	\$229 727	40.83
10016		Desmonte y retiro malla existente h=2.0 m	m	\$6 914	118.54
21		DESMONTE VENTANASL (Traslado+Retiro)	m2	\$11 334	12.38
19		Desmonte Aparatos Sanitarios	und	\$21 348	94.00
14008		DESMONTE PUERTA+ MARCO METAL (Traslado+Retiro)	und	\$16 924	81.00
14050		DESMONTE MARCO+ PUERTA(Traslado+retiro)	m2	\$8 332	34.29
11221		Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**	und	\$17 172	248.00
11290		Desmonte y retiro de red electrica interior**	mL	\$4 682	4 728.02
13769		Desmonte estruc metal Cubierta para colcheros*	kg	\$7 665	21 957.85
14168		DESMONTE MARJAL DE CASETORI (Carga + retiro)	m2	\$8 865	2 367.27
10791		Desmonte e instalacion, asfalto civicos **	und	\$33 354	101.00
10948		Desmonte Cubierta +Andamos+Seguridad+transporte	m2	\$31 327	4 948.85
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
10606		Valle Excavacion RCD- Arcilla(Recebo (V) 15m3)	M3	\$4 310	104.51
10608		Valle Excavacion RCD- Arcilla(Recebo (V) 6m3)	M3	\$5 570	10.00
12500		Retorno Recabo tipo alamedo tipo IDRD- exteri+ocup	m3	\$61 162	18.00
ESTRUCTURA					
0.0.		Puerta de acceso para 32 personas*	m2	\$42 810	1 931.79
14116		Placa contrapiso 30x30 psi en reforz Gray-12C **	m3	\$501 379	15.30
11397		Dado cement concreto 400psi (Tras+retiro) sin reforz**	m3	\$646 928	232.01
11724		ACERO DE REFUERZO 6000 **	kg	\$2 851	34 266.71
14492		Malla electrosoldada d=6 mm@15 (area 6x2 35)**	kg	\$2 958	4 513.10
12500		Dia de Traslado con 2 ayudantes**	di	\$53 421	306.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 955 491 043.00

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

IDRD-CES2999-2019-000190

Bogotá D. C., 20 diciembre del 2019

Señor:
RAFAEL PALACIOS DORADO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SAN ANTONIO

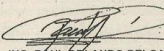
Referencia: CONTRATO DE OBRA No.2937 de 2017 cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ DC, PARQUE SIMÓN BOLÍVAR – 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".

Asunto: RESPUESTA A SU OFICIO UT S-A 2937:434
LEGALIZACION ANTICIPO

Cordial saludo,

Mediante el presente comunicado nos permitimos aclarar que luego de revisada la documentación anexa al oficio del asunto se evidencia que los ítems contemplados en el mismo no corresponden a ninguna orden de giro realizadas durante el desembolso del anticipo, por lo cual las mismas no serán tenidas en cuenta para la legalización del mismo. Teniendo en cuenta lo antes descrito el CONSORCIO SANTA PAULA 008 ratifica lo mencionado en el comunicado IDRD-CES2999-2019-00087 DE FECHA 19 DE Noviembre de 2019.

Sin otro particular,

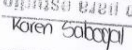

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
Área: IMA
Con copia: IDRD-AREA DE INTERVENTORIA
Ejemplar: LAM-2019

Bajo la anterior indico frente a las ordenes de giro:

Bogotá D.C., Diciembre 23 de 2019

UT S-A 2937: 447

Arquitecto:
Mauricio Reina Manosalva
Subdirector Técnico de Construcciones
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Calle 63 No. 59-06
Ciudad


10:36am
27-12-2019

Ref: Contrato de Obra N° 2937 de 2017 cuyo objeto es: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".

Asunto: Aclaración inicial y/o preliminar sobre el anticipo

Respetado Arquitecto:

Por medio de la presente, me permito efectuar una aclaración inicial respecto al manejo e inversión del anticipo del contrato de obra de la referencia , en los siguientes términos:

RELACION DE ÓRDENES DE GIRO:

Comencemos por expresar que la relación de las órdenes de giros contenida en el oficio IDRD-CES2999-2019-088, remitido por la interventoría al contrato de la referencia, ejercida por el CONSORCIO SANTA PAULA 008, presentan diferencias en las órdenes No. 09, 014, 015, 016 y 018 en la discriminación de los rubros para la destinación del giro correspondiente, debido a que en el cuadro enviado mediante oficio UT-S-A 2937:380 se relacionan de la siguiente manera:

1

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

	\$	73.368.654.00	TRANSGO SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERIA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	15/07/2019	16/07/2019
017	\$	20.000.000.00	ESMECOL INGENIERIA SAS	TRANSPORTE DE MATERIALES, ALQUILER DE EQUIPOS	TRANSPORTE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	N/A	PENDIENTE POR LEGALIZAR, DADO QUE ESTE ÍTEM NO SE HA COBRADO EN ACTAS DE OBRA	23/07/2019	25/07/2019
018	\$	5.353.819.00	TRANSGO SAS	MANO DE OBRA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	23/07/2019	25/07/2019
	\$	30.000.000.00	TRANSGO SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERIA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	24/07/2019	25/07/2019
019	\$	8.364.018.00	TRANSGO SAS	MANO DE OBRA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	26/07/2019	31/07/2019
	\$	33.000.000.00	TRANSGO SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERIA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	30/07/2019	31/07/2019
020	\$	6.000.000.00	ESMECOL INGENIERIA SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERIA	TRANSPORTE Y MATERIALES ESTRUCTURA METALICA	N/A	PENDIENTE POR LEGALIZAR, DADO QUE ESTE ÍTEM NO SE HA COBRADO EN ACTAS DE OBRA	20/07/2019	31/07/2019
	\$	14.000.000.00	ESMECOL INGENIERIA SAS	TRANSPORTE DE MATERIALES, ALQUILER DE EQUIPOS	TRANSPORTE Y MATERIALES ESTRUCTURA METALICA	N/A	PENDIENTE POR LEGALIZAR, DADO QUE ESTE ÍTEM NO SE HA COBRADO EN ACTAS DE OBRA	30/07/2019	31/07/2019

Conforme lo anterior, se puede constatar que las órdenes de giros mencionadas presentan las siguientes diferencias:

Orden de Giro No. 09: El CONSORCIO SANTA PAULA 008 no relacionó el giro correspondiente a la empresa AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS por valor de \$200.000.000 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS); adicional, este pago se encuentra pendiente por legalizar mediante factura, dado que el suministro y actividades no han sido finalizadas, y hasta que no se concluyan , la empresa no procede a facturar al IDRD:

009	\$	16.746.940.00	TRANSGO SAS	MANO DE OBRA	PRELIMINARES DEMOLICION, ESCARIFICADO MANUAL, CONCRETO (TRANS-CAR-4ET) DETONANTE ESTRUCTURA METALICA	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	26/07/2019	30/07/2019
	\$	200.000.000.00	AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERIA	SUMINISTRO DE MATERIALES	N/A	PENDIENTE POR LEGALIZAR, DADO QUE ESTE ÍTEM NO SE HA COBRADO EN ACTAS DE OBRA	15/04/2019	10/04/2019

Orden de Giro No.014: El CONSORCIO SANTA PAULA 008 hizo una sumatoria del rubro total en \$129.977.433 considerando todo como Compra y Suministro de Materiales, aún cuando tanto en la orden de giro, como el formato de control de compras e inversión del anticipo se hacía separación del ítem, correspondientes en realidad a una parte de Mano de obra \$40.000.000 y otra a Compra y suministro de Materiales \$89.977.443:



014	\$	40.000.000.00	TRANSGO SAS	MANO DE OBRA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	26/07/2019	28/07/2019
				COMPRA Y SUMINISTRO DE	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE,		SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA		

014	\$	40.000.000.00	TRANSGO SAS	MANO DE OBRA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	26/07/2019	28/07/2019
	\$	89.977.443.00	TRANSGO SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERIA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	26/07/2019	28/07/2019

Orden de Giro No.015: El CONSORCIO SANTA PAULA 008 hizo una sumatoria del rubro total en \$77.966.460 considerando todo como Compra y Suministro de Materiales, aún cuando tanto en la orden de giro como el formato de control de compras e inversión del anticipo, se hacía separación del ítem, correspondientes en realidad a una parte de Mano de obra \$20.000.000 y otra a Compra y suministro de Materiales \$57.966.460:

015	\$	20.000.000.00	TRANSGO SAS	MANO DE OBRA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	08/07/2019	11/07/2019
	\$	57.966.460.00	TRANSGO SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRERIA	DEMOLICIONES, PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACION Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTES DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUTADAS	08/07/2019	11/07/2019

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

	UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN CTO 2937-2017	
---	--	---

Orden de Giro No.016 : El CONSORCIO SANTA PAULA 008 hizo una sumatoria del rubro total en \$88.384.654, considerando todo como Compra y Suministro de Materiales, aún cuando tanto en la orden de giro, como el formato de control de compras e inversión del anticipo se hacía separación del ítem, correspondientes en realidad a una parte de Mano de obra \$15.000.000 y otra a Compra y suministro de Materiales \$73.384.654:

016	\$ 15.000.000,00	TRANINGCO SAS	MANO DE OBRA	DEMOLICIONES - PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTE DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUCIONALES	15/10/2019	16/10/2019
	\$ 73.384.654,00	TRANINGCO SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRUTERIA	DEMOLICIONES - PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTE DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUCIONALES	15/10/2019	16/10/2019

Orden de Giro No.018: El CONSORCIO SANTA PAULA 008 hizo una sumatoria del rubro total en \$35.353.862, considerando todo como Compra y Suministro de Materiales, aún cuando tanto en la orden de giro, como el formato de control de compras e inversión del anticipo se hacía separación del ítem, correspondientes en realidad a una parte de Mano de obra \$5.353.862 y otra a Compra y suministro de Materiales \$30.000.000:


018	\$ 5.353.862,00	TRANINGCO SAS	MANO DE OBRA	DEMOLICIONES - PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTE DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUCIONALES	24/10/2019	25/10/2019
	\$ 30.000.000,00	TRANINGCO SAS	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRUTERIA	DEMOLICIONES - PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO Y MATERIALES PARA CONCRETO 4000 PSI	323-324-325	SE ADJUNTA CORTE DE OBRA DEL 01 AL 10 PARA VERIFICACION DE ACTAS EJECUCIONALES	24/10/2019	24/10/2019

RUBRO	INFORME INTERVENTORIA		DATOS REALES		INCREMENTO RUBRO
	GIRO No.	VALOR	GIRO	VALOR	
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES	14	\$ 129.977.433,00	14	\$ 89.977.443,00	
MANO DE OBRA			14	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES	15	\$ 77.966.460,00	15	\$ 57.986.460,00	
MANO DE OBRA			15	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES	16	\$ 88.384.654,00	16	\$ 73.384.654,00	
MANO DE OBRA			16	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES	18	\$ 35.353.862,00	18	\$ 5.353.862,00	
MANO DE OBRA			18	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00
					\$ 105.000.000,00


Ahora bien, en relación a las facturas entregadas por los proveedores como soporte correspondiente a la legalización de cómo fue invertido el anticipo del contrato, la Interventoría Actual le indica a usted que “hay facturas que se repiten hasta tres veces por orden de giro”, pero resulta que esto sucede dado que el proveedor cuando emitió las facturas para legalización del cobro del material y las actividades desarrolladas mediante corte de obra, elaboró las facturas de acuerdo a las actividades ejecutadas por ítem específico, quedando éstas superiores a los anticipos entregados; por tal motivo y en efecto de causación contable, para realizar el cruce de cuentas por pagar y los anticipos entregados, se abonan en algunas facturas de manera repetida, relación socializada en respuesta oficio UT S-A 2937: 380, en el caso específico de TRANINGCO SAS como podemos ver a continuación:

Como resultados de las diferencias antes mencionadas se puede concluir que al agrupar unos valores que no corresponden al rubro de nuestro Plan de Inversión del Anticipo, se está incrementando considerablemente el rubro de COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES, creando posiblemente confusiones tanto para la Interventoría actual como para la entidad IDRD a la cual va dirigido dicho informe, ya que se cuantifica la información por un valor de \$105.000.000 de la siguiente manera:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825



UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN CTO 2937-2017



RELACION ANTICIPOS Y LEGALIZACIONES TRANINGCO SAS

INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	PROVEEDOR	DOCUMENTO No.	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
25/01/2018	\$ 382.666.641,00	\$ -	\$ 382.666.641,00				
05/12/2018	\$ 486.157.802,00	\$ -	\$ 868.824.533,00				
21/12/2018	\$ 143.060.000,00	\$ -	\$ 1.011.884.533,00				
21/12/2018	\$ 133.730.000,00	\$ -	\$ 1.145.614.533,00				
25/02/2019	\$ 433.742.389,00	\$ -	\$ 1.579.356.922,00				
11/03/2019	\$ 90.573.886,00	\$ -	\$ 1.669.930.808,00				
15/03/2019	\$ 147.937.346,00	\$ -	\$ 1.817.868.154,00				
28/03/2019	\$ 138.331.074,00	\$ -	\$ 1.956.199.228,00				
16/04/2019	\$ 186.746.949,00	\$ -	\$ 2.142.946.177,00				
30/04/2019	\$ -	\$ 20.625.000,00	\$ 2.122.321.177,00	TRANINGCO	302	ENERO-ABRIL	
30/04/2019	\$ -	\$ 326.307.095,00	\$ 1.996.014.082,00	TRANINGCO	304	CORTES 01.02.03	
02/05/2019	\$ -	\$ 248.580.803,00	\$ 1.747.433.279,00	TRANINGCO	307	N/A	MATERIAL POR COBRAR
22/05/2019	\$ 158.734.907,00	\$ -	\$ 1.906.168.186,00				
30/05/2019	\$ 134.924.671,00	\$ -	\$ 2.041.092.857,00				
30/05/2019	\$ -	\$ 5.115.000,00	\$ 2.035.977.857,00	TRANINGCO	309	MAYO	
30/05/2019	\$ -	\$ 169.687.086,00	\$ 1.866.290.771,00	TRANINGCO	311	CORTES 04.05.06	
13/06/2019	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 1.906.290.771,00				
13/06/2019	\$ 74.685.970,00	\$ -	\$ 1.980.976.741,00				
28/06/2019	\$ 40.000.000,00	\$ -	\$ 2.020.976.741,00				
28/06/2019	\$ 89.977.443,00	\$ -	\$ 2.110.954.184,00				
30/06/2019	\$ -	\$ 5.115.000,00	\$ 2.105.839.184,00	TRANINGCO	312	JUNIO	
30/06/2019	\$ -	\$ 296.025.453,00	\$ 1.809.813.731,00	TRANINGCO	315	CORTE 07	
05/07/2019	\$ -	\$ 661.811.598,00	\$ 1.148.002.133,00	CRUZ FERRETERIA SAS	274	MATERIAL	PAGO POR CAMBIO DE RUBRO
10/07/2019	\$ -	\$ 96.927.509,00	\$ 1.051.074.624,00	CRUZ FERRETERIA SAS	280	MATERIAL	ABONO POR CAMBIO DE RUBRO
10/07/2019	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 1.071.074.624,00				
11/07/2019	\$ 57.986.460,00	\$ -	\$ 1.129.061.084,00				
16/07/2019	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 1.144.061.084,00				
16/07/2019	\$ 73.384.654,00	\$ -	\$ 1.217.445.738,00				
25/07/2019	\$ 5.353.862,00	\$ -	\$ 1.222.799.600,00				
25/07/2019	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 1.252.799.600,00				
28/07/2019	\$ -	\$ 352.810.457,00	\$ 899.989.143,00	TRANINGCO	319	CORTE 08	
30/07/2019	\$ -	\$ 5.115.000,00	\$ 894.874.143,00	TRANINGCO	321	JULIO	
30/07/2019	\$ 8.364.018,00	\$ -	\$ 903.238.161,00				
30/07/2019	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 936.238.161,00				
	\$ 412.313.627,00	\$ -	\$ 523.924.534,00	TRANINGCO	323	CORTE 09	
	\$ 518.809.534,00	\$ -	\$ 5.115.000,00	TRANINGCO	324	CORTE 10	
	\$ 5.115.000,00	\$ -	\$ -	TRANINGCO	325	AGOSTO	
	\$ -	\$ -	\$ -				
	\$ 2.924.358.162,00	\$ 2.924.358.162,00					

De igual manera, y tal como se evidencia del cuadro relacionado a continuación, la Interventoría actual hizo en su oficio IDRD-

28/06/2019	\$ 89.977.443,00	\$ -	\$ 2.110.954.184,00	TRANINGCO	312	JUNIO	
30/06/2019	\$ -	\$ 5.115.000,00	\$ 2.105.839.184,00	TRANINGCO	315	CORTE 07	
30/06/2019	\$ -	\$ 296.025.453,00	\$ 1.809.813.731,00	CRUZ FERRETERIA SAS	274	MATERIAL	PAGO POR CAMBIO DE RUBRO
05/07/2019	\$ -	\$ 661.811.598,00	\$ 1.148.002.133,00	CRUZ FERRETERIA SAS	280	MATERIAL	ABONO POR CAMBIO DE RUBRO
10/07/2019	\$ -	\$ 96.927.509,00	\$ 1.051.074.624,00				
11/07/2019	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ 1.071.074.624,00				
11/07/2019	\$ 57.986.460,00	\$ -	\$ 1.129.061.084,00				
16/07/2019	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 1.144.061.084,00				
16/07/2019	\$ 73.384.654,00	\$ -	\$ 1.217.445.738,00				
25/07/2019	\$ 5.353.862,00	\$ -	\$ 1.222.799.600,00				
25/07/2019	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ 1.252.799.600,00				
28/07/2019	\$ -	\$ 352.810.457,00	\$ 899.989.143,00	TRANINGCO	319	CORTE 08	
30/07/2019	\$ -	\$ 5.115.000,00	\$ 894.874.143,00	TRANINGCO	321	JULIO	
30/07/2019	\$ 8.364.018,00	\$ -	\$ 903.238.161,00				
30/07/2019	\$ 33.000.000,00	\$ -	\$ 936.238.161,00				
	\$ 412.313.627,00	\$ -	\$ 523.924.534,00	TRANINGCO	323	CORTE 09	
	\$ 518.809.534,00	\$ -	\$ 5.115.000,00	TRANINGCO	324	CORTE 10	
	\$ 5.115.000,00	\$ -	\$ -	TRANINGCO	325	AGOSTO	
	\$ -	\$ -	\$ -				
	\$ 2.924.358.162,00	\$ 2.924.358.162,00					

De igual manera, y tal como se evidencia del cuadro relacionado a continuación, la Interventoría actual hizo en su oficio IDRD- CES2999-2019-101 (página 13), un resumen de valores girados al proveedor TRANINGCO SAS, el cual relaciona valores errados, ya que los mismos no suman las cantidades realmente pagadas mediante la Fiducia:

Finalmente, el contratista en el oficio de respuesta al requerimiento hace una tabla de análisis anticipo versus ejecutado así:

ITEMS NO PREVISTOS									
12175	NP-02	Exoneración manual con retiro en recibo "	m3	0,00	\$ 40.852,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598.747.553,00
12185	NP-03	Exoneración manual con retiro sobre Valsco "	m3	0,00	\$ 34.103,00	\$ -	\$ -	\$ -	89,53 \$ 3.290.254,00
111528	NP-04	Cerco obra obra roja, toldo de zinc y pvc h=3,0"	m	0,00	\$ 96.455,00	\$ -	\$ -	\$ -	91,13 \$ 8.789.944,00
11649	NP-05	Cercoamiento linea h=2,20 mts (h=2,20")	m	0,00	\$ 16.088,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10528	NP-06	Cercoamiento linea h=2,20 mts (h=2,20")	m	0,00	\$ 19.398,00	\$ -	\$ -	\$ -	148,72 \$ 2.882.786,00
845	NP-07	Demolicion de escalera en concreto	m2	0,00	\$ 57.699,00	\$ -	\$ -	\$ -	31,59 \$ 1.822.711,00
n.a.	NP-17	Desmonte de ventanas (Trasiego-Revoloteo; Andamio certificado	m2	0,00	\$ 6.543,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,48 \$ 62.029,00
12256	NP-18	Desmonte Alaba Forne concreto a=15,0cm"	m	0,00	\$ 9.917,00	\$ -	\$ -	\$ -	13,92 \$ 130.945,00
n.a.	NP-18	demolicion cielo Raso Falso Inc. Andamio certificado	m2	0,00	\$ 34.478,00	\$ -	\$ -	\$ -	1.637,40 \$ 56.454.277,00
n.a.	NP-19	DEMOLICION PANELES CIELO RASO PLACA Inc. Andamio certificado	m2	0,00	\$ 17.559,00	\$ -	\$ -	\$ -	1.531,00 \$ 23.371.029,00
17344	NP-19	ANDAMIO e=10m CONCRETO PC 21 MPa	m2	0,00	\$ 50.965,00	\$ -	\$ -	\$ -	90,90 \$ 1.506.690,00
12785	NP-10	Desmonte Divisiones Metálicas: cerrojos y rielos	m2	0,00	\$ 21.828,00	\$ -	\$ -	\$ -	365,51 \$ 6.668.672,00
n.a.	NP-20	Desmonte Columnas en Metal 0.20x0.20	UND	0,00	\$ 43.184,00	\$ -	\$ -	\$ -	6,00 \$ 259.164,00
845	NP-11	DEMOLICION MUROS DE CONCRETO Cargue"	m3	0,00	\$ 195.737,00	\$ -	\$ -	\$ -	31,62 \$ 6.189.204,00
n.a.	NP-22	Desmonte division, panel Dry Wall Inc. Andamio certificado	m2	0,00	\$ 17.289,00	\$ -	\$ -	\$ -	154,75 \$ 2.677.020,00
n.a.	NP-21	Demolicion Mural Vigas y Columnas: vello	m3	0,00	\$ 163.902,00	\$ -	\$ -	\$ -	12,00 \$ 1.965.624,00
13864	NP-12	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=12CM	m2	0,00	\$ 18.330,00	\$ -	\$ -	\$ -	17,78 \$ 325.907,00
14142	NP-13	Desmonte Piso Machimbire Est.	m2	0,00	\$ 7.827,00	\$ -	\$ -	\$ -	1.862,56 \$ 14.578.257,00
n.a.	NP-23	Desmonte estropajo metálico Inc. Andamio certificado	m2	0,00	\$ 7.660,00	\$ -	\$ -	\$ -	104,13 \$ 1.521.930,00
13391	NP-14	Demolicion de Dintel en conc. reforzado"	m	0,00	\$ 13.849,00	\$ -	\$ -	\$ -	50,90 \$ 692.450,00
11615	NP-16	DEMONTES Y RETIRO PUERTA VORRIO	m2	0,00	\$ 5.688,00	\$ -	\$ -	\$ -	10,24 \$ 58.348,00
n.a.	NP-25	Arriazo epoxico 3/4" estructural 0.30m + adherision	UND	0,00	\$ 23.738,00	\$ -	\$ -	\$ -	5.885,00 \$ 151.585.830,00
n.a.	NP-26	Arriazo epoxico 3/4" estructural 0.30m + adherision	UND	0,00	\$ 16.989,00	\$ -	\$ -	\$ -	6.949,00 \$ 96.716.390,00
n.a.	NP-27	Arriazo epoxico 5/8" estructural 0.15m + adherision Inc. Planta electrica	UND	0,00	\$ 15.395,00	\$ -	\$ -	\$ -	968,00 \$ 14.803.328,00
n.a.	NP-28	Arriazo epoxico 7/8" estructural 0.30m + adherision Inc. Planta electrica	UND	0,00	\$ 31.975,00	\$ -	\$ -	\$ -	690,00 \$ 22.450.640,00
n.a.	NP-29	Arriazo epoxico 3/8" estructural 0.15m + adherision Inc. Planta electrica	UND	0,00	\$ 10.270,00	\$ -	\$ -	\$ -	117.18,00 \$ 120.343.680,00
11379	NP-30	Abrazadero mecanico "Anclaje" superior m2	m2	0,00	\$ 15.112,00	\$ -	\$ -	\$ -	1.100,00 \$ 16.623.502,00
730	NP-31	ASEO GENERAL	m2	0,00	\$ 3.680,00	\$ -	\$ -	\$ -	8.600,00 \$ 34.454.400,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.248.447.148,00
AIIU					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 347.992.504,00
TOTAL					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.596.439.652,00

ITEM EJECUTADOS PENDIENTES POR FACTURAR					
Anclaje epoxico 1-1/2" estructural 0.48m + adhesivo Inj. Planta electrica	UND	526.00	\$	315.478	166.572.384.00
Casos de topor no recuperable	m3	169.80	\$	131.784	22.376.953.20
Gravado de roscados	m3	1.75	\$	660.868	1.044.914.00
Espazo trabajo en altura	DD	20.00	\$	52.147	1.042.944.00
Pied acero provisional	UND	1.00	\$	1.226.810	1.226.810.00
Ped Electrica Provisional	UND	3.00	\$	3.174.787	9.524.301.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 201.798.272.20
ALU				27.941.170%	\$ 56.384.758.20
TOTAL					\$ 258.183.070.00

ORDEN DE PAGO FIDUCIA: PRELIMINARES, CIMENTACION OTROS	VALOR GIRO FIDUCIA
ORDEN No.1	363.023.309
ORDEN No.8	138.331.074
ORDEN No.9	186.746.948
ORDEN No.10	158.734.907
ORDEN No.11	134.924.677
ORDEN No.12	40.000.000
ORDEN No.12	74.685.970
ORDEN No.14	129.977.443
ORDEN No.15	77.986.460
ORDEN No.16	88.384.654
ORDEN No.18	353.862.882
ORDEN No.19	8.364.015
VALOR TOTAL	1.438.513.313

RESUMEN COMPARATIVO ACTIVIDADES ANTICIPO VS EJECUTADO

(A) GIRO FIDUCIA	
1.436.513.313,00	
(B) SUMATORIA OBRA EJECUTADA - ACTA	
1.447.245.420,20	

DIFERENCIA (A-B)	
\$	-10.732.107,20

Actualmente estan pendientes por desarrollar actividades del capitulo de preliminares y cimentacion en la zona del

COMPARATIVO ACTIVIDADES ANTICIPO VS EJECUTADO

					CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA No. 12		ACUMULADO			
CODIGO EX	CODIGO OF	DESCRIPCION	UO	CANT	Un Dólares	Un Dólares	CANT	Un Dólares	CANT	Un Dólares			
				01	01	01			01	01			
ITEMS TO PREPARE													
n.a.	NPO	Barricade, include equipment, Access-control ASTM A57			\$	10,600.00				\$	2,026,726.4033		
		Sensors, include mounting, Access-control, ASTM A57, include											
		SIS (SMDMS) (3) (3474)											
		Sensors, include mounting, Access-control, ASTM A57, include	kg	0.00				5105.43	40,561,305.00	303,191.43	562,169,927.00		
		SIS (SMDMS) (3) (3474)											
		SIS (SMDMS) (3) (3474)											
n.a.	NPO	Barricade, include equipment, Access-control, ASTM A57, include											
		SIS (SMDMS) (3) (3474)											
		Sensors, include mounting, Access-control, ASTM A57, include	kg	0.00				303,191.43	802,016,357.00	303,191.43	880,016,357.00		
		SIS (SMDMS) (3) (3474)											
		Sensors, include mounting, Access-control, ASTM A57, include											
		SIS (SMDMS) (3) (3474)											
Anchorage system 3-1/2" structural 0.65% yield steel, flat, flange		USD	0.00	\$	324,444.00								
SUBTOTAL COSTO DIRECTO													
AID				27,741.91				\$	1,109,118,236.00			\$	2,666,726.4033
								\$	323,671,105.62			\$	556,814,729.00
								\$	443,169,433.00			\$	7,085,341,324.00

ITEM EJECUTADOS PENDIENTES POR FACTURAR

	Sumarios estadísticos porcentaje Acervo estructural ASIMA37 (Código 9) (SUMINTRO)	KG	30 000.00	8 800.00	264 000 000.00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				\$ 264 800 000.00
	ALU			22,941,170.00	\$ 74 016 110.00
	TOTAL				\$ 338 816 110.00

ORDEN DE PAGO FIDUCIA	VALOR GIRO FIDUCIA
ORDEN No 3	133.735.000
ORDEN No 3	141.060.000
ORDEN No 4	326.328.600
ORDEN No 4	30.000.000
ORDEN No 6	200.000.000
ORDEN No 9	200.000.000
ORDEN No 17	20.000.000
ORDEN No 20	33.000.000
ORDEN No 20	14.000.000
ORDEN No 20	6.000.000
ORDEN No 13	200.000.000
ORDEN No 1	382.666.641
ORDEN No 2	200.000.000
ORDEN No 2	286.157.893
VALOR TOTAL	2.174.943.221

RESUMEN COMPARATIVO ACTIVIDADES ANTICIPO VS EJECUTADO

(A) GIRO FIDUCIA	
2.174.943.221,00	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

CONSORCIO SANTA PAULA 008
NIT 901.326.500-1

Bogotá D. C., 08 de enero del 2021

IDRD-CES2999-2020-00217

Señor:
RAFAEL PALACIOS DORADO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SAN ANTON

No. 2020210007072
FECHA: 08-01-2020 14:48:48
FOLIO: 2
RADICADOR: LAURA DANIELA MARTIN RAMIREZ
DISTRITO: SUBSECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCION
REMITENTE: CONSORCIO SANTA PAULA DE RAUL ORLANDO D
ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO LEGALIZACION DE A
Seguimiento de trámite consulta www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.2937 de 2017** cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTA DC, PARQUE SIMON BOLIVAR – 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO LEGALIZACION DE ANTICIPO. ALCANCE COMUNICADO IDRD-CES2999-2020-00215**

Cordial saludo,

Dando alcance al comunicado del asunto y como respuesta al oficio UT S-A 2937:447, nos permitimos manifestar lo siguiente:

1. Si bien es cierto la aclaración realizada por el contratista respecto a la discriminación de los rubros es válida, es de aclarar que esto en nada cambia el valor restante por legalizar, puesto que este sigue siendo el mismo, diferencia la legalización del rubro.
2. Respecto a las ordenaciones de Giro No.001 por un valor de \$382.666.641,00 y No.002 por un valor de \$286.157.892,00 no se adjunta autorización de la fiducia o legalización del cambio realizado por la Unión Temporal San Antonio Reforzamiento Asemain, ya que estos rubros debieron devolverse a la fiducia y volver a solicitar su retiro, adicional a lo antes descrito no entendemos lo que el contratista quiere decir respecto a "al realizarse cambio de rubro, *Traningco invirtió la compra de este material en cruz ferreteria sas , valor de \$302.244.057,00, el excedente fue en ejecución*", Lo antes mencionado tampoco esta debidamente legalizado y soportado.
3. Dentro de la documentación anexada no se encuentra adjunto ningún soporte técnico que soporte cada giro y factura, es decir la respectiva relación de materiales comprados, o las cantidades demolidas por orden entre otros, ahora bien en lo que respecta a los valores de los giros estos fueron tomados de la información entregada por el contratista UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48 - 55, Bogotá D. C.
TELEFONO: 7653016 – 301-3942384. Email: proyectos@soliusas.com - civil.delgado@hotmail.com

CONSORCIO SANTA PAULA 008
NIT 901.326.500-1

ASEMAIN, y los mismos no fueron refutados en las diferentes mesas de trabajo, ni aclarados como respuesta a alguno de los diversos comunicados emitidos por el Consorcio Santa Paula 008.

4. En lo que respecta a las facturas con AIU no se esta dando claridad a las observaciones realizadas por el Consorcio Santa Paula 008.
5. En cuanto las actas parciales en los mismos se tienen en cuenta actividades que NO pueden sumarse pues NO pertenecen a ningún rubro del cual fue solicitado el anticipo, por lo cual no hacen parte de los valores tenidos en cuenta por parte del Consorcio Santa Paula 008, teniendo en cuenta lo antes descrito es necesario que el contratista realice una relación teniendo en cuenta cada orden de giro y su respectivo plan de Inversión del Anticipo.


Teniendo en cuenta lo antes descrito el consorcio Santa Paula 008 se ratifica en lo presentado en el informe de presunto incumplimiento

Sin otro particular,





ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
Analisis: N/A
Con copia: IDRD-AREA DE INTERVENTORIA
Elaboro: JVER

En este mismo orden, es importante indicar que las cifras no fueron conciliadas por el contratista, si bien como lo indica el apoderado de la compañía garante y la apoderada del contratista, la estructura metálica tenía el componente de valores girados por anticipo, es claro que los valores

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825



CONSORCIO SANTA PAULA 008
NIT 901.326.500-1



De la relación antes descrita se pudo evidenciar que el material que se encuentra en taller es de aproximadamente 14 Toneladas y se encuentra sin pintar, de igual forma en el taller el contratista cuenta con suministro de material que está en proceso de corte, así como material de insumo listo para usar.

3. El día 13/11/2019 Se realizó visita al taller TECNIFORMAS METALICAS LTDA - Ricaurte por parte del Consorcio Santa Paula 008, donde se verifico que el contratista UNION TEMPORAL SAN ANTONIO REFORZAMIENTO ASEMMAIN tiene en fabricación aproximadamente 40 correas de arrostramiento, un aproximado de 20 Toneladas de material, las cuales se encontraron en proceso de pintura y listas para llevar a la obra según lo manifestado por el profesional encargado de taller y evidenciado visualmente por el profesional de interventoría, lo antes descrito se certifica en el siguiente registro fotográfico.



CONSORCIO SANTA PAULA 008
NIT 901.326.500-1



Por último, es preciso aclarar que en las últimas semanas y después del reinicio de las actividades de obra, ha llegado a la obra un total de 34.90 Toneladas correspondientes al módulo B.

De la misma manera y según la solicitud del comunicado No. 20194200195511 donde se requiere el reporte de CANTIDAD DE ESTRUCTURA METALICA EN OBRA, para la fecha del presenta el siguiente material metálico en obra, así:

MODULO	CANTIDAD EN OBRA TON	CANTIDAD FALTANTE TON
MODULO A	63.381	112.619
MODULO B	71.798	121.802
MODULO C	11.287	214.712
TOTALES	158.86	449.13

Sin otro particular,



ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTELEGAL

Atestado: (80) Fdoles
Con copia: N/A
Elaboro: L.M.

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48 - 55, Bogotá D. C.
TELEFONO: 7653016 – 301-3942384. Email: proyectos@solunsas.com - civil.delgado@hotmail.com

CONSORCIO SANTA PAULA 008

NIT 901.326.500-1

Bogotá D. C., 13 de noviembre de 2019

Ingeniera:

MONICA B. LILIANA, MENDEZ TRIVIÑO

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

Subdirección técnica de construcciones

Área de interventoría

La Ciudad

No. 2019210040352 Carga via Q75486

FECHA: 11-2019 17:31:54 FOLIO: 5

ADICION: NUESTRO INFORME AL SEÑOR

INGENIERO SUBDIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

SEÑOR: ALCALDE COMUNICADO 2019210040352

Sequencia de trámite con el sistema de gestión

Código de barras: 954 - 05 PEX: 001 600

Referencia: CESIÓN DEL CONTRATO 2999 de 2017, cuyo objeto es "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C., PARQUE SIMÓN BOLÍVAR 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS"

Asunto: ALCANCE COMUNICADO NO.20192100403532
RESPUESTA NO.20194200195511 - INFORME VISITA A TALLER DE ORNAMENTACION

Cordial saludo,

De acuerdo con su solicitud, hacemos entrega del informe correspondiente a la visita que se realizó al Taller de Ornamentación "TECNIFORMAS METÁLICAS LTDA", se aclara que dicha visita fue una inspección visual, ya que no se contaba con todo el dossier de calidad que fue requerido al contratista.

Sin otro particular,

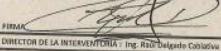
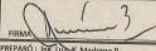
ING. RADH ORLANDO DELGADO CABIATA
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobado: (04) Folios
Nº: L.M.
Elaborado:

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48 - 55. Bogotá D. C.

TELÉFONO: 7653016 – 301-3942384. Email: proyectos@solulinea.com - cidr.delgado@hotmail.com

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

IDRD Instituto Distrital de Recreación y Deporte	UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE	Interventoría: CONSORCIO SANTA PAULA 008
		Contratista: UNION TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN
VISITA A TALLER DE ORNAMENTACIÓN		Fecha: 22 10 2019
REGISTRO FOTOGRAFICO		
TALLER DE ORNAMENTACIÓN CALLE 7 N° 28-35 - BARRIO RICAURTE		
1- FABRICACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES		
2- CORTE Y FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA - MÓDULO B		
3- ESTRUCTURA METÁLICA DEL MÓDULO B, EN PRODUCCIÓN		
FIRMA: 		FIRMA: 
DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA: Ing. R2D Delgado Cabiativa		PREPARO: Ing. L2D M. Moreno B.

IDRD-CES2999-2019-000152

Bogotá D. C., 16 diciembre de 2019

Señor:
RAFAEL PALACIOS DORADO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SAN ANTONIO

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.2937 de 2017** cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ DC, PARQUE SIMON BOLIVAR – 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".

Asunto: **FABRICACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA**
Cordial Saludo,

En la visita realizada el 12 de diciembre de 2019, por la Interventoría Consorcio Santa Paula 008, a los talleres "ESMECOL INGENIERÍA SAS" y el de "TECNIFORMAS METÁLICAS LTDA", se encontró que la fabricación del material para la estructura metálica es demasiado lenta y no se observó adelanto con respecto a lo revisado en la visita anterior.

Al día de hoy, se reporta un atraso en la fabricación y suministro de aprox. 143 ton; a la fecha, deberían estar fabricados en la obra 359 ton; desde el día 2 de diciembre de 2019, no han despachado material y se prevé incumplimiento en el proceso de izaje ya que una vez se realice el montaje de la estructura que está fabricada en obra, no habrá material elaborado suficiente, para completar los pórticos en los módulos.



Además, el producto bruto para la fabricación es importado y la época decembrina afecta de cierta manera el normal desarrollo de la obra, por las festividades de fin de año.

Por lo descrito anteriormente, la Interventoría le ha solicitado la presentación de un PLAN DE CONTINGENCIA para establecer compromisos y estrategias que conlleven al cumplimiento del cronograma de obra. A la fecha no lo hemos recibido.

Sin otro particular,


ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL

Anexos: N/A
Con copia: IDRD-ÁREA DE INTERVENTORÍA
Elabora: L.M.

		720
10 de mayo de 2017 ACTA No.	CONTINUACIÓN:	DD MM AA 04 12 2017
LUGAR:	TALLERES DE ORNAMENTACION ORO TECNOFORMAS METALICAS LTDA	HORA DE INICIO:
		HORA FIN:
NOMBRE	ASISTENTES	
CARGO	DEPENDENCIA	
GILBERTO GOMEZ	INSPECTOR INTERVENIDORA	CSP 008
LUIS A. MERRANO	RESIDENTE INTERVENIDORA	CSP 008
		
ORDEN DEL DIA		
1. VISITA A TALLERES DE ORNAMENTACION DE SUBA Y RICAURTE		
TEMAS TRATADOS		
Lectura acta anterior: N/A.		
1- EL DIA DE Hoy se realiza visita a LOS TALLERES DEL GIRASOL RICAURTE, TECNOFORMAS METALICAS LTDA UBICADO EN LA CALLE 7 N° 28-71 Y EL TALLER ESTECOL INGENIERIA SAS LOCALIZADO EN LA AV. CIUDAD DE CALI #163-05 - SUBA.		
2- EN EL TALLER TECNOFORMAS METALICAS LTDA, SE EVIDENCIA LA FABRICACION DE ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL HONDU B; PLACA EN LAMINAS DE EIPESOR 2 CM PARA CORTE Y FABRICACION, ANTES DE ALCANOS ELEMENTOS ESTRUCT- RALES LISTOS PARA DESMONTAR.		
3- EL MATERIAL FABRICADO ES DE APROXIMADAMENTE 3.5 TONELADAS		
4- EN EL TALLER "ESTECOL INGENIERIA SAS" SE EVIDENCIA LA FABRICACION DE DOS COLUMNAS METALICAS, DE APROXIMADAMENTE 1300 KGS/CU, SIN PINTAR, PERFORAL ACERQUINADO SOLDADURA A ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL HONDU A		

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

COMPROMISOS			
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN	
5.- MATERIAL CORTADO PARA ELABORACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS			
6.- LA ESTRUCTURA FORJADA SIN PINTAR ASIENDO Aprox. A 1400 \$ / U.			
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN			
¿Se logró el objetivo?		Sí	No
Observaciones			

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUELÉN CONVOCA	SECRETARIO (S)
FIRSA 	FIRSA
NOMBRE LUIS A. MEDRANO	NOMBRE LUIS A. MEDRANO
CARGO	CARGO ING. RESERVISTA

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	LUIS A. MEDRANO
---	-----------------

Finalmente, se realizó un resumen de las visitas de taller así:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Bogotá D. C., 24 enero de 2020

Señor:
RAFAEL PALACIOS DORADO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL SAN ANTONIO


Referencia: **CONTRATO DE OBRA No.2937 de 2017** cuyo objeto es "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTONICAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ DC, PARQUE SIMON BOLIVAR – 12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS PARA TODOS".

Asunto: **INVENTARIO MATERIAL ESTRUCTURA EN TALLERES**

Cordial Saludo,

Adjunto a la presente, relacionamos el inventario de materiales para la estructura metálica, que la interventoría CONSORCIO SANTA PAULA 008 registró durante el desempeño de visitas que realiza a los talleres de ornamentación, sitios en los cuales el Contratista manifiesta está almacenado el material o en proceso de fabricación. Una de las visitas se realizó al taller de ornamentación TECNIFORMAS METÁLICAS LTDA, ubicado en el barrio Ricaurte Calle 6ª # 28 -71 y el otro en el depósito La Campana ubicado en SIBERIA – Autopista Medellín Km 2,5 Vía a Siberia.

IDRD-CE52999-2020-000369


BOGOTÁ, D.C. 24 de Enero de 2020
SEÑOR: RAFAEL PALACIOS DORADO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO
CALLE 6ª # 28-71, BARRIO RICARTE, BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO: 301-3942384
CORREO: proyectos@solunsa.com - civil.delgado@hotmail.com

INVENTARIO DE MATERIAL EN TALLERES/BODEGAS

Fecha : 22 de Enero 2020

TALLER TECNIFORMAS - MATERIAL EN BRUTO O LAMINADO SIN REFERENCIA - EL CONTRATISTA INFORMA QUE ESTE MATERIAL CORRESPONDE AL MÓDULO B				
CANTIDAD	ANCHO	LARGO	W(Kg)	PESO TOTAL(kg)
3	2,44	12,20	15.335	15.335

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48 - 55, Bogotá D. C.
TELÉFONO: 7653016 – 301-3942384. Email: proyectos@solunsa.com - civil.delgado@hotmail.com

TALLER TECNIFORMAS - MATERIAL EN BRUTO O LAMINADO SIN REFERENCIA - EL CONTRATISTA INFORMA QUE ESTE MATERIAL CORRESPONDE AL MÓDULO C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	W(Kg)	PESO TOTAL(kg)
4	2,44	6,10	8.763	76.311
16	2,44	6,10	29.210	
10	2,44	6,10	14.605	
13	2,44	6,10	9.493	
5	2,44	6,10	3.651	
3	2,44	6,10	5.477	
1	2,44	6,10	2.191	
2	2,44	6,10	2.921	

DEPÓSITO LA CAMPANA EN "SIBERIA" MATERIAL EN BRUTO O LAMINADO SIN REFERENCIA ; EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE QUE ESTE CORRESPONDE AL MÓDULO C

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	W(Kg)	PESO TOTAL(kg)
9	2,44	6,10	16.431	38.338
15	2,44	6,10	21.907	

BODEGA INDUSTRIAS CRUZ; EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTE MATERIAL REPOSA EN ESTA BODEGA - SIN VERIFICAR POR INTERVENTORÍA

CANTIDAD	ANCHO	LARGO	W(Kg)	PESO TOTAL(kg)
3	2,44	6,10	6.572	33.956
3	2,44	6,10	5.477	
10	2,44	6,10	10.954	
5	2,44	6,10	3.651	
5	2,44	6,10	7.302	

DIRECCION CORRESPONDENCIA: CARRERA 70C No. 48 - 55, Bogotá D. C.
TELÉFONO: 7653016 – 301-3942384. Email: proyectos@solunsa.com - civil.delgado@hotmail.com

NIT 901.326.500-1

MATERIAL ELABORADO EN TALLERES - FALTA CERTIFICACIÓN DE MATERIALES

TALLER DE ORNAMENTACIÓN TECNIFORMAS Calle 6 N° 28 - 71

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	ELEMENTO	CANTIDAD	LARGO	W(kg)	MÓDULO C
COLUMNA C-C3	HS600X8X290X16	c-m12	1,00	12,747	1.374,65	3.604
COLUMNA C-C23	HS600X8X290X16	c-m9	1,00	11,452	1.233,85	
COLUMNA C-C25	HS600X8X290X16	c-m15	1,00	9,252	995,13	

DEPÓSITO LA CAMPANA- Autopista Medellín Km 2,5 Vía Siberia

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	LARGO	W(kg)	Total	NUCLEO CENTRAL
PERFIL	HEA 180	2	12,00	35,500	852,00	3.385
PERFIL	HEA 240	3	12,00	60,300	2.170,80	
PERFIL	HEA240	1	6,00	60,300	361,80	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Es importante manifestar entonces que, los rubros del plan de inversión del contrato 2937 de 2017, no fueron modificados en la trazabilidad expuesta por el Consorcio Santa Paula 008, pues, esta obedece a un cambio de destinación de los recursos aprobados para la inversión en el proyecto Unidad Deportiva el Salitre. Adicionalmente, en el estudio de la información del procedimiento administrativo, se evidencia la ausencia de Plan de Compras del proyecto, es decir, no existe especificidad en los giros del anticipo, así las cosas, no se encontró en los soportes cantidades, unidades de medida, valores unitarios y descripción contra las actividades vinculadas dentro del presupuesto del contrato de obra 2937 de 2017, como consecuencia se concluye que, tampoco se ubicaron por medio de actas parciales pagas a la UT ASEMAIN la amortización del 100% de los recursos del anticipo del contrato.

Finalmente, frente al anticipo, se encuentra conforme lo indico el interventor Santa Paula 008 en la prueba por informe que:

*“En primera instancia, se aclara al apoderado del garante que el CONSORCIO SB en calidad de interventor del contrato de obra pública No. 2937 de 2017, **NO** ha dado por satisfecha la obligación de legalización, buen manejo y correcta inversión del anticipo, pues no existe evidencia de aprobación emitida por el CONSORCIO SB al contratista UT SAN ANTONIO IDRDR REFORZAMIENTO ASEMAIN en lo referente a los giros realizados de los recursos del anticipo.*

Por lo anterior, y en cumplimiento del deber contractual, el interventor CONSORCIO SANTA PAULA 008 realizó los requerimientos necesarios para la revisión de la documentación que soporta los desembolsos y la inversión del anticipo entregado mediante fideicomiso al contratista UT SAN ANTONIO IDRDR REFORZAMIENTO ASEMAIN, y así mismo, realizó las respectivas verificaciones en la ejecución de las obras de la Unidad Deportiva el Salitre.

No obstante, a la fecha no ha sido posible establecer en debida forma la legalización, buen manejo y correcta inversión del anticipo de la totalidad de los recursos del anticipo del contrato de obra pública No. 2937 de 2017.

En segunda instancia, el Anexo técnico del contrato de obra pública No. 2937 de 2017 establece:

(...)

INVERSIÓN Y LEGALIZACIÓN: Para los pagos que se hagan con los recursos del anticipo se deben contar con el visto bueno de la Interventoría presentando un oficio remitido de autorización de pago dirigido a la fiduciaria, anexando los soportes contables requeridos para soportar el desembolso. Estos desembolsos deben corresponder al plan detallado de inversión del anticipo.

El plazo máximo para la legalización del anticipo, será a la firma del acta del recibo final del contrato. Dicha legalización deberá estar acompañada del informe final de inversión de anticipo, el cuadro consolidado de desembolsos respecto al plan e inversión vigente, el reporte de rendimientos financieros generados y los soportes de las respectivas devoluciones al IDRDR, igualmente deberá remitirse el cierre de la fiduciaria y la certificación de paz y salvo ante la fiduciaria.

(...)

Imagen tomada del folio 11 del documento: Anexo Técnico contrato 2937 de 2017

En consecuencia, el plazo máximo para que se esclarezcan los hechos correspondiente a la legalización del anticipo es la suscripción del acta de recibo final del contrato de obra pública No. 2937 de 2017, y la interventoría CONSORCIO SANTA PAULA 008 en su potestad y ejercicio de las obligaciones contractuales puede realizar los requerimientos necesarios a lo largo del plazo de ejecución del contrato.

De lo anterior se concluye, que se realizaron giros por concepto de anticipo a los proveedores del contratista, bajo lo cual se debe señalar que estos no cumplieron con los requisitos legales y

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

contractuales como quiera que tales giros fueron realizados con soportes que no cumplen financieramente y a empresas dedicadas a temas diferentes a los apropiados en los rubros determinados en el plan de inversión del anticipo, por lo que se procederá con la remisión del presente acto administrativo a las entidades competentes para las investigaciones del caso.

Así mismo, se concluye que los recursos girados por concepto de anticipo a los proveedores del contratista, no se amortizaron en su totalidad tal y como se demuestra en las actas de avance de obra y el balance final de obra, lo cual demuestra que no se amortizo la suma de \$2.876.172.668, conforme el siguiente cuadro:

AMORTIZACION DEL ANTICIPO			
CONCEPTO	VALOR		
VALOR OBRA (V)	\$		11.763.441.857,00
VALOR ANTICIPO (VA)	\$		4.577.216.641,00
ESTAMPILLA UDISTITAL 1%	\$		45.772.166,41
CONTRIBUCION FONDO DE VIGILANCIA 5%	\$		228.860.832,05
VALOR DE SEMBOLSAO (VD)	\$		4.302.583.642,54
ACTAS PARCIALES OBRA (O)			
NUMERO ACTA	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
PARCIAL 1 OBRA	PRIMER MES	\$ 46.580.779,00	\$ 18.203.984,00
PARCIAL 2 OBRA	SEGUNDO MES	\$ 75.321.238,00	\$ 29.435.888,00
PARCIAL 3 OBRA	TERCER MES	\$ 166.663.880,00	\$ 65.133.014,00
PARCIAL 4 OBRA	CUARTO MES	\$ 134.419.956,00	\$ 52.531.940,00
PARCIAL 5 OBRA	QUINTO MES	\$ 207.234.790,00	\$ 80.988.313,00
PARCIAL 6 OBRA	SEXTO MES	\$ 45.954.594,00	\$ 17.959.268,00
PARCIAL 7 OBRA	SEPTIMO MES	\$ 396.489.253,00	\$ 154.949.831,00
PARCIAL 8 OBRA	OCTAVO MES	\$ 472.545.697,00	\$ 184.673.041,00
PARCIAL 9 OBRA	NOVENO MES	\$ 552.236.324,00	\$ 215.816.506,00
PARCIAL 10 OBRA	DECIMO MES	\$ 694.870.226,00	\$ 271.558.493,00
PARCIAL 11 OBRA	ONCEAVO MES	\$ 553.828.533,00	\$ 216.438.748,00
PARCIAL 12 OBRA	DOCEAVO MES	\$ 1.540.767.077,00	\$ 602.138.888,00
TOTAL OBRA EJECUTADA (O)		\$ 4.886.912.347,00	\$ 1.909.827.914,00
PRECIOS NO PREVISTOS EJECUTADOS SIN ACTA DE LEGALIZACIÓN (P)		\$	228.803.099,00
DESCUENTO POR ACTIVIDADES NO EJECUTADAS (D)		\$ -534.241.234,00	\$ -208.783.941,00
VALORES REALES EJECUTADOS -(VR=O+D+P)		\$ 4.581.474.212,00	\$ 1.701.043.973,00
VALOR AMORTIZADO (AM)	\$		1.701.043.973,00
VALOR SIN AMORTIZAR (VSA = VA - AM)	\$		2.876.172.668,00
Nota: El descuento aplicado para la realización del torque de la estructura, corresponde al 10% del costo del montaje de la estructura izada; el cual corresponde a: \$39.785.308. Dicho costo se encuentra incluido en los descuentos por			

De lo anterior, es claro que el anticipo girado al contratista no fue invertido de conformidad con lo señalado en el contrato y los anexos técnicos y por tanto, conforme el acervo probatorio se evidencia el USO INDEBIDO DEL ANTICIPO entre otras cosas al encontrar (anexo 3 del informe de Interventoría) giros por dicho concepto a favor de proveedores cuyo RUT no correspondía a las actividades para las cuales se giró dicho anticipo al contratista; es así como, al menos 3 de las empresas facturaron bienes y servicios que no se ajustaban a su actividad económica, al no tener la capacidad y experticia necesaria para atender los requerimientos técnicos requeridos, tal es el caso por ejemplo de la empresa de consultoría a la que se le contrató el suministro de materiales y la empresa de transporte a la que se le contrató la prestación de servicios de mano de obra y suministró material, también que la contadora del contratista fuera simultáneamente representante legal y proveedora de materiales a través de otra empresa, así como proveedores que imputaron el anticipo al AIU, cuando este no estaba estipulado para dicho concepto dado que solo era permitido para costos directos, hechos probados en la actuación administrativa que determinan el incumplimiento.

Así mismo, según los soportes allegados al proceso, en los documentos de trazabilidad de los giros por concepto de anticipo a los proveedores del contratista, no se indicaron las cantidades establecidas para cada giro aprobado, por el contrario, las cuentas de cobro presentadas por los proveedores relacionaban solamente valores generales, omitiendo cantidades para cada ítem contratado. Por otra parte, pero no menos importante, se pudo establecer que algunos proveedores del contratista formaban también, parte del equipo de trabajo de este. Al respecto, se pudo evidenciar que la señora PAOLA MIER, quien fungía como contadora del Contratista de obra, a su vez se desempeñaba como representante legal de la empresa Inversiones Grandes Proyectos

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

de Construcción SAS, es decir, que era la contadora del contratista de obra 2937 de 2017, y al mismo tiempo, a través de la empresa Inversiones grandes proyectos de construcción SAS era proveedora de material, la cual recibió recursos del anticipo, materializándose de esta manera un riesgo para el control y manejo de dichos recursos y una apropiación indebida de los mismos.”

Lo anterior, aunado a que, en las actas de avance de obra realizadas durante la ejecución del contrato, no se encontró identificada la incorporación de la totalidad de los recursos del anticipo a título de amortización.

Aspectos estos, que evidencian un USO INDEBIDO DEL ANTICIPO dado que el contratista no implementó las medidas necesarias para salvaguardar el uso de dichos recursos durante la ejecución del contrato en las condiciones pactadas. Así mismo, se demuestra una apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo, como quiera que es claro la amortización en el balance final del contrato de obra y en las actas de avance de la misma, suma que asciende a \$2.876.172.668 de acuerdo con lo manifestado por la interventoría.

Adicionalmente, como quiera que el apoderado también argumenta una ausencia de afectación del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y confusión de los conceptos de amortización de anticipo con buen manejo y correcta inversión del anticipo

Es importante concluir adicionalmente que le contratista hizo uso indebido del anticipo porque invirtió el anticipo en conceptos que no estaban permitidos en el pliego de condiciones, lo que conlleva también a que exista un eventual apropiación indebida del mismo para la ejecución del proyecto.

La ausencia y falta de prueba de la amortización del anticipo debidamente probada en las actas parciales de obra, conllevaban a probar a que existió un uso indebido del anticipo en conceptos que no estuvieron aprobados inicialmente, y una apropiación indebida del anticipo porque no se encontró prueba que indicara la inversión del 100% de los dineros entregados en calidad de anticipo.

II. DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD DEL GARANTE.

FALSA MOTIVACION DEL ACTO

Argumenta el apoderado de la compañía garante, que tratándose de actos administrativos en lo referente a la motivación que el mismo debe contener, esta debe comportar elementos fácticos acordes a la realidad, y del mismo modo, que tales circunstancias de hecho, deben ser correctamente valoradas en el plano jurídico, pues de no ser así, se evidenciaría una falsa motivación del acto administrativo y que dicha cuestión no ocurrió con ocasión de la expedición de la Resolución No. 1452 de 2022, por los argumentos que expuso.

Bajo lo anterior, en efecto la Resolución recurrida obedece a un análisis completo sobre el acervo probatorio y los argumentos expuestos por las partes, en donde se logró evidenciar que efectivamente el contratista no ejecutó ni culminó la obra contratada por circunstancias imputables a su propia culpa entre ellas y como se analizó, por no realizar las actividades establecidas en las etapas del proyecto, y por no hacer un uso adecuado de los dineros entregado en calidad de anticipo.

Acorde con ello, el Consejo de Estado ha indicado que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto, que cuando

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivación.

Situación que no fue demostrada por las partes dentro del trámite sancionatorio, como quiera que no existe prueba suficiente que demuestre que la falta de entrega de la obra y la indebida inversión del anticipo, obedezcan a circunstancias atribuibles a la entidad.

A. Del argumento por cuanto el contrato No. 2937 no fue ejecutado en la forma y plazo convenido por decisiones de la entidad contratante

Expone el apoderado que el contrato de obra No. 2937 de 2017 estableció como plazo de ejecución un total de 13 meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, lo cual ocurrió el día 17 de noviembre de 2017, el mismo ha tenido un gran número de modificaciones, suspensiones y prorrogas, que se motivaron precisamente en la existencia de falencias de planeación y la indefinición de cuestiones técnicas suficientes para proceder a ejecutar el objeto contratado, imprecisión en diseños, cimentación y demás.

Consideraciones de la entidad:

Tal y como se indicó en líneas atrás y fue plenamente desarrollado, en el desarrollo de la ejecución del contrato se realizaron sendas modificaciones las cuales fueron originadas por solicitud del contratista y avaladas por el interventor del contrato, en este sentido, las decisiones originadas por la Entidad y que hace referencia el apoderado, estuvieron orientadas a dar cumplimiento del objeto a partir de las decisiones en la ejecución propia del contrato, por lo que no puede decirse que el contrato no fue ejecutado por las decisiones de la entidad.

Adicional a lo ya expuesto, como bien lo trae a colación el apoderado respecto a la impresión de los diseños y la cimentación, conforme con el acervo probatorio recaudado, se observa que el ajuste a los diseños que debía entregar el contratista del reforzamiento estructural, no aportó en la solicitud de licencia de construcción un análisis de vulnerabilidad sísmica, así mismo se evidencia que el levantamiento estructural no coincidía con lo encontrado en la obra, ni con lo entregado por las firmas PCA y CEYCO, también que el diseño estructural trabajaba de manera independiente a la estructura.

De igual manera, se observó que el diseño entregado a la curaduría no tuvo en cuenta la información de consultoría de PCA y CEYCO, pues esta información hablaba de un reforzamiento de los elementos y un reforzamiento local de la cimentación afectando en menor medida la estructura existente. Bajo estas premisas y al modificarse el modelo de estructura debía plantearse una nueva cimentación, que como se ha manifestado no fue presentada en la curaduría por la UT ASEMAIN, obviando su obligación principal en etapa de licencias.

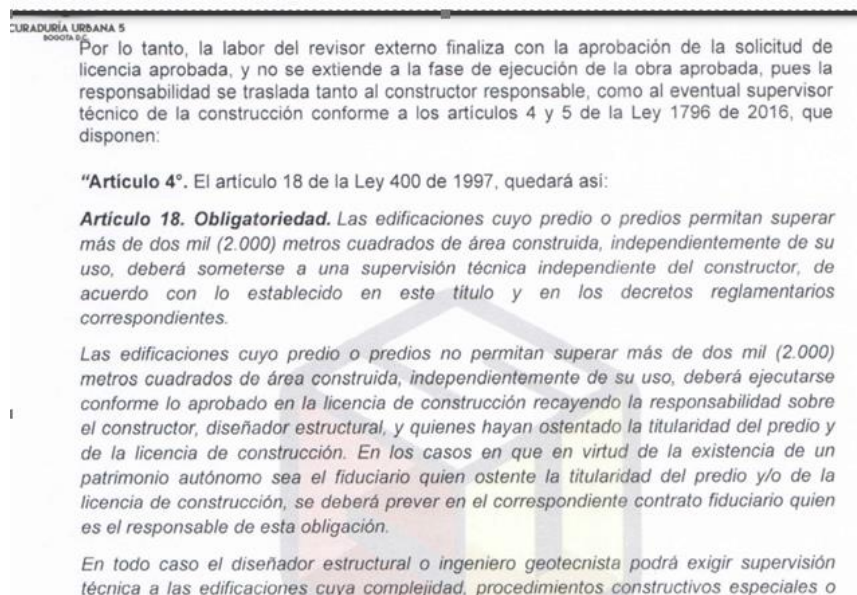
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

diseños de cimentación, en donde manifiesta que el ingeniero realizó varias comunicaciones al IDRD donde requería los planos en versión final de los diseños de cimentación, y bajo los cuales el IDRD conocía cada una de las observaciones realizadas por el consorcio interventor SB respecto al diseño de cimentación, indicando que el IDRD se responsabilizó del diseño de la cimentación y el ingeniero comunico a la curaduría urbana No5 sobre su solicitud de exoneración.

Consideraciones de la Entidad:

Conforme con el acervo probatorio recaudado, lo que se encontró a contrario sensu de lo argumentado pro el apoderado del contratista los planos y diseños de la cimentación fueron aprobados y firmados por el ingeniero Fernández como revisor externo actuando como ingeniero del consorcio SB interventor del contrato de obra y bajo lo cual la curaduría ante su solicitud de retirar le respondió *“la labor del revisor externo finaliza con la aprobación de la solicitud de licencia aprobada, y no se extiende a la fase de ejecución de la obra aprobada”*.

Situación que prueba, que el ingeniero aprobó y avalo los planos que hicieron parte de la solicitud de la licencia, y que después ante la cesión del contrato de interventoría y su no seguimiento en la etapa de construcción le solicita a la curaduría que se retirara como responsable. Lo cual es evidentemente contrario a la norma, el firmo los planos para otorgase la licencia y el curador aprueba la licencia, su responsabilidad ya está incluida en ese aval.



Conforme lo anterior y el análisis realizado anteriormente, el argumento del apoderado no esta llamado a prosperar.

2. Del argumento del debido control, monitoreo y cualificación de los riesgos dentro del contrato de obra No. 2937 de 2017.

Argumenta el apoderado del garante, como segundo punto de reproche efectuado por en contra de la resolución No. 1452 de 2022, respecto a la falsa motivación en que la misma incurre respecto del análisis y consideraciones sostenidas por la entidad. La regulación normativa en materia de contratación estatal de nuestro país, determinó la necesidad de

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

implementar, como etapa obligatoria, la distribución de riesgos, en desarrollo de la cual las entidades estatales TIENEN EL DEBER LEGAL DE ELABORAR CON PRECISIÓN LA IDENTIFICACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS, asunto sobre el cual no sobra subrayar que dicha actividad debe sujetarse a un criterio de justicia y equidad, al tiempo que corresponde ejercerse con apego a los principios y reglas constitucionales y legales que orientan la actividad contractual del Estado.

Consideraciones de la Entidad.

Como bien se ha indicado, la falsa motivación del acto debe corresponder a que la congruencia entre el acervo probatorio y lo resulto por la entidad en su acto administrativo, frente a lo cual se señala que la revisión de los riesgos en la ejecución del contrato define cargas que deben ser verificadas en su ejecución, pero eso no quiere decir que corresponda su control solo a la entidad, sino que el contratista precisamente en aplicación del principio de buena fe, también le corresponda advertir o evidenciar cualquier eventualidad de las allí identificadas para adoptar las medidas del caso.

Lo anterior, como quiera que los posibles riesgos que se podían presentar en la ejecución del contrato, fueron trabajados en conjunto con los proponentes del proceso, identificaron la asignación frente a los mismos.

En tal sentido, se tuvieron en cuenta en la decisión de la Resolución No. 1452 los documentos que determinaron los posibles riesgos del contrato y precisamente la manera como fueron afrontados por las partes en la ejecución del contrato.

3. Del argumento del derecho fundamental del debido proceso

Frente a los argumentos expuestos por el apoderado del garante, señalada que el debido proceso se entiende garantizado cuando se adelanta un procedimiento que, como mínimo, agote un requerimiento previo para que el contratista y los demás interesados conozcan los fundamentos que darán lugar a la determinación administrativa que se pretenda adoptar y, de cara a ello, puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción, para lo cual deben tener la posibilidad de pedir pruebas y contradecir las que se aduzcan en su contra, pues así lo consagra el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin embargo, en el procedimiento que nos avoca se presentaron situaciones que lejos de permitir el ejercicio defensivo de mi representada, se vulneró y el mismo se desconoció por temas que esboza en su argumentación.

Frente a lo cual, es necesario tener en cuenta que como obra en el expediente correspondiente, en el mismo se agotaron todas y cada una de las etapas procesales que fueron dispuestas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, teniéndose que el Contratista de Obra y su garante tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos, solicitar la pruebas y controvertir las que se allegaron en su contra, y así mismo presentaron consideraciones finales, antes y después del decreto de prueba oficiosa de informe, así las cosas no puede enunciarse de forma genérica que se ha violado su derecho al debido proceso, cuando gozó de todas las oportunidades y garantías procesales que son dispuestas en la reglamentación concerniente.

a. Del argumento por haber expedido decisiones ajenas al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011

Expone el apoderado que en abierto desconocimiento y desobediencia a los deberes consagrados en las normas precitadas, el Instituto Distrital de recreación y Deporte IDRD, en la expedición de la resolución No. 1452 y de la cual se pide su revocación definitiva

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

adopto una conducta completamente ajena e irregular a las previsiones legales consistente en propiciar que la cuantificación de las cargas económicas impuestas se efectúen en trámite posterior a la ejecutoria del presente acto administrativo, y en ausencia de discusión por parte de mi representada o de la unión Temporal contratista.

Consideraciones de la Entidad.

Como se indicó en el análisis de la cláusula penal, se tiene que la entidad estatal contratante, en los contratos en los que se haya incluido cláusula penal, como es el Contrato 2937 de 2017, está exenta de la prueba del monto de los perjuicios, por cuanto esa suma ya fue determinada en forma anticipada, teniendo que su actuar deberá circunscribirse en los juicios de responsabilidad a la determinación del daño y la existencia del perjuicio más no al valor dado al mismo.

b. Del argumento por no dar trámite a solicitud de recusación

Como argumento de violación del debido proceso, el apoderado expuso los argumentos de no haber dado trámite a la recusación presentada por el apoderado del contratista en la audiencia del 7 de octubre de 2022, frente a lo cual, si bien ya se realizaron las consideración por parte de la entidad, en el apartado de los argumentos de reproche frente a la resolución 1452 por parte del apoderado del contratista en el numeral 5.1, valga la pena realizar un análisis continuo sobre el tema de debate, en cuanto a la solicitud de recusación formulada la cual se rechazó de plano, como se indicó anteriormente, es necesario precisar los argumentos facticos y jurídicos en que se basa la decisión en el marco del actual procedimiento administrativo así:

En audiencia llevada a cabo el 7 de octubre de 2022, una vez se otorga la palabra al apoderado del contratista para presentar alegatos de conclusión el apoderado especial Juan Carlos Quintero Cuervo, en vez de realizar la presentación de los alegatos en la oportunidad debida, presenta sorpresivamente una nueva recusación contra el Subdirector de Contratación del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), Doctor, Camilo Ernesto Quiroga Mora, indicando los siguiente:

(...)

En el curso de la audiencia establecida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. 2937 de 2017, suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, cuyo objeto fue contratar por el sistema de precios unitarios fijos, las obras de la primera etapa del reforzamiento estructural y adecuaciones arquitectónicas, de la Unidad Deportiva El Salitre de Bogotá, se practicó el testimonio de la señora Ingrid Yurani Roperó Triviño.

2. La señora Roperó Triviño fungía como contratista de la entidad desempeñando labores de apoyo a la supervisión de la interventoría desde aproximadamente el mes de octubre de 2019, cuando en virtud de la cesión del contrato, el Consorcio Santa Paula 008 asumió la interventoría del contrato de obra No. 2937 de 2017.

3. Así las cosas, el pasado 15 de mayo de 2022 se practicó el mencionado testimonio, donde la testigo en varias oportunidades al contestar las preguntas formuladas por el doctor Camilo Quiroga se refirió a él con el denominativo “jefe”, situación que fue puesta de presente por la doctora Diana Carolina Barragán Vargas, apoderada del contratista para ese momento y quien ya había solicitado,

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso, la tacha de la testigo por su evidente falta de imparcialidad.

4. Lo anterior, deja en evidencia nuevamente la posición que tiene el IDRD frente al presente procedimiento sancionatorio que se adelanta en contra del contratista, pues haciendo un análisis de la relación que hay entre la testigo y el doctor Quiroga, no es posible predicar que exista una relación de subordinación laboral o de alguna otra índole, pues la señora Roperó Triviño no se encuentra vinculada por contrato laboral con la entidad ni tampoco labora para la Subdirección de Contratación.

5. Así las cosas, no se entiende como la testigo puede referirse al doctor Quiroga como su jefe, más allá de dejar absolutamente claro que el subdirector de contratación tuvo algún tipo de injerencia en la forma en que la testigo debía rendir su testimonio.

6. Nuevamente nos encontramos frente un hecho que revela la falta de imparcialidad y la posición que tiene la entidad respecto del presente proceso sancionatorio, pues valga la pena destacar, el doctor Camilo Quiroga ya ha sido recusado en dos oportunidades anteriores, la primera de ellas por el apoderado de la entidad garante, La Equidad Seguros, por la revelación de datos que estaban bajo reserva del proceso sancionatorio y por ende en custodia del doctor Quiroga, por parte de la directora general del IDRD en una rueda de prensa llevada a cabo en noviembre de 2021, donde se afirmó que el contratista había incumplido el contrato de obra sin que ello se haya demostrado hasta el momento, recusación que fue negada.

7. El 13 de junio de 2022, el suscrito presentó recusación formal en contra del doctor Quiroga por los hechos sucedidos con el testimonio de la señora Mónica Triviño, donde al finalizar la audiencia del 23 de marzo de 2021, el doctor manifestó que “le estaban sacando canas a Mónica, pero lo hizo bien”, situación que llevó al suscrito a solicitar la recusación del doctor Quiroga, pues era evidente la falta d imparcialidad y la violación a los diferentes principios con los que se deben adelantar las actuaciones administrativas, máxime cuando en un presunto intento de ocultar lo sucedido con la grabación de la audiencia, la entidad subió a SECOP I una copia de la misma donde se había extraído el aparte de la manifestación hecha por el doctor Quiroga. Dicha recusación nuevamente fue negada por la entidad.

8. Es absolutamente claro que el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD, en cabeza del subdirector de contratación, quien fue facultado para dirimir la controversia por el presunto incumplimiento al Contrato de Obra No. 2937 de 2017, tiene una posición ya sentada frente a este caso, situación que ha sido denunciada en varias oportunidades a lo largo del proceso y que ahora nuevamente se deja en evidencia como el doctor Quiroga tiene una clara injerencia en la forma en que los testigos han rendido sus testimonios, lo que claramente se verá reflejado en las resultas del proceso.

(...)

SOLICITUDES

Con base en todo lo anterior, amablemente solicito:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

1. Que sea tramitada la presente recusación en contra del doctor CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA, subdirector de contratación del IDR, de acuerdo con lo establecido para tal fin, en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- 1. Que se suspenda el curso del proceso administrativo sancionatorio hasta que se haya decidido de fondo la recusación, de acuerdo con lo establecido en el inciso cuarto, del artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.*

Ante la nueva solicitud de recusación, el Despacho precisó todo lo actuado hasta la fecha y se motivó la decisión de rechazar de plano la recusación formulada conforme a los siguientes apartados de la audiencia que se transcriben a continuación:

(...)

“Bueno, vamos a hacer una revisión general de lo actuado hasta este punto a fin de verificar la solicitud que hace, el apoderado del contratista.

Lo primero que es importante señalar es precisamente el histórico de la actuación administrativa y voy a hacer un recuerdo breve de las 50 audiencias, con las que con el día de hoy se completan en el marco de la actuación administrativa.

El procedimiento administrativo inició el día 9 de octubre de 2020, se presentaron descargos los días 20 y 27.

El 3 de noviembre hubo cambio de apoderado del contratista y se hizo una solicitud de nulidad.

El 12 de noviembre hubo presentación de descargos por la apoderada de contratista.

El 24 de noviembre al finalizar la presentación de descargos de 2020.

El 3 de diciembre 2020 se resolvió una recusación presentada en el marco del acto sentido, en términos generales.

El día 15 de diciembre de 2020 se emitió el acto administrativo que ordenó la práctica de pruebas

El día 20 de enero del 2021 se presentó la prueba por informe.

El día 27 de enero del 2021 continúa la presentación de la prueba por informe.

El 4 de febrero continuó la presentación de la prueba por informe

El 16 de febrero de 2021. Se hizo la práctica de pruebas testimoniales.

El 17 de febrero continuó con practicar pruebas testimoniales

El 19 de febrero de 2021 solicitud de suspensión por incapacidad médica de la apoderada del contratista,

El 25 de febrero de 2021 solicitud de nulidad del procedimiento.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

El, 4 de marzo del 2021 el IDRD se resolvió solicitud de nulidad del procedimiento.

El, 12 de marzo del 2021 se emitió un nuevo administrativo que adopto decisión sobre práctica de pruebas.

El 23 de marzo 2021 se lleva a cabo práctica de pruebas testimoniales.

El 14 de abril de 2021 hubo renuncia del poder por parte del apodera del contratista.

El 26 de abril de 2021 reasumió la apoderada del contratista y solicitó nuevamente la suspensión de la audiencia. El día 3 de mayo de 2021 se continuó con la práctica de pruebas testimoniales.

El 4 de mayo 2021, continua práctica de pruebas testimoniales.

El, 12 de mayo del 2021 continuó la práctica de pruebas testimoniales.

El 20 de mayo del 2021 hubo suspensión por incapacidad médica.

El día 28 de mayo del 2021 se continuó con la práctica de pruebas testimoniales.

El 8 de junio del 2021, hubo práctica de pruebas testimoniales

16 de junio 2021 se continuó con la práctica de testimonios

El 22 de junio de 2021 se hizo revisión de las pruebas testimoniales que no se han podido practicar.

El 7 de julio del 2021 hubo solicitud de suspensión de la audiencia por el apoderado de la aseguradora.

El 16 de julio de 2021 se emitió acto administrativo que decidió sobre pruebas

El 27 de julio del 2021, nuevamente se verificó acto administrativo que ha sido sobre práctica de pruebas

el 15 de septiembre 2021, se tenía prevista la primera fecha para la presentación de alegatos de conclusión, pero hubo solicitud de suspensión de la audiencia por la apoderada del contratista.

El 28 de septiembre 2021 también se renueva para alegatos de conclusión, hubo solicitud de suspensión de la audiencia por la apoderada del contratista

El 7 octubre 2021 otra vez hubo solicitud el apodera del contratista sobre el control de legalidad de la prueba por informe.

El 13 octubre 2021 hubo solicitud de aclaraciones y observaciones de la prueba por informe

El día 2 de noviembre de 2021 hubo solicitud de suspensión por incapacidad médica.

El 10 de noviembre, 2021, se deja constancia que esa fecha se renueva audiencia, pero el 6 de noviembre 2021 se notificó la existencia de una acción de tutela que conoció el juzgado 64 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá.

El 30 de noviembre 2021 conforme lo ordenado por el juez de tutela, se procedió a convocar la reanudación nuevamente para el día para el día 30 de noviembre 2021, notificado a las partes los oficios correspondientes

El 14 de diciembre, la apoderada manifestó la imposibilidad de asistir.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

El día 3 de enero 2022, la apoderada manifestó la imposibilidad de asistir conforme con correo electrónico allegado

En audiencia del 24 de enero del 2022, hubo solicitud de suspensión de la audiencia por el representante legal del contratista.

El día 2 de febrero de 2022 llegó una nueva acción de tutela, ahora de conocimiento del juzgado 58 civil municipal de Bogotá de pequeñas causas.

el 18 de febrero del 2022 se había convocado a reanudación de audiencia, Sin embargo, el contratista no compareció a la misma, indicando que el fallo de tutela no ha cobrado firmeza ante la impugnación presentada.

El día 25 de marzo del 2022, se insistía exactamente en el mismo inconveniente ya había renunciado en ese momento la apoderada del contratista.

El 21 de abril de 2022 hubo una comunicación del representante legal del consorcio indica la posibilidad de reanudar audiencia, Pese a la citación que se ha enviado y a que digamos que el trámite de impugnación y no suspenderá los efectos de la actuación administrativa,

El día 5 de mayo del 2022 hubo una comunicación del representante legal donde nuevamente señala la imposibilidad de reanudar audiencia.

El día 19 de mayo del 2022 de acuerdo con el fallo de tutela que decidió la impugnación de la última tutela, se convocó a la reanudación de la audiencia. Sin embargo, ese día el representante manifestó que no contaba con abogado y que necesitaba conseguirlo.

El día 26 de mayo 2022, se presentó audiencia el doctor Juan Carlos Quintero Cuervo como abogado del contratista.

El día 2 de junio del 2022, se dio lectura al acto administrativo por el cual se había solicitado que se había solicitado una nulidad en la actuación y se adoptó decisión.

El día 13 de junio, el doctor Juan Carlos Quintero presentó la solicitud de recusación que al inicio de esta audiencia se enuncio y se adoptó decisión correspondiente, sin embargo, al interior de la actuación de la administrativa y aún cuando hoy nos convocaba precisamente la presentación de los alegatos de conclusión, nuevamente el día de hoy se ha llegado a la actuación por parte del apoderado del contratista, una nueva solicitud de recusación, qué pudo haber sido formulada en su momento, aún más teniendo en cuenta varios elementos.

El primero de ellos es que cuando el apoderado del contratista allegó, solicitó el plazo del código general del proceso para presentar sus alegatos de conclusión, término de 10 días que fue otorgado por la entidad precisamente en garantía del derecho de defensa, de contradicción y el conocimiento que debía tener de la actuación administrativa.

Una vez reanudado el término desde los 10 días para presentar alegatos, se presentó la primera solicitud de recusación, el cual se dio curso en su momento. Hoy después de casi 3 meses, al momento de reanudación de la audiencia, nuevamente se presenta una solicitud de recusación que tiene una característica particular, y es que está fundamentando la recusación en una solicitud que en su momento la doctora Diana

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Barragán, como apoderada del contratista, presentó en audiencia, pero no como recusación, sino como la tacha de un testigo por imparcialidad.

En la audiencia del día 15 de mayo del 2021, la doctora Diana expresamente citó el artículo 211 del código general del proceso, en el que expone exactamente los mismos argumentos que aquí se están exponiendo ahora como causal de recusación en contra del suscrito, digamos que, en ese momento, y siguiendo precisamente las reglas establecidas en el artículo 211 del código general del proceso, resulta relevante indicar que cuando se presentan este tipo de solicitudes, el escenario propicio e idóneo para adoptar decisión sobre la procedencia o no de esas solicitud es precisamente el acto administrativo en el cual se adopta decisión en la actuación correspondiente. Y en esas condiciones, precisamente por solicitud de la doctora Diana, es una de las solicitudes que está pendiente de resolver, pero se resuelven de fondo precisamente cuando se adopté decisión al interior de la actuación administrativa, situación que en este momento no ha ocurrido.

Importante destacar y eso se puede verificar en los audios correspondientes de la audiencia del día 15 de mayo, en el minuto 5 punto 12, en particular que es en donde ya hace la solicitud y entonces digamos que ahora lo que resulta sorpresivo, es que el argumento que se presenta sobre la tacha del testigo ahora se emplee con el mismo argumento como una recusación para impedir el avance de la actuación administrativa.

Eso resulta absolutamente sorpresivo y es necesario contarle y traerlo de presente a la actuación cuando uno verifique el contenido de los argumentos expuestos por la doctora Diana Barragán en su momento era precisamente eso y fue antes de la práctica, incluso del testimonio en el cual señaló que podría ser un testigo falso. un testigo tachado por imparcialidad, esas fueron la causal que invocó en su momento la doctora Diana Barragán como apoderada el contratista, siguiendo las reglas precisamente que establece el mismo código sobre el particular, esas tachas se resuelven, esto es precisamente el momento adoptar decisión cuando se consolida todo el acervo probatorio y cuando la administración se encuentra realmente en la posibilidad de verificar la presencia o no de esas solicitudes, verificar el acervo probatorio y darle el valor probatorio a las pruebas allegadas y practicadas en el procedimiento según corresponda desde el punto de vista legal y esa es precisamente la solicitud que está pendiente de decidirse por parte de la entidad una vez lleguemos a esa etapa.

Otro elemento a tener en cuenta y que resulta fundamental es que cuando miramos el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, la etapa de alegatos de conclusión no es una etapa prevista en el procedimiento. Sin embargo, desde el inicio de la actuación se ha dejado claro a las partes que ante la importancia y relevancia de la actuación administrativa, el contenido del acervo probatorio tan importante que existe en la actuación, resulta de especial relevancia la posibilidad que deben tener las partes de pronunciarse sobre las pruebas y el contenido del procedimiento previo adoptar decisiones sobre el particular.

Otro punto que es relevante e importante en la actuación administrativa es que cuando se cuando existe la sustitución de un abogado por la razón que corresponda, el abogado que llega a la actuación recibe el proceso en la etapa en que se encuentre y, en este sentido, digamos que advertir en este momento o en la situación que se presenta en el documento que entrega el apoderado del contratista, cuando desde hace más de casi un año estamos, es precisamente en el punto de presentar alegatos de conclusión, resulta ser una maniobra dilatoria para impedir la continuidad de la actuación administrativa.

Cuando hice el recuento de todas las actuaciones, son 50 audiencias, estamos pendientes de presentar alegatos de conclusión desde el año 2021, rodeado de una serie

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

de circunstancias especiales y particulares, de las cuales ya hicimos trazabilidad y en la cual de alguna manera con este tipo de actuaciones lo que se ha puesto es la afectación de la actuación administrativa, que, como bien lo indica la apoderado del contratista en su documento, es una actuación que también se encuentra sujeto a los principios de economía, de efectividad, de celeridad, del interés público subyacente, al interior de la actuación, señalando argumentos que de alguna manera ya se han presentado en la actuación y sobre los cuales la administración se encuentra pendiente por decidir.

En este momento como ya lo indicado, nos convoca, es la presentación de los alegatos de conclusión y eso hace ya hace un año. Por eso de alguna manera, antes de suspender la audiencia, también le preguntaba al abogado doctor Juan Carlos si tiene alguna causal adicional, por favor, expóngala porque alguna manera resulta temerario que teniendo la posibilidad de verla presentado en la audiencia del mes de junio, cuando ya se le destinaba alegatos de conclusión, guardó silencio. Y tuvimos que de alguna manera surtir el trámite que se surtió, de casi 3 meses para que una vez decidida su solicitud nuevamente en audiencia, ahora presente una solicitud en relación a algo que era de su conocimiento porque les recuerdo doctor Juan Carlos que usted tuvo los 10 días que se que pidió y de hecho un poco más para poder revisar el interior de la actuación administrativa y proceder a la presentación de alegatos de conclusión, que es la etapa en la cual usted recibe el poder y frente a la cual estamos reanudando la actuación administrativa.

En ese sentido, doctor Juan Carlos, tengo que manifestar que no es de mi recibo el documento que usted presente la solicitud que usted presenta, aun cuando tuvo el tiempo más que suficiente para hacerlo, y quisiera leer por aquí un extracto muy importante y es que de alguna manera yo me veo en la necesidad en todo caso de remitir copia de la presente actuación en el Consejo Superior de la judicatura, precisamente, en razón a la exposición que estoy haciendo de toda la trazabilidad del procedimiento y cómo nuevamente el momento en que se va a presentar la etapa de alegatos de conclusión se presentó una solicitud diferente, usted tiene poder desde el día desde el mes de mayo de este año, cuando asumió el poder se le otorgó el término que usted mismo solicitó para presentar alegatos de conclusión, término que se le otorgó en respeto y garantía del derecho de defensa y de contradicción. Una vez renueva el término presentó la recusación que derivó en todos los documentos que ya han sido expuestos en esta audiencia y hoy, de manera sorpresiva, nuevamente se hace la solicitud y aquí quisiera citar una parte de la Corte Constitucional en ese sentido, indica lo siguiente

“La actuación es entendida como la actitud de quien demanda o ejercer el derecho de contradicción, a sabiendas de que carece de razones para hacerlo o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso.

En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la corte, como aquella que supone una actitud torticera que delató un propósito es leal para obtener la satisfacción del interés individual a toda costa que expresa un abuso del derecho, porque deliberadamente, y si tener razón de mala fe, se instaura la acción o finalmente constituye un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de Justicia”.

Es importante recordarle doctor Juan Carlos, que cuando usted conoció la actuación y la totalidad de audios que nos costa, usted lo reviso ratificó que en el mes de mayo, el día 15 de mayo en la audiencia en la que se practicó el testimonio, como ya lo indica la doctora diana Barragán presentó la solicitud de tacha de testigo por imparcialidad y de hecho señaló algunos elementos de posible enemistad al momento de sustentar su solicitud con fundamento en el artículo 211 del código general del proceso, es decir, doctor Juan Carlos, que usted conoce de antemano que esa tacha está pendiente de

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

decidirse y sobre esa solicitud ahora no me puede forjar una solicitud diferente, ahora bajo el amparo de recusación, cuando precisamente es uno de los asuntos que están pendientes de decidir al interior de la actuación administrativa. Entonces, en este contexto y previa exposición de los argumentos anteriormente indicados, lo primero es señalar que, rechazó la solicitud de documento que se presenta el día de hoy, precisamente ante las condiciones y el contexto que precisamente se ha presentado en esta audiencia. Como explicación de todo el contexto.

Segundo elemento es que se remitirá copia de lo actuado a la autoridad competente para que investigue la conducta en el marco de sus competencias, para saber si constituye o no una eventual falta disciplinaria y el tercer elemento es que el día de hoy nos convoca a la presentación de alegatos de conclusión y lo conminó para que. De inmediato sin más dilaciones, por favor, proceda a presentar los alegatos de conclusión correspondientes, doctor Juan Carlos tienen uso de la palabra para presentar alegatos de conclusión correspondientes.

(...)

Dr Juan Carlos, yo ratificó lo que ya indicamos sobre el tema y es una solicitud que ya se venía empleando y sobre la cual se adopta decisión sobre el final, digamos que en este momento y como es de su conocimiento desde el mes de mayo, nos convoca a la presentación de alegatos y lo invitó nuevamente a que presente de los alegatos, so pena de que pierda la oportunidad. Yo ratificó que el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, que regula este tipo de actuaciones administrativas, no tiene prevista la etapa, sin embargo, en garantía del debido proceso, precisamente sea entregado y se han mencionado desde inicio que lamentar entonces lo convirtió esa que so pena de que pierda la oportunidad de procesar para hacerlo, para que presente los alegatos de conclusión, si no los presenta hoy a la luz de la palabra, la compañía garante para lo pertinente.

(...)”

Como se logra evidenciar del desarrollo del procedimiento administrativo enmarcado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 adelantado en contra de la firma contratista UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN por el presunto incumplimiento del contrato de Obra No. 2937-2017, pasó mas de un año, luego de diferentes situaciones procesales y judiciales, que dejaban en suspenso la presentación de alegatos de conclusión.

La anterior situación obedeció a las distintas solicitudes realizadas por parte de los apoderados de la firma contratista, entre las que se encuentra la formulación de recusación presentada el pasado 13 de junio de 2022, previo a la reanudación de la audiencia para presentar alegatos de conclusión, por parte del apoderado de la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, en contra del Subdirector de Contratación del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), y de la cual se surtió el trámite legal correspondiente por cuanto se puso en conocimiento de la recusación al superior jerárquico del recusado, quien también fue objeto de recusación por parte de la firma contratista. Razón por la cual el trámite se elevó a la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, como cabeza del Sector de Recreación y Deporte.

Posteriormente se interpuso recurso a la decisión tomada por parte de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, ante la negativa del trámite de recusación y finalmente se decidió asignar como funcionario ad hoc a la Subdirectora de Recreación y Deporte del IDRD, para decidir sobre el trámite de recusación correspondiente quien adoptó decisión

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

al respecto, tramitando así la solicitud de recusación formulada, el pasado 13 de junio de 2022.

Que las resueltas finales después del trámite de recusación se justifican en los siguientes actos administrativos:

- RESOLUCIÓN No. 441 DE 11 DE JULIO DE 2022 “Por la cual se resuelve una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para resolver recusación en contra del Subdirector de Contratación del IDRD”
- RESOLUCIÓN No. 646 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 “Por la cual se resuelve Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación en contra de la Resolución No. 441 de 11 de julio de 2022, por medio de la cual se resolvió una solicitud de recusación formulada en contra de la Directora General del Instituto de Recreación y Deporte para resolver la recusación en contra del Subdirector de Contratación del IDRD”
- RESOLUCIÓN No. 1251 de 28 de septiembre de 2022 “Por la cual se resuelve la recusación presentada en contra del Subdirector de Contratación del IDRD, en el marco del Proceso Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento del Contrato de Obra 2937 de 2017 suscrito entre la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAYN Y EL IDRD.”

De lo anterior se remitió las copias correspondientes a las partes intervinientes de la audiencia del artículo 86 de la ley 1474 de 2011, en donde en síntesis se inadmitió la solicitud de recusación y en ese sentido el Subdirector de Contratación del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), continua con las diligencias correspondientes, solicitando se presenten los alegatos de conclusión que se encontraban pendientes por presentar desde el pasado 24 de septiembre de 2021.

Es importante recordar al apoderado, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando se asume un poder para actuar en un proceso en curso, el nuevo apoderado lo asume en el estado en el que se encuentra la actuación administrativa o judicial, destacando en todo caso que desde el mes de mayo de 2022, el abogado Quintero que presentó la recusación asumió el poder, en una etapa de presentación de alegatos de conclusión, etapa que aunque no está prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción para controvertir las pruebas practicadas, la Entidad lo consideró relevante. Una vez asumido el poder el abogado solicitó el término de 10 días hábiles para presentar alegatos, término que la entidad le otorgó para el efecto, una vez reanudada audiencia el abogado no presentó alegatos sino que elevó una solicitud de recusación, que fue tramitada y decidida por la Secretaría de Cultura y la Subdirectora de Recreación y Deporte, con los actos previamente indicados en este acto administrativo, y pese a tal situación, en la reanudación de audiencia, como ya se dejó expuesto, para presentación de alegatos de conclusión, expone de manera sorpresiva otra nueva solicitud de recusación, que fue objeto de rechazo en audiencia y sobre la cual ahora se pide trámite de nulidad.

Adviértase, además, que, en el desarrollo de las audiencias del proceso administrativo sancionatorio contractual, se han interpuesto 3 acciones de tutela que han sido desestimadas por las autoridades judiciales, de las cuales la última se relaciona con el trámite de la recusación que decidió la Secretaría de Cultura

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Adicional a lo anterior, en las 50 audiencias grabadas se puede verificar las demás dilaciones injustificadas y maniobras realizadas a efectos de evitar continuar con lo reglado en el procedimiento sancionatorio contractual abusando del derecho enmarcado en lo que respecta al literal D, de la norma señalada que establece:

(...)

D) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

(...)

Habida consideración a lo anterior se demuestra que se le ha otorgado al contratista los plazos y medios necesarios para ejercer su derecho a la defensa y contradicción no obstante en virtud del principio de celeridad consagrado en el artículo 3º numeral 13 de la Ley 1437 de 2011, *“las autoridades administrativas impulsaran oficiosamente los procedimientos e incentivarán las tecnologías de la información y comunicaciones a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas”* ...³⁵

Además de lo expuesto, resulta pertinente recordar lo señalado en audiencia en cuanto a que los hechos alegados para la formulación de recusación, ya se habían propuesto anteriormente en audiencia de 15 de mayo de 2021 por la entonces apoderada del contratista Diana Barragan, tachando de falso testigo por imparcialidad, citando expresamente el artículo 211 del Código General del Proceso, en donde expone los mismos argumentos que está indicando para la solicitud de recusación.

Al respecto, también la administración se había pronunciado sobre los argumentos esgrimidos de tacha de testigo por imparcialidad, indicando que su resolución será objeto de pronunciamiento en el fallo del procedimiento sancionatorio en curso, siguiendo las reglas precisamente establecidas en el artículo 211 del Código General del Proceso, razón por la cual esos argumentos deben resolverse en etapa de decisión, luego de presentarse los alegatos de conclusión pendientes.

Ahora bien, atando la solicitud de tacha del testigo por imparcialidad con la nueva solicitud de recusación, deberá afirmarse que el solicitante ya conocía de los hechos en que ahora basa la recusación y la apoderada del momento decidió continuar con la actuación administrativa sin miramientos sobre el particular, razón por la cual, en virtud del principio de lealtad procesal, no es de recibo el argumento de la nueva recusación. Sobre el particular es pertinente traer a colación, en virtud del principio de integración normativa, lo regulado en el Código General del Proceso, artículo 142, el cual indica:

ARTÍCULO 142. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA RECUSACIÓN. *Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, de la ejecución de la sentencia, de la complementación de la condena en concreto o de la actuación para practicar pruebas o medidas cautelares extraprocesales.*

³⁵ Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Juan Manuel Laverde Álvarez, Legis Editores 2018.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

No podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de plano. (Subrayas y negrillas propias)

No habrá lugar a recusación cuando la causal se origine por cambio de apoderado de una de las partes, a menos que la formule la parte contraria. En este caso, si la recusación prospera, en la misma providencia se impondrá a quien hizo la designación y al designado, solidariamente, multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales.

No serán recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación, ni los que deben dirimir los conflictos de competencia, ni los funcionarios comisionados.

Cuando la recusación se base en causal diferente a las previstas en este capítulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso.

De lo anterior se colige que si bien la solicitud de recusación se puede formular en cualquier momento del procedimiento administrativo, conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso, en determinadas circunstancias no se permite tal posibilidad, cuando se actúa dentro del proceso administrativo con posterioridad al hecho que la motiva; es decir, conociendo el recusante los hechos en que se basa para la tacha del testigo, que a su vez son los mismos en que basa la recusación, decidió continuar la actuación administrativa y guardar silencio, razón por la cual es procedente el rechazo de plano de la recusación en virtud del código general del proceso.

Refuércese a su vez el rechazo de plano de la recusación, también en virtud del principio de integración normativa, lo contenido en el artículo 132 del CPACA:

ARTÍCULO 132. TRÁMITE DE LAS RECUSACIONES. Para el trámite de las recusaciones se observarán las siguientes reglas:

7. Las decisiones que se profieran durante el trámite de las recusaciones no son susceptibles de recurso alguno.

En el mismo auto mediante el cual se declare infundada la recusación, si se encontrare que la parte recusante y su apoderado han actuado con temeridad o mala fe, se les condenará solidariamente a pagar una multa en favor del Consejo Superior de la Judicatura de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a que hubiere lugar. (Subrayado propio)

La decisión, en cuanto a la multa, será susceptible únicamente de reposición.

Finalmente, es importante destacar que la petición de recusación no cumple con el rigor argumentativo y jurídico requerido, pues no establece cual es la causal de recusación invocada ni determina cuales son los supuestos “consejos o conceptos” que presuntamente dieron origen a la recusación, pues tal como lo reconoce la misma solicitud, no existe relación laboral ni jerárquica entre el Subdirector de Contratación y quien fungió como testigo, lo que se encuentra pendiente de decisión es la tacha por imparcialidad fundada en enemistad que su oportunidad adujo la apoderada del

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

contratista, valoración que de acuerdo con el código general del proceso debe ser objeto de valoración al momento de adoptar decisión en la actuación administrativa, reiterando en todo caso que no puede invocar una recusación, quien teniendo la oportunidad para hacerlo no lo hizo y actuó en el procedimiento, razón por la cual se rechaza de plano la solicitud de recusación por infundada en los términos del artículo 132 del CPACA aplicable en virtud del principio de integración normativa y por ende no resulta procedente la solicitud de nulidad invocada por el apoderado del contratista.

4. Del argumento de terminación del contrato de seguro por agravación del estado de riesgo (artículo 1060 del código de comercio)

Otro argumento de reproche por parte del apoderado del garante es, que la conducta de la Entidad Contratante fue fundamental en la realización de los siniestros hoy reclamados como quiera que, existieron falencias en la planeación del contrato, las cuales ocasionaron una serie de demoras en los tramites de expedición de licencias y en particular que el contrato de Obra No. 2937 fuere modificado en su totalidad, por modificación de diseños y la presencia de indefiniciones en la cimentación a construir, y que el procedimiento de autorización de giros no era una conducta desplegada por el contratista de obra a su arbitrio, sino que la misma se efectuaba tras la verificación de una serie de requisitos por parte de la interventoría y la supervisión del contrato.

Consideraciones de la entidad:

Bajo los argumentos expuestos por el garante, es importante señalar que las situaciones presentadas en el desarrollo del contrato no fueron desconocidas por la compañía garante, toda vez que siempre se dieron a conocer las modificaciones realizadas al contrato, tanto las suspensiones como las prórrogas y sus correspondientes justificaciones o el origen que determinaron su modificación, prueba de ello se encuentra los documentos de las pólizas ajustadas a cada modificación realizada.

En este sentido, no resulta inadmisibles el argumento de terminación del contrato de seguro por agravación del estado de riesgo, como quiera que la compañía garante siempre conoció del desarrollo del contrato de obra, tan así que en el mes de enero de 2020 presentó un propuesta de apalancamiento financiero al contratista, el cual no prospero como quiera que era insuficiente para apalancar la situación financiera que presentaba el contratista, pese a que la entidad le había girado los dineros pactados por concepto de anticipo.

Del mismo modo, si bien el procedimiento para la aprobación del giro por concepto de anticipo estaba dado por el interventor del contrato, bajo lo cual la entidad debió revisar el cumplimiento de las labores del interventor bajo la ejecución del Contrato de interventoría No. 2999 de 2017 y validar su cumplimiento al tenor de la ley, no se puede excusar en la aprobación por parte del interventor de su momento, del uso indebido debidamente probado de los recursos entregados a título de anticipo y bajo los cuales no se determinó su correcta inversión en la obra.

Bajo lo cual no está llamado a prosperar el argumento expuesto.

5. Del argumento de falta de acreditación del perjuicio reclamado

Indica el apoderado del garante, que la disposición normativa que regula el procedimiento administrativo sancionatorio impone como requisito sine qua non, la existencia del perjuicio para efectos de hacer viable la declaratoria de incumplimiento, y que los sujetos

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

que colaboran con la administración en el cumplimiento de los fines deba hacerse en providencias motivadas y en las cuales se indique:

- Los hechos que generan la responsabilidad.
- Los motivos y circunstancias para la cuantificación de las indemnizaciones.
- LOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA DOSIMETRÍA SANCIONATORIA.
- Los elementos de impugnación y defensa frente a los referidos actos.

Consideraciones de la entidad.

Frente al argumento expuesto, es importante reiterar lo ya manifestado frente a la cláusula penal pactada en el contrato, toda vez que la misma es una tasación anticipada de perjuicios y bajo la cual la actuación administrativa esta es verificando la aplicación de la cláusula penal como tasación anticipada de esos perjuicios, esto sin perjuicio que la entidad pueda reclamar ante el juez del contrato los perjuicios adicionales que no pueden ser reclamados en sede administrativa a través del proceso administrativos sancionatorio previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

6. Del argumento de la falta de competencia por haberse promovido el medio de control de controversias contractuales por parte de la entidad contratante en contra de la unión temporal reforzamiento asemain.

Entidad considera que expediente del Medio de Control de Controversias contractuales con radicación No. 25000233600020220043700 hace parte de una actuación judicial independiente la cual no aporta elementos de valor frente al argumento expuesto por el apoderado del garante, como quiera que la pérdida de competencia de la Entidad, por haberse iniciado un trámite judicial, ocurriría una vez sea notificado el auto admisorio de la demanda que persigue la liquidación del contrato.

Lo anterior, en suma, a la referencia jurisprudencial realizada por el apoderado del garante en el escrito de sustentación el recurso, en donde señala lo siguiente:

“Es el caso concreto de la liquidación de los contratos estatales, respecto del cual ha expresado lo siguiente:

“No obstante, la entidad contratante perderá la competencia si el contratista - dentro del término de caducidad de la acción contractual, obviamente -, pide al juez del contrato que proceda a liquidarlo y se ha producido la notificación del auto admisorio de la demanda. (subrayado fuera de texto)

Y es que mientras esté en curso el término de caducidad de la acción contractual la administración mantiene la competencia - salvo en el caso de haberse instaurado la acción judicial correspondiente, como quedó consignado –“(Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 31 de octubre de 2001, radicación 1.365).

Bajo lo cual, también se incorpora el siguiente apartado de la referencia jurisprudencial señalada el apoderado:

“CONTRATO ESTATAL - Eventos en que la entidad pierde competencia para liquidarlo / CADUCIDAD - Liquidación del contrato / LIQUIDACIÓN DE CONTRATO - Improcedencia por expiración del término de caducidad

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

La expiración del término de caducidad o la notificación del auto admisorio de la demanda del contratista que persigue la liquidación del contrato, hace perder competencia a la administración para estos efectos y, por lo tanto, sólo mientras esté en curso el término de caducidad es viable proceder a la liquidación del contrato. De lo expuesto se concluye que vencido el término de caducidad de la acción contractual, o notificado el auto admisorio de la demanda en la forma dicha, deviene la incompetencia de la entidad estatal contratante para liquidar el contrato unilateralmente y, para el contratista, la imposibilidad de obtenerla en sede judicial o de común acuerdo y, por lo mismo, en tal supuesto, no es jurídicamente viable extender, unilateralmente o por mutuo acuerdo con el contratista, "un documento de balance final o estado de cuenta para extinguir definitivamente la relación contractual", dado que el término de caducidad es perentorio e improrrogable y por que ello equivaldría a revivir, convencionalmente, los términos de caducidad de la acción que, como es sabido, son indisponibles. Al respecto, valga recordar que la conciliación no es un mecanismo destinado a sustituir el procedimiento de liquidación del contrato previsto en la ley contractual y que "no habrá lugar a conciliación cuando la correspondiente acción haya caducado", conforme al parágrafo 2° del artículo 81 de la ley 446 de 1998, reformatorio del 61 de la ley 23 de 1991 compilado, a su vez, por el decreto 1818 de 1998, artículo 63".

En tal sentido, la Prueba trasladada consistente en el expediente del Medio de Control de Controversias contractuales con radicación No.25000233600020220043700, no se considera conducente en tanto que no es una prueba idónea, teniendo en cuenta que hace parte de un trámite judicial en donde sus etapas son autónomas e independientes a las adelantadas en sede administrativa; no es pertinente toda vez que la solicitud de la prueba no es el medio idóneo para alegar la falta de competencia de la entidad, frente a las situaciones no superadas en el desarrollo del objeto contractual; y no es útil por cuanto o se considera el mecanismo por medio del cual se pretenda demostrar la falta de competencia de la entidad y con ello anular las actuaciones adelantadas.

7. Del argumento de reorganización empresarial de la sociedad construcciones Maja S.A.S

Esta Entidad considera que el documento No. 1 presentado obedece a un documento de carácter jurídico, relacionado como el certificado de existencia y representación legal de una de las empresas que forman parte de la Unión Temporal del contratista, dicho documento señalada condiciones de un integrante de la unión temporal y demuestra una situación empresarial en la que se encuentra dicha empresa, pero no prueba situaciones jurídicas de la Litis.

la situación empresarial de uno de los integrantes de la unión temporal no infiere en la decisión de fondo del proceso administrativo sancionatorio, más allá de las consecuencias jurídicas prevista en el ordenamiento; y no son útiles puesto que su fin no es probar hechos debatidos en el trámite sancionatorio sino demostrar la condición empresaria en la que un integrante de la unión temporal se encuentra.

En este mismo sentido, en materia de representación y de conformidad con lo señalado en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del Consejo de Estado N° 19933 del 25 de septiembre de 2013, (...) **el representante del consorcio o de la unión temporal, que por ley debe ser designado para todos los efectos, lo es de la agrupación empresarial en su conjunto, del ente al cual se refiere la ficción legal y no de cada uno de sus integrantes individualmente considerados, cuestión que se condensa**

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

en la máxima que enseña que el todo es más que la simple suma de sus partes.
(Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, se recuerda que en materia de consorcios y uniones temporales, Colombia Compra Eficiente 2021- N0000413_03, ha precisado:

“Los consorcios o uniones temporales son convenios de asociación provenientes de la colaboración empresarial, mediante los cuales sus integrantes se unen y organizan mancomunadamente para lograr con mayor eficacia un fin común de contenido patrimonial y lucrativo, como lo es la obtención del derecho a ser adjudicatarios de un contrato estatal, compartiendo recursos, de toda índole, para su ejecución, así como las utilidades y los riesgos.

La diferencia radica en la responsabilidad frente a las eventuales sanciones que lleguen a generarse por el incumplimiento de las obligaciones del contrato, toda vez que, tratándose de una unión temporal, éstas se individualizan según el grado de participación de sus miembros, mientras que en el consorcio dicha individualización no opera, ya que sus miembros responderán solidariamente frente a las sanciones que correspondan.”

De acuerdo con lo anterior, es claro que el representante del consorcio o de la unión temporal, que por ley debe ser designado para todos los efectos, cuestión que se condensa en la máxima que enseña que el todo es más que la simple suma de sus partes, por tal razón, en manera alguna puede aceptarse que existe una violación al debido proceso, por no tenerse en cuenta la condición de uno de sus integrantes, ya que en ejercicio de la voluntad de sus miembros, se designó a un representante que es como su nombre lo indica, quien “representa” a las sociedades que hacen parte de la unión temporal, no existiendo un vicio en la citación como se pretende por el contratista y sus integrantes.

Importante resaltar, que la Ley 80 de 1993 ordena a los consorcios y uniones temporales designar la persona “que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal (...)” por esta razón, el argumento de la unión temporal no está llamado a prosperar, en atención a que el hecho de no llamar de manera individual a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal, no viola el derecho a la defensa, pues la designación hecha por sus miembros, para que sea una persona quien los represente, advierte de manera anticipada que es este y no cada uno de los miembros quien debe asumir la defensa de los intereses de la Unión Temporal, cuestión que demuestra que el legislador no quiso limitar y mucho menos condicionar el alcance de las facultades del mandato del representante del Consorcio o unión temporal.

De igual forma, el documento de unión temporal no limitó las responsabilidades por imposición de sanciones.

8. Del argumento subsidiario proporcionalidad de la cláusula penal

TASACION CLAUSULA PENAL

Como se indicó en la resolución recurrida, ante la gravedad del incumplimiento del objeto del contrato, y sopesados los antecedentes del incumplimiento, es necesario indicar que, habiendo transcurrido el plazo contractual, se tiene un incumplimiento relacionado con la inejecución del mismo, que puede tener en consecuencia la afectación de la cláusula penal, en los siguientes términos:

Sentencia Consejo de Estado, Radicación número: 68001-23-31-000-1996-

Página **211** de **216**

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

02081-01(17009):

“...Estos planteamientos sirven de soporte para justificar que, incluso, al interior de una potestad sancionadora existen espacios adecuados para la aplicación del principio de la proporcionalidad, pese a su carácter fuertemente reglado. Uno de ellos es el de la determinación del monto de la cláusula penal pecuniaria, la cual puede variar, en casos como el subíndice, dependiendo de diversos factores, como el porcentaje de ejecución del contrato...”

En línea a lo anterior, el Honorable Consejo de Estado ha manifestado:

“De lo expuesto se infiere, que la cláusula penal consiste entonces en la estipulación contractual según la cual, el contratista se obliga a pagar a título de tasación anticipada de perjuicios, la cuantía que contractualmente se haya determinado, en dos eventos: a) En el evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el evento en que se declare el incumplimiento del mismo, aún vencido el plazo de ejecución del contrato. Lo anterior, sin que sea necesario demostrar el perjuicio percibido por la administración, aunque deberá sí declararse el incumplimiento mediante acto administrativo motivado, una vez se haya garantizado el debido proceso al contratista (...)”³⁶ (subraya fuera de texto)

De acuerdo con los antecedentes ya expuestos en el presente acto administrativo, en la medida que existe competencia y temporalidad para sancionar al contratista con la declaratoria de incumplimiento y la afectación de la cláusula penal pactada no se ha superado, como quiera que si bien es cierto el plazo de ejecución expiró, también lo es que aun en los plazos establecidos para la liquidación podría declararse el incumplimiento del Contrato que nos atañe en el presente procedimiento, resulta procedente declarar el incumplimiento del objeto del contrato, declarar la ocurrencia del siniestro y ordenar el pago de las sumas respectivas, derivadas del incumplimiento.

En este sentido, se aclara que la entidad si realizó la tasación de los perjuicios ocasionados, como quiera que lo realizó de manera anticipada

- TASACIÓN CLAUSULA SEGUNDA – CLÁUSULA PENAL

De conformidad con el informe de interventoría a continuación se relaciona la tasación de la Cláusula segunda – Cláusula penal, la cual se encuentra determinada en las páginas 86 a la 95, así:

“6. TASACION DE SANCIONES A IMPONER AL CONTRATISTA

La tasación de perjuicios derivados del incumplimiento contractual aquí relatado se fundamenta en los principios de legalidad y proporcionalidad desarrollados por la jurisprudencia colombiana, por lo cual se acudirá a la tasación anticipada de perjuicios contractualmente determinada en el contrato de obra pública No.2937 de 2017 y que señala:

“CLAUSULA SEGUNDA CLAUSULA PENAL; Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del presente contrato, pagara al IDRD el veinte por ciento (20%) del valor del mismo como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se declare la caducidad del contrato y se impongan las multas a que haya lugar. EL IDRD podrá hacer efectivo el valor de la cláusula penal imponiéndola mediante resolución motivada. PARAGRAFO: el valor pagado como clausula penal no es impedimento para solicitar ante el juez del contrato la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal.”

³⁶ Sección Tercera. Sentencia de octubre 19 de 2005. Exp. 15.011.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

Conforme lo anterior, las partes pactaron una clausula penal la cual se encuentra en la cláusula segunda del contrato, fijando como tasación anticipada de perjuicios el 20% del valor del contrato en caso de incumplimiento parcial o total, como quiera que el contrato se ejecutó en un 38.8%, conforme los documentos probatorios obrantes dentro el tramite sancionatorio y la prueba por informe presentada por el interventor del contrato, en virtud del principio de proporcionalidad y atendiendo el daño causado se tasara el valor a ser reconocido a título de indemnización integral de los perjuicios causados a la suma de \$ que corresponde al 12,4% de la siguiente operación matemática:

Concepto	Valores
Valor del Contrato	\$ 11.816.242.707
Porcentaje de la Cláusula Penal	20%
Valor de la Cláusula	\$ 2.363.248.541
Porcentaje de cumplimiento	38,8%
Porcentaje de incumplimiento	61,2%
Porcentaje de afectación de la Cláusula Penal	61,2%
Valor de la Indemnización	\$1.446.308.108

$$\begin{array}{rcl} 100\% \text{ de incumplimiento} & \$ & 2.363.248.541 \\ 61,2\% \text{ de incumplimiento} & & \times \\ \hline X = 61.2 \times \$ 2.363.248.541 & & \\ \hline & & 100 \end{array} = \$ 1.446.308.108$$

6. TASACION DE LA EFECTACION DEL AMPARO DEL ANTICIPO

Ahora bien, en lo concerniente a la proporcionalidad del amparo del anticipo del contrato contenido en la Garantía Única, y dado el interés asegurable en el cual se reporta y acredita parcialmente su inversión, se afectará proporcionalmente en relación con los valores que no fueron objeto de debida inversión de acuerdo con los informes de interventoría, es decir en relación con los valores que no fueron debidamente invertidos, amortizados y legalizados en obra, en aplicación al principio de proporcionalidad, que conforme lo resume el Consejo de Estado es; *“un juicio de adecuación entre los hechos, el medio o decisión adoptada y las finalidades de la actuación, la cual busca, en todo caso, alcanzar el interés de orden general.”*³⁷, o, por lo que la entidad procederá a tasar la sanción teniendo en cuenta lo pactado contractualmente y en consonancia con lo descrito en párrafos precedentes respecto de los criterios de proporcionalidad, en relación con el amparo de la debida inversión del anticipo.

Es de aclarar que conforme con la prueba por informe practicada y presentada por el interventor del contrato Consorcio Santa Paula 008, el valor del anticipo que no se amortizo y bajo el cual se demuestra plenamente su uso indebido es por la suma de \$2.876.172.668, aclarando este valor en el presente acto administrativo como quiera que por un error involuntario quedo diferente en la Resolución No. 1452 de 2022.

En mérito de lo expuesto,

³⁷ Sentencia del 13 de noviembre de 2008. Rad. 68001-23-31-000-1996-02081-01(17009). C.P. Enrique Gil Botero.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el artículo primero de la Resolución 1452 del 27 de octubre de 2022, que declaró el incumplimiento parcial del Contrato de Obra No. 2937 de 2017 cuyo objeto consistió en CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE DE BOGOTÁ D.C.; PARQUE SIMÓN BOLÍVAR -12-091, CON CARGO AL PROYECTO 1082 “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS”, suscrito entre el IDRD y la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN identificado con el Nit No. 901118265-1 conformado por las empresas Ingeniería Construcciones y Equipos INCOE SAS identificada con el NIT Nro. 900.803.956-7 con una participación del 24%, ASECAF SAS identificada con el NIT Nro. 808.000.935-2 con una participación del 25% y Construcciones Maja SAS identificada con el NIT Nro. 800.112.612-0 con una participación del 51%, Unión Temporal representada legalmente por Rafael Palacio Dorado, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: aclarar el artículo segundo de la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, la cual quedara así:

*“**ARTÍCULO SEGUNDO:** Como consecuencia de lo anterior, hacer efectiva La cláusula penal pactada en el contrato de obra por el valor de \$ 1.446.308.108 correspondiente al 61.2% de inejecución del contrato en proporción al valor total pactado de la cláusula, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.*

ARTÍCULO TERCERO: aclarar el artículo tercero de la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, la cual quedara así:

*“**ARTICULO TERCERO:** Declarar la ocurrencia del siniestro del amparo de cumplimiento de la garantía única identificada con el No. AA027962, expedida por aseguradora La Equidad Seguros, por el \$1.446.308.108 correspondiente al 61.2% de inejecución del contrato en proporción al valor total pactado de la cláusula, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo*

El Valor de la cláusula penal deberá ser consignada por el contratista dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, a favor del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD identificada con el NIT. 860061099-1 en la cuenta de ahorros No. 007700683878 del BANCO, por las razones expuestas en el presente acto administrativo.

En caso que no se consigne el valor de la cláusula penal impuesta a través de la presente resolución, deberá ser descontada de los saldos a favor del contratista la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo en virtud de la figura jurídica de la compensación de deudas.

Si ello no fuere posible, el valor que corresponde a la cláusula penal se hará efectivo y deberá cancelarse por la aseguradora La Equidad Seguros, con cargo al amparo de cumplimiento de la póliza No. AA027962, constituida con ocasión del Contrato de Obra No. 2937 de 2017, dentro del mes siguiente a la ocurrencia y acreditación del siniestro de conformidad con el Artículo 1080 del Código de Comercio.”

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825

ARTÍCULO CUARTO: Aclarar el artículo cuarto de la Resolución No. 1452 del 27 de octubre de 2022, la cual quedara así:

“ARTÍCULO CUARTO: Declarar el incumplimiento y en consecuencia ordenar la ocurrencia del siniestro amparado en la Póliza Garantía Única No. AA027962, expedida por aseguradora La Equidad Seguros, por concepto del amparo de correcta inversión del anticipo por la suma de \$2.876.172.668, conforme la parte motiva del presente acto administrativo.

El valor impuesto a través de la presente resolución deberá ser pagada por el contratista dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, a favor del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD identificada con el NIT. 860061099-1 en la cuenta de ahorros No. 007700683878 del BANCO, por las razones expuestas en el presente acto administrativo.

En caso que no se consigne el valor por concepto de anticipo por el contratista, el valor deberá ser descontada de los saldos a favor del contratista la UNIÓN TEMPORAL SAN ANTONIO IDRD REFORZAMIENTO ASEMAIN, una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo en virtud de la figura jurídica de la compensación de deudas.

Si ello no fuere posible, el valor se hará efectivo y deberá cancelarse por la aseguradora La Equidad Seguros, con cargo al amparo de correcta inversión del anticipo de la póliza No. AA027962, constituida con ocasión del Contrato de Obra No. 2937 de 2017, dentro del mes siguiente a la ocurrencia y acreditación del siniestro de conformidad con el Artículo 1080 del Código de Comercio.”

ARTÍCULO QUINTO: Confirmar los demás artículos de la parte resolutive de la Resolución 1452 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2022 **“Por medio de la cual se adopta decisión dentro del procedimiento administrativo sancionatorio del Contrato de Obra IDRD-CTO-2937 de 2017”.**

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, y quedará ejecutoriada a partir del día siguiente de su notificación.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar en audiencia el contenido del presente acto administrativo al contratista y la Compañía Aseguradora a través del Representante Legal o su apoderado conforme lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Dada en Bogotá, D.C. a los 22 días del mes de DICIEMBRE 2022

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



CAMILO ERNESTO QUIROGA MORA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN

Proyectó	Andrea Casallas Rodríguez	Abogada Subdirección de Contratación	
Revisó	Camilo Ernesto Quiroga Mora	Subdirector de Contratación	
Aprobó	Camilo Ernesto Quiroga Mora	Subdirector de Contratación	

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE RESOLUCIÓN No. 1825